**Orden del Día de la Cuarta Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**23 de septiembre del año 2020.**

**1.-** Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.

**2.-** Declaratoria de apertura de la Sesión.

**3.-** Lectura, Discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto para el desarrollo de la Sesión.

**4.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la Sesión anterior.

**5.-** Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el Congreso del Estado.

**6.-** Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión anterior.

**7.-** Lectura de Iniciativas de Reforma Constitucional:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, en relación a garantizar el acceso gratuito al internet inalámbrico de banda ancha en los edificios, instalaciones y lugares públicos.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo quinto del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, en materia de garantía del derecho a la educación por vía virtual y a distancia.

**8.-** Lectura de Iniciativas de Diputadas y Diputados:

**A.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional,por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y de la Ley Estatal de Salud, en materia de atención y cuidados psicoemocionales a elementos activos de bandos policiacos y de seguridad.

**B.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada Blanca Eppen Canales, por la que se modifica el contenido de la fracción III, adicionando un nuevo contenido a la fracción IV, recorriendo el actual a la fracción V, que se crea, de artículo 18 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila, para establecer el deber de los municipios de elaborar sus presupuestos de egresos con perspectiva de género.

**C.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, que reforma diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para regular la postulación y elección consecutiva por el principio de representación proporcional de Diputaciones Locales, Sindicadurías y Regidurías.

**D.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXI al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, en materia de acceso y garantía de la educación virtual y a distancia.

**E.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, por el que se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV al artículo 18 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de adecuar y actualizar dicho ordenamiento en lo relativo a la denominación ciudadana de vecino.

**F.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Berino Granados, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Condecoraciones y Reconocimientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir la condecoración al mérito laboral, a fin de reconocer a las personas que con su entrega diaria laboral, contribuyen a aumentar la productividad de la empresa, y del mismo modo son ejemplo a seguir para sus compañeros, logrando con ello un bueno clima laboral en su centro de trabajo.

**G.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto de la Diputada María Eugenia Cázares Martínez, por la que se crea la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**H.-** Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática,en coordinación con Paola Aguirre Praga y Leticia Espinoza Méndez, de la Asociación Civil “Proyecto Mujeres”, en materia de garantía de elementos de gestión menstrual a mujeres.

**I.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, con objeto de que los deportistas de alto rendimiento reciban becas y demás apoyos necesarios para su desarrollo integral.

**J.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Loya Cardona, por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud y a la Ley Estatal de Educación, con el propósito de prevenir y proteger la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.

**K.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Marcelo Torres Cofiño, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 2757 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el efecto de prever expresamente en dicho ordenamiento, la obligación de los Notarios del Estado, de incluir a favor del donante, una cláusula de usufructo vitalicio en las escrituras públicas que expidan, respecto de donaciones universales de bienes que realicen personas adultas mayores de 65 años o más, y así evitar algunas injusticias que se pudieran presentar al dejar sin habitación o en el desamparo a dichos donadores.

**L.-** Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la fracción V del artículo 9 de la Ley General de Educación, que presenta la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática,en materia de educación virtual y a distancia.

**M.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María del Rosario Contreras Pérez, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de a Ley de Urgencias Médicas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de que las instituciones de salud se conduzcan sin distinción, exclusión o restricción, que implique discriminación en la atención médica a quien requiera recibirlos de urgencia por encontrarse en peligro su vida o su integridad física.

**N.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, por la que se adicionan los artículos 150 Quater y 150 Quintus a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, con la finalidad de establecer el deber del Estado de apoyar a las empresas generadores de bolsas de plástico y demás materiales prohibidos por este ordenamiento, para migrar hacia tecnologías para producir dichos productos con materiales ecológicos; además de establecer con precisión las atribuciones de los municipios en la materia.

**Ñ.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de reforzar las atribuciones y sanciones que aplican las autoridades estatales y municipales, en materia de contaminación de ruido, por personas físicas en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial.

**O.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Fernando Izaguirre Valdés,por la que se adiciona una porción normativa al artículo 53 de a Ley Estatal de Salud, esto con la finalidad de que un médico con experiencia presida los Comités de Salud en la Entidad.

**P.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, por el que se adiciona la fracción V, recorriéndose las ulteriores, del artículo 39 de la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de impulsar la promoción digital de los servicios turísticos.

**Q.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, por conducto del Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete,por la que se reforma el inciso E del artículo 10 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para modificar el calendario en materia de licencias para los distintos servidores públicos que aspiren a contender como candidatos a las alcaldías.

**R.-** Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila y de la Ley de Medios de Impugnación en materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**9.-** Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a dos iniciativas la primera de ellas: la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que ocupa esa posición a la siguiente, del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y la segunda: Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona al actual Título Primero denominado “Del Estado y sus Habitantes” un Capítulo Quinto denominado “Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales”, que contiene los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quater y 25 Quinquies, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares**,** conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**B.-** Dictamende la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**C.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**D.-** Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de Decreto que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

**E.-** Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**F.-** Dictamen de lasComisiones Unidas de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto, que presenta el diputado Jaime Bueno Zertuche del grupo parlamentario “Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional por la que se reforma la fracción XVI del artículo 5 y la fracción IV del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza y el primer párrafo de artículos 211 y se adiciona un párrafo al final, asimismo se reforma el primer párrafo del artículo 212 y el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

**G.-** Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se agrega una porción normativa al artículo 375 y se modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**H.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para desincorporar y enajenar a título gratuito, un lote de terreno con una superficie de 165-36-48.66 hectáreas, ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, con objeto de llevar a cabo la construcción de las instalaciones del Destacamento Militar en la Región Carbonífera del Estado.

**I.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. J. Reyes Alvarado Quiñones, con objeto de llevar a cabo la ampliación de su vivienda.

**J.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil “Casa Hogar Abrázame” A.C., con objeto de llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una Casa Hogar.

**K.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 200.00 M2., ubicado en la colonia “José de las Fuentes Rodríguez” de esa ciudad, a favor de la C. Juana Irene de la Rosa García, con objeto de llevar a cabo la ampliación de su casa habitación y regularizar la tenencia de la tierra, el cual se desincorporo con Decreto número 613 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

**L.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 72.74 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, a favor del C. Héctor Herrera Montelongo, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de febrero de 2020.

**M.-** Dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Castaños, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, dos fracciones de área vial; la primera con una superficie de 288.00 m2, ubicado en la calle Francisco I. Madero y la segunda una fracción de la calle Guillermo Prieto con superficie de 400.00 m2, ubicado en la colonia “Libertad” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para ser destinado a la Secretaria de Educación con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo, el cual se desincorporo con Decreto número 612 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

**10.-** Proposiciones de Grupos Parlamentarios, Fracción Parlamentaria y Diputadas y Diputados:

**A.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, “Mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2021, se proteja el derecho a la educación de los sectores más favorecidos del país”.

**B.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Blanca Eppen Canales, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con objeto de que este H. Pleno solicite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención en el caso de la pareja que fue agredida por elementos de la Guardia Nacional durante las protestas en la presa La Boquilla; así como en la investigación del conflicto por el agua, toda vez que involucra el ejercicio de diversos derechos humanos”.

**C.-** Proposición con Punto de acuerdo que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Para exhortar a la CFE a la revisión de los contratos con pequeños productores de carbón”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**D.-** Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria “General Francisco L. Urquizo”, con relación a la situación que acontece actualmente con las Empresas de redes de transporte UBER, IN DRIVER, LOCH, TAXIFY, CABFY, PINK, especialmente en el municipio de Saltillo, Coahuila.

**De urgente y Obvia Resolución**

**E.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con objeto de exhortar de manera respetuosa al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que en el ámbito de su competencia implemente una estrategia, a fin de credencial izar a las personas adultas mayores que no han podido realizar sus trámites en esta Dependencia, ya que el servicio se encuentra suspendido temporalmente hasta nuevo aviso, debido a la pandemia COVID 19”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**F.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Secretaria de Desarrollo Rural de Coahuila, para resolver la preocupante situación que viven productores del Ejido la Ventana en Matamoros, debido a una plaga de langostas que están arrasando con sus cultivos”.

**G.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Verónica Boreque Martínez González “Con el objeto de exhortar a las Autoridades e Instituciones Estatales de Salud, a fin de que establezcan programas y acciones de difusión sobre el derecho de los cuidados paliativos a enfermos en situación terminal”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**H.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Por la que se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal, y a los 38 Ayuntamientos de la Entidad, a que promuevan y apoyen la creación de Comités de Salud que se integran por núcleos de población urbana, rural o indígena y que tienen como objetivo la participación en el mejoramiento y vigilancia de los servicios de salud en sus localidades y de promover mejores condiciones ambientales que favorezcan la salud de las y los Coahuilenses, sobre todo, en días de contingencia sanitaria por COVID 19”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**I.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Diana Patricia González Soto “Con el objeto de exhortar al Instituto de la Salud para el Bienestar, para que consideren dentro de sus programas de salud, el firmar convenios con las abastecedoras de oxigeno medicinal, para apoyar a las familias de escasos recursos económicos, que requieran de un tanque de oxígeno para pacientes que siguen su recuperación por COVID 19 desde su domicilio”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**J.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Mediante el cual se propone a este Pleno solicite al titular del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, brinde el apoyo –que en justicia requieren— a los familiares del Dr. Víctor Homero de la Garza Tenorio, para que en la medida de las posibilidades de su salud, sea trasladado a un hospital con el que el organismo tenga celebrado convenio y le proporcione la atención requerida, además de buscar alternativas para apoyar a los familiares del Dr. De la Garza Tenorio, quien es maestro pensionado, con los gastos generados hasta ahora en un hospital particular, en virtud de la actuación negligente del personal de la Clínica Hospital del Magisterio de Monclova, Coahuila”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**K.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, “Con objeto de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a concluir con la máxima prioridad, el proceso de licitación y adjudicación del proyecto de ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo, en su tramo Derramadero-La Encantada, en el Estado de Coahuila”.

**De urgente y Obvia Resolución**

**L.-** Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud al Poder Judicial del Estado para que implemente un sistema de audiencias en línea en los Juzgados Familiares y Civiles de Coahuila, cuidando los protocolos de seguridad ante la pandemia por el COVID-19, pero buscando dar celeridad a las audiencias, a los desahogos de pruebas, así como a los diversos trámites que se atienden en los tribunales de nuestra entidad”.

**M.-** Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Josefina Garza Barrera, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que coordinen acciones con la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, con objeto de implementar visitas de inspección en los Centros de Rehabilitación de Acciones, que se encuentran operando en nuestro Estado, con la finalidad de verificar que los mismos cumplan con los requisitos de operación y sean registrados en el directorio de establecimientos residenciales de atención a las adicciones del CONADIC”.

**N.-** Proposición con Punto de acuerdo que presenta el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Estado y al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, para que en una acción coordinada, doten de personal médico y medicamentos suficientes a los dispensarios médicos que se encuentran en los Municipios delos Cinco Manantiales y de Jiménez, para brindar una atención médica digna y de calidad para las y los Coahuilenses.

**11.-** Agenda Política:

**A.-** Pronunciamiento que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Entorno a la participación ciudadana en las elecciones que se llevarán a cabo el 18 de octubre”.

**B.-** Pronunciamiento que presenta la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), “En relación a las conferencias matutinas del Presidente de la República”.

**C.-** Pronunciamiento que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria “General Francisco L. Urquizo”, “Con relación al Día de la Conciencia Ambiental”.

**12.-** Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión.

**MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 10 HORAS, CON 27 MINUTOS, DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, DIO INICIO LA SESIÓN ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA, PASADO LO ANTERIOR, LA PRESIDENCIA DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN Y VALIDOS LOS TRABAJOS QUE EN ELLA SE TRATARAN.

**1.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA EN LOS TÉRMINOS QUE FUE PUBLICADA EN LA GACETA PARLAMENTARIA, DISPENSÁNDOSE SU LECTURA.

**2.-** SE APROBÓ LA MINUTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DISPENSÁNDOSE SU LECTURA.

**3.-** SE DIO LECTURA DEL INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**4.-** SE DISPENSO LA LECTURA DEL INFORME SOBRE EL TRÁMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO QUE SE PRESENTARON EN LA SESIÓN ANTERIOR.

**5.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO CON RELACIÓN A LAS SOLICITUDES PLANTEADAS POR EL DIPUTADO JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA, SOBRE LOS INFORMES DE SU LABOR COMO REPRESENTANTE DEL CONGRESO DEL ESTADO ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.

**6.-** SE DIO LECTURA A UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, PARA SUPRIMIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA LA FACULTAD DE VETO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS DE ESTUDIO Y DICTAMEN.

**7.-** LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE A SOLICITUD DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PRESENTARON INICIATIVAS Y QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LOS PUNTOS DEL 9-A AL 9-L DEL ORDEN DEL DÍA PREVIAMENTE APROBADO, SE DISPENSE LA LECTURA DE LAS MISMAS, TODA VEZ QUE LAS REFERIDAS INICIATIVAS SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA PARLAMENTARIA DE LA PÁGINA DEL CONGRESO, POR LO QUE DICHA SOLICITUD SE SOMETE A SU CONSIDERACIÓN, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SIENDO LAS SIGUIENTES Y TURNADAS A LA COMISIONES CORRESPONDIENTES.

* LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PRESENTÓ UNAINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO,POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 234 DE LA LEY PARA LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; EN MATERIA DE DIVORCIO, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓNDE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.
* LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ, PRESENTO UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 106-B AL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS.
* LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE CÁZARES MARTÍNEZ, PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y XI DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
* LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA, PRESENTO UNA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.
* EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS Y ACTIVIDADES CÍVICAS
* LA DIPUTADA MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.
* EL DIPUTADO MACELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE PROPONE REFORMAR EL INCISO B DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA.
* LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES, PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO JURÍDICO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE COAHUILA, PARA IMPLEMENTAR LA REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
* LA DIPUTADA LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA, PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA, A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y AL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SE TURNÓ LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
* LA DIPUTADA BLANCA EPPEN CANALES PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SE TURNÓ COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.
* LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE COAHUILA, Y SE TUNÓ A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
* EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS, PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE AGREGAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES A LA LEY PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD DE ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD.

**8.-** SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, CON RELACIÓN A UN OFICIO SUSCRITO POR EL C.P. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ VILLARREAL, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL R. AYUNTAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTE H. CONGRESO DEL FALLECIMIENTO DEL C. RAÚL HERNÁNDEZ ALMARAZ, QUIEN SE DESEMPAÑABA COMO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE DICHO MUNICIPIO, LO ANTERIOR PARA LO QUE CORRESPONDA.

**9.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y EN LOS TÉRMINOS QUE FUE LEÍDO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS, CON RELACIÓN A OFICIOS SUSCRITOS POR EL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, EL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO, EN LOS QUE SOLICITAN AUTORIZACIÓN DE ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN, PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE GOBERNANZA METROPOLITANA DE “LA LAGUNA” QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO I. MADERO, MATAMOROS Y TORREÓN, COAHUILA Y LOS MUNICIPIOS DE GÓMEZ PALACIO Y LERDO, DURANGO.

**10.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA,RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR MEDIANTE LA CUAL SE CREA UNA FRACCIÓN EL NUMERAL DÉCIMO CUARTO DE LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL C. INGENIERO ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL.

**11.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA,RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR MEDIANTE LA CUAL SE CREA LA LEY DE FOMENTO PARA EL USO DE LA BICICLETA Y PROTECCIÓN AL CICLISTA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL C. ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL.

**12.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA,RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 220, 224, 243 Y 334 DE LA LEY DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y 399 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR EL C. ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL.

**13.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 53 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PLANTEADA POR EL C. ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL.

**14.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA,RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SUSCRITA POR LA C. ALMA IBETH SALINAS BARRÓN.

**15.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA,RELATIVO A LA INICIATIVA POPULAR CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA, SUSCRITA POR LOS C. C. JUAN LUIS ORDAZ MÉNDEZ Y JESÚS ALBERTO HERNÁNDEZ VALDÉS

**SE CONOCIÓ Y RESOLVIÓ SOBRE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO:**

**16.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD D VOTOS “SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS BRINDEN LA ATENCIÓN DEBIDA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CONSUMIDORES, QUE HAN SIDO DEFRAUDADOS EN NUESTRO ESTADO EN ESTA PANDEMIA, SIENDO ACOMPAÑADOS Y ASESORADOS EN TODO EL PROCESO, A FIN DE QUE SE LES DÉ UNA PRONTA SOLUCIÓN A SUS DEMANDAS Y QUEJAS”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE.

**17.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A LAS COMISIONES ENCABEZADAS POR LA DIPUTADA PATRICIA TERRAZAS BACA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL DIPUTADO ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y AL C. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE RECONSIDEREN LOS MONTOS DEFINITIVOS A ASIGNAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS, NO PERMITIENDO EL DECREMENTO APLICADO EN EL PROYECTO DE PAQUETE FISCAL, HACIÉNDOLES UN ENÉRGICO LLAMADO A NO VULNERAR EL PACTO FEDERAL EN PERJUICIO DEL ESTADO DE COAHUILA Y SUS 38 MUNICIPIOS. ASIMISMO, SE SOLICITA AL GOBERNADOR DE COAHUILA, QUE SE SUME A ESTE EXHORTO EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN.

**18.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA QUE INCLUYAN DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, LA PARTIDA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO ACUÑA-ZARAGOZA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR.

**19.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA, CON LA FINALIDAD DE QUE SOLICITE A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS A QUE IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A BRINDAR UNA ÓPTIMA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y PENSIONADOS, QUE CADA MES REQUIEREN LOS SERVICIOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE SUS PENSIONES”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA.

**20.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “EXHORTAR AL MUNICIPIO DE MATAMOROS Y A SU SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, A UNA PRONTA Y RÁPIDA REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, TAMBIÉN AL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA QUE ABASTECEN AL MUNICIPIO Y PRINCIPALMENTE A LOS EJIDOS DEL NORTE DEL MENCIONADO MUNICIPIO, PARA GARANTIZAR EL VITAL LÍQUIDO A TODOS NUESTROS HABITANTES MATAMORENSES”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ.

**21.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “SOLICITAR AL GOBIERNO DE MÉXICO, PARA QUE EMPRENDA LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE SALVAGUARDAR LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA DEBIDO A LA CRISIS QUE SE HA DESATADO POR LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA DE ALTOS HORNOS DE MÉXICO (AHMSA), QUE ES LA PRINCIPAL FUENTE DE EMPLEO DE LA QUE DEPENDEN CERCA DE 400 MIL PERSONAS EN NUESTRO ESTADO”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA.

**22.-** SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS “CON OBJETO DE QUE ESTE PLENO DEL CONGRESO, NOS UNAMOS A LA SOLICITUD PLANTEADA POR LOS SENADORES DE COAHUILA, PARA PEDIR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DECLARE ZONA DE EMERGENCIA ECONÓMICA, A LAS REGIONES CENTRO Y CARBONÍFERA DE NUESTRO ESTADO, A FIN DE QUE PUEDAN ACCEDER A APOYOS Y BENEFICIOS QUE LES PERMITAN LOGRAR SU RECUPERACIÓN ECONÓMICA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS.

**23.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “CON EL OBJETO DE QUE ESTA SOBERANÍA ENVÍE UNA ATENTA SOLICITUD AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE RECONSIDERE ELIMINAR LOS RECORTES PRESUPUESTALES PARA COAHUILA, LOS CUALES COLOCAN A NUESTRO ESTADO COMO LA SEXTA ENTIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN ESTE RUBRO, Y QUE EN TIEMPOS DE PANDEMIA, SUMADO A LA PRECARIA SITUACIÓN DE AHMSA EN LA REGIÓN CENTRO, Y DE LOS PRODUCTORES DE CARBÓN EN LA REGIÓN CARBONÍFERA, SON ALTAMENTE INDISPENSABLES”, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA, LA PRESIDENCIA LA TURNÓ PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.

**24.-** EN VIRTUD, DE QUE NO FUE PRESENTADA COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN “EXHORTAR AL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA QUE CONSIDERE RECLASIFICAR LAS TARIFAS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO DOMÉSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE LOS CINCO MANANTIALES DEL ESTADO DE COAHUILA”, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, POR LO QUE LA PRESIDENCIA LA TURNÓ PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A LA COMISIÓN DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS.

**AGENDA POLÍTICA:**

**25.-** SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, “CON MOTIVO DEL ESCARNIO SOCIAL A QUE HA SIDO OBJETO LA IMAGEN DE UNA PERSONA A TRAVÉS DE VARIAS LONAS DISTRIBUIDAS EN LA CAPITAL DE NUESTRO ESTADO, PROVOCANDO BURLAS Y UN SINFÍN DE EXPOSICIONES MEDIÁTICAS DE SU IMAGEN Y DATOS PERSONALES”:

**26.-** SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, EN RELACIÓN CON LA CONSULTA CIUDADANA PARA EL EVENTUAL ENJUICIAMIENTO A LOS EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA: CARLOS SALINAS DE GORTARI, ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA Y ENRIQUE PEÑA NIETO, POR PRESUNTOS ACTOS ILÍCITOS QUE HAYAN CAUSADO AFECTACIONES O DAÑOS GRAVES AL PAÍS”.

**27.-** SE INSCRIBIÓ ÍNTEGRAMENTE EN EL DIARIO DE LOS DEBATES DE ESTA SESIÓN, EL PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA, CON RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL PARA LA PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO.

**28.-** SE DIO LECTURA A UN PRONUNCIAMIENTO QUE PRESENTARON LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, “EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021”.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DIO POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 13 HORAS, CON 22 MINUTOS, DEL MISMO DÍA, CITANDO A LA CUARTA SESIÓN A LAS 10:00 HORAS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO.**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIP. BLANCA EPPEN CANALES.**  **SECRETARIA** | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **SECRETARIA** |

**INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

**RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO**

**23 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**1.-** OFICIO DE LA SINDICO DE MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE PARRAS, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021, DE DICHO MUNICIPIO.

**TÚRNESE A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

**2.-** OFICIO DEL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, DE DICHA ENTIDAD.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

**3.-** OFICIO DE LA GERENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GENERAL CEPEDA, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL MISMO SISTEMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA**

**4.-** OFICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, MEDIANTE EL CUAL SE ENVIADA UNA REFORMA AL DECRETO 696 EN SU ARTICULO 5, RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CRÉDITO HASTA POR LA CANTIDAD DE $5,445,000.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), MÁS INTERESES Y ACCESORIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, A UN PLAZO MÁXIMO DE HASTA 5 (CINCO) AÑOS, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE CARGA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA.

**SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**5.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021, DE DICHO MUNICIPIO.

**TÚRNESE A LAS COMISIONES DE HACIENDA**

**6.-** OFICIO DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA SU APOYO A LA INICIATIVA PARA QUE SE INSCRIBA EL NOMBRE DE LA COAHUILENSE NANCY CÁRDENAS MARTÍNEZ EN LOS MUROS DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS Y ACTIVIDADES CÍVICAS**

**7.-** OFICIO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VIESCA, MEDIANTE EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTE CONGRESO, QUE EN SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, TOMO PROTESTA EL CIUDADANO MAGDALENO GUERRERO RAMÍREZ, COMO SÉPTIMO REGIDOR DE DICHO AYUNTAMIENTO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**8.-** OFICIO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EN SESIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL PLENO DE DICHO TRIBUNAL APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, UN TOTAL DE 98 TESIS AISLADAS, DE LAS CUALES 24 DE ELLAS SE DECLARARON NO VIGENTES POR REITERACIÓN, FORMANDO 7 JURISPRUDENCIAS. ANEXÁNDOSE UN DISCO COMPACTO EN EL QUE SE CONTIENEN LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES ANTES MENCIONADOS.

**DE ENTERADO Y A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA Y TÚRNESE A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES**

**9.-** OFICIO DEL DIPUTADO MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y COMISIONADO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE OFICIO, MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA A LOS SIMILARES DE LOS CONGRESOS DE COAHUILA Y DURANGO, PARA EMPRENDER ACCIONES DE COORDINACIÓN, TENDIENTES A ATENDER EL PRESENTE PROBLEMA DE IMPACTO ECONÓMICO REGIONAL, NACIONAL Y A NIVEL GLOBAL.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO**

**10.-** OFICIO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA UNA MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020, DE DICHO MUNICIPIO.

**TÚRNESE A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

**11.-** INICIATIVA POPULAR PRESENTADA POR LA CIUDADANA AMAL LIZETTE ESPER SERUR, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL TRÁMITE DE DICHA INICIATIVA, CONFORME A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**12.-** INICIATIVA POPULAR PRESENTADA POR LOS CIUDADANOS JOSÉ LUIS ERNESTO CASTRO GARZA Y ROLANDO VALLE FARIAS, MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA Y SE REFORMA LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL TRÁMITE DE DICHA INICIATIVA, CONFORME A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**13.-** INICIATIVA POPULAR PRESENTADA POR EL CIUDADANO ERICK RODRIGO VALDEZ RANGEL, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON EL TRÁMITE DE DICHA INICIATIVA, CONFORME A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**14.-** ESCRITO QUE SUSCRIBE EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR DE PUEBLOS INDEPENDIENTES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE JUSTICIA PARA QUE LA FISCALÍA DEL ESTADO RESPETE LOS DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**15.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONCLOVA, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA EL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS Y LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES 2021, DE DICHO MUNICIPIO.

**TÚRNESE A LAS COMISIONES DE HACIENDA**

**16.-** OFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONCLOVA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CINCO INMUEBLES, UBICADOS EN LOS FRACCIONAMIENTOS CARLOS SALINAS DE GORTARI Y OSCAR FLORES TAPIAL DE DICHA CIUDAD, CON OBJETO DE FOMENTAR LA VIVIENDA Y PROVEER A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES MENOS FAVORECIDOS, CON UN PREDIO MUNICIPAL.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**17.-** ESCRITO QUE SUSCRIBEN MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ TÉLLEZ, ALBERTO JOHNATAN IRACHETA TOVAR, LUIS ENRIQUE ALEMÁN ESPINOSA, JUAN AMADO MARINES HERNÁNDEZ Y EDUARDO JAVIER ALONSO NAVARRO, SÍNDICO Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE GENERAL CEPEDA, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTAN QUE NO FUERON TOMADOS EN CUENTA PARA LA APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DE DICHO MUNICIPIO, ASÍ MISMO, SOLICITAN A LA COMISIÓN DE HACIENDA DE ESTE CONGRESO SU INTERVENCIÓN PARA SANAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.

**TÚRNESE A LAS COMISIONES DE HACIENDA**

**18.-** TABLAS DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

**TÚRNESE A LAS COMISIONES DE HACIENDA**

**19.-** OFICIO DEL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN DICTAMEN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ARMONIZAR EL MARCO LEGAL EN MATERIA EDUCATIVA, CONFORME LO MANDATA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE ABROGA LA LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS Y ACTIVIDADES CÍVICAS**

**20.-** OFICIO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL HACE USO DE SU FACULTAD PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL DECRETO NÚMERO 704 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, EN EL QUE SE REFORMAN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA**

**21.-** OFICIO DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA 07 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL NOTIFICA EL CONTENIDO Y CALENDARIO APROBADOS A LOS CONGRESOS LOCALES EN LA RESOLUCIÓN INE/CG289/2020.

**DE ENTERADO**

**INFORME SOBRE EL TRAMITE REALIZADO RESPECTO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADAS EN LA SESION CELEBRADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

Sobre el tramite realizado respecto de las Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión celebrada el 15 de septiembre de 2020, el pleno del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, informa lo siguiente:

**1.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió a los titulares de la CONDUSEF y la PROFECO la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Jaime Bueno Zertuche, “Con el objeto de solicitar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), para que en el ámbito de sus respectivas competencias brinden la atención debida a los usuarios de servicios financieros y consumidores, que han sido defraudados en nuestro estado en esta pandemia, siendo acompañados y asesorados en todo el proceso, a fin de que se les dé una pronta solución a sus demandas y quejas”, para los efectos procedentes.

**2.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Presupuesto de la LXI Legislatura del H. Congreso de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud al Gobierno Federal para que reconsidere eliminar los recortes presupuestales para Coahuila, los cuales colocan a nuestro estado como la sexta entidad con mayor porcentaje de disminución en este rubro, y que en tiempos de pandemia, sumado a la precaria situación de AHMSA en la región Centro, y de los productores de carbón en la región Carbonífera, son altamente indispensables”, para los efectos procedentes.

**3.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados Federal la Proposición con Punto de acuerdo planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por la que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que incluyan dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, la partida destinada a la construcción del Libramiento Acuña-Zaragoza”, para los efectos procedentes.

**4.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión Nacional Bancaria la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Josefina Garza Barrera, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Comisión Nacional Bancaria, con la finalidad de que solicite a las instituciones bancarias a que implementen estrategias encaminadas a brindar una óptima atención a la población de adultos mayores y pensionados, que cada mes requieren los servicios bancarios para el cobro de sus pensiones”, para los efectos procedentes.

**5.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió al Municipio de Matamoros y al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del mismo, la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Mediante la cual se exhorta al Municipio de Matamoros y a su sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, a una pronta y rápida reparación de la red de distribución de agua, también al mantenimiento de los pozos de agua que abastecen al Municipio y principalmente a los Ejidos del Norte del mencionado Municipio, para garantizar el vital líquido a todos nuestros habitantes Matamorenses”, para los efectos procedentes.

**6.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió al Titular del Poder Ejecutivo Federal la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud al Gobierno de México, para que emprenda las acciones necesarias a fin de salvaguardar la economía de la Región Centro de Coahuila debido a la crisis que se ha desatado por la difícil situación económica de Altos Hornos de México (AHMSA), que es la principal fuente de empleo de la que dependen cerca de 400 mil personas en nuestro Estado”, para los efectos procedentes.

**7.-** Se formularon comunicaciones mediante las cuales se envió al Titular del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, al Presidente y la Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados Federal la Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, “Para que este H. Pleno exhorte a la Cámara de Diputados, a las Comisiones encabezadas por la Diputada Patricia Terrazas Baca, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Diputado Erasmo González Robledo, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la Republica y al C. Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsideren los montos definitivos a asignar a las Entidades Federativas y Municipios del País, no permitiendo el decremento aplicado en el proyecto de paquete fiscal, haciéndoles un enérgico llamado a no vulnerar el pacto federal en perjuicio del Estado de Coahuila y sus 38 Municipios. Asimismo, se solicita al Gobernador de Coahuila, que se sume a este exhorto en representación del Poder Ejecutivo del Estado”, para los efectos procedentes.

**8.-** Se formuló comunicación mediante la cual se envió a la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la Proposición con Punto de acuerdo planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad, para que considere reclasificar las tarifas para el suministro de energía eléctrica de uso doméstico en los Municipios de la Región de los cinco manantiales del Estado de Coahuila”, para los efectos procedentes.

**A T E N T A M E N T E.**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**

**DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**

**(RÚBRICA)**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NOVENO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRÍGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES.**

El que suscribe, **Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,** Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado por el Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila**, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares,** en ejercicio de la facultad legislativa que concede el artículo 59 fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sometemos a consideración del pleno de ésta Honorable Representación iniciativa con proyecto de decreto que reforma el noveno párrafo del artículo 8° de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Los medios electrónicos han evolucionado de manera constante y su empleo se ha diversificado, ya que los mismos Estados los utilizan para facilitar trámites administrativos, declaraciones de impuestos, métodos de pago, entre otros.

Uno de los principales logros del uso de internet es la rapidez de acceso a un innumerable número de informaciones, entre las que se encuentran las de carácter contractual. Los beneficios que reportan los instrumentos o medios de búsqueda, accesibles de forma gratuita en la red, convierten a internet en el principal medio de comunicación de la denominada sociedad de la información.

Asimismo, las empresas recurren a las modernas tecnologías para obtener mejores resultados en sus diferentes operaciones económicas y jurídicas. En el mismo sentido, los particulares han recurrido a dichos medios para celebrar diversos actos jurídicos, entre ellos los contratos electrónicos.

Es importante señalar, que el acceso al internet se encuentra garantizado en el párrafo tercero del artículo 6° de nuestra Carta Magna, el cual es por demás relevante ya que en su texto se consigna el fundamento de esta iniciativa:

*“…El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet…”.*

En ese mismo sentido, nuestra Constitución Coahuilense establece en el noveno párrafo del artículo 8° que:

*“El acceso a internet y a la banda ancha son derechos reconocidos a todas las personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables en la materia”.*

Ahora bien, no basta con solo garantizar el derecho y el acceso al internet en un texto constitucional, este derecho no se agota con un mero reconocimiento. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, el ejercicio de la libertad humana requiere un mínimo de condiciones económicas que lo posibiliten y lo hagan eficaz.

Por ejemplo, puede decirse que la libertad del hombre con bienes económicos suficientes es idéntica a la libertad de quien no cuenta con lo esencial para vivir, sin embargo, el ejercicio concreto de la libertad en las situaciones de la vida real, cambia radicalmente de acuerdo con las diversas situaciones económicas.

Ya lo apuntaba Isaiah Berlin *“se dice muy plausiblemente, que si un hombre es tan pobre que no puede permitirse algo respecto a lo cual no hay ningún impedimento legal (como comprar una barra de pan o un viaje alrededor del mundo), él tiene tan poca libertad para obtenerlo como si la ley se lo impidiera”.*

Basta reflexionar en la demanda súbita que generó el uso del internet en los hogares, con motivo de la pandemia del coronavirus, lo cual hizo evidente la brecha digital que existe en la sociedad, a pesar de ser un derecho consagrado en el texto constitucional local y en nuestra Carta Magna.

No garantizar este derecho a plenitud, en sentido negativo y positivo sería riesgoso para una verdadera democracia, ya que no hay libertades a medias, o se es libre o no se es libre, no existe una ficción de libertad maquilada en una supuesta democracia, la libertad debe ser plena, y por ello tenemos el deber de hacer efectiva esta libertad, de acceder al internet en forma gratuita, y por ello presentamos la presente iniciativa, con el fin de que no quede ésta libertad como un mero derecho programático, sino que se asegure en el texto constitucional, el deber del Estado y de los Municipios de garantizar y hacer efectiva esta libertad.

Porque hace algunos años, el acceso al internet era un lujo, pero hoy en día es una necesidad, forma parte de la vida de todas y de todos, en todos los sentidos, y la pandemia del coronavirus hizo más evidente esta dependencia y esta necesidad que se tiene hacia el uso de las tecnologías cuya brecha limita otros derechos, como el acceso a una educación de calidad, como el acceso a servicios financieros de calidad, como el acceso a servicios de salud, a través de las citas en línea, como el acceso a servicios tributarios, y la lista es interminable.

Hace un par de años, el 4 de julio de 2018, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución sobre la *“Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”,* la cual establece la importancia de la protección y garantías para el ejercicio de los derechos humanos en línea. Dicha resolución invita a todos los países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red y condena a las naciones que alteran esta libertad.

Nuestro texto constitucional local, y nuestra Carta Magna, garantizan este derecho, pero éste no puede ser efectivo y no puede hacerse uso de ésta libertad si no esta establecido de igual forma el deber del Estado y de los Municipios para hacer pleno el ejercicio de ésta libertad, por ello, acudimos a ésta soberanía para presentar la presente iniciativa y garantizar de una vez por todas el acceso gratuito de las y los coahuilenses y de quienes se encuentren en territorio coahuilense, a los servicios de internet y banda ancha gratuitos en cualquier edificio, instalación o lugar público.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se reforma el noveno párrafo del artículo 8° de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 8°.** El acceso a internet y a la banda ancha son derechos reconocidos a todas las personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables en la materia. **El Estado y los Municipios deberán garantizar el acceso gratuito al internet inalámbrico de banda ancha en los edificios, instalaciones y lugares públicos.**

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ATENTAMENTE,**

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN POR VÍA VIRTUAL Y A DISTANCIA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo quinto del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho a la educación para las y los niños y adolescentes hasta un nivel medio superior de manera gratuita, laica y obligatoria. Esto es así porque nuestro sistema constitucional entiende que la educación es un valor fundamental y necesario para toda sociedad democrática que pretenda desarrollarse económica, social y culturalmente.

La educación de un país no es un tema menor, ya que representa el elemento central que toda sociedad democrática debe priorizar, pues sólo así se puede formar ciudadanos con criterio propio, tolerantes y plurales que respetan el estado de derecho y los valores humanistas.

La educación tiene una función liberalizadora que impulsa en el ser humano la creatividad, la innovación, el emprendimiento y lo despoja de los prejuicios, el fanatismo y los dogmas. Nutrir el pensamiento plural y solidario es la mejor forma de luchar en contra del autoritarismo y violencia.

Desgraciadamente, el panorama educativo en nuestro país no es muy alentador. Antes de la pandemia, estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), estimaban que la matriculación de alumnos a nivel básico y medio superior en nuestro país eran bajas en comparación con otros Estados[[1]](#footnote-1). Después de la pandemia, ese número se ha reducido aún más debido a que muchos estudiantes han tenido que dejar sus clases debido a la falta de tecnologías y herramientas necesarias para lograr las clases virtuales o a distancia.

Un estudio realizado por la asociación civil Mexicanos Primero, sostiene que hasta 4 millones de estudiantes podrían dejar temporal o definitivamente sus estudios debido a afectaciones económicas, familiares y de motivación, causadas por la pandemia. De acuerdo con, David Calderón, presidente ejecutivo de esa organización, explicó que la estimación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre que 2 millones 523 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria abandonarían las clases en el ciclo escolar 2019-2020, se incrementaría al doble con consideraciones como la tendencia regular de abandono escolar por año, así como la cifra de aquellos que no pudieron atender los aprendizajes a distancia[[2]](#footnote-2).

Ante esta situación, que no sólo se vive en México sino en todo el mundo, la UNESCO ha recomendado optar por el uso de soluciones de alta o débil tecnología en función de la energía y el tipo de acceso a Internet con los que cuenten los estudiantes, así como del nivel de competencias digitales que tengan estos y los docentes. Puede tratarse de plataformas de aprendizaje digital, lecciones por vídeos, los MOOC e incluso de la difusión de los cursos mediante cadenas de radio y canales de televisión[[3]](#footnote-3).

Si bien es cierto, que muchas de estas medidas ya han sido tomadas por los gobiernos federal y estatal, también lo es que a pesar de ellas, muchas niñas y niños siguen sin poder acceder a la educación por falta de recursos y por falta de instrumentos legales que garanticen la educación virtual y a distancia como un derecho fundamental de las y los estudiantes.

Es por eso que la presente iniciativa, prevé reformar el artículo 117 de la Constitución Local, con el objetivo de que la educación virtual y a distancia sea reconocida como un derecho fundamental, procurando con políticas públicas estatales, el acceso a internet y otras tecnologías de la información y comunicación a quienes por sus condiciones económicas y sociales no puedan acceder a ellas por cuenta propia.

Partimos de la idea de que la educación debe ser igual para todos, lo que implica que el Estado realice las acciones necesarias para equilibrar las desigualdades sociales y educativas, con el objetivo de combatir la brecha digital, que en el ámbito educativo continúa siendo sumamente alta.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el párrafo quinto del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 117**…

…

Se garantizará el derecho a la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, en situaciones excepcionales, **el Estado garantizará además, la educación a distancia o virtual procurando el acceso de las y los estudiantes a las tecnologías de la información y la comunicación**, así mismo gozarán de las prerrogativas que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

….

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 23 de septiembre del 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DE LA LEY ESTATAL DE SALUD; EN MATERIA DE ATENCIÓN Y CUIDADOS PSICOEMOCIONALES A ELEMENTOS ACTIVOS DE BANDOS POLICIACOS Y DE SEGURIDAD.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.**

La suscrita Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a consideración de este Honorable Pleno del Congreso del Estado, la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

La definición que la Organización Mundial de Salud (OMS) estableció para el término “salud” deriva totalmente del goce personal pleno e íntegro de un estado que recae en el bienestar físico, mental y social que guardan los seres humanos.

Dicho concepto se ha visto modificado constantemente en gran magnitud para su ampliación, toda vez que anteriormente solo se creía que un estado óptimo de salud se presentaba en forma, simplemente, por la ausencia de enfermedades biológicas.

Por dichas modificaciones, hoy día podemos decir que este término ha sido dividido en tres áreas diferentes:

a) Salud física,

b) Salud mental, y;

c) Salud social.

Enfocándonos enfáticamente en el área de *“salud mental”*, la OMS la define como *“el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee la persona, relacionadas con el ámbito que la rodea; este tipo de salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno, por lo que implica una posibilidad de resolver los conflictos que se presenten”*.

Uno de esos entornos principales de desarrollo en las personas es su entorno laboral, es por esto que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en coordinación con la OMS crearon el concepto de *“Salud Ocupacional”* el cual se define como *“la rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; protegerlos de los accidentes de trabajo, consecuencias o resultados de sus acciones, enfermedades o patologías derivadas del desempeño de sus funciones diarias”*.

Enfocándonos en un sector en particular, vemos clara la tarea institucional de las autoridades en seguridad pública por salvaguardar y cuidar los derechos de sus elementos y personal, y que, así como se preocupan natural y originalmente por la sociedad, también se preocupen por sus policías y demás elementos como parte de la misma sociedad.

Son estas instituciones las que brindan seguridad en las acciones que se llevan a cabo para salvaguardar al ciudadano y su entorno llevándose a cabo mediante elementos con estándares de legalidad, dedicaciones, profesionalismo y disciplina. Sin embargo, dichos elementos también tienen el derecho de ser salvaguardados.

Por ejemplo, de inicio, según lo establecido en el artículo 123° apartado B de nuestra Constitución Política Mexicana, *“las autoridades federales, de entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social de Ministerio Público, de corporaciones policiales y de servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentaran sistemas complementarios de seguridad social”*.

En base a tal disposición legal es necesario atender una problemática que también se presenta para quienes nos cuidan, que sin duda alguna aqueja a los elementos policiales que son parte fundamental de nuestras instituciones de seguridad. Su labor diaria los expone día con día a situaciones que pudieran poner en riesgo tanto su salud e integridad física como la mental y emocional. Se enfrentan a condiciones de un medio laboral violento con situaciones allegadas a la muerte, atienden problemas como suicidios, delincuencia organizada, actos de tortura, ataques sexuales y demás aberraciones sociales que sin duda alguna altera su percepción, su realidad y en ocasiones hasta su trabajo; aunado a ello tenemos una sociedad que constantemente se encuentra cuestionando y desacreditando los resultados de las labores que estos realizan.

Otros factores adversos a los que se enfrentan son por ejemplo largas jornadas de trabajo, problemas económicos derivado de salarios cortos y gastos largos y sobre todo traumas emocionales que suelen resultar de las vivencias expuestas en sus labores. Si bien, toda labor conlleva ciertos riesgos, para los policías la exposición es constante y de mayor impacto.

En nuestro Estado nos hemos topado con situaciones tan alarmantes como el gran número de suicidios constantes en el Estado, la ola de delincuencia organizada y sus actos de tortura, entre muchos otros ejemplos que no solo afectan directamente a quienes lo hayan hecho y sus familiares, sino también indirectamente a quienes se familiaricen o tengan una relación con alguno de estos hechos, como la sociedad, vecinos, amigos, autoridades investigadoras, policías, etc.

Dejando los problemas de salud física de lado como pueden ser alta presión sanguínea, insomnio, problemas del corazón, trastorno de estrés postraumático, etc., nos adentramos entramos en el marco de lo emocional con miedos, ansiedad o depresión, apatía, etc.

Ciertamente, los policías cuentan con un entrenamiento físico y mental con el que se capacitan para prestar sus servicios, sin embargo, las consecuencias de lo que antes mencionamos a nivel psicológico son difícilmente percibidas, y llegan a quedar sin el debido estudio o análisis por parte de un especialista. Los elementos de seguridad deben hacer frente a dichos problemas sigilosos, mediante la posibilidad de cuidar su salud mental, por el bien de sí mismos, de sus familiares y de la sociedad.

En un marco de seguridad necesitamos policías firmes, decididos, comprometidos y preparados con buena salud mental para enfrentar lo que su trabajo les ponga de frente, sin embargo, no hay quien se preocupe por esto. Si vemos inversiones en chalecos y armamento creyendo que con eso ya están a salvo; pero es la capacitación en técnicas para el manejo de emociones, la orientación psicológica, así como el correcto comportamiento ante situaciones de estrés lo que realmente los mantendría en un desarrollo pleno de toda situación que se presente.

Es por eso, Diputadas y Diputados que se presenta ante este H. Pleno del Congreso el siguiente:

**P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**PRIMERO:** Se reforma la fracción XI y se adiciona la fracción XV, ambas del artículo 86 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 86. Derechos de los policías**

Los policías tendrán los derechos siguientes:

I al X…

**XI.** Recibir atención médica oportuna e idónea**; dicha atención médica comprenderá el cuidado de su salud física, mental y social.**

XII al XIV…

**XV. Recibir orientación sobre su salud mental y atender sus inquietudes, problemas o cuadros emocionales derivados del desempeño de sus funciones y su conducta.**

**SEGUNDO.–** Se reforman: la fracción IV del apartado A del artículo 4°, la fracción XVI del artículo 7° y el artículo 68 de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 4o.** En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley, corresponde al Estado de Coahuila**.**

1. **En materia de Salubridad General:**

I al III…

**IV.** La salud mental **y psicoemocional;**

V al XXIII…

**Artículo 7o.** La coordinación del Sistema Estatal de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud del Estado, correspondiéndole lo siguiente:

I al XV. …

**XVI.** Impulsar la mejora de los procesos de atención a la salud **física, mental, psicoemocional y social** mediante la implementación de sistemas de calidad en las dependencias públicas y privadas, para alcanzar la certificación de las mismas **en cuanto a la preparación del capital humano y** **sobre todo, para salvaguardar los derechos del personal que en estas laboran.**

XVII y XVIII. …

**Artículo 68.** La atención de las enfermedades mentales comprende:

**I.** La atención de personas con padecimientos mentales, la **prevención y** rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas **o que derivado de sus funciones o labores diarias, siendo estas de índole públicas o privadas, sufran trastornos o traumas o alteraciones de su estado psicoemocional;** y

II…

**T R A N S I T O R I O S.**

**PRIMERO. -** El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE**

Iniciativa que presenta la diputada Blanca Eppen Canales del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; en ejercicio de la facultad legislativa que me conceden los artículos 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso Local, presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se modifica el contenido de la fracción III, adicionando un nuevo contenido a la fracción IV, recorriendo el actual a la fracción V, que se crea, de artículo 18 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila; con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En fecha 25 de septiembre de 2018, presentamos una iniciativa por la que se modifica el contenido de la fracción II del apartado A del artículo 16 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con objeto de establecer disposiciones relacionadas con el presupuesto de egresos del estado, en relación con la perspectiva de género y los recursos destinados para tal fin.

De la exposición de motivos de dicho proyecto, hemos decidido retomar algunos de sus contenidos por guardar estrecha relación con el contenido de la presente, a saber:

“…Los presupuestos públicos son instrumentos de política social y económica que reflejan las prioridades de los estados en relación con el bienestar de la población. Es así que la forma en que se programa planea y distribuye el presupuesto público impacta de forma directa en la disminución de las desigualdades entre mujeres y hombres, especialmente en aspectos económicos como: salario mal remunerado, acceso a la propiedad mueble e inmueble, acceso al crédito, a los servicios de calidad y, de paso, contribuye a erradicar la violencia contra las mujeres.

La Organización para las Naciones Unidas define el Presupuesto Sensible al Género o PPG, como aquel cuya planeación, programación y presupuesto contribuye al avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las mujeres.

(Fuente: http://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/presupuestos-publicos-con-perspectiva-de-genero)

“Los PPG consideran todas las fases de elaboración presupuestaria, desde la formulación, la planeación, la elaboración del presupuesto y la evaluación de impacto de las intervenciones públicas. Un aspecto importante considerado también en los PPG es el análisis del impacto diferenciado de la recaudación de impuestos entre hombres y mujeres.

Las iniciativas de PPG buscan también fortalecer los marcos normativos propicios al objetivo del logro de la igualdad de resultados, construir capacidades, y consolidar mecanismos de monitoreo y evaluación de los presupuestos públicos para la transparencia y la rendición de cuentas a las mujeres. En este sentido, ONU Mujeres promueve la armonización legislativa con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres para que las leyes de planeación y, presupuestos y de responsabilidad hacendaria contemplen la igualdad de género y la no discriminación contra las mujeres…”

El Informe “Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, refiere que la brecha de desigualdad en México y en los países de América Latina es aún muy amplia, menciona que las mujeres son mucho más afectadas por la pobreza que los hombres, las mujeres tienen mayores probabilidades que los hombres de sufrir inseguridad alimentaria, y que un considerable porcentaje de las mujeres de las zonas indígenas y rurales en México enfrentan grandes carencias como el acceso a servicios cualificados durante el parto (18%), y acceso a servicios básicos como agua entubada (22%)

Otras cifras del Informe antes mencionado revelan lo siguiente:

“….A escala mundial, hay 122 mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años que viven en la pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo grupo etario. Entre las mujeres de 25 a 34 años de edad, las cifras de pobreza extrema para la región de América Latina y el Caribe son más altas, donde existen 132 mujeres que viven en esa condición por cada 100 hombres. A partir de datos de 89 países en desarrollo, las mujeres divorciadas mayores de 15 años de edad tienen el doble de probabilidades de ser pobres que los hombres divorciados del mismo grupo etario. América Latina y El Caribe es la región que presenta el mayor porcentaje de mujeres divorciadas entre la población de mujeres pobres, el cual alcanza el 15,8%.

En América Latina y el Caribe, el 29% de las mujeres de entre 20 y 24 años de edad contrajeron matrimonio por primera vez a los 18 años, y el 7% a los 15 años. A nivel mundial, la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres es 2,6 veces mayor que la que asumen los hombres. En América Latina y el Caribe, las mujeres de los grupos de ingreso más bajo destinan más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que las mujeres del segmento de mayor ingreso. Los hombres dedican uniformemente menos tiempo a este tipo de trabajo, con independencia del nivel de ingreso”.

El documento “Pobreza y Género en México: Hacia un sistema de indicadores, 2010-2016’; revela algunos datos muy importantes en relación a la desigualdad en México para el periodo que se cita, esto en el rubro económico y social:

Responsabilidad en el hogar; Una cuarta parte de los hogares en el país se integran con una jefatura femenina, y es común que en estos grupos familiares la presencia de niños y adultos mayores sea mayor al promedio, por lo que los ingresos y sus alcances se reducen considerablemente.

Acceso a la educación; La brecha educativa entre mujeres y hombres impacta con fuerza a las jefas de hogar, quienes no pueden acceder a oportunidades de estudio, especialmente cuando se encuentran en situación de pobreza. En 2016 la brecha educativa entre ambos sexos se ubicó en 6.5 puntos porcentuales, de acuerdo con el Coneval.

Acceso a servicios de salud; en este rubro las mujeres siguen en desventaja al depender de otras personas para gozar del derecho a servicio médico; hablamos de depender de familiares con trabajo y prestaciones para, por medio de ellos, acceder a servicios de salud, lo que las coloca en situación de dependencia y vulnerabilidad.

Seguridad Social: en 2016, por cada cien hombres con acceso a la seguridad social había 62 mujeres con el mismo acceso, cifra que se ha mantenido constante desde 2010; pero, que es distinta en la población en situación de pobreza, donde el porcentaje se reduce a 42 mujeres por cada cien hombres.

Vivienda; cifras del Coneval reflejaron que para 2016, los hogares encabezados por mujeres presentan mayores índices de pobreza que los tutelados por hombres. Y que, en el caso de estos últimos, se observa una tendencia favorable, no así para las mujeres.

Alimentación; desde 2010, los hogares con jefatura femenina presentan mayores niveles de inseguridad alimentaria.

Empleos remunerados; las cifras arrojan que la población trabajadora sin contrato (sumados hombres y mujeres) era para 2016 del 55.1%; y de este porcentaje el 38.6% correspondía a las mujeres, mientras que el 16.5 % a los hombres. Más del doble la desventaja para las mujeres mexicanas.

Trabajo doméstico; el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados (a menores y adultos mayores) presenta una brecha de desigualdad enorme En promedio, las mujeres dedicadas a este ramo dedican a los quehaceres entre 12 y 17 horas semanales más que los hombres, y entre 5 y 14 horas semanales más al cuidado exclusivo y sin remuneración de otras personas, como menores, adultos mayores o enfermos, dentro o fuera del hogar.

Presupuesto con Perspectiva de Género

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, define la perspectiva de género de la siguiente manera:

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

…..

VI. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

La perspectiva de género persigue la finalidad de alcanzar la equidad de género en la distribución de recursos y beneficios entre hombres y mujeres conforme a normas y mediciones adecuadas del impacto de las políticas públicas, programas y acciones.

En materia presupuestal, el objetivo de la perspectiva de género es que sus metas y fines se incorporen a todo el proceso de elaboración de los presupuestos de la administración pública: planeación, formulación, diseño, programación, ejecución y evaluación.

Los Presupuestos con Perspectiva de Equidad de Género fueron establecidos como un requisito fundamental de la Plataforma para la Acción de las Naciones Unidas acordada en la Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) requería a los Estados asegurar que el gasto público, el presupuesto y sus efectos no discriminaran en ningún modo a las mujeres.

La Unión Europea, en el año de 2005, con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Beijing, urge a los Estados miembros a desarrollar y generalizar los Presupuestos con Equidad de Género. Lo anterior en concordancia con los compromisos a favor de la transversalidad de género adoptados por las instituciones de la Unión Europea, incluido el actual Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 y el Pacto Europeo por la Igualdad de Género.

Un presupuesto con perspectiva de género presenta las siguientes características:

No consiste en crear un presupuesto distinto para las mujeres.

No se trata de asegurarse de que se gaste el mismo presupuesto en hombres que en mujeres.

Persigue la finalidad de utilizar los recursos de manera más óptima y planeada para lograr los objetivos de igualdad entre géneros y el desarrollo humano en general.

Prioriza los recursos para lograr los objetivos, planes y políticas en materia de igualdad, pero no se trata de incrementar el gasto público en general. Y;

Reorienta los programas dentro de los sectores, en lugar de cambios de las cantidades asignadas a sectores específicos.

Por otra parte, las ventajas de un presupuesto con perspectiva de género son muchas, a saber: facilita la rendición de cuentas al contar con datos desagregados, permite una valoración precisa de impacto de los programas, planes y políticas en materia de igualdad, se optimiza el uso de los recursos públicos, se obtiene un sistema de gestión presupuestal con resultados perfectamente medibles y se da cumplimiento a los planes de acción previstos en los convenios y tratados internacionales suscritos por México…” **Fin de la cita.**

Los municipios, al igual que los poderes ejecutivos locales y el federal, gozan de plena autonomía para crear, planear y decidir la aplicación de sus presupuestos; y, en concordancia con los planes y programas nacionales y locales, así como con las políticas públicas dedicadas a la equidad de género y a logro de las metas de la igualdad sustantiva, deben considerar en sus partidas presupuestales dichas consideraciones, esto es, no pueden los municipios apartarse de los objetivos antes señalados.

La mayoría de las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres de las entidades federativas, al igual que la nuestra, dedican un apartado a las atribuciones de los municipios en materia de igualdad, en nuestro caso, bajo la siguiente redacción:

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza

*Artículo 18. Atribuciones de los municipios.*

*De conformidad con lo dispuesto en la presente ley, corresponde a los municipios:*

*I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas nacional y estatal;*

*II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;*

*III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo que promuevan los contenidos de la presente ley; y,*

*IV. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.*

Al percibir que no contiene en las atribuciones municipales referencias a el deber de planear el presupuesto con perspectiva de género, decidimos hacer una revisión de derecho comparado, analizando otras leyes de igualdad entre mujeres y hombres de algunas entidades federativas, encontrando lo siguiente:

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE CAMPECHE:

***ARTÍCULO 14.-*** *De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, corresponde a los Municipios:*

*II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal correspondiente, en la consolidación de los programas, planes, proyectos y acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres;*

*III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los valores y contenidos de la presente ley. El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas;*

*IV. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales; y*

*V. Tomar las medidas necesarias en sus presupuestos de egresos para la ejecución de programas con perspectiva de género, en términos de la legislación aplicable.*

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE COLIMA:

***Artículo 14.-*** *De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, corresponde a los Municipios:*

*I. Diseñar, implementar y evaluar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas Nacional y Estatal;*

*V. Elaborar el presupuesto de egresos del Municipio con enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento en el ámbito de su competencia de la política de igualdad:*

*VI. Propiciar y facilitar la participación de las mujeres hacia el interior del ayuntamiento, así como en los puestos de toma de decisiones;*

*VII. Promover acciones afirmativas para dotar de identidad civil a niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, para que puedan ejercer sus derechos sin discriminación;*

*VIII. Implementar el sistema municipal de igualdad; y*

*IX. Celebrar los instrumentos jurídicos de coordinación, cooperación y concertación necesarios, en materia de igualdad de género.*

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE DURANGO:

***ARTÍCULO 20.*** *De conformidad con lo dispuesto en la presente y sin perjuicio de lo señalado en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, corresponde a los municipios:*

1. *Prever las necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad;*
2. *Vigilar las buenas prácticas de la administración pública municipal de igualdad y no discriminación, en concordancia con los principios rectores de la ley****;***
3. *Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de la región en la materia que esta ley confiere.*

*El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difunden las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas;*

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE NAYARIT:

***Artículo 27.-*** *De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley sin perjuicio de lo señalado en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, corresponde a los Ayuntamientos:*

*I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con la política nacional y estatal respectiva, coadyuvando con dichos órdenes de gobierno para la mejor aplicación de esta Ley;*

*II. Establecer los Programas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;*

*III. Prever las necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad que se implementen y hacerlas del conocimiento a quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado;*

*IV. Promover las buenas prácticas de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública Municipal, en concordancia con lo dispuesto en esta Ley;*

En suma, encontramos que al menos la mitad de los ordenamientos consultados contemplan el deber de planear los presupuestos municipales con perspectiva de género; por lo que consideramos que este es un faltante muy importante en nuestra Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado. Motivo por el cual consideramos pertinente realizar las adiciones que se proponen al artículo 18 de este ordenamiento.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** se modifica el contenido de la fracción III, adicionando un nuevo contenido a la fracción IV, recorriendo el actual a la fracción V, que se crea, del artículo 18 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila, para quedar como sigue:

Artículo 18…

I a la II

III. **Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo que promuevan los contenidos de la presente ley;**

IV. **Elaborar el presupuesto de egresos del Municipio con perspectiva de género, incorporando la asignación de recursos suficientes para el cumplimiento en el ámbito de su competencia de las políticas, programas y acciones para la igualdad; y**

V. **Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.**

…

**TRANSITORIO**

**Único.** - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Saltillo, Coahuila a 23 de septiembre de 2020

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”

DIP. BLANCA EPPEN CANALES

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA** **REGULAR LA POSTULACIÓN Y ELECCIÓN CONSECUTIVA POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE DIPUTACIONES LOCALES, SÍNDICADURÍAS Y REGIDURÍAS.**

**C. Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del**

**H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente. –**

La que suscribe, Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, integrantes de este H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 67 fracción I de la Constitución Política del Estado y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, nos permitimos someter a la consideración de ese Honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto de decreto que **reforma diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza para regular la postulación y elección consecutiva por el principio de representación proporcional de diputaciones locales, síndicadurías y regidurías**,acorde a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

Marco teórico:

El seis de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de reformas denominadas “Reforma Política”, impulsadas por el Presidente López Portillo. Mediante este decreto, se creó el principio de la representación proporcional. Bajo este sistema, cada partido político elabora una lista de ciudadanas y de ciudadanos propuestos para acceder a diferentes cargos como diputaciones o regidurías. Dependiendo del número de votos que obtenga el partido a nivel nacional o estatal, según sea el caso, tendrá derecho a una cantidad determinada de diputados o diputadas federales o locales, síndicos, sindicas, regidores o regidoras que proporcionalmente le corresponda. De esta manera, se designan estos cargos a quienes aparecen primero en cada lista hasta agotar el total de lugares que le corresponde al partido.

Posteriormente, en el año 2014 se aprobó una reforma a la Constitución Federal para permitir la reelección de los diputados, diputadas federales y locales y de los senadores, senadoras, así como los integrantes de Ayuntamientos.[[4]](#footnote-4) Específicamente, en el artículo 59 Constitucional se estableció que los senadores y las senadoras podrían ser electas hasta por dos periodos consecutivos, mientras que los diputados y las diputadas podrían hacerlo hasta por cuatro periodos consecutivos, con las únicas condicionantes de que la postulación proviniera del mismo partido o coalición, y que el diputado o diputada no hubiera renunciado o perdido su militancia. Aunado a ello, artículo 116 de la Constitución señala que las constituciones estatales deberán seguir este mismo principio. En el caso de Coahuila concretamente, el artículo 30 de la Constitución local establece esta prerrogativa para los diputados y diputadas locales.

Inicialmente, la razón que llevó a la instauración de la figura de la representación proporcional o de las diputaciones plurinominales fue dar voz a aquellos partidos que no alcanzaban curules o bien ocupaban muy pocos, bajo el principio de mayoría relativa o por voto directo y, en consecuencia, no estaban representados en el Congreso.[[5]](#footnote-5) Para entender el objetivo de esta figura es necesario atender a una interpretación teológica y pragmática. En el momento histórico en que se incorporó esta figura, existía una elevada concentración del poder y de los cargos públicos a manos de un partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional. Por ello, este principio se postuló como una medida que permitía y garantizaba la pluralidad en el Congreso Nacional dándoles voz y voto a nuevos actores políticos, abriendo la puerta a las diferentes ideologías que presentaban grupos distintos, y permitiendo el acceso a grupos minoritarios que representaban visiones, realidades y perspectivas distintas.

Por su parte, la reelección se planteó como una propuesta que presentaba varias ventajas: el aumento de la experiencia y la profesionalización tanto de legisladores como e integrantes del cabildo municipal, así como la continuidad de las funciones legislativas tratándose del Congreso y las funciones administrativas en tratándose de ayuntamientos a largo plazo, como algunas de las razones de mayor relevancia.

Planteamiento del problema:

Etimológicamente, la democracia se define como una forma de gobierno que ejerce el poder político del y para el pueblo. La democracia surge precisamente como una forma de gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias. La democracia, al menos en teoría, es el gobierno en nombre de todo el pueblo, que gobierna de acuerdo con la voluntad popular; mientras que los partidos políticos son entidades de interés público creados para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional.

A través de la presente iniciativa sostenemos que los diputados, diputadas, síndicos, sindicas y regidores o regidoras electas por el principio de representación proporcional en la última elección que participaron, no pueden volver a ser registrados como candidatos o candidatas nuevamente por representación proporcional, ya que hacerlo atenta contra la democracia y la propia representatividad, como se expone a continuación.

Argumentos:

1. Hablando en términos estrictamente conceptuales, no se puede decir que un diputado, diputada, sindica, sindico, regidora o regidor plurinominal pueda ser “reelegido”, puesto que jamás fue elegido por la ciudadanía mediante voto popular, si no que fue registrado o “puesto” mediante una lista cerrada de candidatos y candidatas controlado por el partido que lo postuló. Por tanto, el hecho de volver a postular a un diputado, diputada, sindico, sindica, regidor o regidora plurinominal para un segundo termino nuevamente por la vía plurinominal no equivale técnicamente a una reelección sino una “repostulación” o “redesignación”. No se reelige a un diputado, diputada, sindico, sindica, regidor o regidora bajo estas condiciones, se le “reregistra” o “repone”.

Es decir, mientras que a un diputado o diputada a la que elegimos con nuestro voto podemos volver a elegirla sobre otros candidatos, a un diputado o diputada a la que no elegimos, que fue designada por la dirigencia de un partido, solo podemos decir que la reelegimos si ahora efectivamente votamos por ella, si tenemos la oportunidad de volverla a elegir libremente en lugar de otros candidatos o frente a otras opciones. Por tanto, al volver a registrar a un candidato a candidata por representación proporcional mediante una lista cerrada sin que medien la voluntad u opinión de los representados, se pierde la legitimación y la esencia democrática de lo que implica la reelección.

2. Se trata de una figura que en un principio tuvo un papel importante como contrapeso político; pero que hoy pierde su función y se desnaturaliza al convertirse en un espacio cerrado que desplaza la toma de decisiones a intereses particulares que no responden a la voluntad de los electores, donde quien toma la última decisión es un partido y no la ciudadanía. Los candidatos o candidatas por representación proporcional son elegidas por listas cerradas. Los partidos políticos utilizan este principio *de facto* para premiar a militantes distinguidos o distinguidas, líderes o lideresas del partido, miembros recomendados, recomendadas, o familiares, quienes, como se señala comúnmente, llegan por “dedazo”.

3. La reelección funciona de cierta manera como un método de rendición de cuentas que premia o castiga. El electorado premia a quien considera que realizó un buen trabajo al reelegirlo, al volver a otorgarle el voto o la confianza para seguir o volver al cargo; mientras que castiga al no volver a votar o reelegir a una funcionaria o funcionario público cuando se considera que no hizo un buen trabajo. Mientras tanto, a nivel partidario, se promueve la monopolización de los cargos públicos, creando cotos de poder dentro de la propia estructura partidaria de proveniencia, desestimando el espíritu de competencia frente la inexistencia de una democracia interna. El mérito de estos políticos es la institucionalidad y la fidelidad al instituto político, sin tomar en cuenta su desempeño en cargos públicos, y la percepción que genera frente a los electores y las electoras.

En este aspecto, es importante destacar que la democracia no acaba en las urnas con el depósito del voto, sino que se extiende a la evaluación del desempeño de la función de las candidatas y de los candidatos a quienes les confiamos nuestro voto y la realización de una encomienda, exigiendo una rendición de cuentas de su actuar y de sus decisiones. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y su responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados. No obstante, quienes ocupan un cargo público con por representación proporcional se libran y quedan blindados de esta rendición de cuentas, de la lupa del escrutinio público y de la crítica. Además, se saltan el proceso inherente a toda persona que busca una representación popular consistente en hacer campaña, escuchar a los electores, y dar propuestas para pedir el voto del electorado. Por lo que, ultimadamente, los y las plurinominales representan a un partido y no a los ciudadanos.

Todo ello tiene como consecuencia que la representatividad efectiva, es decir, el vínculo implícito que debe existir entre ciudadano o ciudadana y representante se pierda ante la falta de incentivos por parte de los funcionarios públicos para realizar un papel decoroso. No existe en este escenario un concepto mínimo de congruencia y responsabilidad frente a la sociedad por parte de las y de los servidores públicos que han llegado al congreso o a los ayuntamientos por un segundo, tercer o cuarto turno en la vía de representación proporcional, al saltarse la barrera de la opinión pública. Por tanto, estas y estos funcionarios públicos no responden a ningún grupo de ciudadanos y ciudadanas en específico, puesto que solo buscan quedar bien con su partido para garantizar el siguiente puesto.

Propuesta:

La reforma política del año 2014 dejó la puerta abierta para que un funcionario pueda reelegirse irremediable e incuestionadamente hasta en cuatro ocasiones por la simple decisión de un grupo de poder. Es por ello, que mediante la presente iniciativa se pretende establecer una fórmula mixta que oscila entre los principios de mayoría relativa y de representación proporcional para poder lograr una verdadera reelección y rendición de cuentas. Esto es, que cualquier diputado, diputada, sindico, sindica, regidor o regidora que haya sido designada mediante el principio de representación proporcional solamente podrá ser reelecta para un segundo mandato mediante el sufragio popular.

De esta forma, no se trata de una prohibición total y mucho menos de una violación a los derechos políticos de las y los actores políticos, sino que plantea una restricción fundada al principio de reelección que implica el ejercicio efectivo de la elección mediante sufragio popular. Por tanto, las diputadas, diputados, sindicas, síndicos, regidoras y regidores plurinominales no están impedidos para reelegirse, pues siempre pueden hacerlo mientras se haga por medio de una vía democrática que legitime su mandato y su compromiso con la ciudadanía.

Conclusión y retórica:

Solo mediante el reforzamiento de la naturaleza de las figuras electorales como el que se plantea ahora se estará realmente en las manos de la ciudadanía decidir quienes quieren que los represente, quienes desean que ejecuten el mandato de la mayoría en su nombre. Y quien desee volver a ocupar un cargo público solo podrá hacerlo con el beneplácito de la ciudadanía concedido mediante el voto directo.

Según el influyente teórico político Giovanni Sartori, en las elecciones cuentan las manifestaciones individuales de voluntad o la opinión de los gobernados. Las elecciones son un medio cuyo fin es el gobierno de opinión. El gobernar por tanto responde a la opinión pública. Si en el gobierno hay siempre una minoría relativamente homogénea y solidaria no podemos hablar de una democracia, puesto que cuanto más organizada se hace la organización, en esa misma medida será cada vez menos democrática.[[6]](#footnote-6)

Con el voto damos, pero también quitamos y castigamos. Esta reforma se traduce en un mecanismo de control y en un filtro en la elección de los representantes, un principio que hoy ha sido pervertido al permitir que un mismo funcionario o funcionaria se reelija hasta doce años a nuestras espaldas y sin nuestro consentimiento. Por último, este candado cierra la puerta a un acto autoritario y antidemocrático.

Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos someter a esa H. Legislatura para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. –** Se reforma el inciso c) del numeral 3 del artículo 12, y se adicionan el numeral 3 al artículo 11, el inciso d) al numeral 3 del artículo 12, y los incisos e) y f) al numeral 4 del artículo 14 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 11.**

1. y 2. …..

**3. Los partidos políticos** **no podrán registrar la candidatura de diputados y diputadas por representación proporcional de quienes hayan sido electos** **en los cargos de diputaciones, sindicadurías y regidurías por el principio de representación proporcional en la última elección de estos cargos**.

**Artículo 12.**

1. y 2. …..

3. Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, en los términos que señala la Constitución y observando lo siguiente:

a) y b) …..

c) Los diputados **y diputadas electos por el principio de mayoría relativa** que pretendan la reelección podrán ser registrados por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional.

**d) Quienes en la última elección hayan sido electos como diputados o diputadas por el principio de representación proporcional sólo podrán ser registrados en la siguiente elección consecutiva por el principio de mayoría relativa.**

**Artículo 14.**

1. a 3. …..

4. Los integrantes de los ayuntamientos podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos en los términos que señala la Constitución y observando lo siguiente:

1. a d) …..

**e) Quienes hayan sido electos en los cargos de sindicadurías o regidurías por el principio de representación proporcional que pretendan la elección consecutiva de sus mismos cargos sólo podrán ser postulados por el principio de mayoría relativa.**

**f) Los diputados y diputadas que hayan sido electos por el principio de representación proporcional no podrán ser candidatos a sindicadurías o regidurías por el mismo principio.**

**TRANSITORIOS**

**Primero. –** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Segundo. –** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicitamos que las reformas presentadas sean votadas a favor.

**SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México,

a 23 de septiembre de 2020.

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

Por un Gobierno de Concertación Democrática

Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila

“Brigido Ramiro Moreno Hernández”.

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN MATERIA DE ACCESO Y GARANTÍA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía el presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXI al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho a la educación para las y los niños y adolescentes hasta un nivel medio superior de manera gratuita, laica y obligatoria. Esto es así porque nuestro sistema constitucional entiende que la educación es un valor fundamental y necesario para toda sociedad democrática que pretenda desarrollarse económica, social y culturalmente.

La educación de un país no es un tema menor, ya que representa el elemento central que toda sociedad democrática debe priorizar, pues sólo así se puede formar ciudadanos con criterio propio, tolerantes y plurales que respetan el estado de derecho y los valores humanistas.

La educación tiene una función liberalizadora que impulsa en el ser humano la creatividad, la innovación, el emprendimiento y lo despoja de los prejuicios, el fanatismo y los dogmas. Nutrir el pensamiento plural y solidario es la mejor forma de luchar en contra del autoritarismo y violencia.

Desgraciadamente, el panorama educativo en nuestro país no es muy alentador. Antes de la pandemia, estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), estimaban que la matriculación de alumnos a nivel básico y medio superior en nuestro país eran bajas en comparación con otros Estados[[7]](#footnote-7). Después de la pandemia, ese número se ha reducido aún más debido a que muchos estudiantes han tenido que dejar sus clases debido a la falta de tecnologías y herramientas necesarias para lograr las clases virtuales o a distancia.

Un estudio realizado por la asociación civil Mexicanos Primero, sostiene que hasta 4 millones de estudiantes podrían dejar temporal o definitivamente sus estudios debido a afectaciones económicas, familiares y de motivación, causadas por la pandemia. De acuerdo con, David Calderón, presidente ejecutivo de esa organización, explicó que la estimación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre que 2 millones 523 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria abandonarían las clases en el ciclo escolar 2019-2020, se incrementaría al doble con consideraciones como la tendencia regular de abandono escolar por año, así como la cifra de aquellos que no pudieron atender los aprendizajes a distancia[[8]](#footnote-8).

Ante esta situación, que no sólo se vive en México sino en todo el mundo, la UNESCO ha recomendado optar por el uso de soluciones de alta o débil tecnología en función de la energía y el tipo de acceso a Internet con los que cuenten los estudiantes, así como del nivel de competencias digitales que tengan estos y los docentes. Puede tratarse de plataformas de aprendizaje digital, lecciones por vídeos, los MOOC e incluso de la difusión de los cursos mediante cadenas de radio y canales de televisión[[9]](#footnote-9).

Si bien es cierto, que muchas de estas medidas ya han sido tomadas por los gobiernos federal y estatal, también lo es que a pesar de ellas, muchas niñas y niños siguen sin poder acceder a la educación por falta de recursos y por falta de instrumentos legales que garanticen la educación virtual y a distancia como un derecho fundamental de las y los estudiantes.

Es por eso que la presente iniciativa, prevé reformar el artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, con el objetivo de que la educación virtual y a distancia sea reconocida como un derecho fundamental, procurando con políticas públicas estatales, el acceso a internet y otras tecnologías de la información y comunicación a quienes por sus condiciones económicas y sociales no puedan acceder a ellas por cuenta propia.

Partimos de la idea de que la educación debe ser igual para todos, lo que implica que el Estado realice las acciones necesarias para equilibrar las desigualdades sociales y educativas, con el objetivo de combatir la brecha digital, que en el ámbito educativo continúa siendo sumamente alta.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO:**

**ÚNICO.-**  Se adiciona la fracción XXI al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7…

I…

XX…

XXI. **Promover y Garantizar la educación virtual o a distancia en cualquiera de los niveles obligatorios, en aquellos casos en los que la educación presencial no sea posible, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación.**

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**Único.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 23 de septiembre del 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA.**

Iniciativa con Proyecto de Decreto **que presenta el suscrito, Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” del Congreso del Estado,** **por el que** **se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV al artículo 18 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de adecuar y actualizar dicho ordenamiento en lo relativo a la denominación ciudadana de vecino, al tenor de la siguiente...**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Como bien lo apuntó desde la 58º Legislatura el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, el municipio es una de las instituciones políticas asociativas más antiguas que, en algún momento de la historia, operó dentro de una extensa red de órganos administrativos que permitían controlar la vida social en todas sus esferas.

Si bien el poder político ha buscado centralizar la voluntad colectiva, lentamente la división territorial se volvió una necesidad administrativa, estructurada en la regionalidad y distintivo cultural de cada localidad.

En el caso de Coahuila, los municipios se configuraron en función, si bien de sus características naturales, también de otros factores, como los relacionados con su densidad poblacional y las necesidades ciudadanas.

El propio Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza expresa, en su artículo 2º, que el municipio “es la entidad político-jurídica local, integrada por una población asentada en un espacio geográfico determinado”, misma que incide, mediante una participación democrática, “en la toma de decisiones en lo que concierne al mejoramiento de las condiciones de vida y al fomento de su desarrollo integral”.

El mismo ordenamiento establece que “los elementos que conforman el Municipio Libre son: su población, territorio, la organización y el funcionamiento de sus órganos de gobierno y su hacienda”. De esto se deduce, entre otras cosas, que, sin suficiente población, no hay municipio.

Esta idea se ve reforzada en el artículo 11, el cual establece que: “La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los municipios resultantes cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de sus competencias y no implique disminución en la calidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos.”

“En todo caso --precisa el referido artículo--, para la creación de un nuevo municipio deberán, por lo menos, satisfacerse los requisitos siguientes: I. Contar con una población de más de veinticinco mil habitantes; II. Comprobar que se cuenta con los recursos suficientes para crear la infraestructura administrativa necesaria; proveer a su sostenimiento, ejercer las funciones que le son propias y prestar los servicios públicos municipales que requiera la comunidad; III. Escuchar la opinión del ayuntamiento o los ayuntamientos involucrados, así como de la población...”

El artículo 150 también dispone que incluso para la integración del Plan Municipal de Desarrollo se “...debe conjugar la acción coordinada de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como la participación de los sectores social y privado de cada municipio”.

La fracción I del artículo 153 define al diagnóstico para estructurar el Plan Municipal de Desarrollo, como “*el estudio de la situación actual y previsible del municipio que sirve para conocer las condiciones de su territorio y población e identificar las necesidades, problemas, oportunidades y recursos potenciales de desarrollo...”*

Las anteriores referencias nos ilustran ampliamente sobre el hecho de que el factor demográfico y la participación ciudadana son esenciales, y hasta determinantes, para el efecto de planear correctamente el desarrollo y, en particular, calcular hasta qué punto se requiere ampliar la calidad y capacidad en materia de prestación de servicios: agua potable, electricidad, telecomunicaciones, educación, transporte, atención médica, etcétera.

Por consiguiente, es importante que los ayuntamientos, incluso en el caso de las zonas metropolitanas, posean algún grado de certeza sobre la cantidad de habitantes que, en un momento determinado, viven permanentemente en cada municipio, considerando la población flotante, así como a los ciudadanos que, a causa de sus largas ausencias, pierden arraigo y, por lo tanto, injerencia en los asuntos públicos municipales.

En esta maraña de procesos y posibilidades que experimentan los municipios y sus correspondientes cabildos, es imperativo contextualizar la teoría y práctica municipal, insertándola como una corriente más de la dinámica social que complementa la complejidad de los acontecimientos nacionales, entre ellos, la actual pandemia por Covid-19.

A pesar de las implicaciones económicas y jurídicas que les acarrea en los ámbitos político, electoral y civil, entre otros, hoy día muchos ciudadanos se ven precisados a abandonar temporalmente, y a veces de manera definitiva, sus ciudades y municipios de origen.

En efecto, la nueva dinámica económica, social y política, inmersa en las nuevas condiciones de globalidad y modernidad, obliga a la población a movilizarse constantemente y, en muchos casos, a radicar por largos periodos fuera de sus lugares donde tradicionalmente han radicado.

La pandemia que azota actualmente al país, y de manera contundente a Coahuila, es uno de los motivos por los que frecuentemente los contagiados y sus familiares tienen que trasladarse a centros de atención médica mejor equipados y atendidos. Paralelamente, se siguen dando muchos casos de emigración por cuestiones educativas, laborales, profesionales y políticas.

Por lo demás, estimo que, debido a la creciente necesidad de emigrar temporalmente, deben incluirse en los supuestos de ausencia que contempla la ley en cuestión nuevas excepciones que permitan a los coahuilense mantener su categoría de vecinos en los municipios de donde son originarios y así conservar los derechos y ventajas que les ofrece tal denominación.

Con base en todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Congreso la siguiente Iniciativa con...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. - Se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV al artículo 18 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:**

ARTÍCULO 18. La vecindad se pierde por dejar de residir en el territorio del municipio durante más de seis meses continuos, excepto en los siguientes casos:

I. ... a la II. ...

III. Por ausencia debida a la realización de estudios o actividades **académicas,** científicas, profesionales**, artísticas y/o por participar en eventos culturales.**

**IV. Por ausencia en razón de someterse a estudios clínicos prolongados, a terapias de larga duración o por hospitalización a causa de accidentes, enfermedades comunes, crónicas o epidémicas.**

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de septiembre de 2020**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE INCLUIR LA CONDECORACIÓN AL MÉRITO LABORAL, A FIN DE RECONOCER A LAS PERSONAS QUE CON SU ENTREGA DIARIA LABORAL CONTRIBUYEN A AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA, Y DEL MISMO MODO SON EJEMPLO A SEGUIR PARA SUS COMPAÑEROS, LOGRANDO CON ELLO UN BUEN CLIMA LABORAL EN SU CENTRO DE TRABAJO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

El suscrito Diputado Jesús Berino Granados, conjuntamente con las demás diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que sereforma la fracción IX del artículo 5 y se adiciona la Sección IX, artículo 14 bis, a la Ley de Condecoraciones y Reconocimientos del Estado de Coahuila de Zaragoza,con el objeto de incluir la condecoración al mérito laboral, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

La empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular, beneficiando con ello a la comunidad en general.

Quien al momento de organizarse para formar una empresa, lo hace pensando en obtener un beneficio personal, pero su objetivo va más a allá de ello, ya que no solo produce beneficios para el emprendedor o los inversionistas, si no también para sus trabajadores, y con ello para la sociedad en general.

De lo que podemos partir en breve para mencionar que si bien ya se está reconociendo en la Ley deCondecoraciones y Reconocimientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, el desarrollo empresarial, con una condecoración que se otorga a las personas física o morales que basados en sus principios de honestidad, transparencia y calidad, a la par de conducirse con políticas, programas y estrategias que favorecen el desarrollo humano, buscan la excelencia en el desarrollo de la empresa, de las personas y de sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos, promoviendo e impulsando una cultura de competitividad responsable generando mayores empleos para el Estado, hace falta dentro de esta norma el condecorar y reconocer al trabajador, siendo parte fundamental y transcendental de la empresa, es por eso que venimos a proponer esta iniciativa con proyecto de decreto para que dicha condecoración se lleve a cabo en cumplimiento de la ley en comento.

La aportación que hace un empleado, hablamos de conocimientos y experiencias, para las mejoras o cambios metodológicos es un gran valor agregado al desarrollo de la empresa y más aún cuando son aportaciones perduran, incluso luego de la desvinculación de dicho trabajador.

Un trabajador que se desarrolla con eficacia, eficiencia y esfuerzo, no se limita al buscar siempre un mayor resultado a partir del mismo esfuerzo.

El trabajador ejemplar cuenta con la agilidad necesaria para tomar decisiones y entrar en acción, es decir al tomar la decisión tendrá en cuenta todos los factores involucrados y fácilmente creará los mecanismos que se requieren para cumplir con los objetivos planteados sin perder tiempo y sin posponer tareas innecesariamente, esfuerzo que requiere reconocimiento.

La responsabilidad de un buen trabajador es un valor esencial, ya que conlleva a ser consciente de su labor, lo que le permite hacer las tareas que sabe que puede cumplir en los plazos y con la calidad requerida, no excediéndose o extralimitándose, para así desarrollar sus tareas con máxima eficiencia, consecuencia que traerá los mejores resultados para la productividad de la empresa.

Asimismo debe contar con la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios de las políticas de la empresa, siempre con una actitud positiva, que permee hacia sus compañeros de trabajo, siendo punta de lanza para la implementación de las mejoras en su centro de trabajo.

Su creatividad e iniciativa al momento de proponer o resolver situaciones complejas de la empresa, lo llevarán a ser parte de la solución y no del problema, mejorando seguramente la productividad de la misma y estimulando a sus compañeros a ser parte de las soluciones.

Una de las características que últimamente los empresarios han visto que se debe destacar en un empleado, es que cuente con inteligencia emocional que le ayudará a relacionares con su entorno, lo cual impacta directamente en el ambiente laboral de su centro de trabajo, ya que le permite organizar su trabajo y sus períodos de descanso, traducido de otra forma la productividad no es otra cosa más que la correcta administración del tiempo.

Gracias a estas características el buen trabajador, podrá integrar equipos de trabajo dentro de área de adscripción, así como colaborar en equipo con el resto de la empresa, basándose no solo en el esfuerzo sino también la solidaridad, lo cual garantizará sin duda alguna un excelente clima laboral en el centro de trabajo.

Podríamos seguir exponiendo las características con las que cuenta un buen trabajador, pero nuestro objetivo principal es que esas características sean reconocidas, condecoradas, aplaudidas y sobre todo que sirvan como estímulo y motivación para nuestra clase trabajadora, es por ello deseamos que se dictamine y vote a favor de nuestras iniciativa de reforma.

Terminó con una frase del destacado Médico Cirujano, Francés, Víctor Pauchet *“El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento”.*

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**I N I C I A T I V A C O N P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO.** – Se reforma la fracción IX y se adiciona la fracción X al artículo 5 y la Sección IX, con el artículo 14 Bis, a la Ley de Condecoraciones y Reconocimientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.-** …

I a la VII…

IX.- Mérito Laboral.

X.- Las demás que la Legislatura considere pertinentes debido a su importancia trascendencia.

**Sección IX**

**Condecoración al Mérito Laboral**

**Artículo 14 Bis.-** Esta medalla se otorgará al trabajador que se distingue por su capacidad organizativa, por su enseñanza desinteresada, por su responsabilidad, constancia y entusiasmo en su entrega diaria laboral, que contribuye a aumentar la productividad de la empresa, al mismo tiempo que es un ejemplo a seguir para sus compañeros, generando un buen clima laboral en su centro de trabajo.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre 2020**

**DIPUTADO JESÚS BERINO GRANADOS**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | | |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**La que suscribe la presente, diputada María Eugenia Cázares, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I y 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV Y 152 Fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que** **se crea la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en las siguientes:**

**Consideraciones**

En fecha 01 de septiembre del año 2011, el Grupo Parlamentario del PAN que nos representó en la LVIII Legislatura, presentó una iniciativa a cargo de la entonces diputada, Esther Quintana Salinas, para expedir la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza; esto con el objetivo de apoyar y fomentar las actividades de este tipo de organizaciones que tanto aportan a la sociedad al cubrir los espacios que las autoridades no pueden o no alcanzan a llenar, aportando además conocimiento, asesoría, orientación y en general, un sinfín de apoyos, desde materiales hasta informativos y educativos en bien de las y los mexicanos todos los días.

La propuesta y el contenido de dicha iniciativa siguen estando plenamente vigentes; pues no contamos en Coahuila con una ley de esta naturaleza, que es demanda del sector desde hace años. El proyecto presentado por nuestro grupo parlamentario en la 58 legislatura sigue vigente. Por lo que, decidimos retomarlo de manera íntegra, actualizando algunos aspectos de la exposición de motivos, y realizando algunos ajustes menores al articulado. Apelamos a este derecho en relación a que, como diputados, podemos retomar proyectos de ley de anteriores periodos o legislaturas que en su momento no fueron dictaminados. Y desde luego con estricto respeto a sus autores originales.

Por ello, ponemos a consideración de esta legislatura esta iniciativa con proyecto de decreto; con base en la siguiente:

**Exposición de Motivos**

El concepto de sociedad civil emerge en la historia como ruptura con un poder absoluto y es expresión de la pluralidad, diversidad y diferencia en la sociedad, su finalidad estriba en desempeñar actividades en busca del bien común, sin ánimo de lucro y sin lazos con las distintas ideologías políticas.

Según el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, la sociedad civil se caracteriza por dos componentes principales*: “por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otra parte estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados”[[10]](#footnote-10).*

Al respecto, el pensador y político liberal francés Alexis de Tocqueville definía a la sociedad civil como el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que se desempeñan como mediadores entre los ciudadanos y las autoridades de gobierno.

Es evidente que las diversas definiciones establecidas al término sociedad civil, son semejantes entre sí, pues todas ellas reflejan meridianamente sus características y finalidades.

En nuestro país la sociedad civil desde hace varias décadas ha iniciado el movimiento de aglutinación y sin duda que en los grandes temas que atañen a la vida de la nación, tales como medio ambiente, derechos humanos, alimentación, salud, educación y en los últimos tiempos, seguridad pública, ha ido cobrando presencia destacada. Y de ahí personajes como la señora Wallace y el señor Martí

La legislación hasta hoy existente en el país ha permitido que se incremente el interés de los ciudadanos comunes por participar y colaborar en actividades que benefician al resto de la población, contribuyendo de manera importante en el combate a todas aquellas deficiencias que no son cubiertas por alguno de los tres niveles de gobierno.

El especialista en organizaciones de la sociedad civil, Alberto J. Olvera, afirma que las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la construcción de una vida pública auténticamente democrática, al coadyuvar con la creación, estabilización y expansión del estado de derecho, así mismo en la creación de espacios públicos de diálogo entre los actores sociales y políticos.

Su existencia permite el fortalecimiento del tejido social al propiciar que éste se sienta respaldado, y a su vez impulsa una cultura de tolerancia y respeto mutuo entre la ciudadanía en general.

La legislación a nivel nacional contempla desde el año 2004 la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, normatividad con la que se logró un importante avance en materia de formación y fortalecimiento de las organizaciones civiles de México, dado que constituye un paso importante en el avance de la institucionalización de una democracia participativa. La relevancia radica en que, por primera vez, les es concedido un reconocimiento legal que les permite contar con certeza jurídica y por ende ser sujetos de derechos y obligaciones, les reconoce autonomía e independencia, les hace susceptibles de apoyos y estímulos por parte de la Federación, y se destaca su importancia y trascendencia en la vida pública, lo que les permite participar de manera activa en la toma de decisiones, que atañen a su actividad.

La importancia de que la legislación mexicana reconozca a estas organizaciones va más allá de la expedición de la ley, ello se ve reflejado en el tratamiento especial que los ordenamientos fiscales les proporcionan al permitir que los ingresos que reciben a través de donativos de empresas y particulares, así como los subsidios concedidos por los gobiernos, no sean objeto de gravámenes, como el impuesto sobre la renta, o bien, que puedan ser deducibles de impuestos para aquellos que colaboran económicamente con este tipo de instituciones.

Entidades como Baja California, Veracruz, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Tamaulipas, Jalisco, Campeche, Tabasco, Michoacán y el Distrito Federal, siguieron el rumbo marcado por la federación y emitieron ordenamientos en el mismo sentido.

Algunos de estos estados también han decidido establecer lineamientos particulares que beneficien y fomenten la participación y creación de organizaciones de la sociedad civil, tales como subsidios fiscales en materia de impuesto predial, derechos de agua, impuestos sobre nómina y de los impuestos de traslación de dominio, etc.

La realización de acciones de este tipo por parte de la federación y de los estados refleja que el trabajo que se lleva a cabo por las organizaciones es valorado y reconocido por la comunidad y el gobierno mismo.

Nuestra Coahuila es una de las entidades federativas en las que todavía no se legisla sobre organizaciones de esta naturaleza, no obstante, el número de organizaciones de la sociedad civil que existen en nuestra entidad; derivado de esto, consideramos oportuno proponer ante esta H. Soberanía la creación de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Este ordenamiento tiene como finalidad el establecimiento de los derechos y obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado, igualmente, se pretende que cuenten con los medios y mecanismos adecuados para que se les garantice su participación e inclusión en la toma de decisiones que incumba a sus actividades, y se dispone la creación de las bases para el fomento por parte del Estado y sus municipios, de las actividades que realizan estas organizaciones.

La normatividad propuesta determina como autoridades en materia de fomento a las actividades que realizan las organizaciones civiles, a la Comisión Estatal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo Técnico Consultivo, todas ellas de carácter honorífico.

El objeto de la creación de una Comisión Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, estriba en facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades que realizan las organizaciones; por su parte, la Secretaría Técnica fungirá como la encargada de la operación y supervisión de las acciones y programas de fomento y coordinación, con las dependencias de la Administración Pública Estatal y de los Municipios; mientras que el Consejo Técnico Consultivo será el órgano que tendrá como función primordial la de opinar y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección y operación del Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como concurrir anualmente con la Comisión Estatal para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento, en el que tendrán participación directa las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro y los representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural del Estado.

Así mismo, determina que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de las de los Municipios fomentarán las actividades de las organizaciones a través del otorgamiento de estímulos y apoyos, establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos, concertación y coordinación con

organizaciones para impulsar sus actividades, celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley, y para el otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia.

Se crea el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya función consiste en establecer un sistema de información que permita identificar plenamente a las organizaciones que forman parte del mismo, así como contar con un registro detallado de las actividades que desempeñan, si éstas se llevan a cabo adecuadamente y las sanciones en su caso, a las que hubiera lugar.

La presentación de esta iniciativa tiene como propósito primordial el dotar de condiciones óptimas a las organizaciones civiles que laboran en el Estado, a favor de todos los Coahuilenses, así como sentar las bases jurídicas que les permitan recibir apoyos y estímulos de manera equitativa y transparente.

Por lo anteriormente expuesto tenemos a bien presentar ante esta H. Soberanía el siguiente proyecto de:

**DECRETO.**

**Articulo único:** Se expide la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar en los siguientes términos:

**Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Capítulo Primero**

**Disposiciones Generales**

**Artículo 1.-** La presente ley es de orden público e interés social y tiene como finalidad el establecimiento de:

1. Los derechos y las obligaciones de las organizaciones que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser objeto de fomento de sus actividades;
2. Las figuras legales y bases generales que garanticen el acceso pleno del derecho de los ciudadanos a participar en las propuestas, programas y acciones públicas a través de las organizaciones; y
3. Decretar las bases sobre las que el gobierno estatal y los municipios fomentarán la participación de la sociedad en general, a través de las organizaciones.

Las organizaciones que pretendan constituirse o que se encuentren constituidas en forma de asociaciones o fundaciones de beneficencia o asistencia, seguirán sujetas a la regulación, vigilancia y obligaciones que se establecen en las leyes especiales de la materia, sin embargo, podrán participar de los beneficios contenidos en esta Ley, cumpliendo con los requisitos señalados en la misma.

**Artículo** **2**.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Ley: la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
2. Autobeneficio: bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de una organización o sus familiares hasta el cuarto grado civil, por medio de la utilización de los apoyos y estímulos públicos que le hubieren sido otorgados a la organización con la finalidad de que ésta lleve a cabo su misión.
3. Beneficio mutuo: bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y estímulos públicos que reciban, de manera conjunta, los miembros de una o varias organizaciones y los servidores públicos responsables y que deriven de la existencia o actividad de la misma;
4. Comisión Estatal: La Comisión Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
5. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
6. Consejo: el Consejo Técnico Consultivo;
7. Dependencias: Las unidades de la Administración Pública del Estado;
8. Entidades: Los Organismos, empresas paraestatales, Municipios y organismos paramunicipales y fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública del Estado.
9. Estado: Estado de Coahuila de Zaragoza;
10. Organizaciones: Personas morales a que se refiere el artículo 3 de esta ley;
11. Redes: conjunto de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones, y
12. Registro: El Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 3.-** Las agrupaciones u organizaciones mexicanas con registro vigente en el Estado que, sin ánimo de lucro, en beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y transparencia, sin fines partidistas, político-electoral o religiosos, podrán acceder a los apoyos y estímulos que establezca esta ley, siempre y cuando realicen alguna de las siguientes actividades:

1. La promoción y defensa de los derechos humanos;
2. Impulsar la realización de obras y la prestación de servicios públicos para beneficio de la comunidad;
3. Promover el desarrollo local, regional y comunitario, de manera sustentable;
4. Acciones en favor de comunidades rurales y urbanas marginadas;
5. Fomentar el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la conservación y restauración del equilibrio ecológico;
6. Efectuar acciones de prevención y protección civil;
7. Brindar atención y apoyo a los grupos vulnerables y en desventaja social en la realización de sus objetivos;
8. Suministrar asistencia social en los términos de las leyes en la materia;
9. Realizar actividades cívicas enfocadas en la promoción de la participación ciudadana en los asuntos de interés público;
10. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, deportivo, científico y tecnológico;
11. Promover, canalizar y colaborar con servicios, materiales y recursos humanos, para la atención de la salud integral de la población, de acuerdo con las disposiciones aplicables a la materia;
12. Apoyar las acciones a favor del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano;
13. Proporcionar asesoría, gestiones y orientaciones de asistencia técnica, jurídica y social a personas, grupos, instituciones y asociaciones en general.
14. Difundir y promover la equidad de género;
15. Promover la preservación de la cultura, las tradiciones populares y la restauración y mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos;
16. Fomentar acciones para mejorar la economía popular, a través del incremento de las capacidades productivas de las personas;
17. Las demás actividades que contribuyan al desarrollo social de la población.

**Artículo** **4.-** Las organizaciones que constituyan capítulos nacionales de organizaciones internacionales registradas en los términos de esta ley, ejercerán los derechos que la misma establece, siempre que sus órganos de administración y representación estén integrados mayoritariamente por ciudadanos mexicanos y que las acciones objeto de fomento, se realicen en el Estado. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, las organizaciones internacionales deberán inscribirse en el Registro y señalar domicilio en el Estado.

**Capítulo Segundo**

**De las Organizaciones de la Sociedad Civil**

**Artículo** **5.-** Para que las organizaciones puedan acceder a los apoyos y estímulos que otorgue la Administración Pública del Estado y de los Municipios, dirigidos al fomento de las actividades que esta ley establece, sin detrimento a lo estipulado por otras disposiciones jurídicas aplicables, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Inscribirse en el Registro;
2. Destinar la totalidad de sus recursos para el cumplimiento de su objeto, así como proporcionar las facilidades para verificar en todo momento el uso y destino de los apoyos y estímulos públicos y privados que reciban;
3. Contar y mantener disponible la información relacionada con sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, patrimonio, operación administrativa y financiera;
4. Presentar un informe anual ante la Comisión Estatal respecto de las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos recibidos, para mantener actualizado el Sistema de Información y garantizar la transparencia de sus actividades;
5. Hacer del conocimiento del Registro las modificaciones a su acta constitutiva, los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva;
6. Inscribir en el Registro la denominación de las Redes de las que forme parte, o a las que dejen de pertenecer un plazo de treinta días contados a partir de que surja la modificación;
7. Abstenerse de contar con nexos de dependencia o subordinación con partidos políticos o instituciones religiosas, y evitar realizar actividades político-partidistas, así como de realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos;
8. Laborar bajo los principios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de los beneficiarios en las actividades que realice.
9. En caso de disolución, transmitir los bienes que hayan adquirido con apoyos y estímulos públicos, a organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro.

**Artículo** **6.-**Las organizaciones que se encuentren inscritas en el Registro serán acreedoras a los siguientes derechos:

1. Ser consideradas como instancias de participación y consulta en la implementación de programas, acciones y objetivos en materia de Desarrollo Social en el Estado;
2. Contribuir en los mecanismos de contraloría social que establezcan u operen dependencias y entidades;
3. Colaborar en la implementación y seguimiento de los programas de apoyo de la Administración Pública del Estado y de los Municipios;
4. Participar en la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de las políticas públicas, objetivos y metas de los programas y acciones de la administración pública estatal y municipal en materia de Desarrollo Social;
5. Acceder a los apoyos y estímulos públicos para fomento de las actividades objeto de esta ley, que sean destinados por la Administración Pública Estatal;
6. Gozar de las prerrogativas fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que determinen las disposiciones jurídicas en la materia;
7. Recibir donativos y aportaciones;
8. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos relacionados con las actividades objeto de esta ley;
9. Acceder a los beneficios en la materia que, de acuerdo con los términos de convenios o tratados internacionales celebrados, tengan derecho, siempre y cuando estos se encuentren relacionados con las actividades y finalidades previstas en esta ley; y,
10. Recibir por parte de las dependencias y/o entidades públicas que efectúen programas o acciones en la materia, la asesoría, capacitación y colaboración que les permita mejorar su desempeño en el cumplimiento de su objeto y actividades.

**Artículo** **7.-** Las organizaciones no podrán solicitar, ni recibir los apoyos y estímulos públicos previstos en esta ley cuando exista entre sus directivos y los servidores públicos encargados de otorgar o autorizar los apoyos y estímulos, relaciones de interés o nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.

**Artículo 8.-** Las organizaciones que reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.

Las organizaciones que obtengan recursos económicos de terceros o del extranjero, deberán llevar a cabo las operaciones correspondientes conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional o, cuando así proceda, con base en los tratados y acuerdos internacionales de los que el país sea parte.

**Capítulo Tercero**

**De las Autoridades y las Acciones de Fomento**

**Artículo** **9.-** El Ejecutivo del Estado constituirá la Comisión Estatal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, de carácter honorífico, con el fin de facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artículo 3 de esta ley.

**Artículo** **10.-** La Comisión Estatal estará integrada por:

1. El titular de la Secretaría de Gobierno, quien fungirá como Presidente Ejecutivo;
2. El titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, quien fungirá como Secretario Técnico;
3. El titular de la Secretaría de Finanzas del Estado;
4. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente;
5. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad;
6. El titular de la Secretaría de Educación;
7. El titular de la Secretaría de Salud; y
8. El titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Las demás dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal participarán a invitación de la Comisión Estatal, cuando se traten asuntos de su competencia.

Por cada miembro propietario de la Comisión Estatal habrá un suplente designado por el titular, quien en su caso deberá tener por lo menos el nivel de Subsecretario, Director General o equivalente. El suplente contará con las mismas facultades que los propietarios y podrá asistir, con voz y voto, a las sesiones de la Comisión Estatal cuando el propietario respectivo no concurra

La Comisión Estatal se reunirá de manera ordinaria por lo menos dos veces al año y extraordinariamente, cuando sea convocada por su Presidente o por un tercio de sus integrantes.

Las reuniones que realice la Comisión Estatal tendrán el carácter de públicas. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los miembros presentes, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

EI cargo de integrante o invitado de la Comisión Estatal será de carácter honorífico; por lo que sus integrantes no recibirán ninguna remuneración adicional por los servicios que presten.

**Artículo** **11.-** Son atribuciones de la Comisión Estatal:

1. Expedir su reglamento interno;
2. Convocar a las organizaciones que deseen presentar sus proyectos de trabajo, para la distribución de los recursos destinados a las actividades señaladas en el artículo 3 de esta ley;
3. Definir las políticas públicas para el fomento de las actividades de las organizaciones;
4. Solicitar a los Ayuntamientos del Estado la información relativa a los proyectos de las organizaciones, que son apoyados por estas instancias de gobierno, a fin de que realice una distribución más equitativa de los mismos;
5. Evaluar las políticas, programas y acciones de fomento de las actividades que señala esta ley;
6. Elaborar y publicar en el Periódico Oficial del Estado un análisis en relación con la distribución de los recursos públicos entregados a las distintas organizaciones, determinando de forma fundada y motivada, si estos se aplicaron correctamente;
7. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para mejorar las políticas públicas relacionadas con las actividades señaladas en esta ley;
8. Promover las medidas de simplificación administrativa, que faciliten la realización de las actividades de las organizaciones a que se refiere la presente Ley;
9. Conocer de las infracciones e imponer las sanciones correspondientes a las organizaciones, conforme a lo dispuesto en esta ley;
10. Las demás que las leyes y reglamentos le establezcan.

**Artículo 12.-** La Secretaría Técnica será responsable de la operación y supervisión de las acciones y programas de fomento y coordinación, con las dependencias de la Administración Pública Estatal y de los Municipios. Deberá de rendir a la Comisión Estatal un informe anual del trabajo desempeñado y tendrá las atribuciones siguientes:

1. Coordinar, apoyar y fomentar las iniciativas y gestiones de las organizaciones con las diferentes dependencias y entidades;
2. Proponer a las dependencias y entidades programas de fomento orientados y coordinados para la atención de situaciones generales que puedan ser atendidas por la participación de las organizaciones;
3. Dar trámite y seguimiento a los Acuerdos tomados por la Comisión Estatal e informar al mismo, por conducto de su Presidente. El informe se rendirá semestralmente o antes, si así lo solicita el Presidente del Consejo; y,
4. Las demás que le asigne la ley o la Comisión Estatal.

**Artículo 13.-** Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Municipios fomentarán las actividades de las organizaciones establecidas en esta ley, mediante las siguientes acciones:

1. Otorgamiento de apoyos y estímulos a las organizaciones que desempeñen alguna de las actividades descritas en el artículo 3 de esta ley;
2. Promover la participación de las organizaciones en los órganos, instrumentos y mecanismos de consulta para la planeación, ejecución y seguimiento de políticas públicas;
3. Establecimiento de medidas, instrumentos de información, incentivos y apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;
4. Concertación y coordinación con organizaciones para impulsar sus actividades previstas en esta ley;
5. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece;
6. Realización de estudios e investigaciones para apoyo a las organizaciones en el desarrollo de sus actividades;
7. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley, y,
8. Otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en las leyes de la materia.

**Artículo** **14.-** La Comisión Estatal, por sí o a través la Secretaría Técnica, en coordinación con las dependencias y entidades, deberá elaborar y publicar un informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estímulos otorgados a favor de organizaciones que se acojan a esta ley.

El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Finanzas del Estado, se incluirá como un apartado específico del informe anual del estado que guarda la Administración Pública Estatal que rinde el Ejecutivo

**Capitulo Cuarto**

**Del Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Del Sistema de Información**

**Artículo** **15.-** Se crea el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, que estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal. Dicho Registro será público y tendrá las siguientes funciones:

1. Inscribir a las organizaciones que soliciten registro, siempre que cumplan con los requisitos que establece esta ley, y otorgarles su respectiva constancia de registro;
2. Conservar constancias del proceso de registro respecto de los casos en los que la inscripción de alguna organización haya sido objeto de rechazo, suspensión o cancelación;
3. Establecer un Sistema de Información que identifique, de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero de esta ley, las actividades que las organizaciones de la sociedad civil realicen, así como el cumplimiento de los requisitos con el objeto de garantizar que las dependencias y entidades cuenten con los elementos necesarios para dar cumplimiento a la misma;
4. Proporcionar a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en general la información necesaria que les permita verificar el cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece a las organizaciones y, en su caso, solicitar a la Consejo Estatal la imposición de las sanciones correspondientes;
5. Llevar el registro de las sanciones que imponga el Consejo Estatal a las organizaciones;
6. Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones;
7. Proporcionar de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el acceso a toda la información relativa a las organizaciones pertenecientes inscritas en el Registro;
8. Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la existencia de actos o hechos que puedan ser constitutivos de delito;
9. Difundir en el Periódico Oficial del Estado, de manera anual el listado de las organizaciones inscritas en el Registro;
10. Reconocer públicamente las acciones que lleven a cabo las organizaciones civiles que se distingan en la realización de actividades de Desarrollo Social; y
11. Los demás que establezcan el Reglamento de esta ley y otras disposiciones legales.

**Artículo** **16.-** El trámite de inscripción al registro será realizado en los módulos que para tal efecto sean creados, y únicamente podrán ser operados por el personal designado por la Secretaría Técnica.

**Artículo 17.-** Las organizaciones que deseen formar parte del Registro, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Presentar solicitud de registro, por escrito;
2. Presentar copia certificada de su acta constitutiva en la que conste que su objeto social consiste en realizar alguna de las actividades señaladas en el e artículo 3 esta ley;
3. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que:
   * 1. La totalidad de los apoyos y estímulos públicos que reciban serán destinados al cumplimiento de su objeto social;
     2. No distribuirán entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos públicos, donaciones o aportaciones que hubiesen recibido para el cumplimiento de su objeto social;
     3. La determinación de que, en caso de disolución, transmitirán los bienes obtenidos con dichos apoyos y estímulos, a otra u otras organizaciones con inscripción vigente en el Registro;
4. Señalar su domicilio legal;
5. Presentar copia del testimonio notarial que acredite la personalidad y ciudadanía de su representante legal.

**Artículo** **18.-** La presentación de la solicitud de registro deberá estar acompañada de todos los documentos señalados en el artículo anterior, a fin de que el Registro pueda resolver sobre la procedencia de la inscripción en un plazo que no podrá exceder de treinta días contados a partir de que reciba la solicitud.

**Artículo** **19.-** El Registro resolverá la improcedencia de la solicitud cuando la documentación presentada contenga alguna irregularidad, se compruebe fehacientemente que no cumple con el objeto social que se establece en su acta constitutiva, o bien que ésta contiene las disposiciones señaladas en el artículo 18 de esta ley.

**Artículo** **20.-** El Registro concentrará toda la información que forme parte o se derive del trámite y gestión respecto de la inscripción de las organizaciones en el mismo, así mismo incluirá la relacionada con todas las acciones de fomento que las dependencias o entidades emprendan con relación a las organizaciones registradas.

Las dependencias, entidades, organizaciones inscritas, y el público en general tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de informar el estado que guardan los procedimientos del mismo.

En ningún caso la información con la que cuente el Registro relacionada con los estímulos y apoyos que reciban las organizaciones civiles podrá ser clasificada como información reservada.

**Capítulo Quinto**

**Del Consejo Técnico Consultivo**

**Artículo** **21.-** La Secretaría Técnica contará con el apoyo de un Consejo Técnico Consultivo, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección y operación del Registro, así como concurrir anualmente con la Comisión Estatal para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento.

**Artículo 22.-** El Consejo se integrará de la siguiente forma:

1. Un servidor público que designe la Comisión Estatal, quien lo presidirá;
2. Cinco representantes de organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro, uno por cada Región del Estado, cuya presencia en el Consejo será por tres años, renovándose por tercios cada año. La Comisión Estatal emitirá la convocatoria para elegir a los representantes de las organizaciones inscritas en el Registro, en la cual deberán señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad, antigüedad, membrecía y desempeño de las organizaciones;
3. Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural; la Comisión Estatal emitirá las bases para la selección de estos representantes;
4. Un representante del Poder Legislativo, siendo éste el Coordinador de la Comisión Legislativa cuya competencia sea afín a la materia que regula esta ley; y
5. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Consejo a propuesta del Presidente del mismo.

**Artículo** **23.-** El Consejo sesionará ordinariamente por lo menos dos veces al año, y extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente o por un tercio de los miembros del Consejo, para que sus decisiones sean válidas tendrá que ser tomadas por mayoría de votos de sus integrantes.

La Secretaría Técnica será la encargada de proveer de lo necesario al Consejo y a sus integrantes, a fin de que éste pueda llevar acabo sus funciones.

**Artículo** **24.-** Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones siguientes:

1. Analizar las políticas del Estado y los municipios en materia de fomento a las actividades señaladas en esta ley, así como formular opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación;
2. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas del Estado y los municipios señaladas en la anterior fracción;
3. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;
4. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones;
5. Coadyuvar en la aplicación de la presente ley;
6. Emitir recomendaciones para la determinación de infracciones y su correspondiente sanción, en los términos de esta ley. Las recomendaciones carecen de carácter vinculatorio, y
7. Expedir el Manual de Operación conforme al cual regulará su organización y funcionamiento.

**Capítulo Sexto**

**De las Infracciones, Sanciones y Medios de Impugnación**

**Artículo** **25.-** Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere y que se acojan a ella:

1. Realizar actividades de auto beneficio o de beneficio mutuo;
2. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los apoyos o estímulos públicos entre sus integrantes;
3. Aplicar los apoyos y estímulos públicos federales que reciban a fines distintos para los que fueron autorizados;
4. Una vez recibidos los apoyos y estímulos públicos, dejar de realizar la actividad objeto de la organización civil;
5. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o candidato a cargo de elección popular;
6. Llevar a cabo actividades que tengan por objeto la realización de proselitismo de índole religioso;
7. Realizar actividades ajenas a su objeto social;
8. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para los que fueron constituidas;
9. No presentar los informes que les solicite la dependencia o entidad competente que les haya otorgado o autorizado el uso de apoyos y estímulos públicos;
10. Abstenerse de mantener disponible la información de las actividades que realicen con la aplicación de los apoyos y estímulos públicos que hubiesen utilizado;
11. Omitir información o incluir datos falsos en los informes;
12. No informar al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo; y
13. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente ley.

**Artículo 26.-** La Comisión Estatal, a través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización que comenta alguna de las infracciones señaladas en el artículo anterior, las siguientes sanciones:

1. Apercibimiento: cuando la organización incurra por primera vez en alguna de las infracciones señaladas en esta ley, se le apercibirá para que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, subsane la irregularidad;
2. Multa: cuando la organización que haya sido objeto de apercibimiento y no subsane la irregularidad en el plazo establecido por la fracción anterior y tratándose del incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 25 de esta ley; se impondrá una multará hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Estado;
3. Suspensión temporal: en caso de reincidencia respecto de infracciones que hubiesen dado lugar a la imposición de multa, la organización será sancionada con la suspensión de su inscripción en el Registro por un año, contado a partir de la notificación;
4. Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro: en el caso de infracción reiterada o causa grave. Se considera infracción reiterada el que una misma organización que hubiese sido previamente suspendida temporalmente, se hiciera acreedora a una nueva suspensión temporal, sin importar cuáles hayan sido las disposiciones de esta ley cuya observancia hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 25 de la presente ley.

Las sanciones a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En caso de que una organización sea sancionada con suspensión o cancelación definitiva de la inscripción, la Comisión Estatal, por conducto de la Secretaría Técnica, deberá dar aviso, dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de la sanción, a la autoridad fiscal correspondiente, a efecto de que ésta conozca y resuelva de acuerdo con la normatividad vigente, respecto de los beneficios fiscales que se hubiesen otorgado en el marco de esta ley.

**Artículo 27.-** En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, procederán los medios de impugnación establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**T R A N S I T O R I O S**

**Primero. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado.

**Segundo. -** La Comisión Estatal convocará a los representantes de las asociaciones y sectores académico, profesional, científico y cultural, con la finalidad de integrar el Consejo Técnico Consultivo, en los términos de esta ley en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor de la ley.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCION NACIONAL”**

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de septiembre de 2020

DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN COORDINACIÓN CON PAOLA AGUIRRE PRAGA Y LETICIA ESPINOZA MÉNDEZ DE LA ASOCIACIÓN CIVIL “PROYECTO MUJERES”, EN MATERIA DE GARANTÍA DE ELEMENTOS DE GESTIÓN MENSTRUAL A MUJERES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto , conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Como lo ha sostenido la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios deben ser tratadas con el respeto que merece la dignidad propia de todo ser humano. En consecuencia, esas personas son titulares, en igualdad de condiciones, de los mismos derechos reconocidos a los demás miembros de la sociedad.[[11]](#footnote-11)

Las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios constituyen una población en situación de vulnerabilidad que es responsabilidad directa del Estado, por lo que su seguridad, integridad y derechos deben estar garantizados por el mismo.

De acuerdo con las cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, existían 379 centros penitenciarios en el país. En el año 2016, estos centros contaban con una población de 245,479 personas internas, cifra que representa un índice de sobrepoblación global del 17.16%, esto es 35,955 personas sobre la capacidad instalada. De las personas internas, se calcula que alrededor de 12 mil son mujeres, las cuales tienen necesidades específicas y distintas de los hombres en materia de derecho a la protección de la salud, como es la salud menstrual.[[12]](#footnote-12)

La menstruación es un proceso fisiológico natural en las mujeres que generalmente representa un síntoma de buena salud sexual y reproductiva. No obstante, y a pesar de los constantes avances médicos, el tema continua siendo un tabú en gran parte de la sociedad mexicana, debido a lo incomodo que resulta abordarlo y a la falta de sensibilización acrecentado por los prejuicios y los estigmas sociales que se imponen a la mujer menstruante.

Según la investigadora Phillipa Lysaght del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) las mujeres pasan en promedio 3000 días de su vida menstruando y aproximadamente la mitad de la población femenina (equivalente a un 26% de la población total) en edad reproductiva, tiene menstruaciones que duran entre dos y siete días cada mes.

Un adecuado acceso a la salud menstrual no se agota con la posibilidad de usar suficientes productos que permitan absorber y/o recolectar el sangrado, sino que implica la disponibilidad de instalaciones sanitarias que ofrezcan privacidad, el uso de agua y jabón para lavarse manos, cuerpo, ropa y/o productos de gestión menstrual reutilizables, y la posibilidad de disponer correctamente de los residuos.[[13]](#footnote-13)

No obstante, estas condiciones mínimas, se vuelven más difíciles cuando las mujeres están privadas de su libertad ya que si bien el Estado está obligado a garantizar la salud, el tema de la menstruación al ser un tema tabú, ha quedado relegado de las políticas públicas del sistema penitenciario, por lo que en la actualidad, las mujeres deben acceder a elementos de gestión menstrual tales como las toallas higiénicas descartables, reutilizables, los tampones, las esponjas marinas menstruales, los paños absorbentes lavables, la ropa interior absorbente, las copas menstruales entre otras, a través de sus familiares fuera de los penales o bien comprándolos a un precio mucho mayor dentro de los mismos centros de reclusión.

De ahí que sea necesaria una reforma legal que permita la obligación y garantía de la distribución de elementos de gestión menstrual, de manera gratuita, segura y obligatoria, con el objetivo de proteger de manera más amplia el derecho a la protección de la salud de las mujeres.

Recordemos que la obligación de mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad no sólo provienen de fuente constitucional, sino también de los tratado internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, de los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo es el caso Montero Araguren vs Venezuela del año 2006, en el que la Corte expresamente estableció que:

“La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afectación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad personal. Esta restricción de derechos, consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo, debe limitarse de manera rigurosa. Asimismo, el Estado debe asegurar que la manera y el método de ejecución de la medida no someta al detenido a angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén adecuadamente asegurados”.[[14]](#footnote-14)

Por lo que necesariamente, el Estado en cualquiera de sus órdenes debe garantizar que los centros penitenciarios o de reclusión cumplan con las medidas mínimas para garantizar la salud de las personas privadas de la libertad y en específico, los derechos de las mujeres.

En ese sentido, la presente propuesta de ley busca reformar el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de que el Estado asuma la responsabilidad de gestionar y garantizar los elementos de salud menstrual para las mujeres que están privadas de su libertad.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforman la fracción XXV de artículo 3 y la fracción V del artículo 9 ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como siguen:

Artículo 3…

I…

XXIV…

XXV. Suministros: A todos aquellos bienes que deben ofrecer los Centros Penitenciarios, gratuitamente, entre ellos, el agua corriente y potable, alimentos, medicinas, anticonceptivos ordinarios y de emergencia; **elementos de gestión menstrual**, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación;

**Artículo 9…**

I…

VI..

VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; **en el caso de las mujeres, se les garantizará la entrega de elementos de gestión menstrual necesarios así como instalaciones y espacios adecuados que ofrezcan privacidad, limpieza y la posibilidad de disponer correctamente de los residuos menstruales;**

VIII…

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor y enviadas a la Cámara de Diputados para el trámite que corresponda.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 23 de septiembre de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA**

Iniciativa con Proyecto de Decreto **que presenta el suscrito, Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la** **Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, con objeto de que los deportistas de alto rendimiento reciban becas y demás apoyos necesarios para su desarrollo integral, al tenor de la siguiente...**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

No obstante que en nuestro país siempre han existido deportistas con grandes potenciales, la gran mayoría de estos talentos siguen pasando desapercibidos, a pesar de su capacidad para destacar a nivel internacional.

Para nadie es desconocido que, a causa del marcado desinterés que durante décadas han mostrado los tres órdenes de gobierno, México sigue a la zaga en el medallero de las más importantes justas deportivas del mundo.

En vista de esta lamentable realidad en el deporte, cuyo impulso es sinónimo de fomento a la salud y desarrollo humano, considero que llegó la hora de reconocer y capitalizar el espíritu competitivo de millones de niños y jóvenes mexicanos que siguen a la espera de verdaderas oportunidades para escalar los más altos escaños en las diferentes disciplinas deportivas.

Particularmente en Coahuila, me alarma que a las nuevas generaciones no les entusiasme la idea de emprender una carrera deportiva, y no porque les falte ambición, más bien porque les desanima el hecho de que se carece de adecuados y suficientes apoyos oficiales para realizar sus sueños.

De acuerdo con datos del INEGI, respecto de la población que lleva a cabo prácticas físico-deportivas, el 63% tiene como motivo principal la salud; el 17.7% lo realiza por diversión, y 15.3 por ciento para verse mejor. En ningún caso expresan su deseo de hacer del deporte una carrera.

Será por eso que las nuevas políticas en materia deportiva, derivadas del proyecto de transformación que hoy se abre paso en el país, nos indican que es necesario involucrar a la población en actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desenvolvimiento social y humano.

También nos invitan a concebir la aplicación de los recursos presupuestales, no como un gasto, sino como una inversión, y promover la igualdad de oportunidades en el ejercicio del deporte, hasta el grado de alcanzar el grado de excelencia en cualquier prueba, según los estándares internacionales.

En algún momento de su vida, nuestros atletas se ven forzados a resolver una disyuntiva muy recurrente: proseguir con sus estudios y compromisos laborales o seguir practicando un deporte. Esto último suele implicar un significativo sacrificio económico personal que muy pocos están en posibilidades de realizar, lo que en suma significa el desperdicio de un sinfín de capacidades extraordinarias y prometedoras.

Ya lo señaló hace años el ex senador y ex gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez: *“la gran mayoría de los deportistas mexicanos de excelencia no siempre son producto de los sistemas nacionales, ni estatales de cultura física y deporte, más bien, del esfuerzo y dedicación personal y familiar. Es en muchas ocasiones a escala familiar donde la niñez y juventud encuentran apoyo para desarrollarse y alcanzar niveles de alto rendimiento”*.

Mientras tanto, es innegable que en nuestra Entidad se requiere consolidar las políticas públicas en la materia y reorientar los recursos presupuestales para respaldar y proyectar de manera primordial a los talentos deportivos más destacados, sin menoscabo de los programas de fomento del deporte como una práctica saludable, principalmente en el sector educativo.

Es por ello que, en este primer paso hacia la creación de una plataforma de impulso efectivo a la vocación deportiva de los atletas de alto rendimiento en Coahuila, se propone a través de la presente iniciativa formalizar y, a su vez, dar mayor certeza y viabilidad al deporte de excelencia, considerando que ello contribuye, inclusive, a la anhelada reconstrucción del tejido social y al bienestar general de las familias.

Con base en todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presento ante este Honorable Congreso la siguiente Iniciativa con...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. - Se reforma la fracción IX del artículo 5, así como las fracciones I y III del artículo 8, los incisos b) y c), suprimiendo el uso de “y/o”, de la fracción VII del artículo 13, y se añade la fracción d) a este mismo artículo, todos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar en los términos siguientes:**

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. ... a la VIII. ...

**IX. Deporte de alto rendimiento: Actividad física, individual o colectiva, que se ejerce como juego o competición, cuya práctica exige la optimización extrema de los recursos corporales y técnicos, propia** de los atletas y entrenadores con alto nivel competitivo que, **como resultado de sus entrenamientos profesionales, intensivos y permanentes, están capacitados para representar dignamente a Coahuila y a México** en competencias **nacionales e** internacionales dentro del ciclo olímpico; **por extensión, se trata de un aspecto muy importante de los** planes y programas **gubernamentales** en materia deportiva.

ARTÍCULO 8.- Los municipios, en la esfera de su competencia, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Fomentar y promover la cultura física y la práctica de las actividades deportivas entre los habitantes de su municipio; y celebrar convenios con instituciones públicas, privadas, sociales y recreativas, con objeto de patrocinar la realización de eventos deportivos, la conformación de ligas, **la integración** de equipos de las distintas disciplinas físicas más aceptadas por los habitantes de cada municipio **y el desarrollo de deportistas de alto rendimiento.**

II. ...

III. Asignar una partida presupuestal anual que permita ejecutar los programas en materia de cultura física y deporte; la cual deberá quedar debidamente especificada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda**, que a su vez contemplará claramente el otorgamiento directo de apoyos especiales a deportistas de alto rendimiento, así como a sus entrenadores y acondicionadores físicos.**

ARTÍCULO 13.- Con el fin de procurar su mejor desarrollo integral individual y contribuir a la armonización social y el bienestar colectivo de las personas que se encuentren en el Estado tendrán, en materia de cultura física y deporte, los siguientes derechos:

I. ... a la VI. ...

VII. Formar parte del Sistema Estatal del Deporte para, en su caso:

**b) Obtener el registro que lo acredite como deportista;**

**c) Recibir becas, estímulos y apoyos deportivos, con atención diferenciada en tratándose de personas de la tercera edad, con discapacidad y de cualquier otro grupo vulnerable;**

**d) En el caso de los deportistas de alto rendimiento, obtener becas académicas, económicas, en especie y, en general, todos los medios y apoyos que requieran para potenciar sus niveles competitivos y sufragar los gastos que demande su participación en contiendas deportivas, dentro o fuera del país; y/o**

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A t e n t a m e n t e :**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 21 de septiembre de 2020**

***“Por el Camino de la Cuarta Transformación”***

**DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**

**FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ESTATAL DE SALUD Y LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y PROTEGER LA SALUD MENTAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Andrés Loya Cardona conjuntamente con los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa mediante la cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud y la Ley Estatal de Educación, con el propósito de prevenir y proteger la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como *“un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”*. Trasladado a la infancia, se podría traducir como el desarrollo de las capacidades sociales y emocionales del niño que le permiten experimentar, regular sus emociones, establecer relaciones próximas y seguras y aprender.[[15]](#footnote-15)

Los trastornos mentales pueden surgir en cualquier momento de la vida. La Organización Mundial de la Salud estima que hasta uno de cada cinco niños y adolescentes presentan problemas de desarrollo, emocionales o de conducta, y uno de cada ocho tiene diagnosticado un trastorno mental. Destaca también que los problemas de salud mental se desarrollan temprano, indicando que el 50 por ciento de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 15 años y el 75 por ciento antes de los 18 años.[[16]](#footnote-16)  En México la prevalencia de los problemas de salud mental de la población infantil urbana que tiene entre 3 y 12 años se ha estimado en 16% mediante el Cuestionario de Reporte para Niños (RQC), un instrumento estandarizado aplicado por parte del personal de salud en el primer nivel de atención.

Son múltiples los factores que intervienen en la salud mental: hereditarios, un normal desarrollo neurobiológico, la educación familiar y escolar, el nivel de bienestar social, el grado de realización personal y una relación de equilibrio entre las capacidades del individuo y las demandas sociales. Identificar posibles cambios en su comportamiento y emprender acciones de detección temprana son fundamentales para su buen desarrollo.

Los hallazgos de las Encuestas Mundiales de Salud Mental de 17 diferentes países muestran que los trastornos psiquiátricos consistentemente inician en las primeras décadas de la vida.[[17]](#footnote-17) Según la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, los retrasos del desarrollo, el autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo se manifiestan desde los primeros meses de vida. Los problemas de comportamiento desde los dos años, los síntomas de ansiedad desde los 4-5 años o incluso antes, la depresión desde los 5-6 años, el consumo de sustancias desde los 11-12 años y la esquizofrenia con características similares a la del adulto desde los 14-15 años.

Un trastorno mental en esta etapa de la vida tiene un alto costo no solo por el sufrimiento que se representa para los niños y jóvenes, sino también por las secuelas que pueda tener para el funcionamiento en la vida adulta como el menor alcance educacional, ocupacional y económico, una peor productividad laboral, el embarazo no deseado, accidentes automovilísticos, y relaciones interpersonales disfuncionales. La detección e intervención oportuna contrarresta estas secuelas. No se debe olvidar que estos trastornos pueden prevenirse, otros tratarse y curarse y una gran mayoría de quienes los padecen puede llevar una vida plenamente satisfactoria.

La protección de la salud mental es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, en conjunto con el Estado y la sociedad en general. Resulta importante impulsar políticas en salud orientadas a la prevención de trastornos y a la promoción de un adecuado desarrollo en la infancia, con el objetivo de identificar factores de riesgo tanto en el entorno familiar, escolar y comunitario.

En efecto, la salud mental y los objetivos educativos están estrechamente relacionados. Cuando los estudiantes gozan de una adecuada salud mental son capaces de desplegar al máximo su potencial y desarrollarse de manera integral; por el contrario, la presencia de problemas y trastornos mentales pueden afectar profundamente todas las áreas de su desarrollo, impactando negativamente en su capacidad de aprendizaje y adaptación social.

Siendo la escuela uno de los espacios de mayor convivencia e interacción de los menores, tienen un rol importante en la prevención y promoción del bienestar para toda la población estudiantil, siendo puntos centrales para la identificación e intervención temprana para aquellos considerados en riesgo, e intervenciones más intensivas para estudiantes con problemas más serios.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como propósito fortalecer las acciones de prevención y protección de la salud mental de niñas, niños y adolescentes desde el sector educativo y de salud, al introducir programas de prevención y detección temprana de trastornos mentales, de manejo y gestión de estrés, así como para el desarrollo emocional en donde se involucre tanto a los menores, como a sus padres de familia, tutores y maestros.

Las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que la salud mental de niñas, niños y adolescentes no debe ser un tema extracurricular en las escuelas, sino que constituye requisito previo para el aprendizaje y el logro académico de los estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO.-** Se **adiciona** la fracción III, recorriéndose las ulteriores, del artículo 67 de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

**Artículo 67.** …

1. A la II. …
2. **La realización de programas y acciones para la prevención y detección temprana de trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes en los entornos familiar y educativo, así como en su caso la canalización para su atención y tratamiento;**
3. a la V. …

**SEGUNDO.-** Se **adiciona** la fracción XXI del artículo 7º de la Ley Estatal de Educación, para quedar como sigue:

**ARTICULO 7°.-** …

I.  a la XX. …

**XXI. Desarrollar en los alumnos técnicas para la gestión de estrés, la conciencia y el manejo de las emociones, así como de detección temprana de los trastornos mentales.**

**Las escuelas incluirán programas, cursos y actividades dirigidos a docentes, alumnos y padres de familia en materia de prevención y protección de la salud mental de los estudiantes, que ayuden a combatir los estigmas sobre los trastornos mentales y eliminar cualquier tipo de discriminación asociada a los mismos.**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE. -**

**INICIATIVA QUE PRESENTA EL DIPUTADO MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO, EN CONJUNTO CON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”; EN EJERCICIO DE LA FACULTAD LEGISLATIVA QUE CONCEDE EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 22 FRACCIÓN V; 144 FRACCIÓN I; 158, 159 Y 160 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE LA CUAL PRESENTAMOS LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2757, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EFECTO DE PREVER EXPRESAMENTE EN DICHO ORDENAMIENTO, LA OBLIGACIÓN DE LOS NOTARIOS DEL ESTADO DE INCLUIR A FAVOR DEL DONANTE, UNA CLÁUSULA DE USUFRUCTO VITALICIO EN LAS ESCRITURAS PÚBLICAS QUE EXPIDAN, RESPECTO DE DONACIONES UNIVERSALES DE BIENES QUE REALICEN PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS O MÁS, Y ASÍ EVITAR ALGUNAS INJUSTICIAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR AL DEJAR SIN HABITACIÓN O EN EL DESAMPARO A DICHOS DONADORES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Conforme a lo expresamente establecido en la Ley del Notariado, el ejercicio del Notario en el Estado de Coahuila, es una función de orden público que está a cargo del Ejecutivo del Estatal y, por delegación, se encomienda a profesionales del Derecho, en virtud del fiat que para el efecto les otorga el Congreso del Estado a los ciudadanos que asumen esa responsabilidad, en ese sentido, el Notario es la persona investida de fe pública, autorizada para autentificar los actos y los hechos, a los que los interesados deban o deseen dar forma conforme a las Leyes, y sólo podrá ejercer sus funciones dentro del Distrito de su adscripción.

Ahora bien, Cuando se trate de actos por los cuales se constituya, modifique o extinga algún derecho real sobre bienes inmuebles localizados en el Distrito Notarial de su adscripción, el Notario personalmente y bajo su más estricta responsabilidad, podrá recabar las firmas de los interesados en lugar distinto a su Distrito, haciendo constar esta circunstancia en el instrumento correspondiente, estando obligados por ley a autorizar en sus protocolos con total arreglo a las leyes vigentes toda clase de instrumentos públicos.

En ese sentido, conviene destacar que el contrato de donación, es el instrumento jurídico mediante el cual una persona llamada donante, trasmite gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra llamada donatario, y forzosamente deben de reservarse para el donante los bienes necesarios para su propia subsistencia, porque aun y cuando la ley prevé o faculta una donación universal, ante tales circunstancias debe de prevenirse que la misma deba de limitarse a que el sujeto donante deba de reservarse lo necesario para su propia subsistencia, y como este tipo de contrato se caracteriza por ser de naturaleza principal porque existe y subsiste por sí solo, y es de forma unilateral, porque es solo el donante quien asume la obligación de trasmitir el dominio de la cosa donada y de entregarla al donatario, es que surge la necesidad de legislar una medida adicional de protección de las personas donadoras de sus bienes inmuebles, cuando son personas mayores de 65 años o más, para el efecto de que dichas personas no queden en el desamparo ante la lamentable ingratitud de que pueden ser objeto por parte de los donatarios, así sean sus propios familiares.

Lo anterior es así, tomándose en consideración de que la vejez se considera una etapa vulnerable de la vida por múltiples razones, como lo son el deterioro de la salud, la economía, el patrimonio, la desigualdad, la discriminación, el abandono y la falta de cuidados.

El envejecimiento es un progresivo declive en las funciones orgánicas y psicológicas, como la perdida de las capacidades sensoriales y cognitivas que se presentan de manera única y diferente en cada individuo.

Las Naciones Unidas consideran como adulto mayor a toda persona de 65 años o más para los países desarrollados y a partir de 60 para los países en desarrollo.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2015 y 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando de 12% al 22% de la población.

La buena calidad de vida en las personas mayores es posible y las probabilidades de envejecer saludablemente se incrementan con los avances científicos, tecnológicos y médicos del siglo XXI, una adecuada alimentación y la activación física.

Es importante considerar las consecuencias y efectos naturales en cada una de las personas y por tanto la conclusión del ciclo laboral y productivo en cada una de ellas.

El referido ciclo laboral representa una disminución de las condiciones financieras de cada una de las personas mayores, puesto que, los ingresos suelen ser inferiores a los ingresos percibidos durante la vida laboral, lo que significa la disminución del poder adquisitivo, situación que, sin duda alguna, impacta en el nivel y calidad de vida de las mismas.

Debido a lo anterior y en el ánimo de ordenar y dar certeza a su patrimonio en un eventual fallecimiento, algunas personas mayores deciden realizar la donación del o los bienes inmuebles que lograron adquirir a lo largo de su vida, bien sea a sus hijos, nietos o algún otro familiar.

Si bien es cierto, la o el adulto mayor titular de una propiedad inmueble está legitimado y cuenta con todo el derecho de donar a favor de la o las personas que considere, también es cierto y, muy lamentable, que muchas ocasiones se abusa de la condición y la buena fe de este sector de la población para obtener un beneficio.

De esta manera, como se ha dicho, el día a día de nuestra sociedad muestra una dura y muy triste realidad de nuestros adultos mayores, una vez que donan su patrimonio sobreviene el desinterés y la indiferencia por parte de sus descendientes y demás parientes e inclusive de aquellos quienes se vieron beneficiados mediante la donación; es decir, es común, que nuestros adultos mayores queden en condiciones de desamparo total.

Y si bien, las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud, tal y como lo establece el artículo 2779, del Código Civil de nuestra entidad, dicho normatividad no establece la hipótesis jurídica de que el Notario tenga oficiosamente tenga la facultad de establecer en el contrato de donación el usufructo vitalicio cuando el donante o su cónyuge, sea una persona mayor de 65 años.

En ese sentido, es deber de un Legislador en su calidad de Representante Popular, el de velar por un mejor marco jurídico que contribuya a salvaguardar la integridad y el patrimonio de todas las personas, más aun, en tratándose de aquellas que se contemplan dentro de los grupos que se consideran vulnerables, lo cual se materializaría mediante esta propuesta legislativa en la que se busca esencialmente garantizar el disfrute de los bienes de las personas mayores mientras se encuentren aún con vida, no obstante que haya sido su deseo el otorgarlos en donación.

Esta propuesta, resulta proporcional y razonable con relación a la libre disposición de los bienes y a la liberalidad contractual, en virtud de que el usufructo vitalicio como un derecho real y temporal de usar y de disfrutar total o parcialmente de un bien, aunque ya es ajeno por donación que se hizo de él, tal acuerdo de voluntades por disposición de la ley, no restringe a la primera ni condiciona a la segunda, sino que, privilegia el derecho de la persona adulta mayor de seguir gozando de los bienes inmuebles que durante el transcurso de su vida logró conformar como parte de su patrimonio.

Es decir, con tal medida se limita y se previene que algunas personas que se ubiquen en tal sector de la población puedan ser víctimas de engaños o de abusos, así el Estado privilegia su protección, por lo que resulta razonable que con apoyo del Notario Público se vigile y garantice el usufructo vitalicio del inmueble objeto de la donación a fin de proteger a las personas adultas mayores del completo abandono y garantizarles el derecho a una vivienda digna y/o en su caso de ingresos por el arrendamiento del mismo, de ahí, que los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Legislaturas en las que formamos parte, estemos impulsando este tipo de propuestas que benefician a los grupos vulnerables representados en las personas mayores de 65 años o más, quienes por sus razones muy particulares realicen el contrato de donación a sus beneficiarios elegidos, pero que por ley pueden aún seguir disfrutándolos por el resto de su vida, por lo que, por dicho motivo, es que ponemos a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de:

**DECRETO:**

**ARTÍCULO ÚNICO. - SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULO 2757, DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 2757…**

Cuando el o los donantes sean personas de 65 años o más, el Notario que expida el instrumento público de donación, deberá incluir oficiosamente una cláusula de usufructo vitalicio a favor del donante sobre los bienes otorgados a los donatarios.

…

**TRANSITORIOS**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**ATENTAMENTE**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE PRESENTA LA DIPUTADA CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “ELVIA CARRILLO PUERTO” DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO.**

**PRESENTE.**

La suscrita Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la *Constitución Política del Estado de Coahuila*, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la *Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza*, me permito presentar a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho a la educación para las y los niños y adolescentes hasta un nivel medio superior de manera gratuita, laica y obligatoria. Esto es así porque nuestro sistema constitucional entiende que la educación es un valor fundamental y necesario para toda sociedad democrática que pretenda desarrollarse económica, social y culturalmente.

La educación de un país no es un tema menor, ya que representa el elemento central que toda sociedad democrática debe priorizar, pues sólo así se puede formar ciudadanos con criterio propio, tolerantes y plurales que respetan el estado de derecho y los valores humanistas.

La educación tiene una función liberalizadora que impulsa en el ser humano la creatividad, la innovación, el emprendimiento y lo despoja de los prejuicios, el fanatismo y los dogmas. Nutrir el pensamiento plural y solidario es la mejor forma de luchar en contra del autoritarismo y violencia.

Desgraciadamente, el panorama educativo en nuestro país no es muy alentador. Antes de la pandemia, estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), estimaban que la matriculación de alumnos a nivel básico y medio superior en nuestro país eran bajas en comparación con otros Estados[[18]](#footnote-18). Después de la pandemia, ese número se ha reducido aún más debido a que muchos estudiantes han tenido que dejar sus clases debido a la falta de tecnologías y herramientas necesarias para lograr las clases virtuales o a distancia.

Un estudio realizado por la asociación civil Mexicanos Primero, sostiene que hasta 4 millones de estudiantes podrían dejar temporal o definitivamente sus estudios debido a afectaciones económicas, familiares y de motivación, causadas por la pandemia. De acuerdo con, David Calderón, presidente ejecutivo de esa organización, explicó que la estimación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre que 2 millones 523 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria abandonarían las clases en el ciclo escolar 2019-2020, se incrementaría al doble con consideraciones como la tendencia regular de abandono escolar por año, así como la cifra de aquellos que no pudieron atender los aprendizajes a distancia[[19]](#footnote-19).

Ante esta situación, que no sólo se vive en México sino en todo el mundo, la UNESCO ha recomendado optar por el uso de soluciones de alta o débil tecnología en función de la energía y el tipo de acceso a Internet con los que cuenten los estudiantes, así como del nivel de competencias digitales que tengan estos y los docentes. Puede tratarse de plataformas de aprendizaje digital, lecciones por vídeos, los MOOC e incluso de la difusión de los cursos mediante cadenas de radio y canales de televisión[[20]](#footnote-20).

Si bien es cierto, que muchas de estas medidas ya han sido tomadas por los gobiernos federal y estatal, también lo es que a pesar de ellas, muchas niñas y niños siguen sin poder acceder a la educación por falta de recursos y por falta de instrumentos legales que garanticen la educación virtual y a distancia como un derecho fundamental de las y los estudiantes.

Es por eso que la presente iniciativa, prevé reformar el artículo 9 de la Ley general de Educación, con el objetivo de que la educación virtual y a distancia sea reconocida como un derecho fundamental, procurando con políticas públicas estatales, el acceso a internet y otras tecnologías de la información y comunicación a quienes por sus condiciones económicas y sociales no puedan acceder a ellas por cuenta propia.

Partimos de la idea de que la educación debe ser igual para todos, lo que implica que el Estado realice las acciones necesarias para equilibrar las desigualdades sociales y educativas, con el objetivo de combatir la brecha digital, que en el ámbito educativo continúa siendo sumamente alta.

Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción I, 60 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila, así como 21 fracción IV, 152 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Congreso del Estado, la siguiente:

**PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma la fracción V del artículo 9 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

**Artículo 9…**

I…

IV..

V. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. **En casos excepcionales que no hagan posible la opción educativa presencial, el Estado garantizará a las y los educandos la educación virtual y a distancia a través de los diferentes medios disponibles.**

Por lo expuesto y fundado, ante esta soberanía respetuosamente solicito que las reformas presentadas sean votadas a favor y enviadas a la Cámara de Diputados para el trámite que corresponda.

**SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza a 23 de septiembre de 2020.**

**DIPUTADA**

**CLAUDIA ISELA RAMIREZ PINEDA**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE URGENCIAS MÉDICAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE QUE LAS INSTITUCIONES DE SALUD SE CONDUZCAN SIN DISTINCIÓN, EXCLUSIÓN O RESTRICCIÓN QUE IMPLIQUE DISCRIMINACIÓN EN LA ATENCIÓN MÉDICA A QUIEN REQUIERA RECIBIRLOS DE URGENCIA POR ENCONTRARSE EN PELIGRO SU VIDA O SU INTEGRIDAD FÍSICA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.**

La suscrita Diputada María del Rosario Contreras Pérez, conjuntamente con las demás Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley de Urgencias Médicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza,conforme a lasiguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

El objetivo de la creación de la Ley de Urgencias Médicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza fue proteger a las y los ciudadanos que enfrentan situaciones de emergencia médica, procurando la atención puntual de todo aquel individuo que tenga en peligro su integridad o su vida, así versa el artículo 1° de dicha norma.

Así mismo establece en su artículo 5 que las instituciones de salud, ya sean pública o privadas, no pueden negar la atención médica a las personas que lo requieran de urgencia por que su vida o integridad física se encuentren en peligro.

Es de nuestro interés que se incluya dentro de este artículo que tampoco deben comenterse actos de discriminación en contra de los pacientes, es decir que no se les trate de manera distinta, con exclusión o restricción de su derecho a la atención médica de urgencias por razón de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, su lengua, prefencias sexuales o aparencia física.

En este punto exponemos, el concepto amplio de discrimanción que se enuncia en el artículo 3 de la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para el caso de que cualquier otra circunstancia sea considerada dentro de este concepto, por lo que cito a la letra dicho precepto:

***“ARTÍCULO 3.*** *Para los efectos de esta ley se entiende por:…*

***VI.*** *Discriminación: Toda ley, acto, hecho o conducta que provoque distinción, exclusión, restricción, o rechazo, motivada por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica o de salud, estado de gravidez, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, filiación o identidad política, apariencia física, identidad o expresión de género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;…”.*

Amerita por lo tanto que dicho concepto permee en las leyes de nuestro Estado, para darle seguridad y certeza jurídica al ciudadano, es decir pretendemos prevenir, bajo cualquier circunstancia, toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana o bien que sea un obstáculo para su desarrollo intregal pleno e integral, más aún en este caso en específico, ya que la persona se encuentra en una situación compleja en cuanto a su salud, y no queremos que se sume una situación más que pueda llegar a consecuencias graves para el paciente.

Consideramos que la atención de una urgencia médica debe realizarse sin ningún tipo de condicionamiento, apegado al respeto de los derechos humanos del paciente declarado con una emergencia o urgencia médica.

Como un marco de referencia la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pugnado que los estados que forman parte de dicho organismo diseñen políticas públicas que permitan que el derecho a la salud se preste sin discriminación, exclusión o restricción, ya que cuando prevalece dicha situación existe un impacto negativo, lo que dificulta e impide el acceso efectivo, disfrute o ejercicio del derecho humano a la salud y las demás libertades fundamentales que confluyen en este.

Los preceptos constitucionales de nuestro país reconocen en el artículo 1º que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, se garantizará su protecicón, cuyo ejercicio no podrá restringirse salvo en lo casos y bajo las condiciones que dicha norma establece, de la misma manera, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Otro más de los preceptos constitucionales que fortalecen esta iniciativa es el artículo 4º cuyo mandato establece que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud y que será la Ley la que establecerá las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud, entre otras circunstancias relevantes de dicho artículo.

Por último es de gran utilidad citar el artículo 77 bis 1, de la Ley General de Salud, que establece que la protección a la salud será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, generando condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progesivo, efectivo, oportuno de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.

Es por ello que siendo la Ley de Urgencias Médicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, una norma que coadyuva en la protección a la salud de las personas que se encuentran en una situación de urgencia médica, es coherente sumar la no discrimanción, para que se les garantice un trato digno, fortaleciendo a esta norma en relación con la defensa y protección de los derechos humanos de los Coahuilenses.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**I N I C I A T I V A C O N P R O Y E C T O D E D E C R E T O**

**ÚNICO. –** Se adiciona un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley de Urgencias Médicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.- …**

**Las instituciones que presten servicios de salud se conducirán sin distinción, exclusión o restricción que implique discriminación en la atención médica a quien requiera recibirlos de urgencia por encontrarse en peligro su vida o su integridad física.**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** | |  |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  | |  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** | |  |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  | |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | |  |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  | |  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** | |  |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  |  | | | |
|  | **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE**

Iniciativa que presenta el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; en ejercicio de la facultad legislativa que me conceden los artículos 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso Local, presento INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se adicionan los artículos 150 Quater y 150 Quintus a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila; con base en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El 17 de diciembre de 2018, en esta Tribuna se dio lectura al dictamen que derivó en diversas reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza; con base en iniciativas de los diputados Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor conjuntamente con la Diputada Zulmma Berenice Guerrero Cazares del Grupo Parlamentario del Partido Unidad democrática de Coahuila; el Diputado Juan Carlos Guerra López Negrete conjuntamente con las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como la Diputada Azucena Ramos Ramos, conjuntamente con las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional.

De acuerdo con las exposiciones de motivos de las iniciativas en comento, los argumentos expuestos, de manera breve, se refieren a problemas como los siguientes:

“…Que los principales problemas que hasta hoy se tienen respecto a las bolsas de plástico son entre otras las siguientes:

I. Que tardan entre 150 y 1000 años para desintegrarse en el ambiente

II. Que únicamente el 1 % de las bolsas son recicladas.

III. Que son fabricadas principalmente a base de petróleo, el cual no es renovable y es muy costoso: inclusive produce grandes cantidades de este combustible, generando emisiones de gases efecto invernadero.

IV. Que cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas.

V. Las bolsas no recicladas se convierten en basura que determinan en el drenaje o en costas y mares ocasionando inclusive la muerte de gran diversidad de especies, al confundirla con comida.

VI. Algunas de las partículas que emiten las bolsas al desintegrarse son toxicas, como es la tinta para su diseño.

VII. La cantidad en la que se producen comparada con la cantidad eliminada, no es sostenible y si muy perjudicial, no solo para el ambiente sino también para los seres humanos.

Que diversos países y ciudades han adoptado medidas para disminuir las cantidades de plástico enormes que se convierten en basura y con ello los daños que ocasiona.

Así desde 2002 las autoridades irlandesas implementaron un impuesto del 20% sobre las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas plásticas, generando un efecto inmediato pues el consumo de bolsas se redujo en un 90% y el dinero recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de reciclado. En Escocia se adoptó un impuesto similar al de Irlanda obteniendo iguales resultados que el país vecino. En Taiwán el gobierno decidió prohibirlas a los supermercados que las suministraran en forma gratuita. En Italia donde producían el 25% de todas las bolsas producidas y usadas en Europa prohibieron su uso en 2011. En España que es el primer productor de bolsas de plástico de un solo uso, se aprobó reducir paulatinamente el consumo de bolsas de este tipo hasta suprimirlas definitivamente en 2018.

En México, concretamente en la ciudad de México, se prohibió la entrega de bolsas plásticas al consumidor final, que no estén sujetas a los criterios y normas para la producción y el consumo sustentable, según su ley de Residuos Sólidos, en Baja California se aprobó en su ley de protección al ambiente, la prohibición a los establecimientos comerciales de proporcionar las bolsas de plásticos en forma gratuita, advirtiendo que el costo deberá correr a cargo del consumidor final. En similares términos aprobó el ayuntamiento de Querétaro el 13 de diciembre de 2017 su reglamento de Protección Ambiental y Cambio en el que prohíbe proporcionar a los consumidores cualquier tipo de plástico desechable para el acarreo de productos ya sea en forma gratuita u onerosa.

…

La Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado mes de junio, exhortó a todos los países tomar medidas contra el uso de bolsas de plástico, como parte del desafío global por reducir y acabar con la contaminación de los océanos que se incrementa cada año, esta petición fue hecha a pocos días que se celebrara el día Mundial del Medio Ambiente, ya que como resultado del consumo excesivo de plásticos de un solo uso y de la mala gestión de los residuos, cada año se vierten en el océano 13 millones de toneladas de plásticos, advirtiendo que si los patrones actuales de consumo continúan, en 2030 la producción anual de plástico será de 619 millones de toneladas a nivel global, a este llamado América Latina y el Caribe reaccionan ya que son de las regiones más biodiversas del mundo, con 16 millones de km2 de mar que son fuente de 24% de la pesca global. Las medidas tomadas por Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica para restringir el uso de bolsas de plásticos. Chile ya prohibió su uso a partir de 2019, convirtiéndose en el más reciente país que asume una decisión frontal contra las bolsas plásticas. Colombia prohibió también en 2016 la circulación de bolsas plásticas de pequeño tamaño y en 2017 aplicó un impuesto a bolsas de mayor tamaño. Ecuador se unió este año a la corriente contra el plástico y dictó medidas para restringir el uso de sorbetes, bolsas y botellas desechables en las islas Galápagos. Su objetivo: que el archipiélago sea una zona libre de plásticos. Mientras tanto, Perú quiere también prohibir las bolsas y se debate en el Congreso un proyecto de ley para tal fin. En América Central, la ofensiva contra los plásticos la impulsó Panamá, que devino a inicios de este año en el primer país del istmo en prohibir por ley la bolsa de plástico. Costa Rica lanzó de su lado una estrategia para reducir el uso en un lapso de tres años, en 2021.

…

…Uno de los principales problemas de la contaminación en nuestros días, lo constituye el uso indiscriminado de plásticos creados a partir del petróleo y sus derivados. Esta situación se explica en razón de que dicho elemento, al ser un material procesado de alta resistencia, cuenta con un grado de degradación que se puede extender hasta los 300 años.

Esta circunstancia ha impulsado al reciclado de los productos fabricados con plásticos; pero, el reciclado tiene limitaciones, además de que, en el proceso mismo, en necesario utilizar procedimientos que generan a su vez, una mayor contaminación al medio ambiente.

…Empero, la inmensa mayoría de los productos plásticos que existen no tienen esa cualidad de ser biodegradables, y como ya se ha señalado, su proceso de degradación se contabiliza en siglos, por lo que es necesario empezar a tomar medidas para aminorar el impacto ambiental que produce.

No pasa desapercibido que el plástico no biodegradable ha sido de gran utilidad y que representa una opción económica para el envasado y traslado de productos y mercancías, pero se estima que es momento de iniciar con acciones legislativas concretas para ir limitando su uso…**Fin de la cita.**

En los transitorios se estableció un periodo de 12 meses para la plena entrada en vigor de la prohibición, y una periodicidad gradual para que los distintos tipos de comercios puedan cumplir en plazos más que razonables con esta obligación.

Sin embargo, las leyes son perfectibles, más aún cuando se trata de reformas innovadoras que modifican un paradigma histórico. En relación con estas reformas que hemos comentado, han surgido diversas inquietudes expresadas por los distintos actores involucrados en el proceso, desde los clientes afectados, hasta los dueños de las tiendas y comercios y de las fábricas de las bolsas, que guardan relación con los aspectos siguientes:

I.- La falta de especificación de los materiales que deben o pueden ser usados para la fabricación de bolsas ecológicas o reciclables.

II.- La falta de especificación para los tipos de materiales que deben o pueden usar por ejemplo los negocios de comida, aquellos que entregan sus productos envueltos en materiales plásticos.

III.- Las atribuciones de las autoridades municipales. Y,

IV.- La forma en que se apoyaría a los negocios que fabrican bolsas de plástico y recipientes de unicel, ante la eventual afectación económica y pérdida de empleos que resentirán por la prohibición.

Revisamos diversas leyes del medio ambiente de 14 entidades federativas, encontrando lo siguiente:

**LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS**

*Artículo 8.- A la Secretaría, le corresponde las atribuciones siguientes:*

*…*

*XXXIV.*

*…*

***d)*** *Deberá fomentar la transición de tecnologías a empresas productoras para la sustitución de bolsas de plástico*

***…***

***XXXVI.-*** *Fomentará la transición de tecnologías a empresas productoras para la sustitución de bolsas de plástico, popotes y recipientes de unicel para reemplazo por materiales que puedan ser fácilmente compostable o con contenido de material reciclado, el Titular del Ejecutivo Estatal podrá constituir programas de apoyo dirigidos para este fin.*

**LEY DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

*ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Secretaría, el ejercicio de las siguientes atribuciones:*

*…*

*…*

*…*

*XXXVIII.- Formular los Criterios y Normas de Producción Sustentable que tendrán por objeto establecer y describir los criterios y buenas prácticas de producción sustentable que los fabricantes de bolsas de plástico deban implementar en sus procesos, operaciones y productos.*

**LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL**

*ARTÌCULO ÚNICO. - Se adiciona la fracción XVIII Bis al artículo 11, el artículo 11 Bis, la fracción XI Bis del artículo 25, el artículo 26 Bis, y el artículo 26 Bis1 todos de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal para quedar como sigue.*

*….*

*….*

*TRANSITORIO*

***QUINTO****. El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y de Desarrollo Económico ambas del Distrito Federal, deberán implementar un programa de apoyos a efecto de que las empresas que actualmente producen las bolsas y empaques de plástico puedan adecuar las tecnologías que tienen a efecto de atender las demandas ambientales y legales implementadas en la presente reforma.*

**LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA**

*…*

*ARTÍCULO 143 BIS 2.- Los Ayuntamientos, tendrán facultades para verificar que en los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, no se utilicen bolsas de polietileno u otro material plástico, que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 143 BIS de esta Ley. Así como también para verificar en fábricas y centros de distribución, que no se vendan, almacenen y distribuyan bolsas de polietileno u otro material plástico, que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 143 BIS de esta Ley.*

*ARTÍCULO 143 BIS 3.- La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, deberá crear un Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de bolsas biodegradables en el que deberán inscribirse todas las personas físicas y morales que fabriquen o comercialicen dichas bolsas, quienes deberán contar, con un certificado anual de degradabilidad o biodegradabilidad de sus productos, expedida o avalada por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.*

**LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA**

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE JALISCO**

**CAPÍTULO III**

De las atribuciones de la Secretaría

**….**

*Para apoyar la transición de tecnologías a empresas productoras para la sustitución de bolsas de plástico y popotes por elaborados de material biodegradable, compostable o con contenido de material reciclado, la Titular del Ejecutivo podrá constituir programas de apoyo dirigidos para este fin.*

**CAPÍTULO IV**

De las atribuciones de los Gobiernos Municipales

**Artículo 8º.**

...

***XIII****.**Establecer en sus reglamentos, en materia de sustitución de materiales no biodegradables, no compostables o no reciclados:*

*a) La gradualidad con la que toda unidad económica deberá sustituir el material de las bolsas de plástico que proporcionan para el acarreo de productos por materiales biodegradables, reutilizables, compostables o materiales reciclados;*

*b) La gradualidad con la que los productores de bolsa para acarreo y popote no biodegradable o sin contenido de material reciclado asentados en su territorio, deberán producir con materiales biodegradables, compostables o con contenido de material reciclado; y*

*c) Las sanciones económicas y administrativas para infractores a las disposiciones de sustitución de los productos a los que se hacen referencia en las fracciones anteriores;*

*XIV. Elaborar programas de concientización sobre el uso responsable de los plásticos de un solo uso dirigidos a las unidades económicas en su ámbito de competencia, así como los beneficios de la reducción en el consumo, la sustitución y la correcta disposición;*

*XV. Coadyuvar con las empresas dedicadas la fabricación de bolsas de plástico o popotes biodegradables, compostables o con contenido de material reciclado para facilitar el abasto de estos a unidades económicas y población en general;*

*XVI. Vigilar el cumplimiento de la transición de bolsas de plástico y popotes no biodegradables, por biodegradables, compostables o con contenido de material reciclado;*

*XVII. Establecer en sus disposiciones reglamentarias que las actividades de venta y comercialización de bolsas de plástico para acarreo y popotes deberán sujetarse a los materiales establecidos en la Norma Técnica Ambiental Estatal de la materia; y*

XVIII. Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia ambiental.

**LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE NAYARIT**

**Capítulo IV**

***Artículo 172 A.-*** *Dentro del ámbito territorial del Estado queda prohibido que se entregue al consumidor, ya sea a título gratuito, de manera onerosa o con motivo de cualquier acto comercial, bolsas de plástico que no cumplan con las normas oficiales mexicanas que determinen los criterios en materia de eficiencia ambiental y tecnológica, y en materia de generación, manejo y disposición final de residuos sólidos; así como con los Criterios y Normas de Producción Sustentable que al efecto emita la Secretaría.*

*Los Criterios y Normas de Producción Sustentable tendrán por objeto establecer y describir los criterios y buenas prácticas de producción sustentable que los fabricantes de bolsas, popotes y recipientes de plástico, unicel o aquellos elaborados con materias primas tóxicas o nocivas para el medio ambiente pueden implementar con el propósito de minimizar el impacto ambiental de sus procesos, operaciones y productos a lo largo de su vida útil.*

*Entre los Criterios y Normas de Producción Sustentable se comprenderá:*

***1****. Conservación de recursos naturales y no renovables;*

***2****. Procesos de fabricación atóxicos, y*

***3****. Los demás que la Secretaría determine para favorecer la producción sustentable de los productos compostables.*

*En todo momento se buscará que el fin de vida de las bolsas de plástico no sea mayor al de diez años.*

*En el caso de que en la producción de bolsas se utilice un aditivo que sea incompatible con el reciclaje, se procurará que estas tengan un fin de vida menor al de cinco años.*

**El Conflicto con los Fabricantes de Bolsas de Plástico y productos similares**

Entre los amparos que se han promovido desde el año 2018 contra las reformas legales que prohíben las bolsas de plástico, destacan como argumentos principales de los quejosos, los siguientes:

I.- La pérdida de miles de empleos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales de Plásticos, AC. (Anipac), se perderían 25 mil empleos.

II.- El hecho de que la mayor parte de las leyes reformadas, sean las del medio ambiente o las de residuos, establecen la sustitución por materiales compostables, pero, aluden que dichos materiales no se consiguen en México, y se deben importar, lo que dispararía los costos enormemente.

III.- La demanda de un régimen de excepción, donde se puedan utilizar bolsas de plástico para ciertos alimentos. Y;

IV.- La falta de apoyos para reconvertir sus tecnologías y líneas de producción a fin de producir bolsas y productos de otros materiales de rápida biodegradación o reutilizables.

**Normas Técnicas**

Diversas leyes en casi todos los estados de la República conllevan el deber de la expedición de normas técnicas para diversas materias. Sin embargo, en los hechos casi ninguna entidad federativa las expide, y quedan en la nada. No se conocen a ciencia cierta los motivos, ya sea indiferencia o temor e ignorancia por no saber cómo hacerlo.

En efecto, a la fecha casi ningún estado ha expedido normas técnicas en materia de bolsas de plástico; destacan las de Baja California y Jalisco.

Por simple referencia, reproducimos algunos párrafos de la NORMA TÉCNICA ECOLÓGICA NTE-001-SETUES-2018, QUE ESTABLECE LAS RESTRICCIONES DEFINITIVAS DE LA VENTA Y OBSEQUIO DE BOLSAS PLÁSTICAS, POPOTES Y CONTENEDORES DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE UN SOLO USO:

“…1.0 Objeto

La presente norma tiene los siguientes objetivos:

1.1 Señalar los residuos de los contenedores de poliestireno expandido, popotes plásticos, bolsas plásticas para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas problemáticos o innecesarios, que conforme a los artículos 77 Bis y 77 Ter de la Ley del Equilibrio ecológico y Protección Ambiental del Estado de Baja California Sur se encuentran restringidos definitivamente para venta, obsequio y facilitación de los mismos.

1.2.- Identificar y clasificar los materiales de los residuos de los productos que por sus características de reusabildiad no se encuentran restringidos por los artículos 77 Bis y 77 Ter de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental del Estado de Baja California Sur.

1.3 Identificar y clasificar los materiales compostables y los fabricados con materiales que faciliten su reciclado y tratamiento dentro de un esquema de economía circular y que sustituyen a los residuos plásticos restringidos generados por los contenedores de poliestireno expandido, popotes plásticos, bolsas plásticas para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas.

…

4.0 Términos y definiciones

Para los efectos de esta Norma Técnica se consideran las definiciones contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur y las siguientes:

4.1.- Biobasado: Producto fabricado a partir de fuentes naturales, con al menos 60% de recursos renovables, pueden ser sintetizados químicamente a partir de un material biológico o biosintetizado enteramente por un organismo viviente. Químicamente son cadenas de moléculas hechas de bloques químicos repetidos. Son biodegradables aquellos basados en polihidroxibutirato [PHB], poliáctido [PLA], almidón, y no biodegradables al estar basados en polietileno [PE], nylon 11 [NY11] o acetil celulosa (AcC).

…

4.9.- Material biodegradable: Material capaz de descomponerse en dos productos principales: dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) y subproductos en menor cantidad (menos del 1%) tales como compuestos inorgánicos de nitrógeno, hidrógeno, amoniaco, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos volátiles que en conjunto se conocen como biogás, además de agua y biomasa, a una velocidad determinada. El proceso de biodegradación es promovido por la acción de enzimas de microorganismos mediante procesos continuos de reducción y oxidación, se puede dar tanto en condiciones tanto aerobias como anaerobias. Se puede medir mediante pruebas estándar en magnitud de periodo de tiempo, el cual depende de condiciones químicas y físicas, tanto del material como del ambiente, así como de la biodiversidad de microorganismos.

4.10.- Material compostable: Aquel material susceptible de ser biodegradado en condiciones de composteo que resulta en CO2, agua y biomasa bajo un proceso específico en instalaciones industriales o municipales destinadas para tal fin.

…

4.13.- Plásticos degradables: Materiales plásticos cuyas propiedades pueden propiciar su descomposición en el ambiente como resultado de su interacción con factores químicos, físicos o biológicos. Pueden añadírseles catalizadores que propicien su descomposición para acelerar el proceso siempre y cuando los catalizadores no sean tóxicos conforme a pruebas conforme a la NOM-052-SEMARNAT-2010 establecidos en el art 5 fracción XXXII de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y las fracciones XX Bis, XXXII, del artículo 2 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur.

4.17.- Reúso o reutilización: Operación mediante la cual, un empaque diseñado para cumplir durante su ciclo de vida, un número mínimo de rotaciones, es rellenado o utilizado nuevamente para el mismo propósito para el que fue concebido, con o sin ayuda de productos auxiliares.

ANEXO NORMATIVO II.

ESPECIFICACIONES PARA LOS MATERIALES BIOBASADOS Y COMPOSTABLES

Para la sustitución de los productos citados en el punto 5.2 y 5.3.3 de la presente norma se deberán utilizar los materiales biobasados biodegradables y compostables o los fabricados con materiales que faciliten su reúso o reciclado.

1. Los materiales biobasados permitidos deberán de tener la capacidad de degradación en cualquiera de las siguientes condiciones:

1.2. Composta.

1.3. Relleno sanitario.

2. Los materiales biobasados deberán contar con al menos una certificación nacional o internacional ASTM o ISO impresa en los empaques de los productos sustitutos y el certificado que valide la acreditación de los productos…” **Fin de la cita.**

Antendiendo a los argumentos expuestos, consideramos pertinente realizar algunas adecuaciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de nuestra entidad en el apartado referente a las bolsas de plástico y demás productos similares, para hacer más claro, preciso y eficiente su contenido.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se adicionan los artículos 150 Quater y 150 Quintus a la de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**150.- QUATER. El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, establecerá programas para apoyar la transición de tecnologías a empresas productoras para la sustitución de bolsas de plástico, poliestireno expandido para fines de envoltura y popotes por elaborados de material biodegradable o con contenido de material reciclado.**

**La norma técnica que se expida para establecer las restricciones al uso de bolsas de plástico, popotes y recipientes de poliestireno expandido, deberá contener los materiales que serán utilizados como reemplazo en la producción de estos productos; los cuales deberán ser de costos accesibles para los productores**

**150.- QUINTUS. Además de las atribuciones que esta ley les confiere para regular y prohibir el uso de bolsas de plástico, los municipios tendrán las siguientes:**

**I.- Verificar que en los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, no se utilicen bolsas de material plástico o materiales para empacado y transportación de productos y alimentos que no cumplan las condiciones establecidas en esta ley, y en su caso en la norma técnica que a tal efecto expida el Estado.**

**II.- Verificar que en fábricas y centros de distribución no se vendan, almacenen y distribuyan bolsas de material plástico o materiales para empacado y transportación de productos y alimentos que no cumplan las condiciones establecidas en este ordenamiento y en la norma técnica correspondiente.**

**III.- Aplicar las sanciones económicas y administrativas para infractores a las disposiciones de sustitución de los productos a los que se hacen referencia en las fracciones anteriores;**

**III.- Elaborar programas de concientización sobre el uso responsable de los plásticos de un solo uso dirigidos a las unidades económicas en su ámbito de competencia, así como los beneficios de la reducción en el consumo, la sustitución y la correcta disposición;**

**IV.- Coadyuvar con las empresas dedicadas la fabricación de bolsas de plástico o popotes biodegradables o con contenido de material reciclado para facilitar el abasto de estos a unidades económicas y población en general;**

**V.- Vigilar el cumplimiento de la transición de bolsas de plástico y popotes no biodegradables, por biodegradables o con contenido de material reciclado;**

**VI.-. Establecer en sus disposiciones reglamentarias que las actividades de venta y comercialización de bolsas de plástico para acarreo y popotes deberán sujetarse a los materiales establecidos en la norma técnica ambiental estatal de la materia; y**

**VII.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia ambiental.**

**…**

**TRANSITORIOS**

**Único.** - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Saltillo, Coahuila a 23 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA COMBATIR EL RUIDO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL OBJETO DE REFORZAR LAS ATRIBUCIONES Y SANCIONES QUE APLICAN LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN DE RUIDO, POR PERSONAS FÍSICAS EN CASA HABITACIÓN O PROPIEDAD PRIVADA SIN GIRO COMERCIAL.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga el artículo 59 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a este Honorable Pleno del Congreso, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 7, la fracción II del artículo 8, la fracción VIII del artículo 10, la fracción III del artículo 11, el inciso D) del artículo 19, la fracción VII del artículo 22 y se adicionan dos párrafos y las fracciones VIII, IX y X del artículo 9, un párrafo al inicio y final del artículo 18, y las fracciones X y XI al artículo 20, todos de la Ley para para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

Uno de los problemas ambientales que se presentan con mayor frecuencia en una sociedad moderna, es la contaminación acústica o sonora, debido precisamente al desarrollo e incremento de las actividades de la industria y del comercio.

Otras fuentes que producen ruido y que forman parte de la vida cotidiana de las personas, son los medios de transporte, las construcciones, las vías de comunicación, así como las actividades de esparcimiento, en las que el exceso de sonido altera las condiciones normales del ambiente en una zona determinada.

Según sea la intensidad, frecuencia y tiempo de exposición al ruido, causará diversas afectaciones a todo ser vivo. Dentro de las repercusiones que ocasiona al ser humano estar expuesto al ruido intenso de forma continua, se encuentra el malestar en los oídos, que puede desencadenar una disminución en la capacidad auditiva o en un problema más severo como la hipoacusia o sordera, además de ocasionar daños en su calidad de vida como en la perturbación del sueño y rendimiento cognitivo en adultos mayores y niños.

Dentro de las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el derecho a vivir en un ambiente sano para su desarrollo. El artículo 4° artículo establece que*: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.*

En cuanto al tema del ruido, encontramos en la legislación federal la prohibición de las emisiones de ruidos cuando rebasen los límites que establecen las normas oficiales mexicanas, señala el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente lo siguiente:

*“Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes.*

*En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.*

Es la norma oficial mexicana NOM- 081-SEMARNAT-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1995, la que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

Aun con esta regulación explícita, nuestro país sigue presentando graves problemas generados por la contaminación acústica, así lo ha señalado un estudio realizado por la Organización para la Cooperativa y Desarrollo Económicos (OCDE), que coloca a México entre los países expuestos a un nivel sonoro superior a 65 decibeles.

Es por ello, que resulta necesario seguir impulsando acciones en materia legislativa que contribuyan a frenar los efectos negativos que ocasiona la contaminación acústica. Debemos atender y observar diversos hechos cotidianos y algunas veces aislados que se encuentran ocurriendo en los sectores de casa habitación o locales particulares sin giro comercial, como comúnmente los denominamos “vecinos ruidosos”.

Preocupados por el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, se cuenta con una Ley estatal de la materia, la cual tiene como objeto *Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, definiendo los principios y criterios de la política ambiental en el Estado, a través de acciones de conservación ecológica, protección al ambiente. Estableciendo competencias estatales y municipales mediante políticas públicas a través de normas e instrumentos para su aplicación.*

Además con el objeto de regular y sancionar la contaminación por emisión de ruidos producidos por fuentes fijas y móviles de competencia estatal y municipal se creó la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila, objeto de este proyecto de iniciativa de reforma.

Por lo que se refiere a las atribuciones de las autoridades, proponemos armonizar el contenido de la fracción XI del artículo 7, en cual se establecía a la Procuraduría de Protección al Ambiente quien entre otras funciones era el imponer sanciones y medidas de seguridad correspondiente a las infracciones de la ley en comento, sin embargo, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado, en cuanto a las atribuciones, faculta en su numeral 10 fracción II a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del Estado, *a imponer las sanciones que procedan por la comisión de infracciones, conforme a las disposiciones aplicables*.

Así mismo proponemos reformar el artículo 8 fracción II de la Ley para Combatir el Ruido, referente a lo establecido en el numeral 11, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el Estado, en la cual se definen las atribuciones de los ayuntamientos, en su fracción XV que a la letra dice: “… *el sancionar en el ámbito de su competencia, la realización de actividades ruidosas, así como las emisiones provenientes de aparatos de sonido instalados en casa habitación, en establecimientos públicos o privados, o en unidades móviles, que rebasen los límites permitidos por las normas mexicanas.* …” Lo anterior con el objeto de que quede debidamente establecido dentro de las atribuciones tanto de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano como de los municipios el intervenir y sancionar en el ámbito de su competencia y con ello garantizar la atención y combate en materia de ruido.

Por lo que se refiere a los Criterios Generales para Medir la Contaminación por Ruido, establecido en la ley materia de esta iniciativa, proponemos adicionar en el artículo 9, separar los Criterios de las autoridades estatales y municipales para realizar estudios de impacto ambiental, conceder licencias y certificaciones, definiéndolos en los numerales ya establecidos y adicionado al final de las mismas, la separación de criterios de las autoridades estatales y municipales para atender quejas o denuncias por contaminación de ruido de personas físicas, adicionando el contenido de las fracciones VIII, IX y X, en la cual definimos la infracción cometida en particular en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial al momento de que la autoridad municipal reciba una queja o denuncia de forma anónima, por escrito o de manera telefónica.

Adicionando la queja de manera telefónica por el hecho de que actualmente el Municipio de Saltillo, atiende mediante la policía ambiental las llamadas de los particulares los cuales manifiestan la problemática de ruido excesivo ya sea fijo u o ocasional sobre todo los fines de semana, y los cuales exceden el limite de decibeles permitido y con ello perjudican la tranquilidad de su desarrollo y bienestar dentro de su propio hogar e inclusive perjudicando quizás su propia salud física o emocional.

Es por ello que proponemos definir un mecanismo el cual consiste en que una vez recibida la queja o denuncia, la autoridad municipal acudirá al domicilio señalado por los particulares agraviados, entregando una amonestación por escrito al particular, la cual ya se encontraba regulada dentro de las infracciones y sanciones en el artículo 19 de esta Ley, de no cesar el ruido en un plazo de 30 minutos después de haber sido entregada la amonestación por escrito por parte de la autoridad municipal y una vez que sea reportado nuevamente mediante queja o denuncia antes definidas, la autoridad municipal regresara al domicilio amonestado entregando un citatorio para que acuda en día y hora especifico ante el juez calificador quien le determinará el monto de la multa a que se ha hecho acreedor, la cual también ya se encontraba establecida dentro de la fracción VIII del artículo 22 de esta misma ley para combatir el ruido, cuando la autoridad municipal encuentre en flagrancia al particular en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial el ruido excesivo, aplicará la multa correspondiente, así mismo establecimos en caso de reincidencia y una vez que ya se cubrió la amonestación y la multa correspondiente y se continúa con la emisión de ruido excesivo, podrán hacerse acreedores de un arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual también ya se encontraba establecido en el artículo 19 inciso D de la propia Ley para Combatir el Ruido en el Estado.

En cuanto a las Obligaciones de Personas Físicas y Morales, Reparación de Daños y Prohibiciones en Materia de Ruido, y referente a las obligaciones de las personas físicas y morales que residen en Coahuila, proponemos reformar el artículo 10, en su fracción VIII, en cuanto la utilización de los equipos de audio, juegos, maquinas o aparatos dentro de la casa-habitación adicionando dentro de la propiedad privada sin giro comercial, con el fin de que también se observe esta obligación en este tipo de propiedades que comúnmente un particular puede tener dentro de una zona habitacional y no tiene giro de negocio o comercio, pero se puede utilizar como una área de recreación particular y afecte y contamine mediante ruido excesivo perjudicando al resto de la población. Así mismo en el numeral 11 fracción III en cuanto a lo que se considerarán como responsables de las fuentes generadoras de ruido se propone adicionar la propiedad privada sin giro comercial.

Lo referente al capitulo de Denuncia y Garantía de Seguimiento a la Queja por Ruido, proponemos adicionar un párrafo al inicio de las fracciones separando el procedimiento de seguimiento de las personas físicas y morales, adicionando un último párrafo únicamente de las personas físicas, en la cual establecimos un registro de las quejas o denuncias atendidas referente a la contaminación de ruido excesivo por personas físicas que se cometan en casa - habitación o propiedad privada sin giro comercial y que cuenten con amonestación por escrito y multa, lo anterior para detectar las reincidencias y así contar con la evidencia y registro debido y en su caso proceder al arresto administrativo el cual ya era contemplado en dicha legislación.

En cuanto al capítulo de infracciones y sanciones, proponemos reformar el inciso D, del artículo 19, señalando el arresto como ya se encontraba definido solo adicionado que será administrativo y una vez que haya sido amonestado y sancionado por la autoridad, con el objetivo de que el arresto administrativo hasta por 36 horas, sea la última infracción y sanción por la reincidencia y omisión de ruido excesivo en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial que cometa un particular en contra de otro.

En cuanto a las infracciones establecidas en numeral 20, proponemos adicionar las fracciones X y XI, con el objetivo de adicionar cuando no cesa el ruido en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial, en un plazo de 30 minutos después de que se había llevado a cabo la amonestación por escrito, mediante denuncia o queja de particulares, así mismo proponemos definir que la sanción de infracción por ruido excesivo no podrá exceder en ningún momento las 500 unidades de medida y actualización.

Y por último, proponemos reformar la fracción VII del artículo 22, en la cual se establece la multa de 150 hasta 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización adicionando las fracciones IX y X del artículo 20, con el fin de armonizar la reforma antes propuesta en el cual se adicionó sancionar el no cesar el ruido en un plazo de 30 minutos una vez que ya fue amonestado por escrito y complementarlo con la sanción ya existente en la fracción IX cuando se trata de engañar a la autoridad bajando el nivel de ruido durante las visitas de inspección, para subirle posteriormente.

Con este proyecto de iniciativa, queremos darle verdadera importancia al ruido excesivo ocasionada en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial, como un agente contaminante de primera importancia, actividad que degrada nuestra calidad de vida al incidir negativamente sobre numerosas actividades cotidianas, como puede ser la perturbación en el trabajo o estudio, el descanso nocturno o el descanso en cualquier momento después de una jornada laboral intensa de por lo menos 8 horas, cuando se produce un factor inductivo de tensión en nuestra salud, las personas afectadas por el ruido excesivo pueden presentar intranquilidad, inquietud, depresión, ansiedad o rabia, se presentan cambios de conducta, especialmente comportamientos antisociales tales como hostilidad producido por los niveles de exceso de ruido, cometidos entre particulares.

Como lo citamos con anterioridad todo ser humano tiene derecho a un medio ambiente sano, el daño o deterioro ambiental deberá de ser responsabilidad de quien lo emita, por lo que es importante definir y establecer legalmente las facultades de las autoridades que serán los agentes estatales y municipales que están facultados para sancionar, así como las obligaciones de las personas físicas y morales como agentes generadores de ruido, y sobre todo definir claramente los deberes y sanciones a que se hacen acreedores los particulares que emitan ruido excesivos en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial, afectando la convivencia y sana vecindad que debe predominar en un sector habitacional donde convives y convivirás toda o casi toda tu vida y a la cual tenemos derecho por el solo hecho de respetar y ser respetados en un área común de convivencia.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se reforma la fracción XI del artículo 7, la fracción II del artículo 8, la fracción VIII del artículo 10, la fracción III del artículo 11, el inciso D) del artículo 19, la fracción VII del artículo 22 y se adiciona dos párrafos y las fracciones VIII, IX y X del artículo 9, un párrafo al inicio y final del artículo 18, y las fracciones X y XI al artículo 20, todos de la Ley para para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 7.-** Son atribuciones de la Secretaría:

**I.- a la X.- …**

**XI.-** Verificar el cumplimiento de los instrumentos y disposiciones jurídicas en materia de ruido, inspeccionar y vigilar las fuentes generadoras de ruido, así como imponer las sanciones y medidas de seguridad correspondientes a las infracciones a esta Ley.

**XII.- …**

**ARTÍCULO 8.-** Son atribuciones de los municipios:

**I.- …**

**II.-** Combatir **y sancionar** de modo prioritario la contaminación por ruido generada por casas-habitación, talleres de todo tipo de giro, centros comerciales, salones de fiesta, salones de lotería u otros juegos similares, discotecas o centros similares, antros, clubes privados o públicos, ferias, encuentros deportivos, bailes populares; y en general la contaminación sonora producida por cualquier tipo de fuente similar a las ya señaladas.

**III.- a la XI.- …**

**ARTÍCULO 9.- … :**

**Criterios de las autoridades estatales y municipales para realizar estudios de impacto ambiental, conceder licencias y certificación:**

I.- a la VII.- …

**Criterios de las autoridades estatales y municipales para atender queja o denuncia por contaminación de ruido de personas físicas;**

**VIII.- Cuando la infracción se cometa en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial y se reciba queja o denuncia de forma anónima, por escrito o de manera telefónica por particulares, la autoridad municipal deberá acudir al domicilio y entregará una amonestación por escrito.**

**De no cesar el ruido en un plazo de 30 minutos y en caso de que sea nuevamente reportado mediante queja o denuncia, se citará para que acuda en día y hora específica con un juez calificador para que determine la naturaleza y monto de la multa correspondientes, establecida en la fracción VIII del artículo 22 de esta ley, por la omisión de la amonestación por escrito de contaminación por ruido que se haya emitido al particular.**

**Una vez que la autoridad municipal, haya llevado a cabo una amonestación por escrito, así como la multa respectiva a que se hizo acreedor el particular por la omisión de la amonestación y en caso de reincidencia, la autoridad municipal podrá imponer arresto administrativo hasta por 36 horas.**

**IX.- La flagrancia será sancionada de inmediato con la multa correspondiente.**

**X.- Las personas físicas y morales podrán denunciar ante la Secretaría y los gobiernos municipales, según corresponda, todo hecho violatorio del presente artículo.**

**ARTÍCULO 10.- … :**

I.- a la VII.- …

**VIII.-** Utilizar los equipos de audio, video, juegos, máquinas o aparatos dentro de las casas-habitación **o propiedad privada sin giro comercial** a un volumen o intensidad que no sobrepase los niveles establecidos en las normas para la emisión de ruidos y por ende no afecten la salud auditiva de los demás colindantes.

IX.- a la XII.- …

**ARTÍCULO 11.- … :**

I.- a la II.- …

**III.-** Los propietarios, arrendatarios o poseedores bajo cualquier tipo de posesión de las casas-habitación **o propiedad privada sin giro comercial**

IV.- … .

… .

**ARTÍCULO 18.- … :**

**De las personas físicas y morales:**

A) a la B) …

… .

… .

… :

1. **a la d) . …**

… .

**De las personas Físicas:**

**Las autoridades llevarán un registro de las quejas o denuncias atendidas de contaminación de ruido excesivo por personas físicas, cuando la infracción se cometa en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial y en las cuales se haya amonestado por escrito y mediante multa a un particular, lo anterior para detectar la reincidencia y llevar a cabo el arresto administrativo en caso de que corresponda.**

**ARTÍCULO 19.- … :**

A) a la C) … .

**D)** Arresto **administrativo** hasta por 36 horas para los reincidentes o para quienes se opongan a las visitas de verificación de las autoridades competentes y para quienes se nieguen a cesar sus emisiones de ruido una vez que hayan sido **amonestado y sancionado** por la autoridad.

E) a la G) … .

**ARTÍCULO 20.-** Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

**I.-** a la IX … .

**X.- No cesar el ruido en casa habitación o propiedad privada sin giro comercial, en un plazo de 30 minutos después de haber sido amonestado por escrito por la autoridad municipal.**

**XI.- La sanción de infracción por generación de ruido excesivo no podrá exceder, en ningún caso, de quinientas unidades de medida y actualización.**

… .

**ARTÍCULO 22.-** Las sanciones económicas se aplicarán de conformidad a lo siguiente:

I.- a la VI.- …

**VII.-** Multa de 150 hasta 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, por la infracción plasmada en **las fracciones IX y X** del artículo 20.

… .

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020.**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR LA QUE SE ADICIONA UNA PORCIÓN NORMATIVA AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE UN MÉDICO CON EXPERIENCIA PRESIDA LOS COMITÉS DE SALUD DE LA ENTIDAD, Y**

**CONSIDERANDO**

Que en el numeral 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que *“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y lo servicios sociales necesarios…”*.

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipula en su artículo 12 que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a la salud, siendo la ley la que definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Que en nuestra entidad, no solo se garantiza el derecho a la salud de las y los coahuilenses, sino también se fomenta la participación de la comunidad por medio de los “Comités de Salud”, que son grupos de población urbana, rural o indígena que tienen como objeto generar la participación ciudadana para el mejoramiento y vigilancia de los servicios de salud de sus localidades, siendo los ayuntamientos quienes tendrán la responsabilidad de formar y organizar dichos comités.

Que estos grupos al ser conformados por la ciudadanía en general, debe existir la participación de un médico que los presida, pues estos serán parte fundamental para concientizar sobre la importancia de preservar la salud de la comunidad.

Que por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Las disposiciones establecidas en las normas internacionales y nacionales son claras, la salud es un bien jurídico que debe garantizarse por parte del Estado y este debe generar políticas públicas idóneas que involucren a la ciudadanía en este tema trascendental.

Ante esto, observamos que el artículo 52 de la Ley Estatal de Salud establece textualmente que

*“La Secretaría de Salud del Estado, y demás instituciones de salud estatales, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades, accidentes, discapacidad y de rehabilitación de personas con discapacidad.”*

Esta disposición da pie a que las distintas agrupaciones de la sociedad civil se involucren a fin de generar condiciones idóneas para que los habitantes del Estado sientan un compromiso social sobre el cuidado de la salud.

Así mismo, el artículo 53 de la ley en comento, establece que

*“…en los centros de población, se constituirán comités de salud que podrán ser integrados por núcleos de población urbana, rural o indígena los cuales tendrán como objetivo la participación en el mejoramiento y vigilancia de los servicios de salud de sus localidades y promover mejores condiciones ambientales que favorezcan la salud de la población, así como la organización de la comunidad para obtener su colaboración en la construcción de obras e infraestructura básica y social y mantenimiento de unidades.”*

Observamos que en dicho párrafo se garantiza la participación de la ciudadanía en general, sin embargo, no se encuentra un médico que forme parte del comité, ya que este sería un aliado que despertaría la conciencia sobre el tema de salud en la comunidad.

Cabe resaltar que un médico es un experto que practica la medicina y que intenta mantener y recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico, y el tratamiento de la enfermedad o lesión del paciente. Es, además, un profesional altamente calificado en materia sanitaria y precisa de formación constante a lo largo de su vida laboral.

Es por demás importante el tema de la salud en nuestra entidad, por esa razón, estos grupos liderados por un médico se convertirían en un apoyo para la Secretaría de Salud Estatal, ya que los Comités de Salud generarían conciencia social en el tema de salud y apoyarían para prevenir enfermedades a las y los coahuilenses. Cabe añadir que se llevó a cabo una consulta sobre la participación de los médicos a estos Comités de Salud, y el resultado fue que 36 de los 37 profesionales de la salud estuvieron de acuerdo en participar en estas.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos comprometidos con la ciudadanía en materia de salud, por esa razón, buscamos que por medio de la norma se involucre a la comunidad y a los médicos de la entidad, a fin de generar conciencia sobre el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades en nuestro Estado.

**Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la fracción IV del artículo 21 y la fracción I del artículo 152 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 135 y 136 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, sometemos ante esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de**

**DECRETO**

**ÚNICO. - SE AGREGA UNA PORCIÓN NORMATIVA AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**…**

**Artículo 53.** Para los efectos del artículo anterior, en los centros de población, se constituirán comités de salud ***que serán presididos por personas que ejerzan la profesión de médico con experiencia acreditada de mínimo 5 años e*** integrados por núcleos de población urbana, rural o indígena los cuales tendrán como objetivo la participación en el mejoramiento y vigilancia de los servicios de salud de sus localidades y promover mejores condiciones ambientales que favorezcan la salud de la población, así como la organización de la comunidad para obtener su colaboración en la construcción de obras e infraestructura básica y social y mantenimiento de unidades.

…

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. –**  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

***ATENTAMENTE***

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, RECORRIÉNDOSE LAS ULTERIORES, DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR LA PROMOCIÓN DIGITAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jesús Andrés Loya Cardona conjuntamente con los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente Iniciativa mediante la cual se adiciona la fracción V del artículo 39 de la Ley de Turismo del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de impulsar la promoción digital de los servicios turísticos, misma que se presenta bajo la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Con una inigualable riqueza natural, cultural, gastronómica e histórica, Coahuila ofrece una gran cantidad de experiencias para el turismo en todas sus variantes. Desde el turismo tradicional de esparcimiento, el turismo de negocios enfocado en trabajadores que asisten a juntas, conferencias o reuniones; el turismo de naturaleza, de salud, cultural, de aventura y deportivo o gastronómico, cada una de sus regiones tiene alto potencial para atraer a turistas locales, nacionales e internacionales.

Recorriéndo su extenso territorio, encontramos importantes museos y una gran belleza arquitectónica e histórica en sus construcciones y edificios. Destacan nuestros viñedos, grandes zonas industriales y extensos sitios históricos y paleontológicos. Un inigualable contraste entre desierto, hermosas ciénegas, lagunas, montañas y bosques.

Actualmente Coahuila ocupa el 16º lugar nacional con mayor turismo internacional con más de 510 mil visitantes, y el 23º lugar en turismo nacional con más de 3.6 millones de visitas.[[21]](#footnote-21) Somos el Estado con más pueblos mágicos del norte del país, que resaltan la belleza de la naturaleza y la historia que se reúne en nuestro territorio. Arteaga, Parras de la Fuente, Cuatrociénegas, Candela, Viesca, Múzquiz y Guerrero asombran con sus paisajes y su fuerte componente histórico cimentado en sus tradiciones.

Durante la actual gestión del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se ha impulsado arduamente el valor turístico y la competitividad de nuestro Estado. La titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos, se ha dado a la tarea de dar una mayor promoción y proyección de los destinos a nivel nacional e internacional. Ejemplo de ello es la plataforma *“Haz Turismo en Coahuila”*, que tiene como objetivo promover y difundir los atractivos, actividades, festividades, tours, hoteles y restaurantes de 13 municipios de Coahuila, considerados como los de mayor vocación turística, incluyendo a los siete Pueblos Mágicos, a las ciudades cabeceras de región, la frontera norte y un Pueblo con Historia. Además, debemos resaltar la creación y fortalecimiento de las marcas características de nuestra entidad: el tesoro paleontológico plasmado en la marca *“Coahuila, tierra de dinosaurios”*, y la marca *“Vinos de Coahuila”*, que ha potencializado el producto elaborado en nuestra entidad, mismas que atinadamente se han conjugado en la ruta turística *“Vinos & Dinos de Coahuila”*.

Las estrategias implementadas han logrado que cada vez más personas visiten nuestro Estado para conocer sus raíces históricas y patrimonio cultural, disfrutar de la gastronomía y maravillarse con las atracciones naturales de nuestra tierra.

De 2015 a 2018, la llegada de turistas a establecimientos de hospedaje se ha incrementado en un 11 por ciento, pasando de 1,677,604 a 1,871,752. De acuerdo sistema DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en el año 2018 Coahuila tenía 505 establecimientos de hospedaje registrados y 14,928 cuartos y unidades de hospedaje, entre hoteles, moteles, cabañas, villas y similares, campamentos y albergues recreativos, pensiones y casas de hospedaje, así como departamentos y casas amuebladas con servicio de hotelería.[[22]](#footnote-22)

Es innegable que el uso de las tecnologías de la información y comunicación han puesto al servicio los prestadores de servicios, herramientas fundamentales para promocionar sus productos y servicios, cambiando la forma en que viajamos. Ahora los usuarios tienen en la palma de su mano y a la distancia de un click, información tales como precio, atractivos turísticos, rutas de acceso, servicios análogos, entre muchos otros, que los lleva a tomar decisiones más informadas respecto a qué destino elegir y lo que realizan estándo allí.

El internet y los medios digitales se han convertido en una de las herramientas esenciales a la hora de viajar, haciéndo de nuestro guía turístico, agencia de viajes, localizador de los mejores restaurantes, mapa, etc. Nos acompaña durante todas las etapas del proceso de compra. De hecho, según TripAdvisor, un 45 por ciento de los usuarios emplean su Smartphone para todo lo relacionado con sus vacaciones.[[23]](#footnote-23)

Es por ello que surge la necesidad de adaptar la comunicación y servicios de la industria turística a esta nueva modalidad. Ese es el objetivo de la presente iniciativa: vincular a los prestadores de servicios turísticos con el uso de nuevas tecnologías a través del posicionamiento y actualización permanente de sus páginas web que les permita difundir su oferta turística, de forma tal que el usuario cuente con información precisa respecto de los servicios ofrecidos, costos y restricciones.

Este es un momento clave para priorizar al sector turístico y establecer mecanismos eficientes que coadyuven a reactivar la economía. Hoy más que nunca los usuarios hacemos uso constante de las herramientas digitales para concertar nuestras actividades y realizar cualquier compra. El fortalecer las estrategias digitales nos permitirá no sólo acercarnos más al público objetivo, sino a su vez incentivar los atractivos turísticos del Estado.

En ese sentido, con el objeto de fortalecer la competitividad de las empresas y servicios turísticos, es que se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se **adiciona** la fracción V, recorriéndose las ulteriores, del artículo 39 de la Ley de Turismo para el Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 39.** …

1. **a IV.** …

**V.** **Mantener actualizadas sus páginas electrónicas, en caso de disponer de una, con la finalidad de que contengan de manera detallada su ubicación, los servicios, costos, restricciones y demás aspectos que sean de interés para el turista;**

**VI a XVII.** …

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE.**

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.**

El que suscribe, **Juan Carlos Guerra López Negrete,** Diputado de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionalen ejercicio de la facultad legislativa que concede el artículo 59 fracción I, 65 y 67 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I, 159 y 160 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, someto a consideración del pleno de ésta Honorable Representación iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el inciso e) del artículo 10 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Los derechos políticos se encuentran catalogados como derechos fundamentales porque expresan el derecho del hombre a la sociedad justa, pacífica y suficiente, necesariamente vinculada con la participación democrática de la población y con la legitimidad de origen y ejercicio de la autoridad política.

De esta forma, a la naturaleza de la autoridad, que es derecho de mandar para el bien común, corresponde la auténtica soberanía del pueblo que, en relación con el gobierno, se expresa en el derecho de elegir, controlar y sustituir legalmente a los gobernantes. (Efraín González Morfín, 2003)

Y aquí está el quid, ¿cuáles son las condiciones para que esta soberanía del pueblo se exprese en el derecho de elegir, controlar y sustituir legalmente a los gobernantes?, ¿Quiénes tienen ese derecho? Bueno, hay que recordar que, en cuanto a la soberanía del Estado, en un Estado constitucional, que lo es de Derecho, se entiende que el ejercicio del poder se encuentra limitado por las leyes, estamos como se había dicho, en un gobierno de leyes y no de personas, a eso se llegó después del Estado absolutista, degenerado, enfermo, donde gobernaban las personas y no las leyes. Por eso es importante comprender el momento de la condensación de lo político a lo jurídico, del poder constituyente al poder constituido, donde el soberano, que es el pueblo, se autolimita a través de la Constitución y la ejerce dentro de sus límites. Y ese es el papel fundamental de una constitución, la de garantizar jurídicamente la soberanía popular para autodeterminarse, regulando el poder, estableciendo reglas para su ejercicio, de tal suerte la voluntad popular no sea suplantada, que no degenere, que no se enferme.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer, como diría Norberto Bobbio, *“reglas claras del juego”*, y es que como aseguraba Bobbio, la única manera de entender la democracia, es considerarla caracterizada por un *“conjunto de reglas que establezcan quien está autorizado para tomar decisiones y bajo qué procedimientos*”. Solo con base en estas reglas, una decisión tomada por individuos (uno, pocos, muchos, todos) podrá ser aceptada como una decisión colectiva. En este juego, ***participa todo aquel que cumpla ciertos requisitos*** (énfasis añadido), que lo lleven a ser parte del cuerpo soberano.

Así, históricamente, la ciudadanía ha tenido que satisfacer ciertos requisitos para poder ser parte del cuerpo estatal, de otra forma, fuera de este no podrían sobrevivir, y es que el hombre requiere de la sociedad por la mera necesidad de supervivencia. De esta forma, la humanidad evolucionó a través de la historia y fue dando vida al cuerpo del Estado en diferentes formas y mutaciones hasta llegar al Estado Constitucional de Derecho del que hoy somos parte.

Como podemos ver, hoy en día la voluntad general, en el caso particular de la legislación electoral, muchas veces es producto de la desconfianza de las mismas personas que construyen la voluntad general, es decir, de los mismos seres que habitan dentro del cuerpo y le dan vida.

Entonces, nuestra legislación, la legislación del miedo, no solo contiene elementos que protegen al cuerpo de elementos externos, sino de los mismos entes que habitan dentro del cuerpo. Así, muchas legislaciones, que expresan la voluntad general, son redactadas de forma tal que protegen la salud del cuerpo no solo contra amenazas externas sino contra las mismas amenazas que pueden surgir al interior del cuerpo, derivado precisamente, de la naturaleza humana de quienes lo forman.

Al interior de un cuerpo, cuando una célula muta y se convierte en una amenaza para el sistema, se activa el sistema inmunológico el cual busca destruir esta célula para que deje de dañar la salud del cuerpo. En la legislación electoral, dada la condición humana es que, en el devenir de la historia, al momento de construir esta voluntad general es cuando ocurren desviaciones que activan los mecanismos de corrección del cuerpo, su sistema inmunológico, y éste es, el poder judicial, el cual, busca activar los sistemas de defensa del cuerpo para preservar su buen funcionamiento.

De esta forma, ***existen ciertos requisitos para poder ser parte de la construcción de la voluntad general*** (énfasis añadido), donde si bien varían en cuanto a especie, el género gravita en la premisa de que *“quien respeta el pacto permite conformarlo”* o a contrario sensu, quien viola la ley no tiene derecho a conformarla, o como suele decirse, los quebrantadores del pacto (lawbreakers) no deben ser los legisladores (lawmakers).

Así, cada Estado, tiene su forma particular de actuar cuando consideran que un ciudadano ha roto el pacto. Es como cada sistema inmunológico, cada uno es diferente y cada uno actúa dependiendo de la fortaleza o debilidad de éste actúa de distinta manera cuando detectan un agente externo o interno. Cada cuerpo es distinto.

La presente iniciativa busca abordar esta legislación del miedo, que si bien justificada, en el devenir de los precedentes ha mostrado y hecho evidente un exceso de desconfianza, toda vez que se han establecido requisitos que sobreprotegen principios que ya se encuentran asegurados en la propia legislación, tal es el caso de la equidad en la contienda y la imparcialidad, regulados entre otros, en el inciso e) del párrafo 1. del artículo 10 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece el requisito de temporalidad de separación del cargo, el cual busca precisamente, proteger un valor esencial, que es la equidad en la contienda, al impedir que el o la funcionaria pública, que aspiren a ser postulados a un cargo de elección popular, no vulneren los principios de imparcialidad en la disposición de recursos públicos y, con ello atenten contra la neutralidad en la contienda.

Si bien la norma busca evitar que alguna candidatura obtenga ventaja en relación con otra u otras, aprovechándose de su posición de servidor público, esta resulta excesiva al limitar el derecho político de ser votado, estableciendo quince días como requisito para separarse del cargo público que se encuentre desempeñando, antes del inicio de las precampañas, lo cual pretende, garantizar que quienes participen en un proceso democrático de selección interna de un partido político para ser postulados, compitan en condiciones de igualdad, sin que se vean afectados por la difusión o proyección un servidor público que por igual busca su postulación.

Sin embargo, es de considerarse que establecer quince días para separarse del encargo en la fase previa a las precampañas restringe, de manera desproporcionada e injustificada el derecho fundamental a ser votada, consagrado en los artículos 35, fracción II, de la Constitución Federal y 23, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos52, en relación con el 1° de nuestra Carta Fundamental.

Por ello, la presente iniciativa busca establecer que el servidor o servidora pública se separe del cargo antes de iniciar la etapa de precampañas, lo que aseguraría una contienda equitativa al interior de cada instituto político, sin extenderlo a quince días previos al inicio de la contienda lo cual resulta innecesario y desproporcionado. Por ello, con este ajuste en la temporalidad de separación del cargo, tanto la equidad y la imparcialidad en la contienda como el derecho fundamental a ser votado quedan asegurados.

En virtud de lo anterior, es que se somete a consideración de este Honorable Congreso del Estado, para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa con proyecto de:

**DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se reforma el inciso e) del artículo 10 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 10.-** …

**a) a d) …**

e) No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Fiscal General del Estado, Magistrado del Poder Judicial, Presidente Municipal, Síndico o Regidor, Legislador federal o local, Consejero o integrante del órgano de dirección de los organismos públicos autónomos, titulares de los organismos descentralizados, **salvo que se separen de su encargo antes del inicio de la precampaña que corresponda.** Los Diputados del Congreso del Estado, no requerirán separarse de sus funciones cuando busquen la reelección del cargo; así mismo los síndicos y regidores tampoco requerirán separarse de sus funciones a menos de que contiendan al cargo de Presidente Municipal, para lo cual deberán pedir licencia en los términos de la presente fracción;

f) …

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ATENTAMENTE,**

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**POR EL GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |
| DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ | DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA |

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAIME BUENO ZERTUCHE, CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito Diputado Jaime Bueno Zertuche, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que nos otorga la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 21 fracción IV, 152 fracción I y 167 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos someter a este H. Pleno del Congreso, la presente iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual se presenta bajo la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

Los retos que se han presentado en los últimos meses no son precisamente algo nuevo, la realidad del mundo entero apunta desde hace tiempo a la modernización del andamiaje jurídico y el sistema de impartición de justicia, lo cual, derivado de la Pandemia actual, se ha acentuado y se han encontrado mecanismos alternativos para cumplir con las tareas propias de la impartición de justicia y, en general, de toda la función pública.

Lo anterior ha permeado a todo el sistema jurídico y de impartición de justicia en México: “*Considerando esta realidad, en las últimas semanas surgió la conversación de ampliar el uso de la tecnología con el objetivo de implementar juicios en línea, como una medida contingente”[[24]](#footnote-24)*, esto también se ha reproducido al interior de las entidades federativas.

En ese sentido, el derecho electoral forma parte integral de la democracia de un país, puesto que es a través de esta herramienta que se definen las bases para la consecución de la sociedad democrática y la resolución de conflictos que del ejercicio del derecho a la participación política y democrática derivan, “*Ante esta exigencia, coincidimos en la necesidad de implementar una plataforma en línea diseñada para la presentación de demandas de todos los medios de impugnación del sistema electoral, que tenga como fin maximizar el derecho de acceso a la justicia en el contexto de las medidas de prevención y distanciamiento emitidas por las autoridades sanitarias durante la pandemia por COVID-19”.[[25]](#footnote-25)*

Asimismo la dinámica del Derecho Electoral obliga a buscar la constante actualización en la impartición de justicia, incorporando mejores prácticas y las herramientas digitales que propicien un sistema más asequible para las personas justiciables; así, la posibilidad de tramitar los medios de impugnación a través de un sistema digital es acorde con la propia Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza y permite garantizar el acceso a la justicia de manera más efectiva y pronta, permitiendo que, desde cualquier lugar, pueda acudirse a obtener justicia en materia electoral.

En este orden de ideas, de manera pionera en México, se propone seguir el ejemplo de algunos países del mundo como China y Estonia en el uso de Inteligencia Artificial para mejorar la impartición de justicia, otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica y Australia también son ejemplo de cómo el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación permite potenciar el servicio que ofrecen los Tribunales.

Con el objetivo de consolidar el Sistema de Justicia Electoral en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se presentan diversas propuestas de modificación a la normativa local, tales reformas se estructuran en dos grandes ejes: el primero de ellos es el concerniente al uso de las herramientas digitales para la mejora de la impartición de justicia; el segundo es el relativo a la armonización normativa que resulta necesaria derivada de diversas resoluciones, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se incluyen también aquellas normas que deben ser ajustadas debido a reformas a diversos ordenamientos de carácter general.

Es importante destacar que la presente iniciativa se elaboró con la estrecha colaboración y apoyo, así como con las aportaciones del Tribunal Electoral del Estado, cuyo trabajo en conjunto permite, ahora, plantear las reformas que a continuación se describen, las cuales tienen el objetivo de modernizar la forma en la que se imparte justicia, acelerar los tiempos de respuesta y velar en todo momento por la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía a través de juicio en línea, modificaciones relacionadas con perspectiva de género y las derivadas de las reformas de paridad y violencia política de género; así como en relación a la función jurisdiccional.

**I. Justicia Digital**

* 1. **Juicio en línea**

La reforma implica dotar de facultades legales al Tribunal Electoral para que éste reglamente el Sistema de Justicia Digital Electoral, con ello, se sigue el modelo que han utilizado la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del cual, es el propio órgano quién estructura el juicio en línea atendiendo a las necesidades del servicio, con ello, se privilegia la innovación, puesto que, de ser necesarias adecuaciones para mejorar el funcionamiento del Sistema de Justicia Digital Electoral, bastaría con que el Pleno del Tribunal tome las medidas pertinentes a través de su normativa interna.

Así, además de lo anterior, se busca modificar diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado, dotando de coherencia al *Sistema de Justicia Electoral Digital*, clarificando que la presentación y sustanciación de medios de impugnación a través de medios electrónicos no pueden tener la misma lógica que el modelo tradicional, por lo que, se diferencia el requisito de presentar documentos ante la autoridad responsable o desistirse por escrito cuando el trámite puede hacerse directamente en el portal que el Tribunal Electoral habilite para tales efectos.

A lo anterior también se suma la previsión de que el Tribunal Electoral pueda, eventualmente, celebrar sesiones a través de videollamadas, lo cual brinda una herramienta más para la resolución de los asuntos por medio de la vía en.

Además se establece la posibilidad de que se celebren convenios, como puede ser con el Servicio de Administración Tributaria para el uso de la firma electrónica.

Asimismo, se establece que el Tribunal Electoral deberá notificar a la Autoridad Responsable para el efecto de que esta pueda publicitar el medio de impugnación para la eventual comparecencia de tercerías interesadas en el asunto.

* 1. **Inteligencia artificial**

Las experiencias de éxito en el mundo representan una guía para que la Inteligencia Artificial y otras tecnologías se conviertan en una herramienta imprescindible para la mejora continua en la administración de justicia. Con esta propuesta no se pretenden sustituir a la Magistraturas o al funcionariado del Tribunal Electoral, todo lo contrario, con ello se les dotaría de mecanismos tendentes a asegurar una impartición de justicia innovadora.

Esto se lograría a través de la reforma que propone regular el uso de la inteligencia artificial, para permitir crear un modelo de impartición de justicia innovadora que posicionará a Coahuila de Zaragoza como pionero en el país en el uso de los avances cibernéticos para mejorar la impartición de justicia, a través de la reglamentación del uso de la misma dentro de la esfera administrativa.

**II. Armonización**

Son diversos los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre la legislación electoral de Coahuila en diversas Acciones de Inconstitucionalidad, en las que se analizó la constitucionalidad abstracta de diversas porciones normativas, así como también, los criterios que la Sala Superior ha sostenido al momento de analizar la constitucionalidad de ciertos preceptos en casos concretos, se convierten en un parámetro para poder armonizar la legislación local, derogando aquellos preceptos que se encuentran sin aplicación por mandato judicial

También se incorporan en esta propuesta, las modificaciones pertinentes derivadas de diversas reformas a nivel federal, como lo son, las relativas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, paridad y violencia política de género. Por último, se incorporan propuestas que suplen vacíos legales como lo es la regulación de la facultad laboral del Tribunal Electoral o se precisan los preceptos normativos que pueden generar contradicción con la legislación nacional.

Respecto al tema de las modificaciones que se proponen en el tema de perspectiva de género, es importante destacar que, mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020.

Estas modificaciones buscan, principalmente, integrar al marco legal interno la nueva concepción respecto a la violencia política que sufren los grupos vulnerables en el ejercicio de sus derechos político-electorales; además de ello, se busca armonizar con el resto de modificaciones que se hicieron en las leyes mencionadas con motivo del Decreto del 13 de abril de 2020.

**a. Armonización legislativa**

Mediante la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas, la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, además de contener imprecisiones con relación a la Ley General de Partidos Políticos o, incluso, contener disposiciones contrarias a ésta última.

Por lo anterior, se propone derogar aquellas disposiciones que no se encuentran ajustadas al orden constitucional y que fueron declaradas inválidas mediante la Acción de Inconstitucionalidad mencionada; asimismo, también se considera necesario ajustar con el objetivo de armonizar la legislación interna en materia político-electoral con las Leyes Generales, evitando así imprecisiones o disposiciones contrarias al orden constitucional que pudieran, eventualmente, ser declaradas inválidas mediante algún medio de control de constitucionalidad.

Por otro lado, la derogación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza en atención a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es imprescindible adecuar el marco normativo en la materia para encontrarse ajustado conforme a las nuevas disposiciones que derivan de la referida Ley, esto a través de la modificación de las denominaciones a las que hace referencia el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**b. Perspectiva de género**

En el marco de las nuevas directrices que han nacido de la lucha por la reivindicación de los derechos y libertades de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género, se estima necesaria su incorporación y visibilización. El incremento del catálogo de mujeres que puedan acceder a la justicia electoral por violencia política, amplia el espectro de protección a todas aquellas mujeres que su trabajo en la vida pública tiene una relación directa con la democracia.

En ese sentido, se proponen modificar disposiciones en materia de perspectiva de género introduciendo disposiciones derivadas de posicionamientos y criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obligan al Tribunal Local del Estado a observarlos. Dichas modificaciones se agrupan básicamente en la eliminación del lenguaje no inclusivo, la adecuación del marco político-electoral a la perspectiva de género, la paridad de género como un piso para las mujeres y no un techo y sanciones a los partidos que incumplan con las candidaturas paritarias.

**c. Funcionamiento de la labor jurisdiccional**

En el mismo orden de ideas, la armonización y adecuación del marco normativo en materia político-electoral también impacta en la modificación de las labores y el funcionamiento de los Tribunales; así, se propone modificar disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado. En cuanto al primero, las modificaciones se centran básicamente en la inclusión de principios constitucionales, proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía y modificar el proceso de designación del Contralor.

En otro sentido, la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado se propone ser armonizada tanto con las disposiciones generales, así como aquellas que ya estando previstas en el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no se encuentran incluidas en esa legislación, específicamente, en el tema de la salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Electoral de Coahuila y de los del Tribunal Electoral, para lo cual se adiciona una sección en la que se hace referencia a este tipo de juicios laborales, remitiendo el marco regulatorio que se prevea en los reglamentos internos del Instituto Electoral de Coahuila y el Tribunal, así como en los lineamientos que se emitan al efecto.

Asimismo, también se modifican otras disposiciones de la ley referida en materia de lenguaje incluyente; se adicionan las precandidaturas y la posibilidad de que puedan comparecer por conducto de su representante legítimo; se establece la definición de días y horas hábiles por considerar que, al ser el Tribunal Electoral un organismo autónomo e independiente del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, no debe hacerse referencia expresa a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza; modificaciones en materia de notificación automática; se adiciona la figura del interés legítimo en la materia electoral; se modifican o eliminan diversas disposiciones que carecían de sentido o bien, que deben de ser ajustadas a la nueva concepción de las mismas figuras jurídicas.

Con las modificaciones anteriormente expuestas, derivadas en dos grandes grupos: 1. Justicia Digital y 2. Armonización legislativa, se busca actualizar y adecuar el marco normativo interno del Estado en materia electoral, además de lograr un verdadero y efectivo acceso a la justicia por parte de la ciudadanía; esta modificación se ha replicado en varias materias del derecho en nuestro país: “*En México, la mayoría de los tribunales utiliza los recursos tecnológicos con el fin único de difundir información. Sin embargo, también se ha implementado un modelo de juicio de amparo en línea que pretende replicar el procedimiento basado en papel; incluso, se ha desarrollado un sistema especializado para los juicios administrativos*”.[[26]](#footnote-26)

Lo anterior indica que la necesidad de innovar en materia electoral no es solamente una situación derivada de las condiciones actuales en las que vive el mundo, sino una verdadera necesidad para garantizar la justicia a los ciudadanos a través sistemas tecnológicos, así como actualizar y adecuar el marco normativo interno a la realidad actual en la que se desenvuelve nuestra sociedad.

En virtud de lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de este H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se **modifican** el numeral 1 y el inciso f) del artículo 10; el numeral 1 del artículo 16; el numeral 1 del artículo17; los numerales 3 y 4 del artículo 24; el artículo 31; el numeral 2 del artículo 35; el numeral 3 del artículo 70; el segundo párrafo del inciso f numeral 2 del artículo 118; el numeral 1 del artículo 202; el numeral 1 y el inciso f) del artículo 262; el numeral 1 del artículo 266; el numeral 1 y el inciso e) del artículo 397; el numeral 5 del artículo 402; el numeral 1 y el inciso j) del artículo 404; el numeral 1 del artículo 409; el artículo 419; se modifica el inciso j) del artículo 427; el inciso v) del artículo 436; el numeral 3 del artículo 439; el numeral 5 del artículo 442; se **adicionan** el numeral 3 al artículo 5; el inciso g) al artículo 10; el inciso q) al artículo 260; el inciso g) al artículo 262; un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 423; un inciso k) al artículo 427; los incisos w) y x) al artículo 436; se **deroga** el numeral 2 del artículo 20; el inciso c) del artículo 62; el artículo 164; el artículo 165; los numerales 2 y 3 del artículo 195; el inciso c) del artículo 371; el numeral 2 del artículo 385; el artículo 388; del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.**

1 a 2. …

3. La protección de los derechos político-electorales de las mujeres deberá tener una interpretación progresiva y maximizadora, en la que se protejan de la violencia política por razones de género a las mujeres que participan en la vida pública y desempeñan un papel fundamental para el orden democrático, de manera enunciativa se protege a:

a) Precandidatas.

b) Candidatas.

c) Aspirantes a candidata independiente.

d) Candidatas independientes.

e) Funcionarias electas.

f) Secretarias de estado.

g) Periodistas.

h) Defensoras de derechos humanos.

i) Magistradas electorales.

j) Consejeras electorales.

k) Funcionarias del Instituto y Tribunal Electoral.

l) Funcionarias de casillas.

m) Militantes.

n) Afiliadas.

ñ) Simpatizantes.

**Artículo 10**.

1. Son requisitos para ser titular de la gubernatura, ocupar una diputación del Congreso del Estado o ser integrante de Ayuntamiento, además de los que señalan respectivamente los artículos 36 y 76 de la Constitución y el artículo 43 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los siguientes:

a) al e) ...

f) Presentar ante el Instituto la declaración patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses.

g) No haber sido condenada o condenado por el tipo administrativo o por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para la aplicación de este artículo debe entenderse que tal prohibición aplicará para los dos procesos electorales siguientes, además de que únicamente podrá postularse si ha cumplido con las medidas de reparación.

**Artículo 16.**

1. El registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa se realizará mediante el sistema de fórmulas. Los partidos políticos, registrarán una candidatura propietaria y una suplente del mismo género. Para el caso de las fórmulas encabezadas por hombres podrán registrarse indistintamente, mujeres u hombres como suplentes. En todo caso, deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos en este Código.

2. a 3. …

**Artículo 17.**

1. Los partidos políticos garantizarán la paridad de género, por lo que las candidaturas propietarias a diputaciones por ambos principios de cada partido político deberán ser al menos el cincuenta por ciento para el género femenino. El Instituto, rechazará el registro del número de candidaturas del género que no cumpla con el principio de paridad, fijando al partido un plazo improrrogable de tres días para la sustitución de estas.

En caso de que no se realicen las sustituciones correspondientes únicamente se aceptarán los registros en favor de mujeres.

Los partidos políticos y/o coaliciones en la postulación a diputaciones de mayoría relativa observarán lo establecido en el artículo 33 de la Constitución.

2. a 3. …

**Artículo 20.**

1. ...

2. Se deroga.

3 a 6. ...

**Artículo 24.**

1 a 2. …

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputaciones, así como en la integración de los Ayuntamientos, asegurando condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

**Artículo 31.**

1. Toda organización que pretenda constituirse como partido político local deberá cumplir los requisitos que al efecto señala la Ley General de Partidos Políticos.

**Artículo 35.**

1. …

2. En el caso de que un nombre aparezca en más de un padrón de afiliaciones de partidos políticos registrados o en formación, el Instituto les dará vista para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

**Artículo 62.**

**1. ...**

a) al b)

c) Se deroga.

d) ...

**Artículo 70.**

1 a 2. …

3. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda.

**Artículo 118.**

1. a 2. ...

a) al e) …

f) ...

Se deberá entregar al Instituto las cédulas de respaldo ordenadas por distrito o municipio acompañadas de listados que contengan el nombre completo de cada persona, acompañando además el archivo en medio digital de acuerdo a las características que determine el Instituto.

...

g) al h)…

**Artículo 164**. Se deroga.

**Artículo 165.** Se deroga.

**Artículo 195.**

1. …

2. Se deroga.

3. Se deroga.

**Artículo 202.**

1. Los nombramientos de las personas representantes generales deberán contener los mismos datos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de casilla.

2 a 3. ...

**Artículo 260.**

1. …

a) al p) …

q) Destinar el financiamiento público ordinario previsto para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres a fines diversos a los contemplados en la legislación aplicable.

2. …

**Artículo 262.**

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidaturas y candidaturas de partido político a cargos de elección popular a el presente Código:

a) a la e) …

f) Realizar actos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género y/o recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas, y

g) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.

**Artículo 266.**

1. Constituyen infracciones de las autoridades o del funcionariado público, de cualquiera de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos públicos autónomos, y cualquier otro ente público:

a) al f) …

**Artículo 371.**

1. …

a) al b) …

c) Se deroga.

**Artículo 385.**

1. ...

2. Se deroga.

**Artículo 388.** Se deroga.

**Artículo 397.**

1. La persona encargada de la contraloría podrá ser sancionada conforme al Título Cuarto de este Libro Sexto de este Código por las siguientes causas graves de responsabilidad administrativa:

a) al d) …

e) Incurrir en alguna de las infracciones a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**Artículo 402.**

1 a 4. ...

5. Son supletorias, para los efectos del presente Libro, las disposiciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las demás aplicables.

**Artículo 404.**

1. Serán causas de responsabilidad para el funcionariado público del Instituto:

a) al i) ...

j) Las previstas, en lo conducente, en la Ley de General de Responsabilidades Administrativas, y

**Artículo 409.**

1. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente Capítulo y a las cometidas en contravención a la Ley General de Responsabilidades Administrativas consistirán en:

a) al f) ...

2. ...

**Artículo 419.**

1. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos, en lo conducente, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**Artículo 423.**

1. …

Para el cumplimiento de sus obligaciones deberá ejercer su presupuesto con honestidad y austeridad conforme a las disposiciones legales aplicables.

2 a 3. …

**Artículo 427.**

1. …

a) al i) …

j) Las impugnaciones que se realicen de algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

k) Las demás que la Constitución, el Reglamento Interior, y las leyes aplicables determinen

**Artículo 436.**

1. ...

a) al u) ...

v) Implementar el Sistema de Justicia Electoral Digital para la presentación, sustanciación y resolución de los medios de impugnación y asuntos sobre los que tiene competencia;

w) Reglamentar el uso de Inteligencia Artificial y tecnologías que permitan mejorar la impartición de justicia;

x) Las demás que le confiera este Código u otras disposiciones legales aplicables.

**Artículo 439.**

1 a 2. …

3. El contralor será designado por el Pleno del Tribunal Electoral, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a propuesta de instituciones públicas de educación superior, mediante los procedimientos y en los plazos que fije el Congreso del Estado.

4 a 7. …

**Artículo 442.**

1 a 4. ...

5. Son supletorias, para los efectos del presente Libro, las disposiciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se **modifican** la fracción I del artículo 2°; el artículo 4°; el artículo 7°; el segundo párrafo del artículo 14; la fracción II y III del artículo 16; el numeral 4 de la fracción I y la fracción III del artículo 19; el segundo párrafo del artículo 22; el artículo 23; el artículo 33; el artículo 37; el artículo 38; la fracción VI y VII del artículo 39; la fracción III del artículo 40; el primer párrafo del artículo 41; el numeral 1 y 3 de la fracción I del artículo 42; la fracción I del artículo 43; el primer párrafo y la fracción V del artículo 48; el primer párrafo y la fracción IX del artículo 52; el artículo 65; la fracción I del artículo 71; el primer párrafo del artículo 79; el segundo párrafo del artículo 84; el primer y segundo párrafo del artículo 93; el artículo 94; la fracción II del artículo 104; se **adicionan** la fracción V del artículo 2°; la fracción V y un segundo párrafo del artículo 3°; un tercer párrafo al artículo 6°; un segundo párrafo al artículo 21; un segundo párrafo al artículo 39; los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 a la fracción I del artículo 42; un segundo párrafo al artículo 48; el artículo 50 Bis; las fracciones VI y VII del artículo 71; un tercer párrafo al artículo 93; la fracción V al artículo 95; una Sección Quinta y un artículo 106; se **derogan** la fracción V del artículo 42 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 2°.** …

I. La constitucionalidad y legalidad de los actos, omisiones, acuerdos y resoluciones de los órganos del Instituto o de los partidos políticos, así como del Poder Ejecutivo y Legislativo o de los Ayuntamiento, a fin de salvaguardar la forma democrática de gobierno, y la validez y eficacia de las normas aplicables en la materia.

II. a la IV. …

V. La salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores del Instituto y de los del Tribunal Electoral, así como la resolución de los conflictos inherentes a dicha materia.

**Artículo 3°.** …

I. a la IV. …

V. El Juicio para dirimir las controversias laborales entre el Instituto y su personal, así como entre el Tribunal Electoral y su personal.

La tramitación de cualquiera de los medios de impugnación se puede realizar de manera ordinaria, esto es físicamente o a través de los medios electrónicos dispuestos para tal efecto por el Pleno del Tribunal Electoral.

**Artículo 4°.** En ningún caso la interposición de los medios de impugnación en materia político-electoral previstos en el artículo anterior producirá efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnada, excepto en los casos inherentes a los conflictos laborales que surjan entre el Instituto y su personal o entre el Tribunal Electoral y su personal, cuando así lo determine el Pleno.

**Artículo 6°. ...**

...

El Tribunal Electoral implementará el Sistema de Justicia Electoral Digital como un mecanismo adicional para la presentación, sustanciación y resolución de los asuntos de su competencia, para lo cual, celebrará los convenios que estime convenientes, además establecerá los requisitos de uso y pautas de funcionamiento en su reglamento interno.

**Artículo 7°.** Para la organización y el funcionamiento del Tribunal Electoral, se observarán las disposiciones previstas en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado de Coahuila, en el Código Electoral del Estado de Coahuila, en esta ley, en el Reglamento Interior del Tribunal Electoral, la legislación laboral atinente y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 14.** …

En todo caso, el acceso a los expedientes, en la etapa de sustanciación, quedará reservado sólo a las partes y a las personas autorizadas para ello.

**Artículo 16.** …

I. …

II. La autoridad responsable, que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna o a quien se atribuya alguna omisión.

III. Tercería interesada, que es la ciudadanía, partido político, coalición, candidatura, organización o la agrupación política o ciudadana, según corresponda, con un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora.

**Artículo 19.** …

I. …

1. a 3. …

4. Las precandidaturas y candidaturas por su propio derecho, o por conducto de su legítima representación. Deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro.

II. …

III. Las organizaciones y agrupaciones políticas o ciudadanas, a través de su representación legítima, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable.

IV. …

**Artículo 21.** …

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los asuntos inherentes a conflictos laborales que surjan entre el instituto y su personal o entre el Tribunal Electoral y su personal, respecto de los cuales, para el cómputo de los plazos respectivos se tomarán únicamente los días y horas hábiles, con independencia de que exista o no proceso electoral ordinario o extraordinario.

**Artículo 22.** …

Se entiende por días hábiles todos los del año, exceptuando los sábados y domingos y los demás que la ley o el Pleno del Tribunal Electoral señalen como inhábiles.

…

**Artículo 23.** Los medios de impugnación, con excepción del Juicio Laboral, previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los tres días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable

**Artículo 33.** El partido político cuya representación haya estado presente en la sesión o reunión de la autoridad responsable que actuó o resolvió el acto a impugnar, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente desde ese momento para todos los efectos legales, siempre y cuando tenga a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado de su contenido.

**Artículo 37.** Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esta ley, el Tribunal Electoral podrá determinar su acumulación o escisión.

La acumulación o escisión podrá decretarla de oficio el Pleno del Tribunal Electoral o a solicitud de cualquiera de las magistraturas o las partes sin mayor trámite.

**Artículo 38.** La acumulación o la escisión podrán decretarse al inicio o durante la sustanciación o para la resolución de los medios de impugnación.

**Artículo 39.** …

I. a la V. …

VI. Identificar el acto, resolución u omisión impugnado y la autoridad responsable.

VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto, la omisión o resolución impugnada y los preceptos presuntamente violados.

VIII. a IX. …

Los requisitos para la presentación de los medios de impugnación a través del Sistema de Justicia Electoral Digital se ajustarán a lo previsto en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

**Artículo 40.** …

I. …

II. …

III. En caso contrario precluirá el derecho para ofrecerlas a excepción de las supervenientes.

**Artículo 41.** Cuando el medio de impugnación incumpla con los requisitos esenciales para sustanciar y resolver el asunto, previstos en los artículos 39 y 40 de esta ley; resulte evidentemente frívolo o su notoria improcedencia se derive de las disposiciones de la presente ley; se desechará de plano.

…

**Artículo 42.** …

I. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que:

1. No afecten el interés jurídico o legítimo de la parte actora.

2. …

3. Se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por ello, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;

4. …

5. Sea materia de algún otro medio de impugnación que conozca el propio Tribunal, promovido por la misma parte actora, contra las mismas autoridades, y los versen sobre el mismo acto reclamado y agravios.

6. Dictados en cumplimiento a resoluciones emitidas por el Tribunal que tengan el carácter de ejecutoria, y no sean reclamadas por vicios propios.

7. Cuyos efectos sean inviables.

8. Sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

9. En las que no se hayan agotado las instancias previas establecidas en el Código Electoral, o en las normas internas de los partidos políticos, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales o determinaciones, en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado, salvo que se considere que los actos o resoluciones del partido político violen derechos político-electorales o los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa a quien promueve.

II. a la IV. …

V. Se deroga.

**Artículo 43.** ...

I. El promovente se desista expresamente por escrito o a través del Sistema de Justicia Electoral Digital y ratifique su desistimiento ante el funcionario autorizado por el magistrado instructor o ante fedatario público.

II a IV. ...

**Artículo 48.** Dentro del plazo a que se refiere la fracción II del artículo 45 de esta ley, la tercería interesada podrá comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. a la IV. …

V. Precisar la razón del interés jurídico o legítimo en que se funden y las pretensiones concretas de su comparecencia.

VI. …

VII. …

Los requisitos para la presentación de los escritos a través del Sistema de Justicia Electoral Digital se ajustarán a lo previsto en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

**Artículo 50 Bis.** Tratándose de medios de impugnación presentados en el Sistema de Justicia Electoral Digital:

I. El Tribunal Electoral notificará a la autoridad responsable sobre la presentación del medio de impugnación, remitiéndole copia digital del mismo.

II. La autoridad responsable procederá en los términos del artículo 45, fracción II y quedará exenta de cumplir con el requisito contenido en la fracción I del artículo 50.

**Artículo 52.** Recibida la documentación a que se refiere el artículo 50 de esta ley, el Tribunal Electoral, por conducto de la o el magistrado instructor, realizará los actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación del medio de impugnación de que se trate, de acuerdo con lo siguiente:

I. a la VIII. …

IX. Cerrada la instrucción, se formulará el proyecto de sentencia de desechamiento, sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, y lo someterá al conocimiento del Pleno del Tribunal Electoral.

X. …

**Artículo 65.** El Tribunal Electoral, resolverá el fondo de los asuntos de su competencia en sesión pública y en forma colegiada. La sesión podrá llevarse a cabo de manera presencial o de manera remota.

**Artículo 71.** …

I. Confirmar el acto o resolución impugnada.

II. a la V. …

VI. Ordenar la realización del acto o resolución cuya omisión se atribuya a la autoridad responsable.

VII. Los demás que determine el Pleno

**Artículo 79.** Cuando se declare la inelegibilidad de candidaturas a diputaciones o regidurías electas por el principio de mayoría relativa, tomará el lugar de la candidatura declarada no- elegible su suplente y en el supuesto de que este último también sea inelegible, la elección será nula.

…

**Artículo 84.** …

El juicio electoral procederá fuera y durante los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios, en los términos y formas que establece esta ley.

**Artículo 93.** Todos los medios de impugnación promovidos en el proceso electoral deberán estar resueltos en un plazo no mayor de veinte días naturales a partir de que la autoridad responsable cumpla con las obligaciones previstas en los artículos 45 y 50 de esta ley; dicho plazo se podrá reducir a juicio del tribunal, sin que se afecten las garantías de las partes.

Los demás medios de impugnación que se promuevan fuera del proceso electoral serán resueltos en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la presentación del medio de impugnación de que se trate.

Los plazos para la presentación, sustanciación y resolución de los juicios sobre conflictos laborales entre el Instituto y su personal o entre el Tribunal Electoral y su personal se sujetarán a lo dispuesto en la legislación laboral aplicable, el Reglamento Interior del Instituto y del Tribunal y los Lineamientos que se expidan para tal efecto.

**Artículo 94.** El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales en el estado, cuando el ciudadano o ciudadana por sí mismo y en forma individual, hagan valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y de ser votada; de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, así como de ejercer plenamente el derecho a conformar y ejercer un encargo público para el que fue electa o designada; siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes para el ejercicio de esos derechos.

**Artículo 95.** …

I. a la IV. …

V. Considere que se violó su derecho político-electoral de integrar un órgano de representación popular o partidista, no obstante haber tenido una designación o elección, previamente para tal efecto.

**Artículo 104.** …

I. …

II. Se presentará por escrito y en él se señalará la autoridad responsable, la omisión reclamada, sus antecedentes, los preceptos legales violados y los conceptos de violación conducentes.

III. a la VI. …

**SECCIÓN QUINTA**

**DEL JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL INSTITUTO Y SUS TRABAJADORES Y EL TRIBUNAL ELECTORAL Y SUS TRABAJADORES**

**Artículo 106.** Para la regulación de los aspectos relativos a la presentación, sustanciación y resolución de los juicios para dirimir los conflictos laborales entre el Instituto y su personal y el Tribunal Electoral y su personal se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Instituto, el Reglamento Interior del Tribunal Electoral, así como en los Lineamientos que se expidan para tales efectos.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto, deberán adecuarse iniciada su vigencia.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Las disposiciones relativas al Sistema de Justicia Electoral Digital, serán aplicables hasta en tanto el Pleno del Tribunal Electoral emita los acuerdos generales correspondientes a su implementación.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente decreto.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 22 de septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DDIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DDIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DDIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DDIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYACARDONA** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a dos iniciativas la primera de ellas: la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que ocupa esa posición a la siguiente, del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y la segunda: Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona al actual Título Primero denominado “Del Estado y sus Habitantes” un Capítulo Quinto denominado “Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales”, que contiene los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quater y 25 Quinquies, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares**,** conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 08 del mes de noviembre del año 2018, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que ocupa esa posición a la siguiente, del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben y en fecha 23 de Abril de 2020 la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona al actual Título Primero denominado “Del Estado y sus Habitantes” un Capítulo Quinto denominado “Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales”, que contiene los artículos 25 Bis, 25 Ter, 25 Quater y 25 Quinquies, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares**,** conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor,del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila,.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de los referidos acuerdos, se turnaron a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, las iniciativas a que se ha hecho referencia, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo y se recorre el que ocupa esa posición a la siguiente, del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece derechos fundamentales para las comunidades indígenas de todas las naciones; reitera en su texto la importancia de que los estados que han acogido este documento, deben hacer esfuerzos para reconocer, proteger y alentar el desarrollo de los pueblos indígenas, proporcionarles los recursos necesarios para la preservación de sus costumbres, de sus lenguas o dialectos, así como para facilitarles la permanencia en sus territorios y la subsistencia económica.*

*No menos importante es el derecho de estos pueblos a conservar su autonomía en cuanto a sus usos y costumbres en la elección de sus autoridades internas, así como en lo relativo a la toma de decisiones de asuntos exclusivos de la vida interna de cada uno.*

*De la Declaración en cita, sobresalen por su importancia, las siguientes disposiciones:*

*Artículo 3*

*Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.*

*Artículo 4*

*Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.*

*Artículo 5*

*Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado....*

*Artículo 11*

*1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.*

*2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres....*

*Artículo 13*

*1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.*

*2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados...*

*El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (169), establece lo siguiente:*

*Artículo 1*

*1. El presente Convenio se aplica:*

*a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;*

*b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.*

*2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.*

*3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.*

*Artículo 4*

*1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.*

*2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados……*

*En México, la Constitución General de la República dispone en su artículo 2º las características que un pueblo indígena debe reunir para que sea considerado como tal, a efecto de que se les reconozcan los derechos consagrados más adelante en la misma Constitución. Esto conforme a la siguiente redacción:*

*….La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.*

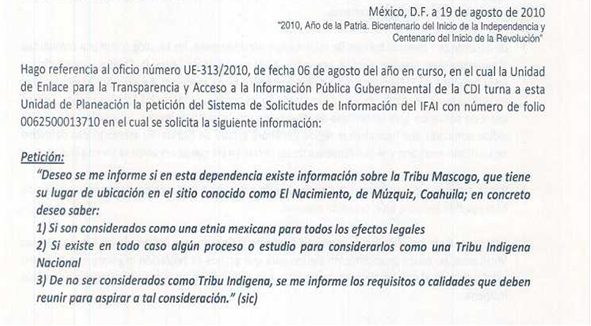
*La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.*

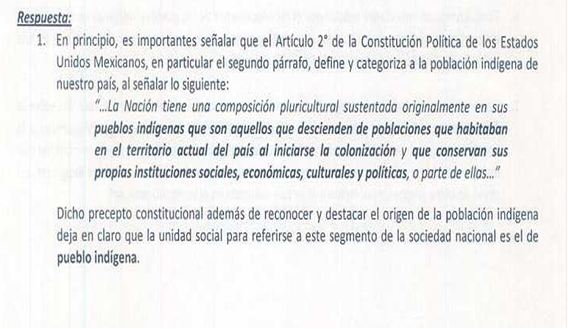
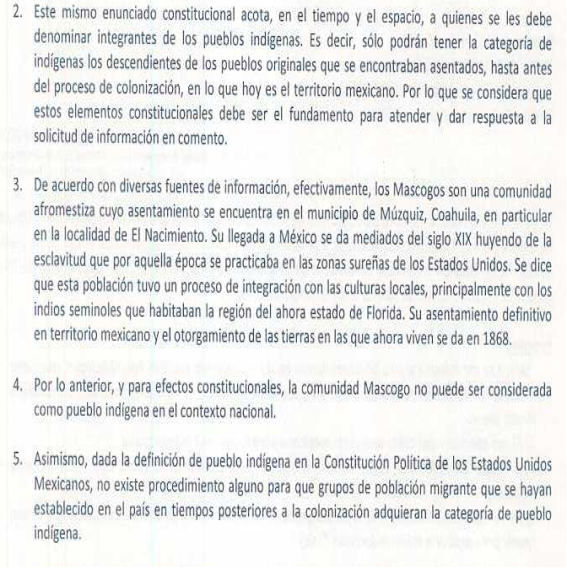
*Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.*

*El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico…*

*Esta disposición plantea un conflicto de aplicación y/o de interpretación, ya que en su primer párrafo, se entiende que solo los pueblos indígenas que ya existían antes del proceso de colonización pueden gozar del derecho a que se les considere como tales, y no así los que se asentaron después de este periodo de la historia de México. De ser esta la interpretación correcta de la norma constitucional que se lee, estaríamos ante un problema muy serio, pues se priva o privaría de derechos propios de las comunidades indígenas a tribus de varios estados del país.*

*Un ciudadano solicitó información a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2010, y también al Instituto Nacional de Lenguas de los Pueblos Indígenas, sobre la comunidad conocida como “Mascogo”, nativa de Múzquiz, Coahuila; la respuesta de estas instituciones parece “confirmar” el criterio ya señalado en materia de quiénes deben ser considerados indígenas; aquí reproducimos parte de las respuestas; toda vez que de acuerdo a la ley, las respuestas a solicitudes de información constituyen información que puede ser difundida o compartida:*

**

**

*Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas informó lo siguiente:*

*DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE*

*COORDINACIÓN Y ENLACE*

*México, D. F. 02 setiembre de 2010.*

*Folio 1131100004210*

*Solicitud de Información:*

*“Deseo se me informe si en esta dependencia existe información sobre la Tribu Mascogo, que tiene su lugar de ubicación en el sitio conocido como El Nacimiento, de Múzquiz, Coahuila; en concreto deseo saber:*

*1) Si son consideraros como una etnia mexicana para todos los efectos legales.*

*2) Si existe en todo caso algún proceso o estudio para considerarlos como una Tribua Indígena Nacional; si existe algún proyecto para rescatar la lengua de los mascogos.*

*3) De no ser considerados como Tribu Indígena, se me informen los requisitos o calidades que deben reunir para aspirar a tal consideración; o bien para que su lengua sea rescatada.”*

*Repuesta:*

*“ Al respecto le informo:*

*La Ley General de Derechos Lingüísticos, en su artículo 2, define a las lenguas indígenas, que deben considerarse como nacionales, de la manera siguiente:*

*Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional.*

*Dado el origen histórico de los denominados como mascogo, no cumplen con el requisito que enuncia dicho artículo, por lo tanto, no están considerados como parte de las lenguas indígenas nacionales en nuestro Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de enero de 2008....”* ***Fin de la cita textual.***

*Los mascogos existen, el propio Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce su existencia y su asentamiento humano, aunque no considera que deban ser considerados como tribu indígena.*

*Si bien las constituciones de los estados no pueden establecer disposiciones que contravengan a la Constitución General de la República, sí pueden ampliar los derechos y garantías que estas otorgan a los ciudadanos.*

*Oaxaca, por ejemplo, decidió reconocer en su Constitución local a las comunidades indígenas que no están expresamente reconocidas por el Artículo 2º de la Constitución Federal; esto lo podemos verificar en el siguiente dispositivo:*

*Artículo 16.- El Estado de Oaxaca tiene una composición multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, así como del Pueblo y comunidades afromexicanas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas y del Pueblo y comunidades afromexicanas. Los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca son: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques. El Estado reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos o culturales.*

*La ley reglamentaria protegerá al Pueblo y las comunidades afromexicanas, así como a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedente de otros Estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan dentro del territorio del Estado de Oaxaca. Asimismo, el Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y en los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y, en general, para todos los elementos que configuran su identidad. Por tanto, la ley reglamentaria establecerá las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas o por quienes legalmente los representen.*

*Esto es, en Oaxaca se reconoce también a las comunidades afromexicanas, aunque estas no cumplan con el requisito constitucional de haber estado aquí desde antes de la Colonia. Lo cual, es más justo y acertado de acuerdo al derecho internacional.*

*La ONU reconoce que ha sido casi imposible establecer una correcta definición de aceptación internacional de lo que es un pueblo indígena; ya que los múltiples intentos han derivado en injusticias de concepto y de alcances; mientras que en otros casos, resultan en limitantes arbitrarias para ciertas etnias y grupos que se consideran animismos indígenas.*

*Si bien la idea de que se considera como tales a quienes reúnen la característica de estar en sus territorios de modo previo a las invasiones y las pre colonias en todos los continentes, tal y como lo señala el 2º constitucional es frecuente en los textos constitucionales nacionales, lo cierto es que por otra parte, gran cantidad de etnias se conformaron en tiempos posteriores, y mantienen todos los demás elementos que mandata la ley para ser considerados como pueblos indígenas, estos son: identidad de grupo, cultura propia, creencias religiosas, tradiciones, usos y costumbres, identidad geográfica, idioma propio y permanencia histórica. Y, no pueden ser privados de su derecho a ser considerados pueblos indígenas por el solo hecho de no haberse asentado en su territorio antes de la época colonial correspondiente.*

*Cabe mencionar, que el día 14 de marzo de 2017, el Diario de los Debates del Congreso del Estado da cuenta de una iniciativa de decreto del entonces gobernador del estado, Rubén Moreira, para declarar al pueblo Mascogo como grupo étnico del estado de Coahuila. Sin embargo, se trata de una iniciativa de decreto ejecutivo, no de una ley, ni de una reforma constitucional, que, como en el estado de Oaxaca, les confiera plena certeza de derechos a las comunidades indígenas locales, sin importar su fecha de conformación. Y, que además, supere la limitante del artículo 2º constitucional.*

*Además, el referido decreto,* ***hace una interpretación del artículo 2º constitucional, en la creencia de que en dicha disposición se pueden separar los elementos establecidos para determinar quiénes son pueblo indígena y quiénes no. Y como consta en las respuestas de acceso a la información que ya hemos expuesto, esto no es posible****, el requisito de haber estado aquí previo a la colonia es inseparable de los otros, por eso, es más atinado y efectivo elevar a rango constitucional local el reconocimiento como pueblo indígena a los Mascogos, y no dejarlo en un simple decreto.*

*Nuestra argumentación se fortalece aún más, al atender lo que dispone el párrafo quinto del artículo 2º constitucional: “…El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas* ***se hará en las constituciones y leyes de las entidades******federativas****, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.”*

*La disposición es clara: el reconocimiento se hará en las constituciones y en las leyes locales….*

*En estricto derecho de libre configuración constitucional local, es decir, apelando al derecho que tenemos de establecer disposiciones en nuestra constitución que no contravengan a la Constitución Federal ni a los Tratados Internacionales, y que, por el contrario, amplíen los derechos que estos instrumentos confieren a los individuos, consideramos oportuna esta propuesta de reforma constitucional.”*

**TERCERO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente el diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza con relación al reconocimiento de las personas, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*En Coahuila de Zaragoza, según la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se estima que en 2015 habitaban 13,349 personas indígenas,[[27]](#footnote-27) así como 253 personas afromexicanas pertenecientes al pueblo mascogo en el año 2013, según el Gobierno del Estado.[[28]](#footnote-28) A nivel nacional, para 2015 en Coahuila habitaban el 0.5% de la población indígena de México. Las leyes de Coahuila, sin embargo, apenas han reconocido su existencia.*

*Aunque si bien, por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido con los derechos de la población indígena desde el año 2001, fue apenas, por otro lado, que en 2019 que se reivindicó a la población afromexicana en dicho texto constitucional, asimilando sus derechos con los de la población indígena. Esto es muestra del poco avance Constitucional y legal que posee nuestro país sobre derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En Coahuila, las omisiones normativas son más evidentes.*

*De esta forma, en el Estado, desde el punto de vista Constitucional y legislativo, apenas se han visibilizado a los pueblos indígenas y tribales del Estado. Así, la Constitución local apenas prevé a la población indígena, mientras que omite totalmente a la población afromexicana de Coahuila. Por su parte, las leyes locales, en las pocas referencias legislativas que prevén a este sector de la población, lo hace insuficientemente y con confusiones conceptuales elementales.*

*Estas circunstancias no tienen justificación desde el punto de vista de las referencias normativas. Estas son abundantes y de ninguna forma justifican las omisiones regulatorias en el Estado. Así, en primer lugar, destaca el “Convenio (No. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, en vigor en México desde el 5 de septiembre de 1991, que realiza distintas distinciones útiles para la legislación nacional de México.*

*Por un lado, este instrumento internacional distingue entre “los pueblos tribales en países independientes” y “los pueblos en países independientes, considerados indígenas”. Conceptualiza a los primeros como aquellos “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial”. Mientras tanto, los segundos son calificados “por el hecho de descender de poblaciones que habitaban (...) en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.” En una legislación que ignora esta distinción, como lo es la coahuilense, esta es valiosa para precisamente conceptualizar las mismas.*

*En segundo lugar, más recientemente, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por México, alienta a los Estados “a que respeten y cumplan eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados”. Esta circunstancia, podemos ver, aún no se logra en nuestro país ni siquiera desde el punto de vista legislativo.*

*Así, por ejemplo, el “Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México”, en relación con el marco jurídico, político e institucional del país, concluyó que:*

*“96. Se debe reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Ello conlleva la modificación o reforma de legislaciones federales y estatales en materia indígena. Un primer paso para resolver los problemas mencionados en este informe es reconocer la deuda histórica del país en esta materia y adecuar la legislación y las políticas relacionadas con temas agrarios, territoriales, de desarrollo energético, minería, agua, producción y seguridad alimentaria, gobernanza y administración de justicia, entre otros, con las obligaciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas. La modificación o reforma de dichas normas debe realizarse en consulta y con la participación de los pueblos indígenas conforme a los estándares internacionales.”[[29]](#footnote-29)*

*Las anteriores circunstancias, por tanto, orillan a adoptar medidas tanto Constitucionales y legislativas como administrativas para garantizar los derechos señalados y, además, crear una normatividad que tenga en cuenta las distinciones conceptuales referidas. Como se ha mencionado, sin embargo, las referencias normativas nacionales y locales han sido más bien escasas.*

*Así, por ejemplo, las referencias provenientes desde la administración pública local también han sido escasas y, en su caso, confusas. En los últimos años destaca el Decreto 803 del martes 16 de mayo de 2017 mediante el que “Se autoriza que se declare como grupo étnico del Estado de Coahuila de Zaragoza a la Tribu de Negros Mascogos”. Dicho decreto, sin embargo, equivocadamente considera a la mencionada tribu como “pueblo indígena”. Es decir, contrario a las distinciones conceptuales ya mencionadas anteriormente.*

*La reforma que hoy se presenta, por tanto, pretende comenzar a reparar esas graves omisiones a través de dos objetivos iniciales: marcar una pauta para la adecuación de la legislación local a los más altos estándares internacionales e interamericanos a través de una reforma a la constitución local, y reconocer expresamente la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en el Estado, corrigiendo las distinciones que se han ignorado entre estos pueblos en la legislación nacional y las medidas administrativas locales.*

*Así, por lo anterior, se propone el reconocimiento de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales de Coahuila desde la Constitución, garantizando a través de esta sus derechos a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social dentro del marco internacional, Constitucional federal y local, y acorde a las leyes del Estado. Además, dispone la sola conciencia de la identidad o pertenencia de las personas indígenas y afromexicanas a estos pueblos y comunidades como criterio fundamental para que se les apliquen dichas disposiciones. Finalmente, dispone desde el texto constitucional local la protección, promoción y garantía del desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas y tribales asentadas en el Estado, garantiza a sus integrantes el acceso pleno a los derechos señalados en el marco normativo aplicable, y dispone que la legislación reglamentaria que se emita garantizará a los pueblos indígenas y tribales su condición de sujetos de derecho público con personalidad jurídica colectiva.*

*Como señalan los indicadores más recientes:*

*“La situación de la población indígena históricamente ha estado marcada por altos niveles de carencias sociales y económicas que denotan condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad en relación con la población nacional. El 55.5% de la población indígena habita municipios de alta y muy alta marginalidad, asimismo el 87.5% de los municipios indígenas se encuentran en condiciones de alto grado y muy alto grado de marginalidad”.[[30]](#footnote-30)*

*Las adecuaciones Constitucionales aquí expuestas tienen por objetivo, en términos generales, ayudar a la garantía de los derechos de las personas indígenas y afromexicanas con la finalidad de revertir esas circunstancias. De esta forma, es mediante la formulación de instrumentos legales y constitucionales de avanzada que, a través de disposiciones acordes a los más altos estándares internacionales, se busca lograr la igualdad sustancial de los grupos socialmente desfavorecidos, en plena observancia a la justicia social.*

**CUARTO.-** Quienes integramos la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de las iniciativas objeto del presente dictamen.

En este orden de ideas, con respecto al contenido de la iniciativa de la Diputada Gabriela Zapopan Garza Galván, observamos lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **DICE…** | **DEBE DE DECIR…** |
| **Artículo 7º.** Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Federal.  Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio por persona.  Las normas relativas a los derechos humanos y a las libertades reconocidas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  Ninguna disposición legal puede ser interpretada en el sentido de:    **a)** Permitir a la autoridad suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México.  **b)** Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedan estar reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los Tratados internacionales suscritos por México.  **c)** Excluir otros derechos y garantías que sean inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática y representativa de gobierno.  Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no regresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que determine la ley.  Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de las personas. La ley establecerá mecanismos a favor de las personas, para que el goce de sus derechos de libertad, igualdad, seguridad jurídica y justicia social, sean reales, efectivos y equitativos dentro del estado humanista, social y democrático de derecho que salvaguarda esta Constitución.  Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.  Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  Toda persona tiene derecho a la información pública. La garantía de acceso a la información pública, es un derecho fundamental que comprende difundir, investigar y recabar información pública, y se definirá a partir de los principios siguientes:  **I.** Su fundamento reside en el estado humanista, social y democrático de derecho que establece esta Constitución.  **II.** El acceso libre, gratuito, sencillo, antiformal, eficaz, pronto y expedito a la información.  **III.** La interpretación constitucional más favorable del principio de publicidad, salvo las excepciones que por razones de interés público establezca la ley en sentido estricto.  **IV.** La protección de los datos personales.  **V.** La obligación de transparencia del Poder Público o cualquier otra entidad que utilice, reciba o disponga de recursos públicos, en los términos de la ley.  **VI.** La administración, conservación y preservación de la documentación pública a través de mecanismos confiables, eficientes y eficaces.  **VII.** La constitución de un organismo público autónomo conforme a las bases previstas en esta Constitución y las siguientes:  **1.** Será autoridad constitucional en la materia, independiente en sus funciones y decisiones, y profesional en su desempeño.  **2.** Contará con autonomía política, jurídica, administrativa, presupuestal, patrimonial y financiera, en los términos que establezca la ley.  **3.** Tendrá a su cargo la rectoría de las siguientes materias:  **a)** El acceso a la información pública.  **b)** La cultura de transparencia informativa.  **c)** Los datos personales.  **d)** *(DEROGADO, P.O. 27 DE MARZO DE 2007)*  **e)** La realización de estadísticas, sondeos, encuestas o cualquier instrumento de opinión pública.  **f)** Las demás atribuciones que establezca la ley.  **4.** Su actuación se regirá por los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad.  **5.** Sus integrantes serán designados por el voto de cuando menos las dos terceras partes del Congreso del Estado, en los términos y conforme al procedimiento que disponga la ley.  Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  Las Cartas de los Derechos Fundamentales y esta Constitución, determinan los principios mínimos en los que se sustenta el ejercicio de los Derechos Humanos. Serán ley suprema en el régimen interior del Estado.  Ninguna persona será sometida a desaparición, sea ésta cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado.  El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a las personas contra las desapariciones.  Las personas desaparecidas y quienes hayan sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición, tienen derecho a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona desaparecida, a conocer la verdad, a la justicia, a la protección judicial efectiva y a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición. El Estado garantizará estos derechos.  Las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos sus derechos. El Estado adoptará las medidas apropiadas en relación con la situación legal de las personas desaparecidas cuyo paradero no haya sido esclarecido. La ley establecerá el procedimiento para la declaración de ausencia por desaparición de personas.  Ninguna persona será sometida a cualquier forma de esclavitud, servidumbre, o a ejecutar un trabajo forzoso.  Las personas migrantes o desplazadas que ingresen, transiten o residan temporalmente en el territorio del Estado, así como sus familiares, con independencia de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizados por su condición de migrantes o desplazados. Tratándose de menores de edad se privilegiará el interés superior de la niñez. Las autoridades de todos los niveles, en la esfera de su competencia, adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del presente artículo. | **Artículo 7º....Párrafos primero y segundo.**  **El Estado reconoce a todos los pueblos indígenas que se han asentado en nuestro territorio, sin importar su origen o la época en que iniciaron su residencia, a estas comunidades se les brindarán todos los apoyos necesarios para la conservación de su cultura, lengua, costumbres y formas de subsistencia, además de garantizarles todos los derechos que los tratados internacionales y las leyes nacionales confieren a las etnias mexicanas. Los pueblos Mascogo y Kikapú gozan del reconocimiento como comunidades indígenas del estado de Coahuila de Zaragoza para todos los efectos legales correspondientes.**  **…** |

En cuanto al contenido de la iniciativa de la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázarez, se verifica lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **DICE…** | **DEBE DE DECIR…** |
| **NO TIENE CORRELATIVO** | **CAPÍTULO QUINTO**  **Personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales**  **Artículo 25 Bis. Esta Constitución reconoce y protege los derechos a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales que habiten en el Estado de Coahuila, los cuales se ejercerán dentro del marco internacional, Constitucional federal y local, y acorde a las leyes del Estado.** |
| **NO TIENE CORRELATIVO** | **Artículo 25 Ter. Esta Constitución reconoce tanto a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del País al iniciarse la colonización o que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio al momento del establecimiento de las actuales fronteras, y a los tribales que descienden de poblaciones afromexicanas, así como los de aquellos que pertenezcan a otros pueblos indígenas y tribales y que por cualquier circunstancia se encuentren asentados dentro del Estado, y que en todo caso conservan condiciones e instituciones sociales, culturales y económicas o partes de ellas que les distinguen de otros sectores de la colectividad del País.** |
| **NO TIENE CORRELATIVO** | **Artículo Quater. Para la determinación de la aplicación de las disposiciones sobre personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales, la conciencia de la identidad o pertenencia de las personas de forma individual o colectiva a estos será el criterio fundamental.** |
| **NO TIENE CORRELATIVO** | **Artículo Quinquies. La legislación que reglamente los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas y tribales que habiten en el Estado deberá respetar, proteger, promover y garantizar el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas y tribales asentadas en Coahuila, y el acceso pleno a los derechos señalados en el marco normativo aplicable en el Estado, además de garantizar a los pueblos indígenas y tribales su condición de sujetos de derecho público con personalidad jurídica colectiva.** |

Como se observa, ambas iniciativas buscan reconocer los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Local y la última de ellas hace ya referencia expresa a las comunidades afromexicanas.

Es imprescindible en este contexto manifestar que quienes dictaminamos coincidimos en la importancia de reconocer y garantizar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y buscar fortalecerlas y preservarlas, defendiendo sus tradiciones y sus tierras.

Como adecuadamente se alude en la exposición de motivos de la primera de las iniciativas objeto de este dictamen, durante algún tiempo estuvo presente el debate sobre si las comunidades Kickapoo y de Negros Mascogos reunían los requisitos previstos en la Constitución General y en las leyes respectivas para poder ser considerados pueblos indígenas, sobre todo por lo que hacía al requisito de que se encontraran asentados en el territorio nacional.

No obstante lo anterior, es importante destacar que con la entrada en vigor de la reforma Constitucional en materia de derechos humanos la interpretación que debe darse al artículo 2 Constitucional debe hacerse considerando el principio pro persona, extendiendo su protección en este caso a los pueblos Kickapoo y de Negros Mascogos.

Lo anterior quedó más claramente de manifiesto con la más reciente reforma a este mismo artículo 2, en el cual se reconocieron los derechos de las comunidades afromexicanas, aunado a que su llegada a nuestro país fuese posterior a la Colonia.

En este contexto, es importante referir que en sesión celebrada por este H. Congreso en fecha 18 de julio del año 2019, se aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se adiciona un apartado C, al artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociéndose en nuestra Carta Magna los derechos de las comunidades afromexicanas, con el objeto de fortalecer efectivamente los marcos y medidas legales, políticas e instituciones existentes, a fin de lograr un país más igualitario, con un Estado que respete, promueva y garantice el goce y ejercicio de los derechos humanos de la población mexicana, sin ningún tipo de discriminación, impulsando su reconocimiento como parte de la composición pluricultural de la Nación, y a fin de dar cumplimiento con los compromisos internacionales contraídos en el Estado Mexicano, en materia de Derechos Humanos, como es el caso de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, misma que establece derechos fundamentales para las comunidades indígenas de todas las naciones.

Ahora bien, en este orden de ideas estimamos oportuno hacer un breve recuento de los antecedentes que existen en nuestra entidad federativa sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Así, encontramos que el 14 de marzo de 2017, se aprobó una iniciativa de Decreto promovida por el entonces Ejecutivo Estatal, para declarar al pueblo Mascogo como grupo étnico del estado de Coahuila.

Dicho Decreto además fijaba la prohibición a todas las formas de discriminación *en contra de los integrantes de la Tribu de Negros Mascogos motivada por su origen étnico o racial; reconocía a la Tribu de Negros Mascogos su unidad, idioma y derechos históricos; así como sus derechos a autodeterminarse, a la*  *libertad de decidir sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; de* *aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose en todo tiempo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, ya las leyes que deriven de éstas; la libertad de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno; la libertad de preservar y enriquecer su idioma, conocimientos y todos los elementos que constituyan su identidad cultural;**la libertad de conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, conforme al orden jurídico vigente; la libertad de elegir representantes ante los ayuntamientos en los municipios en que radiquen; el derecho a acceder, con respeto a las formas y modalidades de la propiedad y la tenencia de la tierra establecida por las leyes en la materia, entre otros.*

Más tarde, se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Siete de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, con relación a los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Antonio Nerio Maltos,del Grupo Parlamentario “Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

Dicha iniciativa tenía por objeto hacer un reconocimiento extensivo de los derechos de los pueblos indígenas, mediante una reforma constitucional local enfocada a la preservación y protección de los pueblos, etnias y comunidades consideradas como indígenas en el Estado, especialmente a los Mascogos, Kickapoos y mazahuas.

En este orden de ideas como ya se ha venido refiriendo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2 brinda su reconocimiento a las diversas etnias, Pueblos Indígenas y comunidades afromexicanas, en el sentido literal siguiente:

***Artículo 2o.*** *La Nación Mexicana es única e indivisible.*

*La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.*

*La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.*

*Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.*

*El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.*

***A.*** *Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:*

***I.*** *Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.*

***II.*** *Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.*

***III.*** *Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.*

***IV.*** *Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.*

***V.*** *Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.*

***VI.*** *Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.*

***VII.*** *Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.*

*Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.*

***VIII.*** *Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.*

*Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.*

***B.*** *La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.*

*Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:*

***I.*** *Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.*

***II.*** *Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.*

***III.*** *Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.*

***IV.*** *Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.*

***V.*** *Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.*

***VI.*** *Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.*

***VII.*** *Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.*

***VIII.*** *Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.*

***IX.*** *Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.*

*Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.*

*Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.*

***C.*** *Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.*

De lo anterior podemos concluir que resulta de suma importancia adecuar nuestra legislación a la Carta Magna, atendiendo así mismo la Recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los tratados internacionales en la materia, en búsqueda de respetar los derechos que atañen a los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas que habitan en nuestro Estado, favoreciéndolos y permitiéndoles mantener formas de gobierno en base a sus usos y costumbres, así como su religión y su concepción de la organización social.

Con la firme intención de forjar un Estado incluyente resulta de vital importancia garantizar el ejercicio efectivo de los derechos para las poblaciones indígenas coahuilenses, respetando siempre su desarrollo social y económico, así como las manifestaciones de cultura y el ejercicio de los derechos, previendo la protección de su patrimonio y riqueza cultural.

Esta dictaminadora no puede obviar que, en fecha 18 de julio de 2019 la Comunidad Kickapoo promovió demanda de Juicio Ciudadano ante el Tribunal Electoral, por omisiones legislativas tanto en la Constitución Local como en leyes secundarias.

En base a ello, de la Sentencia Interlocutoria derivada del expediente 41/2019, se desprende que:

*El dieciocho de julio, Javier Garza Anico, Zulema Garza Salazar, Ernesto Hernández Salazar y Lorena Sukue Elizondo, quienes manifestaron pertenecer a la tribu Kickapoo, presentaron demanda de Juicio Ciudadano en contra del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, por presuntas omisiones legislativas consistentes en la falta de adecuación en la Constitución Estatal y leyes secundarias conforme con lo establecido por el artículo 2º, apartado A, fracción VII de la Constitución Federal.*

*El cuatro de septiembre, el Pleno acordó reencauzar la demanda de Juicio Ciudadano presentada por los actores, como recurso de queja en materia electoral y de participación ciudadana, por constituir la materia de la litis una omisión legislativa en materia electoral atribuida al Congreso del Estado, en los términos de lo dispuesto por los artículos 102 y 103 de la Ley de Medios de Impugnación.*

*Al haber quedado acreditada la omisión legislativa en materia electoral denunciada, ante la ausencia de normativa que reconozca y reglamente los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución Estatal y leyes secundarias, consistentes en el reconocimiento de la representación indígena en el ayuntamiento, podemos concluir que estamos ante la presencia de una omisión legislativa en materia electoral de carácter absoluta por parte del Congreso del Estado, ante la inobservancia de lo ordenado en los artículos transitorios que así lo establecen.*

*Una vez acreditada la existencia de la omisión legislativa absoluta en materia electoral, resulta necesario destacar la importancia del reconocimiento de los derechos políticoelectorales de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución Estatal y leyes locales, la cual se hace palpable a partir de la necesidad de hacer efectiva la representación de la comunidad a la que pertenecen los promoventes en el ayuntamiento de Múzquiz, Coahuila.*

*Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal y los artículos 5°, 18, 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que consagran el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en todos los temas que les afecten, el Congreso del Estado de Coahuila deberá realizar un ejercicio de esta naturaleza con las comunidades y pueblos indígenas existentes en nuestro estado, con el objeto de que expongan sus puntos de vista sobre cómo debe regularse el procedimiento para la elección de su representación ante el ayuntamiento en donde resida oficialmente la comunidad o pueblo indígena de nuestro estado; la participación que los mismos han de tener una vez electos y determinar los recursos económicos y materiales mínimos necesarios para el ejercicio digno de dicha representación.*

*Lo anterior se estima necesario, en razón a que la consulta directa constituye una garantía y medio de protección del derecho a la libre determinación y participación de los pueblos y comunidades indígenas en asuntos públicos, como ha quedado evidenciado en los apartados precedentes de esta sentencia.*

***RESOLUTIVOS***

*PRIMERO. Es procedente el recurso de queja en materia electoral y de participación ciudadana promovido por los quejosos y, en consecuencia, se acredita la existencia de la omisión legislativa en materia electoral por parte del Congreso del Estado de Coahuila, al no haber incorporado a la Constitución Local y demás ordenamientos, el derecho a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas, consagrado en el artículo 2º, apartado A fracción, VII de la Constitución Federal.*

*SEGUNDO. Se ordena requerir al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que de acuerdo con su agenda legislativa, a la brevedad posible y antes de que culmine el periodo constitucional de labores de la actual legislatura local, cumpla con el mandato constitucional previsto en el artículo 2º, apartado A, fracción VII de la Constitución Federal, para lo cual deberá adecuar el marco normativo Constitucional y Legal de la entidad, en los términos de lo precisado en el apartado de efectos de la presente sentencia.*

*TERCERO. Se ordena la publicación por una sola ocasión, de la síntesis oficial de esta sentencia en uno de los periódicos de mayor circulación en el municipio de Múzquiz, Coahuila, para lo cual se deberá instruir a la titular de la Secretaría de Acuerdo y Trámite de este órgano jurisdiccional para su debido cumplimiento.*

En virtud de lo expresado, esta comisión inició con los trabajos legislativos correspondientes para dar comienzo con la armonización constitucional y legal respectiva.

En dicho sentido, en fecha 08 de julio del presente año, se aprobó un acuerdo relativo a la notificación de la sentencia pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado, en el cual se determinó emitir un oficio dirigido a la comunidad Kickapoo en el que se hizo de su conocimiento que esta comisión estaba en la mejor disposición de establecer un diálogo con ellos y escuchar su opinión con respecto a las modificaciones constitucionales y legales necesarias para armonizar nuestro marco normativo al contenido del artículo 2, apartado A fracción VII de la Constitución Federal.

A través de la mencionada comunicación, también se les solicitó que informaran sobre la posibilidad de celebrar dicha audiencia de manera virtual o presencial para estar en condiciones de fijar la hora y fecha respectiva.

Al respecto, al no recibir respuesta para acordar la hora y fecha y debido a la premura e importancia del tema, en reunión de fecha 13 de agosto del presente año, se propuso girar a las autoridades de dicha comunidad, invitación a una reunión virtual con los diputados integrantes de esta comisión.

Asimismo, dada la materia de la reforma, igualmente se planteó abrir la invitación a la comunidad de Negros Mascogos.

En base a lo precedente, se acordó que dicha reunión tuviera verificativo el día 20 de agosto a las 11:50 horas, lo que derivó de diversos trabajos legislativos, celebrando distintos ejercicios de parlamento abierto en los que se tuvo audiencia con las comunidades Kickapoo y Negros Mascogos, en la que se intercambiaron opiniones sobre las modificaciones al marco Constitucional y legal del Estado, para adecuarlo al contenido del Artículo 2, apartado A fracción VII de la Constitución General, disposición que señala entre los derechos de las comunidades indígenas el de: *“elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables”.*

Durante esta reunión, participo el C. Juan Garza, Presidente del Concilio Tradicional de la Tribu Kickapoo, el Lic. Julio Jiménez, y el Lic. Jesús Múzquiz, representantes de la comunidad Kickapoo y Dulce Herrera, representante de la comunidad de Negros Mascogos.

De tal modo, llevaron a cabo su intervención los representantes de la comunidad Kickapoo, así como la representante de la comunidad Negros Mascogos, quienes manifestaron sus propuestas e inquietudes sobre las bases mínimas que consideran que debe contener la legislación local a efecto de que se garanticen los derechos humanos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Por su parte, los integrantes de la comisión, les plantearon diversos cuestionamientos, entre los que se destacaron los siguientes:

¿Qué otros derechos humanos, además del derecho a la representación política deben estar expresamente reconocidos en nuestra Constitución? ¿Bajo qué mecanismo plantean garantizar la representación política en los Ayuntamientos? y si ¿Hay alguna legislación local que ellos consideran pudiera tomarse como referencia?

Preguntas que fueron respondidas en lo sucesivo por los representantes de las comunidades, todo ello con el objeto de llevar a cabo las reformas necesarias, garantizando el máximo respeto a sus derechos humanos.

En tenor de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto toma en consideración las iniciativas que con relación al tema se han planteado en la presente legislatura, lo plasmado en la Constitución General, como referencia lo establecido en las Constituciones de Sonora, Durango y Estado de México, y por supuesto los comentarios y opiniones de las comunidades Kickapoo y de Negros Mascogos para reconocer en la forma más amplia sus derechos.

En ese orden de ideas, y al estar conscientes de que las sociedades progresan y se transforman conllevando esto a la creación de instrumentos normativos que resulten aplicables a la realidad que se vive y con el objeto de que se atiendan cada una de las situaciones presentes de conformidad con las demandas sociales, es que consideramos que esta reforma servirá como una herramienta necesaria y viable, mediante la cual se busca regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con una visión más vinculadora, y así de esta manera estar en el camino de erradicar la discriminación.

En atención a lo precedente, quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos en la importancia de adecuar nuestra Constitución Local, con el objeto no solo de otorgarles a las comunidades Kickapoo y Negros Mascogos una representación dentro del Ayuntamiento, sino también salvaguardar y proteger sus derechos de manera expresa.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adicionan un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos, recorriendo los ulteriores, del Artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 7º. …**

**…**

El Estado reconoce a todos los pueblos indígenas que se han asentado en nuestro territorio, sin importar su origen o la época en que iniciaron su residencia,y a los tribales que descienden de poblaciones afromexicanas,a estas comunidades se les brindarán todos los apoyos necesarios para la conservación de su cultura, lengua, costumbres y formas de subsistencia, además de garantizarles todos los derechos que los tratados internacionales y las leyes nacionales confieren a las etnias mexicanas. Los pueblos Mascogo y Kickapoo gozan del reconocimiento como comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Coahuila de Zaragoza para todos los efectos legales correspondientes.

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos, las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, asegurando la unidad estatal, para:

1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
3. Elegir de acuerdo con sus normas, usos y costumbres, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.
4. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
5. Conservar y mejorar el hábitat y sus recursos naturales y preservar la integridad de sus tierras, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas.
6. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
7. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, en los términos dispuestos en la Ley, a estos representantes se les denominará Regidor o Regidora Étnico o Afromexicano.
8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes respectivas. Los indígenas tienen, en todo tiempo, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

El Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

1. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los diferentes órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán, equitativamente, las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
2. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles; definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas, e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en el Estado.
3. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
4. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
5. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a las actividades productivas, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
6. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación.
7. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
8. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio estatal como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
9. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes estatal y municipales de desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, el Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**…**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 06 del mes de mayo de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza desde el año 2011, el principio de no discriminación, como una norma de aplicación general y prevalente en el ordenamiento jurídico mexicano. De acuerdo con la académica Diana Lara Espinoza “la no discriminación es una verdadera garantía individual, consistente en el derecho subjetivo público de ser tratado en la misma forma que las demás personas, y el correlativo deber jurídico de la autoridad de garantizar un trato idéntico a quienes se encuentran en igualdad de condiciones”.*

*De ahí que, del derecho a no ser discriminado también se desprendan otros derechos como las acciones afirmativas, que buscan equilibrar las condiciones de igualdad de los grupos que social y tradicionalmente se han considerado como en situación de vulnerabilidad.*

*En términos generales, la vulnerabilidad es un estado de riesgo al que se encuentran sujetas algunas personas en determinado momento, en razón de algunas de sus características sociales, físicas, psicológicas, emocionales o de cualquier otra índole. La vulnerabilidad representa un estado de debilidad provocado por la ruptura del equilibrio, que lleva a la persona o al grupo de personas a una espiral de efectos negativos que perjudican, menoscaban o limitan de alguna forma el ejercicio pleno de sus derechos humanos.*

*De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe una amplia gama de grupos en situación de vulnerabilidad (…).*

*La protección de las personas en situación de vulnerabilidad constituye no sólo un derecho sino también una obligación a cargo de los Estados como parte de las obligaciones contraídas en el derecho internacional. En esa tesitura, el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos de Personas con discapacidad, establece los principios sobre los cuales los estados deben legislar e implementar sus políticas públicas. La norma citada sostiene:*

*“Los principios de la presente Convención serán:*

*a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;*

*b) La no discriminación;*

*c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;*

*d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;*

*e) La igualdad de oportunidades;*

*f) La accesibilidad;*

*g) La igualdad entre el hombre y la mujer;”*

*Como se puede observar, todos estos principios, están encaminados a una efectiva protección de las personas en situación de vulnerabilidad y constituyen la base para la creación de normas y la aplicación prioritaria de políticas públicas y programas sociales.*

*En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis jurisprudencial que la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, tiene “un carácter sustantivo o de hecho, el cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social”.*

*De ahí que, derivado de esta protección especial que los grupos en situación de vulnerabilidad tienen en la constitución federal, en los tratados internacionales y en la jurisprudencia del máximo tribunal del país, es que consideramos que tal protección debe incluirse en la Constitución Política del Estado de Coahuila, a fin de dar una garantía reforzada y procurar que en las políticas públicas y programas sociales se establezcan como prioritarios tales grupos. Pues como hemos podido observar en tiempos de crisis como el que actualmente vivimos, son los grupos vulnerables a los que más se les complica el ejercicio de sus derechos.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la iniciativa por la que se reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila, en materia de políticas públicas para grupos en situación de vulnerabilidad.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los grupos en situación de vulnerabilidad “*son aquellos que debido al menosprecio generalizado de alguna condición específica que comparten, a un prejuicio social erigido en torno a ellos o por una situación histórica de opresión o injusticia, se ven afectados sistemáticamente en el disfrute y ejercicio de sus derechos fundamentales. El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico o cualquier otro se encuentran en condición de riesgo, impidiendo su incorporación a la vida productiva, el desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar”*.

El artículo 1º. De la Constitución General se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá ser restringido ni suspendido, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, asimismo establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia ***favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia***, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, **tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad**. Mencionando además que el Estado deberá **prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos**, en los términos que establezca la ley.

Es así, que los Derechos Humanos nacen de la dignidad intrínseca del ser humano, por lo cual deben ser disfrutados por todos, sin ningún tipo de distinción de raza, sexo, idioma, origen social, religión, nacionalidad, capacidades, ocupación, edad, etc. y se encuentran contemplados en la ley y garantizados a través de los tratados internacionales.

Para los integrantes de esta dictaminadora, resulta esencial que en nuestro Estado se asuman las obligaciones y los deberes de respetar, proteger y promover los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Es por ello, que consideramos que la obligación de respetarlos significa que en el estado debemos trabajar para que se evite interferir en el disfrute de los derechos humanos, o que estos se vean limitados. La obligación que como legisladores tenemos de protegerlos, nos exige que frenemos los abusos de los derechos humanos en contra individuos y grupos, por lo cual consideramos que debemos de adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos tanto en el plano individual, pero sobre todo en los grupos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.

Es por ello, que coincidimos respecto a que debemos adoptar una protección especial a los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, tal y como se encuentran salvaguardados en nuestra Constitución Federal, así como en los diversos tratados internacionales, asimismo, teniendo como referencia lo que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 1a./J.25/2017 sobre la protección que tienen los grupos en situación de vulnerabilidad: *“La igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como grupos. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no solo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho sino también una de carácter sustantivo o de hecho, el cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social*”.

Es así, que al reconocer la existencia de grupos con particularidades que los hacen vulnerables, nos hace afrontar la necesidad apremiante de adoptar acciones a fin de eliminar la discriminación de la cual puedan ser objeto, ya que los grupos en situación de vulnerabilidad a lo largo de su vida se enfrentan a dificultades que los privan del pleno goce de sus derechos fundamentales. Es por ello debemos secundar las reformas que sean necesarias, así como detectar vacíos legales que priven de la debida protección de tales derechos. Sabemos que en nuestro estado, se ha llevado un proceso de reformas normativas importantes en materia de protección de derechos, pero consideramos que todavía no es una tarea terminada, ya que no basta con el reconocimiento de derechos, sino que debemos realizar acciones positivas y concretas para lograr el efectivo goce y cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se adiciona un párrafo quinto al artículo 8º y se recorren los subsiguientes de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 8º.** …

…

…

…

El Estado de Coahuila, promoverá y garantizará el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad, las cuales serán consideradas como prioritarias en las políticas públicas, legislativas y en los programas sociales que a cargo del Estado y los municipios, los cuales además, promoverán las acciones afirmativas necesarias para el correcto desarrollo de sus derechos, en los términos de las leyes respectivas.

…

…

…

…

…

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS.**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 27 del mes de mayo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*“De acuerdo con el Jurista Carlos Requena, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los ciudadanos en los tribunales, es justamente la falta de claridad y un lenguaje fácil y entendible en las resoluciones y sentencias. Este problema se origina especialmente en el hecho de que algunas élites de las ciencias, finanzas, impuestos, medicina o jurisprudencia tienen la errónea creencia de que, a mayor complejidad del lenguaje, más elevado o profundo es su mensaje.[[31]](#footnote-31)*

*Palabras como moratoria, ab initio, litis expensas, usucapión, premoriencia, sobreseimiento, litispendencia, subrogación, non bis in ídem y concusión, son apenas algunos términos con los que las personas comunes suelen toparse cuando hablan con un abogado, un juez o se enfrentan a un procedimiento legal, lo cual complica su efectivo acceso a la justicia al no comprender el lenguaje que se suele utilizar en el ámbito jurídico.*

*El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz ha sostenido que el exceso de transcripciones, su volumen y el uso de un lenguaje oscuro y, en ocasiones, arcaico son, por desgracia, las notas características de las sentencias del poder judicial.[[32]](#footnote-32) Lo cual constituye un problema para los justiciables, al no poder entender ni interpretar las resoluciones judiciales que afectan su esfera de derechos.*

*Por otro lado, el tema de la claridad en la redacción de las sentencias ha sido motivo de análisis en ponencias internacionales, de hecho, durante XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana expertos de varias naciones realizaron un estudio del lenguaje y la redacción de diversas sentencias emitidas en ocho países de América Latina, incluido México, encontrando que la mayoría contenía:*

* *Palabras de comprensión exclusiva para juristas,*
* *Expresiones anacrónicas,*
* *Frases muy técnicas y redundantes,*
* *Párrafos y frases oscuras y retóricas,*
* *Lenguajes Inentendibles y obsoletos,*
* *Excesivo uso de latín,*
* *Redacción barroca y,*
* *Demasiadas citas jurisprudenciales y doctrinarias enredadas.*

*En consecuencia y como sostiene Carlos Requena, esto ha propiciado que los movimientos ciudadanos a favor de la claridad en el lenguaje jurídico, han tomado gran fuerza e incluso en algunos otros países se han ido consolidando con el tiempo.[[33]](#footnote-33)*

*En el año 1995, la Comisión Europea de Derechos Humanos, lanzó una campaña titulada Fight The Fog (luchar contra la niebla) para promover el uso de un estilo jurídico más claro. En Suecia, desde 1976 se establecieron mecanismos para traducir leyes y determinaciones al lenguaje ciudadano. La tendencia se ha replicado en otras naciones como Australia, Reino Unido y España. En Estados Unidos surgió un movimiento denominado Plain English Language, (Lengua Inglesa Simple) donde abogados y autoridades tienen como finalidad aprender a transmitir las reglas jurídicas en favor de la ciudadanía, pero en términos coloquiales sin perder precisión técnica.[[34]](#footnote-34)*

*En México este movimiento también ha crecido dentro y fuera del poder judicial. Recientemente el Consejo de la Judicatura Federal, lanzó un documento de trabajo titulado: “Pautas para la elaboración de resoluciones”, en el que se establece que los juzgadores deben emplear un lenguaje útil, breve y eficiente que sea de fácil entendimiento para las partes de un juicio.[[35]](#footnote-35) Además, en el año 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió una sentencia en formato lectura fácil para una persona con síndrome de Asperger.[[36]](#footnote-36)*

*La necesidad de que las sentencias y resoluciones judiciales sean claras, accesibles, precisas y fáciles de entender, deriva justamente del derecho que toda persona tiene al acceso a la justicia, pues como sostiene el jurista argentino Guillermo González Zurro en su artículo titulado Sentencias y lenguaje claro: “el acceso a la justicia comprende el derecho a la información en lenguaje claro lo que implica expandir los límites herméticos del lenguaje judicial, cerrado a especialistas y excesivamente formal a una justicia más abierta y más accesible a los ciudadanos y a los usuarios”. [[37]](#footnote-37)*

*El autor además, sostiene que el lenguaje claro no es sinónimo de fácil, pues: “Mantiene la dificultad de los problemas propios del Derecho, no suprime ninguna información esencial, es preciso. Pero todo ese contenido se intenta comunicar de una manera más comprensible, más legible y clara”.*

*Finalmente, cabe destacar que en el caso de nuestro Estado, el artículo 154 de la Constitución Política de Coahuila ya establece desde el año 2013, que las sentencias deben ser claras, accesibles y precisas, lo cual constituye una garantía de acceso a la justicia, que consideramos debe ser llevada a la Constitución Federal a fin de que tal derecho quede consagrado en el máximo ordenamiento nacional y se convierta así en un mandato para todos los órganos de impartición de justicia del país.*

*No se trata de limitar ni mucho menos vulgarizar el lenguaje jurídico, sino establecer lineamientos y buenas prácticas judiciales que permitan a la ciudadanía acceder a las sentencias, resoluciones y otros documentos legales, de forma fácil y sencilla, maximizando de esta manera la protección de sus derechos de seguridad jurídica y con ello facilitarles el acceso a la justicia”.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis del contenido y alcances de la iniciativa, la cual propone una reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer en el segundo párrafo que las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, deberán ser redactadas en un lenguaje claro, preciso, adecuado, accesible y de fácil interpretación para las partes.

* Primeramente, iniciaremos por mencionar que una sentencia, es una resolución de controversias que surgen entre particulares, o entre particulares y autoridades, las cuales dictan los órganos jurisdiccionales a través de la aplicación de las normas jurídicas vigentes, bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos; con base en los hechos y pruebas que las partes en conflicto hayan exhibido para demostrar su dicho.

En este tenor, para los integrantes de esta dictaminadora, el acceso a la información jurisdiccional debe ir más allá del conocimiento de las resoluciones, toda vez que consideramos que el derecho al acceso a la justicia implica que la ciudadanía, es decir aquellos que no son expertos en materia jurídica, comprenda las decisiones de los tribunales, y para que esto sea posible, es necesario que los ejecutores del derecho emitan sentencias claras que permitan ser comprendidas por la ciudadanía en general, lo cual redundará en una mayor transparencia y certeza institucional que fomente la confianza de los tribunales.

Lo descrito en al párrafo anterior, coadyuvará a establecer un estado democrático de derecho, porque una comprensión plena de la esfera de derechos como de obligaciones, garantiza certeza, ya que no podemos ser omisos, que en la actualidad la función de los órganos jurisdiccionales ha estado envuelta en una crisis de credibilidad que requiere medidas efectivas de comunicación entre jueces y justiciables, siendo por ello, que se debe trabajar en la generación de resoluciones de fácil entendimiento, haciendo más transparente la labor jurisdiccional.

Como bien se señala en la exposición de motivos, la claridad en la redacción de las sentencias ha sido motivo de análisis en ponencias nacionales e internacionales, y en nuestra constitución local, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de Abril de 2013, el Decreto 201, una reforma al artículo 154 en la cual se estableció que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia de manera pública, gratuita, pronta, expedita y completa para tutelar de manera efectiva sus derechos fundamentales, estableciendo que dicha tutela se regirá, entre otros, por el principio del derecho a obtener una resolución fundada y motivada que ponga fin al proceso y que toda resolución deberá ser ***clara, precisa y accesible****.*

Es por ello, que secundamos la propuesta que se hace a través de la presente iniciativa, a fin de que tal derecho quede consagrado en la Constitución Federal, a fin de que se establezcan mejores prácticas judiciales que coadyuven a que la ciudadanía acceda *a las sentencias, resoluciones y otros documentos legales*, de forma fácil y sencilla, a fin de minimizar la complejidad intertextual.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

***Artículo 17****…*

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales**. Las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, deberán ser redactadas en un lenguaje claro, preciso, adecuado, accesible y de fácil interpretación para las partes.”**

…

…

…

…

…

…

…

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de Decreto que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 10 del mes de julio del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en misma fecha se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, la iniciativa de Decreto que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, con fundamento en los artículos 84, 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa de Decreto que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El ambiente en el que niñas, niños y adolescentes crecen es un elemento determinante de su desarrollo. En sus primeros años el ser humano establece vínculos y recibe estímulos que le permiten adquirir las habilidades necesarias para relacionarse con su entorno y sientan las bases de todo su crecimiento en el futuro.*

*Por ello, vivir en familia constituye un derecho fundamental de niños, niñas y adolescentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* *y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano hacen referencia a la importancia de la misma y al deber que tienen los Estados de adoptar medidas para su protección y restitución[[38]](#footnote-38).*

*Acorde a la visión de la doctrina de la situación irregular, durante siglos se creyó que las instituciones como asilos o internados eran la alternativa para niñas, niños y adolescentes que no encontraban cuidados adecuados en su familia de origen. Sin embargo, hoy se sabe con total evidencia que los procesos de institucionalización prolongados los dañan de forma severa, con efectos especialmente alarmantes en la primera infancia.*

*Una institucionalización prolongada tiene consecuencias perjudiciales graves sobre la salud y el desarrollo infantil. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de seis meses de institucionalización pueden afectar el desarrollo cognitivo, las relaciones de apego y con los pares, el desarrollo neuroendócrino y la salud mental, debido al escaso contacto físico y emocional, junto con la falta de estímulo e interacción que padecen en dichos centros[[39]](#footnote-39).*

*En definitiva, la práctica de acoger a niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social los deja expuestos a nuevas vulneraciones y a sufrir secuelas temporales o permanentes, al privarlos de crecer en un entorno familiar y en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, al que todos tienen derecho. Entre las variables que tienen impacto sobre el bienestar y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes se encuentra el tiempo de la institucionalización, la posibilidad de establecer vínculos de apego seguro con los cuidadores, la proporción y la estabilidad del personal a cargo de su cuidado cotidiano, la idoneidad de las personas que cumplen esta función, entre otras.*

*Dado el consenso sobre los efectos, en su mayoría negativos, que la vida en acogimiento residencial tiene para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos hacen referencia específica a su derecho a vivir en su propia familia, a la necesidad de agotar esfuerzos para fortalecer sus capacidades de cuidado y, en caso de que esto no sea posible, a encontrar soluciones basadas en ámbitos familiares[[40]](#footnote-40).*

*La adopción y el acogimiento familiar son formas de restituirles ese derecho a vivir, crecer y desarrollarse dentro de un núcleo familiar, que garantice la protección integral de sus derechos, de ahí la importancia de establecer procedimientos expeditos, simples y orientados siempre por su interés superior.*

*Por ello, a través de la presente iniciativa se propone la creación de la* *Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual promueve un ejercicio de armonización legislativa con las disposiciones federales, así como diversas acciones tendientes a reformular de manera integral, los procesos organizacionales y administrativos, para hacer de la adopción un proceso cada vez más ágil, transparente y efectivo.*

*La promulgación en el año 2014 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, y posteriormente de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, marcó un hito en materia de sus derechos humanos en México, una nueva forma de mirar, relacionarse e interactuar con la realidad de los niños y adolescentes como sujetos de derechos.*

*El marco jurídico de la adopción en el Estado de Coahuila de Zaragoza ha sido objeto de un constante proceso de perfeccionamiento en los últimos años, sin embargo, el vigente Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, data del día 27 de septiembre de 2013, por lo que resultaba ineludible adecuar y modernizar dicho marco jurídico a fin de garantizar los derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.*

*Algunas de las novedades del proyecto son la disminución o supresión de requisitos y exigencias innecesarias, que no solo representaban esfuerzos y gastos para las personas solicitantes, sino que no contribuían a determinar la idoneidad para convertirse en familia adoptiva, al mismo tiempo se elimina cualquier vestigio discriminatorio por razón de sexo, preferencias o condición de salud, como la exigencia de pruebas de VIH/SIDA o certificado médico de infertilidad.*

*Se precisan plazos y términos respecto a la elaboración de los estudios a las personas solicitantes, para la expedición del certificado de idoneidad y el inicio del procedimiento judicial de adopción, así como para la revocación del consentimiento otorgado ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia con propósito de adopción, lo anterior a fin de brindar seguridad y certeza jurídica a las madres y padres biológicos, a los potenciales adoptantes y en particular a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción.*

*Se amplía el objeto y atribuciones del actual Consejo Técnico de Adopciones, adicionando a las vigentes de conocer de las solicitudes de adopción y emitir opinión respecto de éstas, las relativas a la certificación y capacitación de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida, por lo que dicha modificación conlleva en congruencia un cambio en su integración y denominación a Consejo Técnico de Evaluación.*

*La incorporación como integrantes del Consejo Técnico de Evaluación, a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, dependencia encargada de formular y conducir acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas; a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, organismo encargado de promover, divulgar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio de la entidad; así como de dos personas representantes de la sociedad civil, que materializan los esfuerzos por garantizar que todas las adopciones en la entidad, sean lícitas, tengan carácter transparente y no supongan la explotación de las niñas, niños, adolescentes y las familias involucradas en las mismas, sino que les beneficien.*

*La revisión del proceso administrativo de adopción y las propuestas para su agilización y optimización no deben entenderse como la búsqueda de asignación indiscriminada e irresponsable de niñas, niños y adolescentes a cualquier núcleo familiar, sino que esta revisión se debe entender y realizar en un marco de corresponsabilidad absoluta de la sociedad y el Estado con la finalidad de proporcionar una familia a quienes carecen de ella.*

*En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, este proyecto ha sido elaborado con un enfoque basado en derechos humanos priorizando el principio pro-niño, es decir, con consideración prioritaria de atender al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como, eliminando cualquier disposición jurídica que pudiera admitir interpretaciones discrecionales o alejadas a dicho principio rector.*

*Mediante esta propuesta se busca también regular de forma clara y precisa la figura de la Familia de Acogida, establecida en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de enlazar los conceptos y construir los medios necesarios para su aplicación.*

*Adicionalmente, se establece un apartado de medios de impugnación como mecanismos a disposición de los particulares que se consideren agraviados en su esfera de derechos e intereses jurídicos, que les permita inconformarse contra el acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fueron expedidos.*

*De esta forma, la presente iniciativa permitirá responder al compromiso gubernamental establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2017–2023, en su estrategia 2.9.3, la cual contempla el “Garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes que no están sujetos a la patria potestad a vivir en familia de manera permanente, a fin de lograr su pleno desarrollo e instalarlos en una familia idónea que satisfaga sus necesidades y garanticen sus derechos fundamentales”[[41]](#footnote-41).*

*Es importante resaltar que la presente iniciativa no generará impacto presupuestario alguno, puesto que no contempla la creación de puestos, plazas o áreas, además de que dispone que la participación en el Consejo Técnico de Evaluación será de carácter honorario.*

*Así mismo, resulta necesario adecuar también la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de asegurar el cumplimento y operatividad de esta nueva normativa.*

*Expuesto lo anterior, esta nueva ley tiene como finalidad definir claramente las funciones y atribuciones de los actores involucrados en procesos de protección e inclusión de niñas, niños y adolescentes en una familia, para que, tanto servidoras y servidores públicos como la ciudadanía en general puedan tener certeza jurídica en la realización de sus atribuciones y trámites, pero, sobre todo se pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes sean incorporados a familias que les brinden una vida sana, digna y feliz, para su desarrollo integral.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, nos abocamos al estudio de la iniciativa que crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y que además, plantea reformar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, y para un mejor proveer realizamos un cuadro, a fin de analizar el contenido de la nueva ley; asimismo realizamos un comparativo de lo que se pretende reformar de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, contrastándola con la ley vigente.

|  |  |
| --- | --- |
| ***LEY DE ADOPCIONES Y ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA*** | |
| **TÍTULO PRIMERO**  **DISPOSICIONES PRELIMINARES** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO** | **Su aplicación:** corresponderá al Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.  **El objeto:** garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en materia de adopción y acogimiento familiar.  De conformidad a lo establecido en:  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.  En los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.  En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  La Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.  La Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.  El Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  Así como en los demás ordenamientos legales aplicables.  Establece que podrá ser adoptante o familia de acogida toda persona que reúna los requisitos que se establecen en Ley, cualquiera que fuese su origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, religión, estado civil, orientación y preferencia sexual, identidad y expresión de género.  Determina la prohibición de cualquier cobro por concepto de tramitación de adopciones, acogimiento pre-adoptivo y familias de acogida en los casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en acogimiento residencial en centros de asistencia social.  Asimismo en este capítulo se enlista elglosario que permite identificar de forma unívoca los conceptos contenidos en la ley. |
| **TÍTULO SEGUNDO**  **DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN** | |
| **CAPÍTULO I**  **DE LOS PRINCIPIOS RECTORES** | **Establece como** principios rectores en el cumplimiento, interpretación y aplicación de esta Ley los contemplados en:  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.  Los tratados internacionales en materia de adopción y protección a la infancia.  La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  La Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que atiendan a la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. |
| **CAPÍTULO II**  **DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**  **SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN** | Establece quelas autoridades involucradas en el proceso integral de adopción, observarán lo siguiente:   1. Garantizar la plena observancia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez; 2. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes sean escuchados de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; 3. Garantizar que quienes consientan la adopción, así como quienes la soliciten, reciban una asesoría integral que les permita conocer los alcances jurídicos, psicoafectivos, familiares y sociales de la misma; 4. Implementar las acciones necesarias para garantizar que la adopción no sea motivada por la obtención de beneficios económicos para quienes participen en ella; 5. Garantizar que las niñas, niños y adolescentes gocen de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables. |
| **CAPÍTULO III**  **DE LAS PROHIBICIONES EN LA ADOPCIÓN** | Establece como prohibiciones las siguientes:   1. La promesa de adopción durante el proceso de gestación; 2. Que las personas solicitantes de adopción tramiten simultáneamente dos o más procedimientos de adopción; 3. La adopción privada, en los términos establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza; 4. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito; 5. El contacto de la madre, padre o ambos padres, que entregaron en adopción a una niña, niño o adolescente, con las personas solicitantes de adopción, la persona que se pretende adoptar o con cualquier persona involucrada en la adopción, con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando la persona adoptada desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad; 6. La obtención directa o indirecta de beneficios materiales o de cualquier índole, por la familia de origen o extensa de la persona que se pretende adoptar, o por cualquier persona, así como por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción; 7. Que las personas titulares o las que presten sus servicios en los centros de asistencia social, permitan visitas o cualquier tipo de relación que pudieran generar vínculos afectivos o de apego entre las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción y las personas que pretendan adoptar, sin autorización del Consejo; 8. Que la PRONNIF de inicio al procedimiento judicial, sin la previa expedición del certificado de idoneidad o la asignación del Consejo; 9. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. |
| **CAPÍTULO IV**  **DEL CONSENTIMIENTO OTORGADO** **ANTE**  **LA PRONNIF CON PROPÓSITO DE ADOPCIÓN** | Establece los supuestos en que deberán concurrir una madre, padre o ambos padres de una niña, niño o adolescente, que no pudieran o no estuvieran en las condiciones necesarias para la crianza de éste, para poder hacer la entrega voluntaria del mismo a la PRONNIF con el propósito de que sea dado en adopción, siendo los siguientes:   1. Haya sido registrado y se presentare en ese acto el acta de nacimiento; 2. Se exhiba identificación oficial de quien se ostenta como madre, padre, o ambos, o por quien ejerce la tutela o patria potestad; 3. Se corrobore que han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas por la PRONNIF, de las consecuencias legales que la adopción implica, del consentimiento otorgado y en particular de la ruptura de los vínculos jurídicos entre la niña, niño o adolescente y su familia de origen; 4. Que el consentimiento haya sido otorgado libremente, sin que medie pago o compensación alguna; 5. Que el consentimiento de la madre, padre o ambos, sea otorgado cuando menos diez días después del parto.   Determina que las personas titulares de la Dirección de Adopciones y de las Subprocuradurías Regionales de la PRONNIF estarán investidas de fe pública con el objeto de recabar el consentimiento para la adopción, debiéndose levantar un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos, en la cual conste:  La entrega de la niña, niño o adolescente.  El propósito con el que se hizo la misma.  La manifestación expresa de la situación familiar y los motivos que originan tal entrega.  Anexando además al acta la documentación requerida.  Establece que no procederá la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia adoptiva hasta transcurrido un término de treinta días naturales, contados a partir del otorgamiento del consentimiento, en el cual la madre o el padre biológico, o cualquiera de ellos en el caso de que haya sido otorgado conjuntamente, podrán solicitar la revocación del consentimiento otorgado ante la PRONNIF, la cual, en caso de ser procedente, levantará un acta circunstanciada asentando tal reintegración al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre que ello no represente un riesgo al interés superior de la niñez.  Una vez transcurrido el término señalado, sin que se revoque el consentimiento otorgado, y previa la satisfacción de los requisitos señalados, se podrá asignar a la niña, niño o adolescente en acogimiento pre-adoptivo. |
| **TÍTULO TERCERO**  **DEL CONSEJO TÉCNICO DE EVALUACIÓN** | |
| **CAPÍTULO I**  **DISPOSICIONES GENERALES** | Habrá un Consejo como órgano colegiado interdisciplinario, técnico y de opinión, su objeto será conocer, analizar, valorar y dictaminar las solicitudes de adopción y acogimiento familiar en relación a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo acogimiento residencial en un centro de asistencia social como una medida especial de protección, así como de emitir opinión respecto de las adopciones promovidas ante el Poder Judicial del Estado de las niñas, niños y adolescentes no institucionalizados.  Estará encargado de garantizar los derechos de las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción, así como de procurar su debida asignación e integración a personas solicitantes de adopción que resulten idóneas, para que les proporcionen las condiciones necesarias para brindarles una crianza positiva, un sano desarrollo y el máximo bienestar posible.  Estará integrado por:   1. Una presidencia, a cargo de la persona titular de la Dirección del Sistema DIF; 2. Una secretaría técnica, a cargo de la persona titular de la PRONNIF; 3. Una secretaría auxiliar, a cargo de la persona titular de la Dirección de Adopciones; 4. Una persona representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 5. Una persona representante del Sistema DIF, que por las funciones que desarrollen, así como por sus conocimientos especializados en psicología, trabajo social, derecho, docencia o medicina, sean designados por la persona titular de la presidencia; 6. Una persona representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de donde sean originarios o atendidos las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción; 7. La persona titular del centro de asistencia social donde se encuentren acogidas las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción respecto de quien se propondrá asignación de familia; 8. Dos personas representantes de las asociaciones civiles constituidas por adoptantes o adoptados, o ambos, cuyo objeto social sea promover la institución de adopción o del acogimiento familiar, así como asesorar, orientar y brindar apoyo a sus integrantes, designados conforme a la convocatoria que el Consejo Técnico de Evaluación emita para tal efecto.   Establece que todas las personas integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, y pudiendo nombrar en sus ausencias, a sus respectivos suplentes, quienes contarán con voz y voto, y deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior al de la persona titular que suplan, cuya designación se hará a través de un escrito dirigido a la secretaría técnica.  En relación a los acuerdos y resoluciones del mismo, se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes en la sesión, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad.  Los cargos del Consejo serán honorarios, y se regirán con base a los principios de legalidad, debido proceso, honradez, confidencialidad, celeridad procesal e interés superior de la niñez.  Como invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, con derecho a voz, pero sin voto, podrán ser la persona titular de la Presidencia Honoraria del Sistema DIF, así como una persona representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.  La persona titular de la presidencia podrá convocar con voz, pero sin voto, a personas expertas en materia de adopción o acogimiento familiar, académicas o integrantes de la sociedad que se consideren necesarias, para que expresen criterios que orienten la toma de decisiones del Consejo.  Las facultades y obligaciones del Consejo serán las siguientes:   1. Fomentar la cultura de la adopción y el acogimiento familiar de las niñas, niños y adolescentes, en especial los de atención prioritaria; 2. Proponer políticas, acciones y lineamientos en materia de adopción y acogimiento familiar; 3. Realizar las sesiones necesarias para el cumplimiento de su objeto; 4. Verificar que las solicitudes de adopción y certificación estén debidamente requisitadas en los términos de las disposiciones aplicables; 5. Analizar los estudios de psicología, trabajo social y evaluación médica practicados a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida; 6. Determinar, con base en las evaluaciones respectivas, las características de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida; 7. Analizar los expedientes de solicitud de adopción o de certificación de familia de acogida propuestos por la secretaria técnica del Consejo, atendiendo en todo momento al interés superior de la niña, niño o adolescente; 8. Aplicar los criterios para asignación de una familia adoptiva a una niña, niño o adolescente; 9. Verificar la adaptación de la niña, niño o adolescente con la familia asignada y en su caso levantar el acta respectiva, previamente al procedimiento judicial de adopción; 10. Emitir opinión respecto de las adopciones promovidas ante el Poder Judicial del Estado de las niñas, niños y adolescentes no institucionalizados; 11. Solicitar la revaloración de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida; 12. Determinar la baja de las solicitudes de adopción; 13. Conocer y analizar los resultados de las convivencias autorizadas; 14. Guardar estricta confidencialidad sobre todos los asuntos de su competencia; 15. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones aplicables. |
| **CAPÍTULO II**  **DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS** | En este capítulo se mencionan las funciones tanto de la persona titular de la presidencia, como de la secretaría técnica y de los vocales los cuales tendrán las funciones siguientes:  Asimismo, establece que el Consejo sesionará bimestralmente de manera ordinaria, y de forma extraordinaria cuando sea necesario, en atención a la importancia y urgencia de los asuntos que deban tratar, a convocatoria de la persona titular de su presidencia, o en su caso, de la secretaría técnica.  Se señalan los casos en que las personas integrantes del Consejo estarán impedidas por lo que deberán de excusarse por escrito.  Establece que la PRONNIF impartirá el curso de capacitación para madres y padres adoptivos a las personas solicitantes de adopción, informándoseles los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales de la misma, y una vez concluido el curso, se les hará entrega de la constancia de participación a quienes hayan acreditado el mismo, momento a partir del cual las personas solicitantes de adopción contarán con sesenta días naturales para la integración del expediente administrativo de adopción. |
| **TÍTULO CUARTO**  **DEL PROCESO DE ADOPCIÓN** | |
| **CAPÍTULO I**  **DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**  **SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN** | Se requiere que para que las niñas, niños o adolescentes sean susceptibles de adopción, deberá estar resuelta su situación jurídica, a través de:   1. Sentencia ejecutoriada de juicio especial de pérdida de patria potestad; 2. Consentimiento expreso otorgado por la madre, padre o ambos padres, de conformidad con la legislación aplicable; 3. Tratándose de niñas, niños y adolescentes expósitos, abandonados o en acogimiento residencial en un centro de asistencia social, y de los cuales nadie ejerza la patria potestad, cuando haya transcurrido el término establecido en el artículo 69 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza. |
| **CAPÍTULO II**  **DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN** | En este capítulo se establecen las fases del procedimiento administrativo quelas personas que deseen adoptar, además de cumplir con los requisitos de adopción establecidos en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, deberán iniciar ante la PRONNIF, así como los documentos que deberán exhibir en original o copia certificada.  También se señala que en caso de que las personas solicitantes de adopción no cumplan con todos los requisitos señalados o los mismos presenten alguna deficiencia, se prevendrá a los interesados para que en un término que no exceda de treinta días hábiles tratándose de adopciones nacionales y noventa días hábiles en caso de adopciones internacionales, los subsanen, en caso contrario se desechará la solicitud y se procederá a la baja documental.  En el caso de las personas solicitantes de adopción extranjeras deberán acreditar su legal estancia en el país, así como su calidad migratoria y permiso para tramitar el procedimiento de adopción emitido por las autoridades migratorias correspondientes, debiendo cumplir además con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la Ley en comento, debiendo presentar sus actas debidamente apostilladas o legalizadas.  Una vez presentada la solicitud, acompañada de los documentos requeridos, se programará una entrevista conjunta entre el equipo psicosocial y las personas solicitantes de adopción con la finalidad de explorar la historia familiar y en su caso de pareja, la motivación para la adopción y las expectativas ante la misma, así como el apoyo social del que disponen y los demás criterios a tomar en cuenta para su ulterior valoración.  Realizada la entrevista inicial, las personas solicitantes de adopción serán canalizadas a las áreas de trabajo social y psicología, para que se realicen los estudios correspondientes a fin de completar su expediente.  Establece que las autoridades podrán suspender el procedimiento administrativo de adopción cuando tengan razones para creer que ésta se realiza en contravención de lo establecido por la presente Ley. |
| **CAPÍTULO III**  **DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD** | Se señala que una vez integrado el expediente de las personas solicitantes de adopción con los requisitos establecidos y previa valoración psicológica, económica y de trabajo social necesarias para determinar su aptitud, la PRONNIF emitirá el certificado de idoneidad en un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de los resultados de los estudios antes referidos, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el expediente o que no cuente con suficientes elementos, supuestos en los que se podrá ampliar el plazo hasta por treinta días naturales.  Una vez emitido el certificado de idoneidad las personas solicitantes de adopción se integrarán en la lista de espera.  Las personas solicitantes de adopción no deberán tener contacto con las niñas, niños o adolescentes que pretendan adoptar, ni con sus padres o las personas que los tengan bajo su cuidado, hasta en tanto cuenten con un certificado de idoneidad y se autorice el inicio de convivencias, con excepción de los casos en que la adopción sea entre familiares.  Tratándose de adopciones internacionales, las personas solicitantes de adopción deberán obtener el certificado de idoneidad emitido por la autoridad central de su país de residencia.  En los casos que la PRONNIF resuelva la no emisión del certificado de idoneidad de las personas solicitantes de adopción, se podrá presentar una nueva solicitud transcurrido un año contado a partir de la notificación de dicha resolución.  El informe de adoptabilidad que emitan la PRONNIF deberá contener, por lo menos, los siguientes datos sobre la niña, niño o adolescente susceptible de adopción:   1. Nombre completo; 2. Lugar y fecha de nacimiento; 3. Edad; 4. Sexo; 5. Media filiación, así como los antecedentes familiares; 6. Situación jurídica; 7. Condición e historia médica; 8. Características psicológicas, así como necesidades afectivas y emocionales; 9. Evolución pedagógica; 10. Requerimiento de atención especial; 11. Información sobre los motivos por los cuales no se pudo encontrar a una familia nacional que pudiera adoptar a la niña, niño o adolescente, tratándose de adopciones internacionales; 12. Opinión de la niña, niño y adolescente en relación a la adopción, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez.   La PRONNIF podrá solicitar a los centros de asistencia social que tengan bajo su cuidado a la niña, niño o adolescente, cualquier información adicional a la prevista que considere necesaria para salvaguardar el interés superior de la niñez, misma que deberá incluirse en el informe de adoptabilidad. |
| **CAPÍTULO IV**  **DE LOS ESTUDIOS QUE DEBEN REALIZARSE LAS**  **PERSONAS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN Y DE CONSTITUCIÓN**  **COMO FAMILIA DE ACOGIDA** | Establece que la PRONNIF deberá practicar estudios socioeconómicos a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, los cuales deberán contener, por lo menos, lo siguiente:   1. Datos generales; 2. Situación laboral; 3. Composición familiar; 4. Situación económica y patrimonial; 5. Características de la vivienda y el entorno; 6. Hábitos.     Las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida deberán realizarse, a través de instituciones públicas del sistema de salud, los siguientes estudios médicos:   1. Grupo sanguíneo y Factor Rhesus (Rh); 2. Biometría hemática; 3. Química sanguínea; 4. Examen general de orina.   El certificado médico deberá autenticar la existencia de una situación aceptable de salud física de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, que no conlleve discapacidad grave o severa, o un riesgo inminente de muerte.  En caso de requerirlo, el equipo psicosocial podrá consultar al personal médico que expidió el certificado a fin de aclarar su contenido.  Determina que la PRONNIF deberá practicar estudios psicológicos a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, los cuales deberán contener, por lo menos, las siguientes baterías de pruebas:   1. Entrevista psicológica, en el caso de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos, la entrevista deberá ser en pareja; 2. CUIDA (Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores); 3. 16 PF-5 (16 Factores de Personalidad de Cattell); 4. MSI-R (Inventario de Satisfacción Marital Revisado), en el caso de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos; 5. SENA (Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes); 6. MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional de Mayer-Salovey-Caruso); 7. MMPI-2 (Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota); 8. Cualquier otro que se requiera para acreditar la viabilidad psicológica de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida.   Todas las pruebas tendrán una vigencia de seis meses a partir de la notificación de su resultado.  Asimismo en este capítulo se consideran impedimentos de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, que pueden afectar el sano desarrollo de niñas, niños o adolescentes, los siguientes:   1. Cualquier patología o rasgos de personalidad que pongan en riesgo a las niñas, niños o adolescentes; 2. La inestabilidad emocional de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida; 3. La inestabilidad o poca solidez de pareja, en el caso de que las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos; 4. La violencia familiar; 5. La incapacidad de atenderse a sí mismo o cuidar de otros; 6. La escasa adaptación al medio o contar con pocas redes de apoyo social o familiar; 7. La motivación o razón para adoptar no favorezca el interés superior de la niña, niño o adolescente.   En el supuesto de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida presenten uno o más impedimentos que a juicio de la PRONNIF puedan ser subsanados, la misma deberá notificar en qué consisten, así como las recomendaciones y canalizaciones que estimen pertinentes para que los pueda subsanar en el plazo que se les indique para tal efecto.  Durante el referido plazo, se tendrá por suspendido temporalmente su procedimiento y antes de su vencimiento, las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, deberán de comparecer nuevamente ante la PRONNIF, para acreditar que se resolvió satisfactoriamente el impedimento, para que esto sea verificado y en su caso se reactive el mismo.  Si las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida no cumplen en tiempo y forma las recomendaciones, se dará de baja su solicitud por falta de interés. |
| **CAPÍTULO V**  **DE LA ASIGNACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES** | Se establece que la PRONNIF convocará al equipo psicosocial para analizar el expediente de la niña, niño o adolescente susceptible de adopción y de quienes conforman la lista de espera de personas solicitantes de adopción, con la finalidad de seleccionar candidatos idóneos, de acuerdo a las necesidades de la niña, niño o adolescente.  El análisis se basará en el grado de compatibilidad existente entre las necesidades y características de la niña, niño o adolescente con las personas solicitantes de adopción, para el cual se considerará la edad, el sexo, la personalidad, las expectativas de desarrollo social y económico, algún tipo de discapacidad, el diagnóstico médico, así como cualquier otro factor que favorezca la compatibilidad entre las personas solicitantes de adopción y la niña, niño o adolescente.  La PRONNIF presentará ante el Consejo, las razones que justifican las propuestas de asignación de las familias para cada niña, niño o adolescente.  El Consejo elegirá, entre las propuestas que le fueron presentadas, a las familias que considere que, en base al interés superior de la niñez, son las más adecuadas para la niña, niño o adolescente, estableciendo un orden de prelación entre estas y en su caso autorizará el inicio del periodo de convivencias pre-adoptivas.  La PRONNIF informará a las personas solicitantes de adopción que les ha sido asignado una niña, niño o adolescente y los citará a una reunión con la finalidad de conocer su opinión.  En la reunión, en base al expediente de la niña, niño o adolescente, las personas solicitantes de adopción recibirán información médica y psicológica, así como del desenvolvimiento y comportamiento de la niña, niño o adolescente en el centro de asistencia social en que se encuentra.  Una vez que conozcan las circunstancias generales y que hubieren expresado sus inquietudes y dudas, las personas solicitantes de adopción podrán aceptar o declinar la asignación propuesta.  En caso de que las personas solicitantes de adopción rechacen a un niño, niña o adolescente sin justificación suficiente, una vez efectuada la asignación y hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia de adopción, la PRONNIF propondrá al Consejo su baja definitiva de la lista de espera. |
| **CAPÍTULO VI**  **DE LAS CONVIVENCIAS PRE-ADOPTIVAS** | La PRONNIF podrá aprobar convivencias internas, mismas que siempre se llevarán a cabo en las instalaciones del centro de asistencia social en el que se encuentren bajo acogimiento residencial las niñas, niños o adolescentes, las cuales deberán ser supervisadas por personal de psicología de dichas instituciones o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de donde sean originarios o atendidos las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción, quienes deberán emitir los informes correspondientes, los cuales se integrarán al expediente de las personas susceptibles de adopción.  El personal de psicología que participe en la supervisión deberá contar con autorización y registro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  La PRONNIF elaborará el programa de convivencias internas, acorde a las necesidades de cada niña, niño o adolescente y posibilidades de las personas solicitantes de adopción, con un mínimo de tres convivencias, las cuales se desarrollarán en un plazo que no excederá de veinte días naturales, para estar en aptitud de determinar si existe compatibilidad, empatía e identificación; el número y modalidad de las convivencias dependerá de las necesidades específicas y la edad de cada niña, niño o adolescente, al final de éstas, emitirá un informe que será notificado al Consejo.  El Consejo podrá aprobar las convivencias externas una vez analizados los informes del periodo de adaptación remitidos por los especialistas que supervisaron las convivencias internas.  Las primeras convivencias externas, inicialmente no podrán tener una duración que exceda de cuatro horas, las cuales podrán incrementar hasta alcanzar un fin de semana de convivencia, sin pernocta, de acuerdo a las recomendaciones del área de psicología del centro de asistencia social.  En el transcurso de las convivencias internas como externas, el área de psicología puede realizar recomendaciones para mejorar estas.  El Consejo valorará los informes respecto de las convivencias dentro de los centros de asistencia social y determinará la viabilidad y el programa de convivencias externas, con un mínimo de tres convivencias, que deberán realizarse inicialmente durante el día sin considerar pernocta, en un plazo que no excederá de veinte días naturales.  Si de los informes de las convivencias pre-adoptivas se determina que no se consolidaron las condiciones de adaptación entre niñas, niños y adolescentes y las personas solicitantes de adopción, la secretaría técnica informará al Consejo para que resuelva lo conducente y analice la viabilidad de una nueva asignación, atendiendo al interés superior de la niñez.  En caso de ser favorables las convivencias externas y una vez que se haya generado un vínculo afectivo entre la niña, niño o adolescente y las personas solicitantes de adopción, se presentará un informe del periodo de adaptación al Consejo para que se pronuncie sobre el acogimiento pre-adoptivo, para lo cual deberá considerar los criterios establecidos en el artículo 389 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.  Las convivencias internas o externas podrán ser limitadas o suspendidas en cualquier momento por la autoridad correspondiente, cuando resultare necesario, tomando en consideración las recomendaciones efectuadas por los centros de asistencia social respectivos y los resultados de los informes del periodo de adaptación. |
| **CAPÍTULO VII**  **DEL ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO** | El acogimiento pre-adoptivo es una modalidad de cuidado alternativo a través de la cual las personas solicitantes de adopción acogen en su seno a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y asumen todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.  Para la designación del acogimiento pre-adoptivo, se deberá contar con:   1. Certificado de idoneidad expedido por la PRONNIF u otra Procuraduría de Protección a favor de las personas solicitantes de adopción; 2. Informe de adoptabilidad; 3. Informe del periodo de adaptación; 4. Asignación del Consejo.   A partir del inicio del periodo de acogimiento pre-adoptivo, la PRONNIF promoverá en un plazo que no excederá de treinta días hábiles el procedimiento judicial de adopción de conformidad con la legislación aplicable.  La PRONNIF deberá dar acompañamiento al proceso de adaptación e integración familiar, mediante visitas de seguimiento y orientación a través el equipo psicosocial, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.  Una vez iniciado el procedimiento judicial de adopción, las personas adoptantes no podrán reintegrar a la niña, niño o adolescente, sino solo mediante petición expresa ante la autoridad judicial que conozca de la adopción.  Una vez ejecutoriada la sentencia que declaró la procedencia de la adopción, la PRONNIF dará por concluido el procedimiento administrativo. |
| **TÍTULO QUINTO**  **DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DISPOSICIONES GENERALES** | La adopción internacional se rige por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, en particular por la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, y en lo conducente, por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil Federal y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.  La PRONNIF es la autoridad competente para expedir el certificado de idoneidad, en los casos de adopciones internacionales, en donde se haga constar que las personas ciudadanas mexicanas o extranjeras residentes permanentes en el Estado, que pretenden adoptar en el extranjero, son aptas para ello. |
| **TÍTULO SEXTO**  **DEL SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO** | El seguimiento post-adoptivo a la familia deberá efectuarse con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez.  En los reportes del seguimiento realizados por la PRONNIF, se deberá apreciar la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes en su entorno, los cuales serán remitidos a la autoridad judicial. La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.  En caso de adopción internacional, el seguimiento post-adoptivo será realizado por la autoridad central competente. |
| **TÍTULO SÉPTIMO**  **DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR** | |
| **CAPÍTULO I**  **DE LAS BASES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO** | Las personas interesadas en constituirse como familia de acogida, deberán presentar ante la PRONNIF una solicitud para obtener su certificación.  Dicha solicitud contendrá los datos generales de la familia, domicilio, dirección para oír y recibir notificaciones dentro del Estado, teléfono, correo electrónico u otros medios de contacto.  Una vez presentada la solicitud, la PRONNIF convocará a las personas interesadas a una reunión informativa de inducción grupal con otras familias interesadas.  Los requisitos para la expedición de la certificación, en lo conducente, serán los mismos que para la emisión del certificado de idoneidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la presente Ley.  El Consejo podrá solicitar información complementaria cuando se considere necesaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez.  En caso de que la solicitud sea promovida por personas extranjeras residentes en el Estado, a fin de integrar debidamente su solicitud, además de los requisitos señalados, deberán acreditar su residencia permanente en los términos de la Ley de Migración.  Para la integración del expediente, la PRONNIF deberá:   1. Verificar que las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la presente Ley, y exhiban la información adicional que el Consejo considere necesaria; 2. Realizar la investigación correspondiente a fin de cerciorarse que la información proporcionada por las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida es fidedigna.   El Sistema DIF y la PRONNIF, como parte del otorgamiento de la certificación para constituirse en familia de acogida, impartirán un curso de capacitación a las personas que serán las responsables de la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente que se acogerá, en el cual se les informará los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales del cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de las niñas, niños y adolescentes, así como el desapego que deberán guardar y la concientización de la temporalidad de su acogimiento en dicha familia.  El Consejo definirá los objetivos y contenidos del curso de capacitación. |
| **CAPÍTULO II**  **DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN** | Una vez que las personas interesadas cumplan con los requisitos para ser consideradas como familia de acogida, el Consejo a través de la secretaría técnica, expedirá la certificación correspondiente en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la celebración de la sesión del Consejo en la que se apruebe su emisión.  Todas las certificaciones otorgadas se deberán de inscribir en el registro que para tal efecto se instituya por la PRONNIF.  La certificación tendrá una vigencia de dos años contados a partir de su expedición, transcurrido dicho término y en caso de que se desee su renovación, se deberán actualizar los documentos necesarios y las valoraciones psicosociales.  La PRONNIF podrá solicitar al Consejo la cancelación de la certificación otorgada cuando se advierta que la información proporcionada en el informe mensual al que se hace referencia en la fracción V del artículo 74 de la presente Ley es falsa, o cuando las condiciones en las que se proporciona el acogimiento familiar vulneren o coloquen en situación de riesgo los derechos de la niña, niño o adolescente, sin perjuicio de las acciones que se pudieran emprender para la salvaguarda o restitución de los mismos.  En caso de cancelación, la PRONNIF asentará dicha anotación en el registro correspondiente. |
| **CAPÍTULO III**  **DE LA ASIGNACIÓN EN FAMILIA DE ACOGIDA** | La asignación de una familia de acogida a niñas, niños y adolescentes, sólo podrá otorgarse a las familias que cuenten con certificación vigente.  Para la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia de acogida, se deberá considerar que entre éstos y quienes serán las personas responsables de su guarda y custodia, exista una diferencia de edad de por lo menos diecisiete años. En casos excepcionales y a juicio de la PRONNIF, el requisito de diferencia de edad, podrá dispensarse en atención al interés superior de la niña, niño o adolescente.  Una vez que la niña, niño o adolescente, se encuentre en posibilidad de ser integrado a una familia de acogida, la PRONNIF seleccionará la más idónea dentro del registro que se lleve para tal efecto.  Las características de la niña, niño o adolescente que requieren el acogimiento y sus necesidades, así como su interés superior y la prevalencia de sus derechos, serán la base para la selección de la familia.  Una vez realizada la designación, la familia de acogida deberá comunicar por escrito su aceptación ante la PRONNIF.  Una vez seleccionada la familia, la PRONNIF solicitará la autorización judicial de conformidad con lo establecido por el artículo 397 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.  Autorizada la designación por la autoridad judicial, se entregará a la familia de acogida, el oficio de asignación y el informe que contenga los datos generales de la niña, niño o adolescente, su ficha médica, la fecha a partir de la cual se asigna, así como la vigencia de la asignación y la demás información necesaria.  La familia de acogida tendrá las siguientes obligaciones respecto a las niñas, niños o adolescentes:   1. Brindar irrestricto respeto a sus derechos humanos; 2. Proveer de una alimentación sana; 3. Cuidar de su salud en todo momento; 4. Brindar el acceso a la educación, así como a las actividades recreativas que sean posibles para su desarrollo físico y emocional; 5. Rendir un informe mensual a la PRONNIF, además de informar sobre cualquier incidencia que se presente; 6. Guardar confidencialidad; 7. Permitir al personal autorizado de la PRONNIF el acceso a todas las áreas del domicilio, con la finalidad de realizar visitas de supervisión, así como presentar ante la misma las constancias escolares, médicas y demás documentación que se considere necesaria; 8. Abstenerse de trasladar a las niñas, niños o adolescentes fuera de la ciudad, sin autorización por escrito de la PRONNIF; 9. Reincorporar a las niñas, niños o adolescentes al término del acogimiento o ante el requerimiento de la PRONNIF; 10. Dar seguimiento a las canalizaciones que con motivo del plan de restitución de derechos de la niña, niño o adolescente emita la PRONNIF; 11. Las demás que se consideren necesarias para el sano desarrollo y bienestar de las niñas, niños o adolescentes. |
| **CAPÍTULO IV**  **DE LA TERMINACIÓN DEL ACOGIMIENTO** | La PRONNIF podrá dar por terminada la asignación, en los siguientes supuestos:   1. En caso de que se resuelva la situación jurídica de la niña, niño o adolescente; 2. Si de los seguimientos que se realicen se advierte que no se cumplieron las condiciones de adaptación; 3. En caso de presentarse algún tipo de violación a los derechos humanos de la niña, niño o adolescente; 4. En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo anterior; 5. Los demás que sean necesarias para la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. |
| **CAPÍTULO V**  **DEL REGISTRO DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA** | El registro de las familias de acogida a cargo de la PRONNIF, deberá contener, por lo menos, la información siguiente:   1. Datos generales de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida; 2. Domicilio de la familia; 3. Número de dependientes económicos en la familia; 4. Los ingresos y egresos mensuales de la familia; 5. La certificación emitida por el Consejo; 6. El perfil y número de niñas, niños o adolescentes que, en su caso, podrían acoger. |
| **TÍTULO OCTAVO**  **DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** | Procede el recurso de reconsideración en contra del acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido.  El recurso de reconsideración se tramitará únicamente por las personas interesadas ante la PRONNIF, quien deberá resolverlo conforme a derecho.  El plazo para interponer el recurso de reconsideración será de tres días hábiles contados a partir de la emisión del acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido.  Los requisitos del recurso de reconsideración son los siguientes:   1. Se deberá interponer por escrito precisando el nombre y domicilio de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida; 2. Señalar a la autoridad que emitió el acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido; 3. Expresar los agravios que cause el acuerdo señalado en la fracción anterior; 4. Ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; 5. Firmar en forma autógrafa o estampar huella digital de las personas que lo promuevan.   Dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la admisión del recurso, se desahogarán las pruebas que hayan estimado pertinentes las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida con relación a los agravios expuestos.  Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, la PRONNIF emitirá la resolución que corresponda en un plazo de cinco días hábiles y se procederá a su debida notificación.  Las resoluciones que se emitan con motivo del recurso de reconsideración serán definitivas y en su contra no procederá recurso alguno. |
| **TÍTULO NOVENO**  **DEL ARCHIVO, BASE DATOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN** | |
| **CAPÍTULO ÚNICO**  **DISPOSICIONES GENERALES** | La PRONNIF contará con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, las adopciones concluidas y sus seguimientos.  Para garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, se creará un archivo documental y digital de los expedientes que se hayan originado en el proceso de adopción y de acogimiento familiar, el cual estará a cargo de la PRONNIF, quien observará los principios de confidencialidad y reserva, debiendo proporcionar la información a la persona adoptada, cuando este desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad.  Las niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el consentimiento de las personas adoptantes, y podrán hacerlo siempre que ello atienda al interés superior de la niñez.  El archivo y base de datos a que se refiere el artículo anterior deberá conservarse por el periodo acordado por el Comité Técnico Documental de la PRONNIF atendiendo a lo establecido en la Ley General de Archivos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA** | |
| **LEY VIGENTE** | **PROPUESTA DE REFORMA** |
| **Artículo 105.-** En el proceso administrativo de adopción, la Procuraduría deberá integrar el expediente conforme a lo establecido en el Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza. | **Artículo 105.-** En el proceso administrativo de adopción, la Procuraduría deberá integrar el expediente conforme a lo establecido en la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza. |
| **Artículo 106.-** Una vez integrado el expediente, las Subprocuradurías Regionales lo remitirán al área de adopciones de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, quien validará y enviará a la Unidad de Evaluación y Seguimiento para la Protección de Derechos del DIF, a fin de registrar su solicitud de adopción. | **Artículo 106.-** Una vez integrado el expediente, las Subprocuradurías Regionales lo remitirán al área de adopciones de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, quien validará y registrará su solicitud de adopción. |
| **Artículo 107.-** La Procuraduría iniciará de manera inmediata el juicio de adopción de conformidad a lo previsto en la legislación civil aplicable una vez que se hayan agotado y satisfecho los requisitos legales que se desprenden de la Ley de Asistencia social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos aplicables. | **Artículo 107.-** La Procuraduría iniciará el procedimiento judicial de adopción de conformidad a lo previsto en la legislación familiar aplicable, una vez que se hayan agotado y satisfecho los requisitos legales que se desprenden de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos legales aplicables. |

En principio, nos enfocaremos al análisis de lo concerniente a la creación de la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual se compone por nueve títulos que se comprenden por 85 artículos, misma que tiene como finalidad promover un ejercicio de armonización legislativa con las disposiciones federales, asimismo, iniciar acciones tendientes a reformular de manera integral, los procesos organizacionales y administrativos, para hacer de la adopción un proceso cada vez más ágil, transparente y efectivo.

Para los integrantes de estas dictaminadoras, el pertenecer a una familia, es un derecho humano, al ser el primer contacto que tiene el ser humano con una organización social, y que constituye un pilar fundamental para la construcción de la vida y el desarrollo integral de los seres humanos, es así que la familia se caracteriza por brindar protección a las niñas y niños y por satisfacer las necesidades básicas, tanto biológicas, como psicológicas y anímicas.

Es en ese sentido, que diversos instrumentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce el derecho a la protección de la familia, el cual se contempla en su artículo 17, mismo que recalca la importancia de crecer y desarrollarse dentro de un vínculo familiar, mismo que a la letra dice:

***Artículo 17. Protección a la Familia***

*La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.*

*…*

En el mismo orden de ideas, **en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, se reconoce el interés superior de la niñez, como un medio garantista de protección de los derechos humanos y a su vez reconoce a los miembros familiares como sujetos obligados a proteger estos derechos y principios, de conformidad a la redacción literal del texto vigente:

***Artículo 4.****La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

*En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.*

*Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.*

A pesar de ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala que existen cifras de menores que no cuentan con una familia, estando a cargo de instituciones, lo cual no les permite una plena atención así como una protección adecuada. De la misma forma, la Comisión Nacional reporta que *“existen 412 456 niñas y niños privados de cuidado parental, de los cuales 29 310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad. Del resto no se tiene registro, por lo que el número podría ser mucho mayor.”*

Por lo cual consideramos que aun y cuando en México actualmente se ha venido trabajando en la protección de los derechos de los infantes, en la realidad muchas niñas, niños y adolescentes no cuentan con la protección, cuidado y amor de una familia, y se encuentran privados de seguridad, fortalecimiento de las relaciones e interacción en sociedad, de la creación de vínculos, del sentido de pertenencia y del desarrollo de afecto que origina la convivencia familiar, por lo cual vemos con beneplácito que se tomen acciones tendientes a garantizar este derecho.

En este orden de ideas, para los integrantes de estas comisiones unidas es fundamental que, a fin de garantizar la plena efectividad del derecho a la protección de la familia, en nuestro estado se implementen acciones para salvaguardar este derecho, a través de instrumentos jurídicos en materia familiar, con el objetivo de proteger el principio del interés superior de la niñez.

Por lo cual consideramos que la iniciativa objeto del presente dictamen, viene a implementar mecanismos que permitan garantizar el pleno goce de sus derechos a las niñas, niños y adolescentes que son separados de su núcleo familiar de origen, y que si bien, su situación los vuelve más vulnerable, esta ley en materia de adopciones permitirá regular el procedimiento, que permita mejorar el proceso y garantizar la protección de la infancia coahuilense, desde la tramitación hasta la conclusión del mismo.

Como bien se señala en la exposición de motivos, el marco jurídico de la adopción en nuestro Estado ha sido objeto de un constante proceso de perfeccionamiento en los últimos años, y el actualmente el Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, data del día 27 de septiembre de 2013, por lo que coincidimos en la necesidad de adecuar el marco jurídico con esta nueva ley, que entre sus novedades podemos encontrar la disminución o supresión de requisitos y exigencias innecesarias, que no contribuyen a determinar la idoneidad para convertirse en familia adoptiva, asimismo se elimina cualquier vestigio discriminatorio por razón de sexo, preferencias o condición de salud, como la exigencia de pruebas de VIH/SIDA o certificado médico de infertilidad, se precisan plazos y términos respecto a la elaboración de los estudios a las personas solicitantes, para la expedición del certificado de idoneidad y el inicio del procedimiento judicial de adopción, así como para la revocación del consentimiento otorgado ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia con propósito de adopción. Asimismo, se amplía el objeto y las atribuciones del actual Consejo Técnico de Adopciones, adicionando a las vigentes de conocer de las solicitudes de adopción y emitir opinión respecto de éstas, las relativas a la certificación y capacitación de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida, por lo que dicha modificación conlleva en congruencia un cambio en su integración y denominación a Consejo Técnico de Evaluación.

Otro aspecto importante de la iniciativa es que incorpora como integrantes del Consejo Técnico de Evaluación, a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como de dos personas representantes de la sociedad civil.

Además, se señala que la revisión del proceso administrativo de adopción y las propuestas para su agilización y optimización no se deben entender como la búsqueda de asignación indiscriminada e irresponsable de niñas, niños y adolescentes a cualquier núcleo familiar, sino que la revisión se debe entender y realizar en un marco de corresponsabilidad absoluta de la sociedad y el Estado con la finalidad de proporcionar una familia a quienes carecen de ella, pudiendo observar que el proyecto de decreto ha sido elaborado con un enfoque basado en derechos humanos que priorice el principio pro-niño, regulando de forma precisa la figura de la Familia de Acogida, establecida ya en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por último, a fin de que se asegure la operatividad de esta nueva ley, coincidimos en la necesidad de adecuar la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 105, 106 y 107, en lo concerniente ala participación de la Procuraduría en los procesos de adopción.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se expide la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**LEY DE ADOPCIONES Y ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**TÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO**

**Artículo 1.** Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general dentro del territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza y su aplicación corresponderá al Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 2.** La presente Ley tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en materia de adopción y acogimiento familiar, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 3.** Podrá ser adoptante o familia de acogida toda persona que reúna los requisitos establecidos en la presente Ley, sin discriminación alguna, de conformidad a lo previsto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 4.** Queda prohibido realizar cualquier cobro por concepto de tramitación de adopciones, acogimiento pre-adoptivo y familias de acogida en los casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en acogimiento residencial en centros de asistencia social.

**Artículo. 5.** Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Acogimiento residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de protección;
2. Acogimiento pre-adoptivo: Fase dentro del procedimiento administrativo de adopción, bajo la supervisión de la PRONNIF, en la que una familia, distinta a la de origen y de la extensa, acoge provisionalmente a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción y asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez;
3. Adolescente: Persona entre los doce y dieciocho años de edad;
4. Adopción: Constituye, de una manera irrevocable, una relación de filiación entre adoptante y adoptado o adoptada, al mismo tiempo que establece un parentesco equiparable al consanguíneo entre el adoptado o adoptada y la familia de la o el adoptante y entre ésta y éste y los descendientes del adoptado o adoptada;
5. Adopción internacional: Aquella que se promueva por personas de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional, misma que tiene como objeto incorporar en una familia a una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana, que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Este tipo de adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal;
6. Adopción por extranjeros: Aquella promovida por ciudadanos de otro país, con domicilio permanente en el territorio nacional, respecto de niñas, niños o adolescentes con residencia en el Estado. Esta adopción se regirá por lo dispuesto en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza;
7. Autoridad central: Autoridades designadas por los países ratificantes de la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, para intervenir con dicho carácter en los procedimientos de adopción internacional, según lo dispuesto por el artículo 6 de la citada Convención;
8. Centro de asistencia social: Instituciones públicas o privadas que brindan acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar;
9. Certificado de idoneidad: Documento expedido por las Procuradurías de Protección o por la autoridad central del país de origen de las personas adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en virtud del cual se determina la idoneidad de las personas solicitantes de adopción;
10. Certificación: Documento expedido por el Consejo Técnico de Evaluación, mediante el cual se hace constar que las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida son aptas para brindar cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes;
11. Consejo: Consejo Técnico de Evaluación;
12. Convivencias internas: Aquellas que se llevan a cabo en las instalaciones del centro de asistencia social en el que se encuentra recibiendo acogimiento residencial la niña, niño o adolescente susceptible de adopción;
13. Convivencias externas: Aquellas que se llevan a cabo fuera de las instalaciones del centro de asistencia social en el que se encuentra recibiendo acogimiento residencial la niña, niño o adolescente susceptible de adopción, con o sin pernocta;
14. Convivencias pre-adoptivas: Etapa del procedimiento administrativo de adopción en la que las niñas, niños o adolescentes interactúan con las personas solicitantes de adopción para establecer el vínculo afectivo y evaluar su adaptabilidad;
15. Estado: Estado de Coahuila de Zaragoza;
16. Familia de acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva;
17. Familia extensa: Aquélla compuesta por las personas ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;
18. Familia de origen: Aquélla compuesta por las personas titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes las niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado, de conformidad con Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza;
19. Ley: Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
20. Niña o niño: Persona menor de doce años de edad;
21. Niña, niño o adolescente de atención prioritaria: Aquel que viva con una discapacidad o sea mayor de doce años de edad;
22. Niña, niño o adolescente susceptible de adopción: Aquel que jurídica y psicológicamente es apto de integrarse a una familia, y del cual se puede constatar mediante evaluación, que tiene aptitud para insertarse con beneficio propio en un entorno familiar de substitución y que ha roto definitivamente con los lazos de filiación respecto a sus padres de origen, conforme a la legislación vigente;
23. Niña, niño o adolescente institucionalizado: Aquel que recibe como medida de protección judicial o administrativa, el internamiento en un centro de asistencia social público o privado, debido a la carencia de cuidado parental o familiar;
24. Opinión: Documento suscrito por los titulares de la presidencia y la secretaría técnica del Consejo Técnico de Evaluación mediante el cual se hace del conocimiento de la autoridad judicial, el resultado del análisis de las solicitudes de adopción por las personas integrantes del Consejo;
25. Personas adoptantes: Aquellas que, por voluntad propia, reciben como hija o hijo a una niña, niño o adolescente y éstas asumen respecto de la persona adoptada los derechos y obligaciones inherentes a una madre o padre;
26. Procuradurías de Protección: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada entidad federativa;
27. PRONNIF: Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia;
28. Seguimiento post-adoptivo: Valoración técnica realizada por las Procuradurías de Protección, que verifica la integración de niñas, niños o adolescentes con las personas que los hayan adoptado;
29. Sistema DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**TÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN**

**CAPÍTULO I**

**DE LOS PRINCIPIOS RECTORES**

**Artículo 6.** Son principios rectores en el cumplimiento, interpretación y aplicación de esta Ley, los contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, los tratados internacionales en materia de adopción y protección a la infancia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que atiendan a la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

**CAPÍTULO II**

**DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN**

**Artículo 7.** En el ejercicio de sus facultades y obligaciones, todas las autoridades involucradas en el proceso integral de adopción, deberán:

1. Garantizar la plena observancia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez;
2. Asegurar que todas las niñas, niños y adolescentes sean escuchados de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez;
3. Garantizar que quienes consientan la adopción, así como quienes la soliciten, reciban una asesoría integral que les permita conocer los alcances jurídicos, psicoafectivos, familiares y sociales de la misma;
4. Implementar las acciones necesarias para garantizar que la adopción no sea motivada por la obtención de beneficios económicos para quienes participen en ella;
5. Garantizar que las niñas, niños y adolescentes gocen de los derechos y garantías de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO III**

**DE LAS PROHIBICIONES EN LA ADOPCIÓN**

**Artículo 8.** Para los efectos de la presente Ley, se prohíbe:

1. La promesa de adopción durante el proceso de gestación;
2. Que las personas solicitantes de adopción tramiten simultáneamente dos o más procedimientos de adopción;
3. La adopción privada, en los términos establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza;
4. Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito;
5. El contacto de la madre, padre o ambos padres, que entregaron en adopción a una niña, niño o adolescente, con las personas solicitantes de adopción, la persona que se pretende adoptar o con cualquier persona involucrada en la adopción, con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia extensa o cuando la persona adoptada desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad;
6. La obtención directa o indirecta de beneficios materiales o de cualquier índole, por la familia de origen o extensa de la persona que se pretende adoptar, o por cualquier persona, así como por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción;
7. Que las personas titulares o las que presten sus servicios en los centros de asistencia social, permitan visitas o cualquier tipo de relación que pudieran generar vínculos afectivos o de apego entre las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción y las personas que pretendan adoptar, sin autorización del Consejo;
8. Que la PRONNIF de inicio al procedimiento judicial, sin la previa expedición del certificado de idoneidad o la asignación del Consejo;
9. Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

**CAPÍTULO IV**

**DEL CONSENTIMIENTO OTORGADO** **ANTE**

**LA PRONNIF CON PROPÓSITO DE ADOPCIÓN**

**Artículo 9.** En los casos en que una madre, padre o ambos padres de una niña, niño o adolescente, no pudieran o no estuvieran en las condiciones necesarias para la crianza de éste, podrán hacer la entrega voluntaria del mismo a la PRONNIF con el propósito de que sea dado en adopción, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos:

1. Haya sido registrado y se presentare en ese acto el acta de nacimiento;
2. Se exhiba identificación oficial de quien se ostenta como madre, padre, o ambos, o por quien ejerce la tutela o patria potestad;
3. Se corrobore que han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas por la PRONNIF, de las consecuencias legales que la adopción implica, del consentimiento otorgado y en particular de la ruptura de los vínculos jurídicos entre la niña, niño o adolescente y su familia de origen;
4. Que el consentimiento haya sido otorgado libremente, sin que medie pago o compensación alguna;
5. Que el consentimiento de la madre, padre o ambos, sea otorgado cuando menos diez días después del parto.

**Artículo 10.** Las personas titulares de la Dirección de Adopciones y de las Subprocuradurías Regionales de la PRONNIF estarán investidas de fe pública con el objeto de recabar el consentimiento para la adopción, y deberán levantar un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos mayores de edad plenamente identificados, en la cual conste la entrega de la niña, niño o adolescente y el propósito con el que se hizo la misma, así como la manifestación expresa de la situación familiar y los motivos que originan tal entrega, anexando al acta la documentación a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 11.** No procederá la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia adoptiva hasta transcurrido un término de treinta días naturales, contados a partir del otorgamiento del consentimiento, en el cual la madre o el padre biológico, o cualquiera de ellos en el caso de que haya sido otorgado conjuntamente, podrán solicitar la revocación del consentimiento otorgado ante la PRONNIF, la cual, en caso de ser procedente, levantará un acta circunstanciada asentando tal reintegración al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre que ello no represente un riesgo al interés superior de la niñez.

**Artículo 12.** Una vez transcurrido el término señalado en el artículo anterior, sin que se revoque el consentimiento otorgado, y previa la satisfacción de los requisitos señalados en la presente Ley, se podrá asignar a la niña, niño o adolescente en acogimiento pre-adoptivo.

**TÍTULO TERCERO**

**DEL** **CONSEJO TÉCNICO DE EVALUACIÓN**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 13.** El Consejo es un órgano colegiado interdisciplinario, técnico y de opinión, que tiene como objeto conocer, analizar, valorar y dictaminar las solicitudes de adopción y acogimiento familiar en relación a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo acogimiento residencial en un centro de asistencia social como una medida especial de protección, así como de emitir opinión respecto de las adopciones promovidas ante el Poder Judicial del Estado de las niñas, niños y adolescentes no institucionalizados.

**Artículo 14.** El Consejo estará encargado de garantizar los derechos de las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción, así como de procurar su debida asignación e integración a personas solicitantes de adopción que resulten idóneas, para que les proporcionen las condiciones necesarias para brindarles una crianza positiva, un sano desarrollo y el máximo bienestar posible.

**Artículo 15.** El Consejo estará integrado por:

1. Una presidencia, a cargo de la persona titular de la Dirección del Sistema DIF;
2. Una secretaría técnica, a cargo de la persona titular de la PRONNIF;
3. Una secretaría auxiliar, a cargo de la persona titular de la Dirección de Adopciones;
4. Una persona representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
5. Una persona representante del Sistema DIF, que por las funciones que desarrollen, así como por sus conocimientos especializados en psicología, trabajo social, derecho, docencia o medicina, sean designados por la persona titular de la presidencia;
6. Una persona representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de donde sean originarios o atendidos las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción;
7. La persona titular del centro de asistencia social donde se encuentren acogidas las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción respecto de quien se propondrá asignación de familia;
8. Dos personas representantes de las asociaciones civiles constituidas por adoptantes o adoptados, o ambos, cuyo objeto social sea promover la institución de adopción o del acogimiento familiar, así como asesorar, orientar y brindar apoyo a sus integrantes, designados conforme a la convocatoria que el Consejo Técnico de Evaluación emita para tal efecto.

Todas las personas integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto, y podrán nombrar en sus ausencias, a sus respectivos suplentes, quienes contarán con voz y voto, y deberán ser servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior al de la persona titular que suplan, cuya designación se hará a través de un escrito dirigido a la secretaría técnica.

Los acuerdos y resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes en la sesión, en caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad.

Los cargos del Consejo serán honorarios, por lo que sus integrantes no percibirán remuneración alguna, y se regirán con base a los principios de legalidad, debido proceso, honradez, confidencialidad, celeridad procesal e interés superior de la niñez.

Serán invitadas permanentes a las sesiones del Consejo, con derecho a voz, pero sin voto, la persona titular de la Presidencia Honoraria del Sistema DIF, el Diputado o Diputada Coordinador o Coordinadora de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, así como una persona representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La persona titular de la presidencia podrá convocar con voz, pero sin voto, a personas expertas en materia de adopción o acogimiento familiar, académicas o integrantes de la sociedad que se consideren necesarias, para que expresen criterios que orienten la toma de decisiones del Consejo.

**Artículo 16.** El Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Fomentar la cultura de la adopción y el acogimiento familiar de las niñas, niños y adolescentes, en especial los de atención prioritaria;
2. Proponer políticas, acciones y lineamientos en materia de adopción y acogimiento familiar;
3. Realizar las sesiones necesarias para el cumplimiento de su objeto;
4. Verificar que las solicitudes de adopción y certificación estén debidamente requisitadas en los términos de las disposiciones aplicables;
5. Analizar los estudios de psicología, trabajo social y evaluación médica practicados a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida;
6. Determinar, con base en las evaluaciones respectivas, las características de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida;
7. Analizar los expedientes de solicitud de adopción o de certificación de familia de acogida propuestos por la secretaría técnica del Consejo, atendiendo en todo momento al interés superior de la niña, niño o adolescente;
8. Aplicar los criterios para asignación de una familia adoptiva a una niña, niño o adolescente;
9. Verificar la adaptación de la niña, niño o adolescente con la familia asignada y en su caso levantar el acta respectiva, previamente al procedimiento judicial de adopción;
10. Emitir opinión respecto de las adopciones promovidas ante el Poder Judicial del Estado de las niñas, niños y adolescentes no institucionalizados;
11. Solicitar la revaloración de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida;
12. Determinar la baja de las solicitudes de adopción;
13. Conocer y analizar los resultados de las convivencias autorizadas;
14. Guardar estricta confidencialidad sobre todos los asuntos de su competencia;
15. Las demás que establezca la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO II**

**DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS**

**Artículo 17.** La persona titular de la presidencia tendrá las funciones siguientes:

1. Representar legalmente al Consejo, en el ámbito de su competencia, ante todo tipo de autoridades, organismos, e instituciones;
2. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo, así como declarar resueltos los asuntos en el sentido de las votaciones;
3. Convocar a las personas integrantes del Consejo, por conducto de la secretaría técnica, a las sesiones;
4. Proponer los mecanismos que permitan el mejor funcionamiento del Consejo;
5. Suscribir las actas en que se hagan constar los acuerdos y resoluciones de las sesiones del Consejo;
6. Representar legalmente al Consejo, en el ámbito de su competencia, ante todo tipo de autoridades, organismos, e instituciones;
7. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 18.** La persona titular de la secretaría técnica tendrá las funciones siguientes:

1. Presentar propuestas de asignación de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción;
2. Emitir las convocatorias para las sesiones del Consejo, previo acuerdo de la persona titular de la presidencia;
3. Iniciar la sesión del Consejo y dar lectura al orden del día, previa autorización de la persona titular de la presidencia;
4. Conducir el desarrollo de las sesiones del Consejo;
5. Elaborar y suscribir el acta de las sesiones del Consejo, haciendo constar los acuerdos que en ellas se tomen;
6. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos e informar de éstos periódicamente a la persona titular de la presidencia;
7. Mantener, a través de la secretaría auxiliar, en orden y actualizados:
   1. Los archivos de las actas de las sesiones del Consejo;
   2. Los archivos de los expedientes de adopción;
   3. El Libro de Gobierno donde se asienta el nombre de las personas solicitantes de adopción que ingresan a la lista de espera;
   4. Los archivos de los expedientes que integran la lista de espera;
   5. Los documentos relativos a los juicios de adopción;
8. Proporcionar a las personas integrantes del Consejo la información que requieran;
9. Realizar el seguimiento al periodo de adaptación de la niña, niño o adolescente asignado en convivencia a las personas solicitantes de adopción y emitir el informe correspondiente;
10. Emitir el certificado de idoneidad y la certificación;
11. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 19.** Las personas que funjan como vocales del Consejo tendrán las funciones siguientes:

1. Asistir y participar con voz y voto a las sesiones del Consejo;
2. Dar seguimiento al orden del día, y emitir las opiniones correspondientes sobre los asuntos que se pongan a su consideración;
3. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos;
4. Suscribir las actas de las sesiones del Consejo;
5. Realizar las actividades que les encomiende la persona titular de la presidencia;
6. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.

**Artículo 20.** El Consejo sesionará bimestralmente de manera ordinaria, y de forma extraordinaria cuando sea necesario, en atención a la importancia y urgencia de los asuntos que deban tratar, a convocatoria de la persona titular de su presidencia, o en su caso, de la secretaría técnica.

**Artículo 21.** Las personas integrantes del Consejo estarán impedidas y tendrán el deber de excusarse para conocer los siguientes casos:

1. Aquellos en los que tengan un interés personal y directo en el asunto de que se trate;
2. Tengan parentesco consanguíneo o por afinidad con alguna de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida, en línea recta sin limitación de grado, y en línea transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y del segundo grado por afinidad;
3. Tengan amistad estrecha o animadversión con alguna de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida;
4. Haber sido representante legal, apoderado o asesor de cualquiera de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida;
5. Cuando tenga interés su cónyuge, concubina o concubino, compañera o compañero civil, o alguno de sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y en línea transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y del segundo grado por afinidad;
6. Cualquier situación análoga que pueda afectar su imparcialidad a juicio del Consejo.

**Artículo 22.** Cuando una persona integrante del Consejo se encuentre en cualquiera de los supuestos que señala el artículo anterior, deberá excusarse por escrito.

**Artículo 23.** La PRONNIF impartirá el curso de capacitación para madres y padres adoptivos a las personas solicitantes de adopción, en el cual se les informarán los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales de la misma.

Una vez concluido el curso, se les hará entrega de la constancia de participación a quienes hayan acreditado el mismo, momento a partir del cual las personas solicitantes de adopción contarán con sesenta días naturales para la integración del expediente administrativo de adopción.

**TÍTULO CUARTO**

**DEL PROCESO DE ADOPCIÓN**

**CAPÍTULO I**

**DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**SUSCEPTIBLES DE ADOPCIÓN**

**Artículo 24.** Para que las niñas, niños o adolescentes sean susceptibles de adopción, deberá estar resuelta su situación jurídica, a través de:

1. Sentencia ejecutoriada de juicio especial de pérdida de patria potestad;
2. Consentimiento expreso otorgado por la madre, padre o ambos padres, de conformidad con la legislación aplicable;
3. Tratándose de niñas, niños y adolescentes expósitos, abandonados o en acogimiento residencial en un centro de asistencia social, y de los cuales nadie ejerza la patria potestad, cuando haya transcurrido el término establecido en el artículo 69 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**CAPÍTULO II**

**DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN**

**Artículo 25.** Las personas que deseen adoptar, además de cumplir con los requisitos de adopción establecidos en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, deberán iniciar el procedimiento administrativo ante la PRONNIF. Dicho procedimiento se regirá conforme a lo previsto en la presente Ley y comprenderá las siguientes fases:

1. Presentación de la solicitud;
2. Entrevista inicial;
3. Práctica de estudios por el área de trabajo social y psicología;
4. Acreditación del curso de capacitación para madres y padres adoptivos;
5. Integración y valoración del expediente;
6. Emisión del certificado de idoneidad o del acuerdo donde se describan las razones por las que el mismo no fue expedido;
7. Asignación de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción;
8. Convivencias pre-adoptivas;
9. Informe del periodo de adaptación;
10. Acogimiento pre-adoptivo, en caso de haber obtenido un certificado de idoneidad y siempre que se corrobore que el perfil de las personas solicitantes de adopción coincide con el de una niña, niño o adolescente susceptible de adopción, con base al informe del periodo de adaptación posterior a las convivencias pre-adoptivas;
11. Inicio del procedimiento judicial de adopción.

**Artículo 26.** Las personas solicitantes de adopción de niñas, niños y adolescentes, deberán exhibir en original o copia certificada, los siguientes documentos:

1. Solicitud de adopción debidamente requisitada;
2. Carta individual de exposición de motivos;
3. Acta de nacimiento de las personas solicitantes de adopción;
4. Acta de matrimonio o constancia de concubinato, en su caso;
5. En el caso de que las personas solicitantes de adopción tengan hijas o hijos, deberán presentar también actas de nacimiento de los mismos;
6. Copia de la Clave Única de Registro de Población e identificación oficial con fotografía;
7. Dos fotografías tamaño credencial de las personas solicitantes de adopción;
8. Fotografías en tamaño postal y a color de las personas solicitantes de adopción en su entorno familiar, así como de su domicilio;
9. Comprobantes de ingresos;
10. Constancia de trabajo, misma que deberá hacer referencia al puesto que ocupa la persona solicitante de adopción, las actividades que desarrolla en el mismo, su antigüedad y su sueldo;

En caso de que las personas solicitantes de adopción estén imposibilitadas de exhibir constancia de trabajo, deberán presentar una constancia contable, o bien, un documento privado u oficial del que se desprenda su actividad laboral, y el ingreso que perciben, así como el tiempo que lleva realizando dicha actividad;

1. Comprobante de domicilio de las personas solicitantes de adopción;
2. Certificado médico expedido por institución oficial respecto de las personas solicitantes de adopción conforme a lo establecido en el artículo 37 de la presente Ley;
3. Examen toxicológico de las siguientes sustancias: anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos;
4. Carta de no antecedentes penales de las personas solicitantes de adopción, respecto de delitos de índole sexual o cualquier otro cometido dolosamente o negligentemente en contra de niñas, niños y adolescentes;
5. Dos cartas de recomendación de personas que conozcan su intención de adoptar, con los datos de contacto de quien expida la misma.

**Artículo 27.** En caso de que las personas solicitantes de adopción no cumplan con todos los requisitos señalados en el artículo anterior o los mismos presenten alguna deficiencia, se prevendrá a los interesados para que en un término que no exceda de treinta días hábiles tratándose de adopciones nacionales y noventa días hábiles en caso de adopciones internacionales, los subsanen, en caso contrario se desechará la solicitud y se procederá a la baja documental.

**Artículo 28.** Las personas solicitantes de adopción extranjeras deberán acreditar su legal estancia en el país, así como su calidad migratoria y permiso para tramitar el procedimiento de adopción emitido por las autoridades migratorias correspondientes.

**Artículo 29.** Las personas solicitantes de adopción extranjeras deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la presente Ley, debiendo presentar sus actas debidamente apostilladas o legalizadas.

**Artículo 30.** Una vez presentada la solicitud, acompañada de los documentos requeridos, se programará una entrevista conjunta entre el equipo psicosocial y las personas solicitantes de adopción con la finalidad de explorar la historia familiar y en su caso de pareja, la motivación para la adopción y las expectativas ante la misma, así como el apoyo social del que disponen y los demás criterios a tomar en cuenta para su ulterior valoración.

Realizada la entrevista inicial, las personas solicitantes de adopción serán canalizadas a las áreas de trabajo social y psicología, para que se realicen los estudios correspondientes a fin de completar su expediente.

**Artículo 31.** El procedimiento administrativo de adopción termina:

1. Cuando por causas imputables a las personas solicitantes de adopción, no se encuentre debidamente integrado el expediente;
2. Cuando la PRONNIF compruebe que existe algún tipo de falsedad o alteración en los documentos o información que proporcionen las personas solicitantes de adopción;
3. Cuando las personas solicitantes de adopción manifiesten su voluntad de no continuar el procedimiento mediante escrito dirigido a la PRONNIF;
4. Cuando la PRONNIF entregue por escrito el informe donde se funde y motive las razones por las que el certificado de idoneidad no fue expedido, adjuntando la documentación perteneciente a las personas solicitantes de adopción;
5. Cuando las personas solicitantes de adopción vulneren los derechos de la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar;
6. Cuando sobrevengan causas que cambien las condiciones de las personas solicitantes de adopción, que impidan garantizar el interés superior de la niñez;
7. Cuando las personas solicitantes de adopción se nieguen a someterse a las valoraciones que determine el Consejo;
8. Cuando las personas solicitantes de adopción no acaten las recomendaciones derivadas de los estudios en los plazos establecidos para ello;
9. Cuando la autoridad judicial dicte la resolución que decrete la adopción de manera definitiva.

Las autoridades podrán suspender el procedimiento administrativo de adopción cuando tengan razones para creer que ésta se realiza en contravención de lo establecido por la presente Ley.

**CAPÍTULO III**

**DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD**

**Artículo 32.** Una vez integrado el expediente de las personas solicitantes de adopción con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la presente Ley y previa valoración psicológica, económica y de trabajo social necesarias para determinar su aptitud, la PRONNIF emitirá el certificado de idoneidad en un término que no excederá de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de los resultados de los estudios antes referidos, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el expediente o que no cuente con suficientes elementos, supuestos en los que se podrá ampliar el plazo hasta por treinta días naturales.

Una vez emitido el certificado de idoneidad las personas solicitantes de adopción se integrarán en la lista de espera.

**Artículo 33.** Las personas solicitantes de adopción no deberán tener contacto con las niñas, niños o adolescentes que pretendan adoptar, ni con sus padres o las personas que los tengan bajo su cuidado, hasta en tanto cuenten con un certificado de idoneidad y se autorice el inicio de convivencias, con excepción de los casos en que la adopción sea entre familiares.

Tratándose de adopciones internacionales, las personas solicitantes de adopción deberán obtener el certificado de idoneidad emitido por la autoridad central de su país de residencia.

**Artículo 34.** En los casos que la PRONNIF resuelva la no emisión del certificado de idoneidad de las personas solicitantes de adopción, se podrá presentar una nueva solicitud transcurrido un año contado a partir de la notificación de dicha resolución.

**Artículo 35.** El informe de adoptabilidad que emitan la PRONNIF deberá contener, por lo menos, los siguientes datos sobre la niña, niño o adolescente susceptible de adopción:

1. Nombre completo;
2. Lugar y fecha de nacimiento;
3. Edad;
4. Sexo;
5. Media filiación, así como los antecedentes familiares;
6. Situación jurídica;
7. Condición e historia médica;
8. Características psicológicas, así como necesidades afectivas y emocionales;
9. Evolución pedagógica;
10. Requerimiento de atención especial;
11. Información sobre los motivos por los cuales no se pudo encontrar a una familia nacional que pudiera adoptar a la niña, niño o adolescente, tratándose de adopciones internacionales;
12. Opinión de la niña, niño y adolescente en relación a la adopción, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo cognoscitivo y grado de madurez.

La PRONNIF podrá solicitar a los centros de asistencia social que tengan bajo su cuidado a la niña, niño o adolescente, cualquier información adicional a la prevista en este artículo que considere necesaria para salvaguardar el interés superior de la niñez, misma que deberá incluirse en el informe de adoptabilidad.

**CAPÍTULO IV**

**DE LOS ESTUDIOS QUE DEBEN REALIZARSE LAS**

**PERSONAS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN Y DE CONSTITUCIÓN**

**COMO FAMILIA DE ACOGIDA**

**Artículo 36.** La PRONNIF deberá practicar estudios socioeconómicos a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, los cuales deberán contener, por lo menos, lo siguiente:

1. Datos generales;
2. Situación laboral;
3. Composición familiar;
4. Situación económica y patrimonial;
5. Características de la vivienda y el entorno;
6. Hábitos.

**Artículo 37.** Las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida deberán realizarse, a través de instituciones públicas del sistema de salud, los siguientes estudios médicos:

1. Grupo sanguíneo y Factor Rhesus (Rh);
2. Biometría hemática;
3. Química sanguínea;
4. Examen general de orina.

El certificado médico deberá autenticar la existencia de una situación aceptable de salud física de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, que no conlleve discapacidad grave o severa, un riesgo inminente de muerte o cualquier otro padecimiento que les impida garantizar el buen desarrollo social, psicológico, educativo y de salud de la niña, niño o adolescente que se pretenda adoptar.

En caso de requerirlo, el equipo psicosocial podrá consultar al personal médico que expidió el certificado a fin de aclarar su contenido.

**Artículo 38.** La PRONNIF deberá practicar estudios psicológicos a las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, los cuales deberán contener, por lo menos, las siguientes baterías de pruebas:

1. Entrevista psicológica, en el caso de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos, la entrevista deberá ser en pareja;
2. CUIDA (Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores);
3. 16 PF-5 (16 Factores de Personalidad de Cattell);
4. MSI-R (Inventario de Satisfacción Marital Revisado), en el caso de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos;
5. SENA (Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes);
6. MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional de Mayer-Salovey-Caruso);
7. MMPI-2 (Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota);
8. Cualquier otro que se requiera para acreditar la viabilidad psicológica de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida.

Todas las pruebas tendrán una vigencia de seis meses a partir de la notificación de su resultado.

**Artículo 39.** Se consideran impedimentos de las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, que pueden afectar el sano desarrollo de niñas, niños o adolescentes, los que se indican a continuación:

1. Cualquier patología o rasgos de personalidad que pongan en riesgo a las niñas, niños o adolescentes;
2. La inestabilidad emocional de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida;
3. La inestabilidad o poca solidez de pareja, en el caso de que las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida sean cónyuges o concubinos;
4. La violencia familiar;
5. La incapacidad de atenderse a sí mismo o cuidar de otros;
6. La escasa adaptación al medio o contar con pocas redes de apoyo social o familiar;
7. La motivación o razón para adoptar no favorezca el interés superior de la niña, niño o adolescente;
8. El padecimiento de alguna enfermedad que les impida garantizar el buen desarrollo social, psicológico, educativo y de salud de la niña, niño o adolescente que se pretenda adoptar.

**Artículo 40.** En el supuesto de que las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida presenten uno o más impedimentos que a juicio de la PRONNIF puedan ser subsanados, la misma deberá notificar en qué consisten, así como las recomendaciones y canalizaciones que estimen pertinentes para que los pueda subsanar en el plazo que se les indique para tal efecto.

Durante el referido plazo, se tendrá por suspendido temporalmente su procedimiento y antes de su vencimiento, las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida, deberán de comparecer nuevamente ante la PRONNIF, para acreditar que se resolvió satisfactoriamente el impedimento, para que esto sea verificado y en su caso se reactive el mismo.

Si las personas solicitantes de adopción y de constituirse como familia de acogida no cumplen en tiempo y forma las recomendaciones, se dará de baja su solicitud por falta de interés.

**CAPÍTULO V**

**DE LA ASIGNACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**Artículo 41**. La PRONNIF convocará al equipo psicosocial para analizar el expediente de la niña, niño o adolescente susceptible de adopción y de quienes conforman la lista de espera de personas solicitantes de adopción, con la finalidad de seleccionar candidatos idóneos, de acuerdo a las necesidades de la niña, niño o adolescente.

**Artículo 42**. El análisis se basará en el grado de compatibilidad existente entre las necesidades y características de la niña, niño o adolescente con las personas solicitantes de adopción, para el cual se considerará la edad, el sexo, la personalidad, las expectativas de desarrollo social y económico, algún tipo de discapacidad, el diagnóstico médico, así como cualquier otro factor que favorezca la compatibilidad entre las personas solicitantes de adopción y la niña, niño o adolescente.

**Artículo 43**. La PRONNIF presentará ante el Consejo, las razones que justifican las propuestas de asignación de las familias para cada niña, niño o adolescente.

**Artículo 44**. El Consejo elegirá, entre las propuestas que le fueron presentadas, a las familias que considere que, en base al interés superior de la niñez, son las más adecuadas para la niña, niño o adolescente, estableciendo un orden de prelación entre estas y en su caso autorizará el inicio del periodo de convivencias pre-adoptivas.

**Artículo 45.** La PRONNIF informará a las personas solicitantes de adopción que les ha sido asignado una niña, niño o adolescente y los citará a una reunión con la finalidad de conocer su opinión.

En la reunión, en base al expediente de la niña, niño o adolescente, las personas solicitantes de adopción recibirán información médica y psicológica, así como del desenvolvimiento y comportamiento de la niña, niño o adolescente en el centro de asistencia social en que se encuentra.

Una vez que conozcan las circunstancias generales y que hubieren expresado sus inquietudes y dudas, las personas solicitantes de adopción podrán aceptar o declinar la asignación propuesta.

**Artículo 46**. En caso de que las personas solicitantes de adopción rechacen a un niño, niña o adolescente sin justificación suficiente, una vez efectuada la asignación y hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia de adopción, la PRONNIF propondrá al Consejo su baja definitiva de la lista de espera.

**CAPÍTULO VI**

**DE LAS CONVIVENCIAS PRE-ADOPTIVAS**

**Artículo 47.** La PRONNIF podrá aprobar convivencias internas, mismas que siempre se llevarán a cabo en las instalaciones del centro de asistencia social en el que se encuentren bajo acogimiento residencial las niñas, niños o adolescentes, las cuales deberán ser supervisadas por personal de psicología de dichas instituciones o del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de donde sean originarios o atendidos las niñas, niños o adolescentes susceptibles de adopción, quienes deberán emitir los informes correspondientes, los cuales se integrarán al expediente de las personas susceptibles de adopción.

El personal de psicología que participe en la supervisión deberá contar con autorización y registro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La PRONNIF elaborará el programa de convivencias internas, acorde a las necesidades de cada niña, niño o adolescente y posibilidades de las personas solicitantes de adopción, con un mínimo de tres convivencias, las cuales se desarrollarán en un plazo que no excederá de veinte días naturales, para estar en aptitud de determinar si existe compatibilidad, empatía e identificación; el número y modalidad de las convivencias dependerá de las necesidades específicas y la edad de cada niña, niño o adolescente, al final de éstas, emitirá un informe que será notificado al Consejo.

**Artículo 48.** El Consejo podrá aprobar las convivencias externas una vez analizados los informes del periodo de adaptación remitidos por los especialistas que supervisaron las convivencias internas.

**Artículo 49.** Las primeras convivencias externas, inicialmente no podrán tener una duración que exceda de cuatro horas, las cuales podrán incrementar hasta alcanzar un fin de semana de convivencia, sin pernocta, de acuerdo a las recomendaciones del área de psicología del centro de asistencia social.

En el transcurso de las convivencias internas como externas, el área de psicología puede realizar recomendaciones para mejorar estas.

**Artículo 50.** El Consejo valorará los informes respecto de las convivencias dentro de los centros de asistencia social y determinará la viabilidad y el programa de convivencias externas, con un mínimo de tres convivencias, que deberán realizarse inicialmente durante el día sin considerar pernocta, en un plazo que no excederá de veinte días naturales.

Si de los informes de las convivencias pre-adoptivas se determina que no se consolidaron las condiciones de adaptación entre niñas, niños y adolescentes y las personas solicitantes de adopción, la secretaría técnica informará al Consejo para que resuelva lo conducente y analice la viabilidad de una nueva asignación, atendiendo al interés superior de la niñez.

**Artículo 51.** En caso de ser favorables las convivencias externas y una vez que se haya generado un vínculo afectivo entre la niña, niño o adolescente y las personas solicitantes de adopción, se presentará un informe del periodo de adaptación al Consejo para que se pronuncie sobre el acogimiento pre-adoptivo, para lo cual deberá considerar los criterios establecidos en el artículo 389 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 52.** Las convivencias internas o externas podrán ser limitadas o suspendidas en cualquier momento por la autoridad correspondiente, cuando resultare necesario, tomando en consideración las recomendaciones efectuadas por los centros de asistencia social respectivos y los resultados de los informes del periodo de adaptación.

**CAPÍTULO VII**

**DEL ACOGIMIENTO PRE-ADOPTIVO**

**Artículo 53.** El acogimiento pre-adoptivo es una modalidad de cuidado alternativo a través de la cual las personas solicitantes de adopción acogen en su seno a niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y asumen todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio del interés superior de la niñez.

**Artículo 54.** Para la designación del acogimiento pre-adoptivo, se deberá contar con:

1. Certificado de idoneidad expedido por la PRONNIF u otra Procuraduría de Protección a favor de las personas solicitantes de adopción;
2. Informe de adoptabilidad;
3. Informe del periodo de adaptación;
4. Asignación del Consejo.

A partir del inicio del periodo de acogimiento pre-adoptivo, la PRONNIF promoverá en un plazo que no excederá de treinta días hábiles el procedimiento judicial de adopción de conformidad con la legislación aplicable.

**Artículo 55.** La PRONNIF deberá dar acompañamiento al proceso de adaptación e integración familiar, mediante visitas de seguimiento y orientación a través el equipo psicosocial, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.

**Artículo 56.** Una vez iniciado el procedimiento judicial de adopción, las personas adoptantes no podrán reintegrar a la niña, niño o adolescente, sino solo mediante petición expresa ante la autoridad judicial que conozca de la adopción.

**Artículo 57.** Una vez ejecutoriada la sentencia que declaró la procedencia de la adopción, la PRONNIF dará por concluido el procedimiento administrativo.

**TÍTULO QUINTO**

**DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 58.** La adopción internacional se rige por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, en particular por la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, y en lo conducente, por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil Federal y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 59.** La PRONNIF es la autoridad competente para expedir el certificado de idoneidad, en los casos de adopciones internacionales, en donde se haga constar que las personas ciudadanas mexicanas o extranjeras residentes permanentes en el Estado, que pretenden adoptar en el extranjero, son aptas para ello.

**TÍTULO SEXTO**

**DEL SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO POST-ADOPTIVO**

**Artículo 60.** El seguimiento post-adoptivo a la familia deberá efectuarse con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez.

En los reportes del seguimiento realizados por la PRONNIF, se deberá apreciar la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes en su entorno, los cuales serán remitidos a la autoridad judicial. La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.

En caso de adopción internacional, el seguimiento post-adoptivo será realizado por la autoridad central competente.

**TÍTULO SÉPTIMO**

**DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR**

**CAPÍTULO I**

**DE LAS BASES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**Artículo 61.** Las personas interesadas en constituirse como familia de acogida, deberán presentar ante la PRONNIF una solicitud para obtener su certificación.

Dicha solicitud contendrá los datos generales de la familia, domicilio, dirección para oír y recibir notificaciones dentro del Estado, teléfono, correo electrónico u otros medios de contacto.

**Artículo 62.** Una vez presentada la solicitud, la PRONNIF convocará a las personas interesadas a una reunión informativa de inducción grupal con otras familias interesadas.

**Artículo 63.** Los requisitos para la expedición de la certificación, en lo conducente, serán los mismos que para la emisión del certificado de idoneidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la presente Ley.

El Consejo podrá solicitar información complementaria cuando se considere necesaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez.

**Artículo 64.** En caso de que la solicitud sea promovida por personas extranjeras residentes en el Estado, a fin de integrar debidamente su solicitud, además de los requisitos señalados, deberán acreditar su residencia permanente en los términos de la Ley de Migración.

**Artículo 65.** Para la integración del expediente, la PRONNIF deberá:

1. Verificar que las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 26 de la presente Ley, y exhiban la información adicional que el Consejo considere necesaria;
2. Realizar la investigación correspondiente a fin de cerciorarse que la información proporcionada por las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida es fidedigna.

**Artículo 66.** El Sistema DIF y la PRONNIF, como parte del otorgamiento de la certificación para constituirse en familia de acogida, impartirán un curso de capacitación a las personas que serán las responsables de la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente que se acogerá, en el cual se les informará los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales del cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de las niñas, niños y adolescentes, así como el desapego que deberán guardar y la concientización de la temporalidad de su acogimiento en dicha familia.

El Consejo definirá los objetivos y contenidos del curso de capacitación.

**CAPÍTULO II**

**DE LA EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN**

**Artículo 67.** Una vez que las personas interesadas cumplan con los requisitos para ser consideradas como familia de acogida, el Consejo a través de la secretaría técnica, expedirá la certificación correspondiente en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la celebración de la sesión del Consejo en la que se apruebe su emisión.

Todas las certificaciones otorgadas se deberán de inscribir en el registro que para tal efecto se instituya por la PRONNIF.

**Artículo 68.** La certificación tendrá una vigencia de dos años contados a partir de su expedición, transcurrido dicho término y en caso de que se desee su renovación, se deberán actualizar los documentos necesarios y las valoraciones psicosociales.

**Artículo 69.** La PRONNIF podrá solicitar al Consejo la cancelación de la certificación otorgada cuando se advierta que la información proporcionada en el informe mensual al que se hace referencia en la fracción V del artículo 74 de la presente Ley es falsa, o cuando las condiciones en las que se proporciona el acogimiento familiar vulneren o coloquen en situación de riesgo los derechos de la niña, niño o adolescente, sin perjuicio de las acciones que se pudieran emprender para la salvaguarda o restitución de los mismos.

En caso de cancelación, la PRONNIF asentará dicha anotación en el registro correspondiente.

**CAPÍTULO III**

**DE LA ASIGNACIÓN EN FAMILIA DE ACOGIDA**

**Artículo 70.** La asignación de una familia de acogida a niñas, niños y adolescentes, sólo podrá otorgarse a las familias que cuenten con certificación vigente.

**Artículo 71.** Para la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia de acogida, se deberá considerar que entre éstos y quienes serán las personas responsables de su guarda y custodia, exista una diferencia de edad de por lo menos diecisiete años. En casos excepcionales y a juicio de la PRONNIF, el requisito de diferencia de edad, podrá dispensarse en atención al interés superior de la niña, niño o adolescente.

**Artículo 72.** Una vez que la niña, niño o adolescente, se encuentre en posibilidad de ser integrado a una familia de acogida, la PRONNIF seleccionará la más idónea dentro del registro que se lleve para tal efecto.

Las características de la niña, niño o adolescente que requieren el acogimiento y sus necesidades, así como su interés superior y la prevalencia de sus derechos, serán la base para la selección de la familia.

Una vez realizada la designación, la familia de acogida deberá comunicar por escrito su aceptación ante la PRONNIF.

**Artículo 73.** Una vez seleccionada la familia, la PRONNIF solicitará la autorización judicial de conformidad con lo establecido por el artículo 397 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

Autorizada la designación por la autoridad judicial, se entregará a la familia de acogida, el oficio de asignación y el informe que contenga los datos generales de la niña, niño o adolescente, su ficha médica, la fecha a partir de la cual se asigna, así como la vigencia de la asignación y la demás información necesaria.

**Artículo 74.** La familia de acogida tendrá las siguientes obligaciones respecto a las niñas, niños o adolescentes:

1. Brindar irrestricto respeto a sus derechos humanos;
2. Proveer de una alimentación sana;
3. Cuidar de su salud en todo momento;
4. Brindar el acceso a la educación, así como a las actividades recreativas que sean posibles para su desarrollo físico y emocional;
5. Rendir un informe mensual a la PRONNIF, además de informar sobre cualquier incidencia que se presente;
6. Guardar confidencialidad;
7. Permitir al personal autorizado de la PRONNIF el acceso a todas las áreas del domicilio, con la finalidad de realizar visitas de supervisión, así como presentar ante la misma las constancias escolares, médicas y demás documentación que se considere necesaria;
8. Abstenerse de trasladar a las niñas, niños o adolescentes fuera de la ciudad, sin autorización por escrito de la PRONNIF;
9. Reincorporar a las niñas, niños o adolescentes al término del acogimiento o ante el requerimiento de la PRONNIF;
10. Dar seguimiento a las canalizaciones que con motivo del plan de restitución de derechos de la niña, niño o adolescente emita la PRONNIF;
11. Las demás que se consideren necesarias para el sano desarrollo y bienestar de las niñas, niños o adolescentes.

**CAPÍTULO IV**

**DE LA TERMINACIÓN DEL ACOGIMIENTO**

**Artículo 75.** La PRONNIF podrá dar por terminada la asignación, en los siguientes supuestos:

1. En caso de que se resuelva la situación jurídica de la niña, niño o adolescente;
2. Si de los seguimientos que se realicen se advierte que no se cumplieron las condiciones de adaptación;
3. En caso de presentarse algún tipo de violación a los derechos humanos de la niña, niño o adolescente;
4. En caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo anterior;
5. Los demás que sean necesarias para la protección del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

**CAPÍTULO V**

**DEL REGISTRO DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA**

**Artículo 76.** El registro de las familias de acogida a cargo de la PRONNIF, deberá contener, por lo menos, la información siguiente:

1. Datos generales de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida;
2. Domicilio de la familia;
3. Número de dependientes económicos en la familia;
4. Los ingresos y egresos mensuales de la familia;
5. La certificación emitida por el Consejo;
6. El perfil y número de niñas, niños o adolescentes que, en su caso, podrían acoger.

**TÍTULO OCTAVO**

**DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN**

**Artículo 77.** Procede el recurso de reconsideración en contra del acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido.

**Artículo 78.** El recurso de reconsideración se tramitará únicamente por las personas interesadas ante la PRONNIF, quien deberá resolverlo conforme a derecho.

**Artículo 79.** El plazo para interponer el recurso de reconsideración será de tres días hábiles contados a partir de la emisión del acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido.

**Artículo 80.** Los requisitos del recurso de reconsideración son los siguientes:

1. Se deberá interponer por escrito precisando el nombre y domicilio de las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida;
2. Señalar a la autoridad que emitió el acuerdo donde se describan las razones por las que la certificación o el certificado de idoneidad no fue expedido;
3. Expresar los agravios que cause el acuerdo señalado en la fracción anterior;
4. Ofrecer las pruebas que estimen pertinentes;
5. Firmar en forma autógrafa o estampar huella digital de las personas que lo promuevan.

**Artículo 81.** Dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la admisión del recurso, se desahogarán las pruebas que hayan estimado pertinentes las personas solicitantes de adopción o de constituirse como familia de acogida con relación a los agravios expuestos.

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, la PRONNIF emitirá la resolución que corresponda en un plazo de cinco días hábiles y se procederá a su debida notificación.

**Artículo 82.** Las resoluciones que se emitan con motivo del recurso de reconsideración serán definitivas y en su contra no procederá recurso alguno.

**TÍTULO NOVENO**

**DEL ARCHIVO, BASE DATOS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 83.** La PRONNIF contará con un sistema de información que permita registrar a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, así como el listado de las personas solicitantes de adopción, las adopciones concluidas y sus seguimientos.

**Artículo 84.** Para garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes, se creará un archivo documental y digital de los expedientes que se hayan originado en el proceso de adopción y de acogimiento familiar, el cual estará a cargo de la PRONNIF, quien observará los principios de confidencialidad y reserva, debiendo proporcionar la información a la persona adoptada, cuando este desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad.

Las niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el consentimiento de las personas adoptantes, y podrán hacerlo siempre que ello atienda al interés superior de la niñez.

**Artículo 85.** El archivo y base de datos a que se refiere el artículo anterior deberá conservarse por el periodo acordado por el Comité Técnico Documental de la PRONNIF atendiendo a lo establecido en la Ley General de Archivos.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Se modifican los artículos 105, 106 y 107 de la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 105.-** En el proceso administrativo de adopción, la Procuraduría deberá integrar el expediente conforme a lo establecido en la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 106.-** Una vez integrado el expediente, las Subprocuradurías Regionales lo remitirán al área de adopciones de la Procuraduría de las Niñas, Niños y la Familia, quien validará y registrará su solicitud de adopción.

**Artículo 107.-** La Procuraduría iniciará el procedimiento judicial de adopción de conformidad a lo previsto en la legislación familiar aplicable, una vez que se hayan agotado y satisfecho los requisitos legales que se desprenden de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás ordenamientos legales aplicables.

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se abroga el Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 27 de septiembre de 2013.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Los procesos de adopción que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se deberán concluir conforme a la normatividad vigente al momento de su inicio.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Se modifica la denominación del Consejo Técnico de Adopciones por Consejo Técnico de Evaluación, mismo que deberá integrarse de conformidad con lo establecido en el presente Decreto, en un periodo que no excederá de sesenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del mismo, previa emisión de la convocatoria para elegir a las personas representantes de las asociaciones civiles.

Cuando alguna disposición legal o administrativa haga mención al Consejo Técnico de Adopciones, se entenderá que se refiere al Consejo Técnico de Evaluación.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Cuando se haga alusión en un ordenamiento jurídico al Reglamento del Proceso Administrativo de Adopciones del Estado de Coahuila de Zaragoza se entenderá que se refiere a la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sin perjuicio de que con posterioridad se hagan los ajustes normativos necesarios.

**ARTÍCULO SEXTO.-** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y la Comisión Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. Blanca Eppen Canales (Secretaria), Dip. Diana Patricia González Soto, Dip. María Esperanza, Dip. Fernando Izaguirre Valdés, y Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de Septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. BLANCA EPPEN CANALES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÌA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÈS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CTALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 del mes de diciembre del año 2019, se acordó turnar a las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, con fundamento en los artículos 90, 111, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Los nuevos modelos de comunicación han provocado la exigencia ciudadana de generación de información por parte de los gobiernos ya no solo confiable, sino también accesible. El movimiento mundial “datos abiertos” busca que los gobiernos no solamente cumplan con su normativa de acceso a la información y transparencia, sino que la información este dispuesta en formatos asequibles, para que el propio ciudadano pueda contribuir a generar aplicaciones, nuevos datos y otros servicios, para lograr una mayor comprensión y aprovechamiento de la información.*

*Al observar diversos portales electrónicos de información y transparencias de diversos organismos públicos del Estado de Coahuila de Zaragoza, nos topamos con que la información esta presentada en formatos como imágenes y fotocopias, formatos que impiden que dicha información sea trabajada por parte del ciudadano con la finalidad de realizar un análisis a profundidad de la misma y que pudiera colaborar a que dicha información sirviera como fundamento para nuevas y mejoras políticas públicas en el Estado.*

*Cito textual*

*“Las iniciativas de Datos Abiertos se han consolidado como políticas nacionales en diversos países, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, naciones que comprometieron acciones específicas para la apertura de su información pública”*

*En septiembre de 2015, México hizo un llamado a nivel mundial para adoptar la Carta Internacional de Datos Abiertos, con la finalidad de aprovechar a plenitud las nuevas tecnologías logrando mejoras significativas en el bienestar de los ciudadanos.*

*La Carta Internacional de Datos Abiertos es una iniciativa de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y expertos en la materia, que articula los principios fundamentales para coordinar y promover la adopción de los Datos Abiertos a nivel global. Estos principios son un marco de acción común para que los datos sean un medio para el desarrollo sostenible.*

*El compromiso para impulsar los datos abiertos en México se vio estampado en el acuerdo firmado por 17 países en el 2015 y que ha ido agrupando nuevas naciones desde dichas fechas.*

*Es de destacar que el 20 de febrero del 2015 se publicó el Decreto federal en materia de la regulación de Datos Abiertos en México y que tiene por objeto:*

*“regular la forma mediante la cual, los datos de carácter público, generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las empresas productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables”*

*En dicho Decreto en su Artículo Quinto se establece:*

*“Para ser considerados como datos abiertos, los conjuntos de datos deberán contar con las características mínimas siguientes:*

***Gratuitos:*** *Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna;*

***No discriminatorios:*** *Serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios;*

***De libre uso:*** *Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;*

*Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;*

*Integrales: Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;*

***Primarios:*** *Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;*

***Oportunos:*** *Serán actualizados periódicamente, conforme se generen, y*

***Permanentes:*** *Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles a través de identificadores adecuados para tal efecto.*

*Es por lo anterior y con la finalidad de que la Ley de Acceso a la Información Pública de Coahuila, siga siendo un referente a nivel nacional e internacional que pongo a su consideración la presente iniciativa ciudadana, que tiene como único fin contribuir a que la sociedad contribuya a proponer nuevas políticas públicas, diferentes indicadores de gestión y propuestas de mejoras, sin dejar de lado que la presente iniciativa servirá para que la Ley en cuestión este en concordancia con leyes y decretos nacionales y con políticas públicas de avanzada a nivel internacional”.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma, así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto reformar la fracción V del artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, referente a la regulación de datos abiertos.

El acceso a la información se considera un derecho fundamental que se le otorga a la ciudadanía, por medio del cual se puede solicitar al gobierno información y de ello obtener respuestas satisfactorias, a fin de consolidar un mejor y más confiable sistema democrático.

En este sentido, encontramos que artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, el cual al tenor literal manifiesta que:

*Artículo 19*

*1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.*

*2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.*

*3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:*

*a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;*

*b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.*

Por su parte el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también consolida el derecho del acceso a la información, estableciendo que:

***Artículo 6o.*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

***Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.***

***El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.***

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A.*** *Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

***I.*** *Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

***II.*** *La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

***III.*** *Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.*

***IV.*** *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.*

***V.*** *Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.*

***VI.*** *Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.*

***VII.*** *La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.*

***VIII.*** *La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.*

*El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.*

*En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.*

*El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.*

*El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.*

*La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.*

*Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.*

*El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.*

*En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.*

*Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.*

*En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.*

*El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.*

*El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.*

*La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.*

*Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.*

*El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.*

***B.*** *En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:*

***I.*** *El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.*

***II.*** *Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.*

***III.*** *La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.*

***IV.*** *Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.*

***V.*** *La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.*

*El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.*

*El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.*

*El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.*

***VI.*** *La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.*

En este contexto, el iniciador expone que *“los nuevos modelos de comunicación han provocado la exigencia ciudadana de generación de información por parte de los gobiernos ya no solo confiable, sino también accesible. El movimiento mundial “datos abiertos” busca que los gobiernos no solamente cumplan con su normativa de acceso a la información y transparencia, sino que la información esté dispuesta en formatos asequibles, para que el propio ciudadano pueda contribuir a generar aplicaciones, nuevos datos y otros servicios, para lograr una mayor comprensión y aprovechamiento de la información”.*

De lo anterior, se concluye que en la actualidad no basta con recibir la información requerida, sino que también resulta oportuno que dicha información cumpla con los requisitos indispensables para facilitar en la medida de lo posible lo solicitado por la ciudadanía.

En base a ello, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece las características que deben cumplir los datos abiertos, entre las que se enlista que tales deben otorgarse de manera gratuita, que sean accesibles para todo usuario, que sean legibles por maquinas, entre otros.

Por su parte la Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro Estado, sienta la obligatoriedad de efectuar a la utilización de formatos abiertos y de fácil comprensión, sin embargo, resulta oportuno enlistar las características mínimas para dar adecuado cumplimiento con este derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que quienes integramos estas comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, coincidimos en la necesidad imprescindible de incorporar dentro de la ley de transparencia, las medidas para que se otorgue una información pública de fácil comprensión y que cumpla con las características básicas para su debido cumplimiento, todo ello en apego a la ley general en la materia.

No obstante lo anterior, estimamos que lo más adecuado, es definir dentro del glosario el concepto de datos abiertos, ya que ello facilitará la comprensión de los enunciados normativos y su correcta aplicación. En este sentido, se optó por la colocación de la porción normativa en el artículo tercero en lugar del artículo originalmente planteado.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona la fracción II del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, recorriéndose las ulteriores, para quedar como sigue:

**Artículo 3.** …

1. …
2. **Datos abiertos**: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

**a) Accesibles**:Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito;

**b) Integrales**: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios;

**c) Gratuitos**:Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

**d) No discriminatorios**: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro;

**e) Oportunos:** Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

**f) Permanentes:** Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto;

**g) Primarios:** Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible;

**h) Legibles por máquinas:** Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

**i) En formatos abiertos:** Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna;

**j) De libre uso**: Citan la fuente de origen como único requerimiento para ser utilizados libremente;

1. **Días:** Días hábiles.
2. **Documentos:** Los reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
3. **Expediente:** Unidad documental constituida por uno o varios documentos, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados.
4. **Documento Electrónico:** Información que puede constituir un documento, archivada o almacenada en un soporte electrónico, en un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento.
5. **Expediente Electrónico:** Es el conjunto de documentos electrónicos cuyo contenido y estructura permiten identificarlos como documentos de archivo que aseguran la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que contienen.
6. **Indicadores de Gestión:** La información numérica o gráfica que permite evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento del grado de ejecución de las actividades, la asignación y el uso de recursos en las diferentes etapas de los procesos, proyectos y programas; así como, los planes gubernamentales de los sujetos obligados en una dimensión de mediano y largo plazo.
7. **Indicador de Resultados:** La información que permita evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, indicando los beneficios obtenidos, de acuerdo a los resultados de la gestión.
8. **Información:** La contenida en los documentos o documentos electrónicos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier título o medio.
9. **Información Pública de Oficio:** La información que los sujetos obligados deben difundir, actualizar y poner a disposición del público en medios electrónicos de manera proactiva, sin que medie solicitud de por medio.
10. **Información Confidencial:** La información en posesión de los sujetos obligados, que refiera a la vida privada y/o los datos personales, por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la presente ley y/o la Ley de Protección de Datos Personales.
11. **Información Pública:** Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el carácter de confidencial.
12. **Información Reservada:** La información pública que por razones de interés público sea excepcionalmente restringido el acceso de manera temporal, de conformidad con el capítulo quinto de la ley.
13. **Instituto:** El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
14. **Medio Electrónico:** Sistema electrónico de comunicación abierta, que permite almacenar, difundir o transmitir documentos, datos o información.
15. **Ley:** La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
16. **Ley de Protección de Datos Personales:** Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza.
17. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
18. **Servidor público:** Los representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, los integrantes de organismos públicos autónomos, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las entidades públicas.
19. **Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información:** Aquél que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con el artículo 50 fracción I de la Ley General.
20. **Sujetos obligados**: Los señalados en el artículo 6 de esta ley.
21. **Sujetos obligados indirectos**: Las personas físicas o morales que por su labor auxiliar en funciones de orden público, y por razones de interés público, poseen obligaciones de transparentar información en términos de la Sección Tercera del Capítulo Tercero de la presente ley.
22. **Entidad Pública:** Los sujetos obligados a proporcionar información en los términos de la Ley General, esta ley y demás disposiciones aplicables, contenidos en el artículo 6 de esta ley, con excepción de las organizaciones de la sociedad civil que reciban y/o ejerzan recursos públicos en el ámbito estatal y municipal, a partir de 16,000 salarios mínimos generales vigentes en el Estado o aquellos que reciban un ingreso estatal, que sea propuesto dentro de su presupuesto y las instituciones de beneficencia.
23. **Organizaciones de la Sociedad Civil**: Asociaciones o Sociedades Civiles legalmente constituidas.
24. **Instituciones de Beneficencia:** Toda institución, asociación, fundación o ente económico que realice actos de beneficencia, en términos de la ley de la materia.
25. **Estado:** El Estado de Coahuila de Zaragoza.
26. **Versiones Públicas:** Documento en el que, para permitir su acceso, se testa u omite la información clasificada como reservada o la confidencial.
27. **Persona:** Todo ser humano sin importar condición o entidad jurídica, salvo lo dispuesto en la ley.
28. **Derecho de Acceso a la Información Pública:** El derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente ley.
29. **Protección de Datos Personales:** La garantía que tutela la privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas y sujetos obligados, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales.
30. **Prueba de daño:** Carga de los sujetos obligados de demostrar que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla.
31. **Redes sociales:** Formas de comunicación electrónica por medio de comunidades virtuales con objeto de compartir información, ideas, mensajes personales, fotografía, videos y diversos contenidos.
32. **Interés Público:** Valor agregado que posee la información producto de una actividad, que por su naturaleza resulta de importancia conocer para la comunidad para el debido respeto y ejercicio de los derechos humanos.
33. **Ley General:** Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
34. **Ley General de Protección de Datos Personales:** Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
35. **Organismo Garante Nacional:** Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
36. **Persona que realiza actos de autoridad:** Es toda aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. María del Rosario Contreras Pérez (Coordinadora), Dip. María Eugenia Cázares Martínez (Secretaria).En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ**  **(COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de lasComisiones Unidas de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto, que presenta el diputado Jaime Bueno Zertuche del grupo parlamentario “Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional por la que se reforma la fracción XVI del artículo 5 y la fracción IV del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza y el primer párrafo de artículos 211 y se adiciona un párrafo al final, asimismo se reforma el primer párrafo del artículo 212 y el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de fortalecer los derechos de las personas adultas mayores y sancionar las conductas que atenten contra su integridad.

**Resultando**

**Primero.-** Que en la sesión celebrada el día 04 de diciembre de 2019, se presentó ante el Pleno del Congreso la presente iniciativa de ley para su correspondiente lectura.

**Segundo.-** Que en virtud de lo anterior, tal iniciativa fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad para su estudio, análisis y dictamen.

**Considerandos**

**Primero.-** Que esta Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, con fundamento en los artículos 109, 163, 164, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**Segundo.-** Que conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre personas con discapacidad el cual prevé que: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”, se contactó el día 10 de septiembre del presente año mediante correo electrónico, vía telefónica y a través de la aplicación “whats app” con diversas organizaciones de la sociedad civil de todo el Estado de Coahuila, dedicadas a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, en especial a grupos, colectivos y asociaciones en favor de personas con discapacidad.

**Tercero.-** Que la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XVI del artículo 5 y la fracción IV del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza y el primer párrafo de artículos 211 y se adiciona un párrafo al final, asimismo se reforma el primer párrafo del artículo 212 y el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras, en las consideraciones siguientes:

**Exposición de motivos**

De acuerdo al Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en México , realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humando en febrero del presente año, se advierte que las proyecciones demográficas para nuestro país revelan una evidente inclinación al envejecimiento gradual de la población para los siguientes tres décadas.

Se afirma en dicho documento, que conforme a indicadores realizados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) se calcula que en el país habitarán en el año 2050, alrededor de 150,837,517 personas aproximadamente, de las cuales el 21.5% (32.4 millones) tendrán 60 años de edad o más. Y de este grupo etario la mayor parte serán mujeres con el 56.1 %, y la esperanza de vida se habrá incrementado a 81.60 años, mientras que en los hombres será de 77.34 años su esperanza de vida y será una población aproximada del 43%.

Eso significa que, la población de adultos mayores seguirá incrementándose paulatinamente hasta representar casi la cuarta parte de la población total. Es por ello que resulta necesario implementar políticas públicas y ofrecer una legislación cada vez más acorde a proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores.

Si bien es cierto, en nuestro país la protección de los derechos de las personas adultas mayores ha ido evolucionando progresivamente, fue a partir de la década de los setentas en la época en la que el Estado consolidó la atención a este sector de la población, mediante la creación del Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) actualmente Instituto Nacional de las personas Adultas Mayores (INAPAM).

Durante las últimas dos décadas se han implementado diversas acciones y programas que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores. En los Programas de Desarrollo de las diversas administraciones públicas federales que han transcurrido, se han ido introduciendo políticas públicas más concretas para ofrecer programas sociales de amplia cobertura y efectividad a este sector poblacional. Sin embargo, no en todos los casos se han obtenido resultados que impacten en el ejercicio de todos sus derechos humanos.

En materia legislativa, Coahuila se sumó en el 2005 creando la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado, denominación que luego fue reformada mediante decreto el 12 de abril de 2016 para establecerla con el nombre actual de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El objeto de esta ley es justamente reconocer, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, a fin de elevar su calidad de vida y promover su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro Estado.

Es precisamente en este ordenamiento legal, en el que se establecen las bases y disposiciones para su cumplimiento, ya sea a través de políticas públicas estatales para la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, programas estatales o municipales y aquellas acciones implementadas por el Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores.

Ahora bien, de acuerdo a diversos estudios sobre indicadores de la situación económica en las personas adultas mayores, se advierte que dicho entorno está estrechamente vinculado con el derecho al empleo, los ingresos, el retiro y la seguridad financiera.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estimó en el 2015 que en nuestro país el porcentaje de individuos de 65 años y más que vivían en pobreza, fue superior al 30% mientras que el índice promedio de otros países fue de 12.6 %.

En el 2017, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) advirtió que la problemática que más aqueja a este sector de la población es la falta de empleo y de oportunidades para encontrar trabajo y reflejó que el 37% de las personas adultas mayores encuestadas dependen económicamente de sus hijos o hijas.

En ese contexto, resulta notable la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas adultas mayores, pues como ya lo advertimos es alto el índice de personas que dependen económicamente de otro familiar y en algunas ocasiones son objeto de abandono o maltrato por esa situación.

De acuerdo a cifras del INEGI la estadística relativa a la incidencia de violencia contra las personas mayores, es preocupante, pues se advierten cifras anuales cerca de 1,494,953 de mujeres mayores de 60 años a nivel nacional vivieron algún episodio de violencia.

En consecuencia, a la par de la perspectiva demográfica que alerta sobre el envejecimiento poblacional, deben construirse y considerarse proyecciones sobre las complicaciones que afrontarán las personas mayores de 60 años para disfrutar de una vida plena.

Es por ello que la presente iniciativa propone reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de fortalecer las normas que evitan poner en riesgo la integridad de las personas adultas mayores, sus bienes o derechos, determinando cuales conductas serán sancionadas por la vía penal.

En ese sentido, se amplía el término de abandono que define la ley, a efecto de incorporar rasgos distintivos como lo es la acción sistemática, permanente y consiente en la omisión de atender las necesidades básicas de una persona mayor y que por ello ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.

Además se propone reformar lo concerniente a las obligaciones de la familia para con las personas adultas mayores, a efecto de impedir actos u omisiones que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos, por lo que se agregan dentro de esas acciones, el hacinamiento o desalojo cometidos por familiares en contra de los adultos mayores y estableciendo que tales conductas serán sancionadas penalmente, esto debido a que se considera un acto que atenta contra la integridad de las personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad por su edad avanzada, su dependencia económica, o por su deterioro físico o mental, y además que es cometido por quien debiera salvaguardar y proteger su integridad pues tiene a su cargo el cuidado y la atención de un adulto mayor.

En cuanto a la propuesta de reforma al Código Penal, se incluye dentro de los tipos penales referentes a Abandono de persona incapaz de valerse por sí misma; Abandono en institución o ante otra persona y del Incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias la conducta cometida en contra de las personas adultas mayores; pues si bien es cierto, se contempla en términos generales, consideramos que es necesario establecerlo de manera particular, a fin de evitar que este sector de la población tan vulnerable sea protegida en sus derechos.

Asimismo se está proponiendo incluir el establecimiento de medidas de protección que el Ministerio Público estime pertinentes cuando advierta que existe un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima, siendo el caso en particular de los adultos mayores.

Consideramos que era necesario hacer estas adecuaciones legislativas en aras de proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores, que propicien una mejor calidad de vida para este sector de la población y evitar que sus derechos sean vulnerados.

**Tercero.-** Una vez analizada la iniciativa propuesta, estas Comisiones Unidas, advierten que en México existe un alto índice de rezago en materia de protección efectiva de las personas adultas mayores, pues como lo menciona el ponente en su exposición de motivo, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Encuesta Nacional sobre Discriminación, se desprende que alrededor del 30% de las personas adultas mayores están en una situación de pobreza y el 37% depende económicamente de sus hijos.

Esta situación, convierte a un amplio sector de la población adulta mayor en un grupo transversalmente vulnerable ya que no sólo confluye la pobreza y la senectud, sino que en muchos casos, la situación de calle, el pertenecer a una comunidad indígena o tener algún tipo de discapacidad limitan y/o restringen a las personas adultas mayores para ejercer efectivamente sus derechos y en muchos casos son los mismos familiares los que generan estas condiciones por acciones o bien por omisiones de cuidado.

De acuerdo con el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, en México el 16% de los adultos mayores sufren maltrato o abandono, un problema que a pesar de las políticas públicas nacionales y estatales continua presente y que es necesario erradicar, pues no basta con apoyos económicos y pensiones no contributivas, se necesitan además servicios de asistencia social para mujeres y hombres mayores de 60 años de edad, apoyos integrales como atenciones médicas, de enfermería, rehabilitación física, odontología, psicología, de terapia ocupacional, entre otros.

De igual forma, se necesita sancionar efectivamente a las personas que abusen, maltraten o abandonen a las personas adultas mayores, dejando de lado su obligación familiar y legal de un debido cuidado. De ahí que la iniciativa del Diputado Jaime Bueno Zertuche sea relevante y acorde con estas necesidades pues busca conceptualizar y sancionar diversas acciones que realizan los particulares en contra de la dignidad de las personas adultas mayores. Entre los principales cambios están:

* Definir el abandono como la falta de acción sistemática, permanente, consiente y deliberada o no, para atender de manera integral las necesidades de las personas adultas mayores.
* Prohibir los actos de hacinamiento o desalojo de las personas adultas mayores por parte de sus familiares.
* Sancionar penalmente las acciones de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono hacinamiento o desalojo de las personas adultas mayores o con discapacidad.

Estas propuestas legislativas constituyen desde nuestra perspectiva reformas trascendentes y relevantes que coadyuvarán a mejorar la situación que viven las personas adultas mayores más vulnerables, creando además sanciones específicas que protegen la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia de este grupo en situación de vulnerabilidad. De ahí que estas Comisiones unidad consideran procedente tales cambios legislativos.

**Cuarto.-** Por todas estas razones y con fundamento en lo anteriormente expuesto, declaramos procedente la presente iniciativa, por lo que se expide el siguiente:

**Proyecto de Decreto**

**PRIMERO.-** Se reforma la fracción XVI del artículo 5 y la fracción IV del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 5.- …**

**I. a la XV. …**

**XVI.** Abandono. La falta de acción **sistemática, permanente, consiente y** deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral.

**Artículo 28.- …**

**…**

**I. a la III. …**

**IV.** Evitar que alguno de sus integrantes, **realice o induzca a la realización de** cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, **hacinamiento o desalojo** de la persona adulta mayor y demás actos u omisiones que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. **Los actos descritos en la presente fracción serán sancionados acorde a lo establecido en el Código Penal para el Estado.**

**SEGUNDO.-** Se reforma el primer párrafo del artículos 211 y se adiciona un párrafo al final, asimismo se reforma el primer párrafo del artículo 212 y el artículo 254 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 211.** (Abandono de persona incapaz de valerse por sí misma)

Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa, a quien, teniendo la obligación jurídica de cuidarla, **realice o induzca a la realización de acciones discriminatorias de abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, hacinamiento o desalojo de** una persona incapaz de valerse por sí misma, **incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad,** por más tiempo del necesario para preservar o no agravar su estado de salud.

...

...

...

**Así mismo se proporcionara las medidas de protección idóneas que considere pertinentes el Ministerio Público, cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima, establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales**

**Artículo 212**. (Abandono en institución o ante otra persona)

Se impondrá de tres a seis meses de prisión, a quien abandone en una institución o ante cualquier otra persona, que no hayan aceptado el cuidado, a una persona incapaz de valerse por sí misma, **incluyendo a las personas adultas mayores y/o con discapacidad,** respecto de la cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo.

...

...

**Artículo 254**. (Incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias)

Se impondrá de tres meses a tres años de prisión, multa, suspensión de los derechos de familia y la reparación del daño a quien, a pesar de tener recursos económicos, no le proporcione en lo posible, los recursos necesarios a cualquier persona **ascendiente o descendiente**, **menores incapaces o adultos mayores,** respecto de la que tenga obligación legal de proveer a su alimentación, habitación, salud y/o educación.

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda (Coordinadora), Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. María Esperanza Chapa García (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de septiembre de 2020.

**ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA**  **(COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se agrega una porción normativa al artículo 375 y se modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 03 del mes de junio de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se agrega una porción normativa al artículo 375 y se modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se agrega una porción normativa al artículo 375 y se modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“En nuestro Estado, existen familias que tienen el control del número de hijos que desean tener, pero también encontramos parejas que, por problemas relacionados a la fertilidad, deciden adoptar a un menor de edad, sabiendo de antemano, que esto conlleva una serie de requisitos que deben cumplirse cabalmente.*

*Respecto a lo anterior, se debe poner en contexto el significado de la palabra adopción, y es, un proceso legal que les permite a los menores de edad y adolescentes a formar parte una familia que cubra sus necesidades, tanto emocionales, afectivas y económicas. Debemos de entender que es el derecho del menor a formar parte de una familia, no de los adultos a adoptar.*

*La adopción tiene una base jurídica en el Código Civil Federal, en los artículos 390, 391, 392 y demás relativos de la norma referida.*

*Este procedimiento busca siempre el bien superior de la niñez, y para tal efecto, se requiere que dichos procesos se lleven a cabo con la eficiencia y eficacia por parte de las autoridades.*

*En Coahuila, por ejemplo, los adoptantes deben ser personas mayores de 25 años en pleno ejercicio de sus derechos y tener más de 17 años de diferencia de la o el adoptado; contar con medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona que trata de adoptar; ser aptas y adecuadas para adoptar; y que no se encuentran inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos. Este trámite se debe realizar de forma personal, por tanto, las personas interesadas en adoptar, deberán presentarse en las instalaciones de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), donde se les proporcionará una solicitud para la inscripción a la lista de espera de adopciones, en el que se piden datos generales a los solicitantes como son domicilio; Estado civil; los datos laborales y los motivos que indujeron a tomar la decisión de adoptar.*

*En nuestro país existe una tendencia negativa en cuanto al tema de adopción, y es la lentitud de su procedimiento. Para darnos una idea de lo que aquí se expone, daremos a conocer algunos ejemplos de lo que acontece en algunas entidades de México.*

*Para que se tenga permitido adoptar en Colima, es indispensable que la pareja interesada cumpla con distintos requisitos, entre ellos ser aptos psicológicamente para atender un nuevo integrante en la familia; no consumir drogas; y tener una forma honesta de vivir. Estos aspectos deben ser evaluados por especialistas en la materia y validados por un juez, explicó el abogado Abraham Méndez Palomares. "Tiene que presentarse la demanda firmada por los padres (adoptantes), tienen que venir y ratificar el documento, en lo sucesivo, se designa un tutor provisional y en ese intercambio se levanta el acta donde se ratifica la adopción. Tiene que estar presente el ministerio público que es el defensor de los derechos del menor, y con su presencia se convalida la adopción, siendo este el sistema actual".*

*El proceso de adopción puede ser difícil y lento y una vez que se otorga hasta que el menor de edad sea adulto debe existir supervisión del estado a través del DIF, trabajo que no se hizo hace cuatro o cinco años con las adopciones que se otorgaron en Colima a extranjeros y por eso se suspendieron. 2*

*Por su parte, en Mazatlán Sinaloa, hay más de 60 niños entre los 0 y 12 años de edad, que están en espera de una segunda oportunidad para reintegrarse a una familia. Las circunstancias que mantienen a los menores en los albergues son los requerimientos, los procesos y la falta de cultura que rodea a la adopción.3*

*La niñez es una joya que debemos cuidar y proteger por encima de cualquier interés, y es momento de hacer valer lo establecido en nuestras leyes, convenios y tratados internacionales en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, trabajamos en reformas y políticas públicas que beneficien a la ciudadanía, esta vez, enfocadas a que los procesos de adopción sean eficientes y eficaces, con la finalidad de que los menores de edad se integren a un ambiente familiar sano que permita su óptimo desarrollo físico y mental.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la iniciativa que agrega una porción normativa al artículo 375 y modifica la fracción III del artículo 376, de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, en materia de adopciones.

El Interés Superior de la Niñez es un principio jurídico internacional, que comprende un conjunto de acciones y procesos enfocados a garantizar una vida digna a niñas, niños y adolescentes en el mundo.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y en él se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, este tratado, ha sido el más ampliamente ratificado por los países del mundo, por lo cual los estados parte, incluyendo México, están obligados a respetarlos y hacerlos cumplir sin ningún tipo de discriminación, en dicho tratado, se definieron los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños, las niñas y adolescentes y se establecieron cuatro principios fundamentales de la Convención, que son los siguientes:

* *La no discriminación.*
* *El interés superior del niño.*
* *El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo.*
* *La participación infantil.*

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, sin embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar lo siguiente:

*“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”*

Asimismo, cabe señalar lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 2:

*“Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:*

***I.*** *Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;*

***II.*** *Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y*

***III.*** *Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.*

*El**interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.*

*Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.*

*Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.*

*La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.*”

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas a ese principio, en los que se enfatizan que los tribunales deberán atender al interés superior de la niñez y adolescencia, y que éste demanda un estricto escrutinio de las particularidades del caso. Asimismo, señalan que debe considerarse la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte, y se acentúa la obligación del juez(a) de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para la niña, niño o adolescente.

En la Constitución Política de nuestro estado, se establece en el artículo 8° lo siguiente:

*“En el Estado de Coahuila de Zaragoza la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos a favor de niños y niñas, estará a cargo de una Procuraduría y del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, que establecerá los mecanismos de coordinación y participación de los poderes públicos del estado y de los municipios, de los organismos públicos autónomos y la sociedad civil, en los términos que determine la ley, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.*”

Ahora bien, la iniciativa objeto del presente dictamen, encuentra motivación en la finalidad de que procesos de adopción en nuestro estado, sean más eficientes y eficaces, lo que pueda permitir *que los menores de edad se integren a un ambiente familiar que les permita un óptimo desarrollo físico y mental.*

Además queremos señalar, que el “interés superior” es también un principio rector que debe regir la adopción, ya que se señala en el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de la Niñez que los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.

En ese sentido, encontramos que el artículo 173 también de nuestra constitución local, menciona que los menores tienen derecho a una vida sana, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, a la recreación, a la preparación para el trabajo **y a llevar una vida digna en el seno de la familia**; así como a todos los derechos que la Constitución General, los Tratados Internacionales suscritos por México y los previstos en esta Constitución les confieren. El Estado, los municipios, los poderes legislativo y judicial y demás autoridades, **realizarán todas las acciones legislativas, reglamentarias, administrativas y judiciales para garantizar el uso y goce de estos derechos a las niñas y niños en Coahuila, sin menoscabo de lo dispuesto por el Artículo 8º de esta Constitución.**

Es por ello, que coincidimos con el promovente de la iniciativa, en que se establezca en la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza que todo procedimiento de adopción, deberá ser llevado a cabo de manera eficaz y eficiente, conforme a lo establecido en los convenios y tratados internacionales y en la misma ley, además de que se instituya que las autoridades pertinentes determinen en base a estudios que se les realicen si las personas son aptas y adecuadas para adoptar.

Cabe resaltar, que se realizó una modificación en lo concerniente a la reforma al artículo 376, a fin de que quede armonizado con el proyecto de ley de crea la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la cual se menciona que los estudios que las autoridades competentes realicen para saber si las personas son idóneas para adoptar, sean los correspondientes a estudios socioeconómicos, médicos y psicológicos.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.- SE AGREGA UNA PORCIÓN NORMATIVA AL ARTÍCULO 375 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 376 DE** **LEY PARA LA FAMILIA DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA QUEDAR COMO SIGUE:**

**Artículo 375.** La adopción constituye, de una manera irrevocable, una relación de filiación entre adoptante y adoptado o adoptada, al mismo tiempo que establece un parentesco equiparable al consanguíneo entre la o el adoptado y la familia de la o el adoptante y entre ésta y éste y los descendientes del adoptado. Todo procedimiento de adopción, deberá ser llevado a cabo de manera eficaz y eficiente, conforme a lo establecido en los convenios y tratados internacionales y en la presente ley.

**Artículo 376. …**

De la **I.** al **II.** …

**III.** Que son personas aptas y adecuadas para adoptar, de acuerdo a lo que las autoridades competentes determinen en base a estudios socioeconómicos, médicos y psicológicos que se les realicen.

**IV.** …

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de septiembre de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para desincorporar y enajenar a título gratuito, un lote de terreno con una superficie de 165-36-48.66 hectáreas, ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, a favor del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, con objeto de llevar a cabo la construcción de las instalaciones del Destacamento Militar en la Región Carbonífera del Estado.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 15 del mes de septiembre del año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.**  Que estaComisión de Finanzas, con fundamento en los artículos 91, 116, 117 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.** Que la iniciativa se sustentó en la siguiente exposición de motivos.

**TERCERO.**  Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es concertar la realización de acciones previstas en el **“PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2023”,** y sus Programas, con las diferentes instancias de gobierno sea federal, estatal o municipal, lo que favorecerá el desarrollo social, cultural y económico del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, ratifica su intención de coadyuvar con la Federación en el cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentran la preservación de la seguridad y paz nacional, la salvaguarda de los derechos e integridad física de las personas, preservar las libertades individuales, el orden público, en virtud de lo cual, solicita autorización para continuar con la donación de un terreno con una superficie de 165-36-48.66 hectáreas (ciento sesenta y cinco hectáreas, treinta y seis áreas, cuarenta y ocho punto sesenta y seis centiáreas), propiedad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para que la Secretaría de la Defensa Nacional, construya las instalaciones del Destacamento Militar en la Región Carbonífera de la Entidad.

En efecto, el Gobierno del Estado es propietario y poseedor, con pleno dominio, de un inmueble de superficie de 165-36-48.66 hectáreas (ciento sesenta y cinco hectáreas, treinta y seis áreas, cuarenta y ocho punto sesenta y seis centiáreas), ubicado en la Fracción B que se segrega del predio denominado “La Florida” en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, amparando su titularidad con la Escritura Pública N° 240 de fecha 14 (catorce) del mes de julio del año 2020 (dos mil veinte), inscrita en la Oficina de Sabinas del Registro Público el día 13 (trece) del mes de agosto del año 2020 (dos mil veinte) bajo la Partida 62963, Libro 630, Sec. I.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que se han cubierto los requisitos necesarios para la enajenación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de coadyuvar con la Federación en el cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentran la seguridad y salvaguardar los derechos e integridad física de los habitantes de esa región, el cual se otorgará seguridad y beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, las integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE DESINCORPORE UN LOTE DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 165-36-48.66 HECTÁREAS (CIENTO SESENTA Y CINCO HECTÁREAS, TREINTA Y SEIS ÁREAS, CUARENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y SEIS CENTIÁREAS), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE LO ENAJENE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que desincorpore, un lote de terreno con una superficie de 165-36-48.66 Hectáreas (ciento sesenta y cinco hectáreas, treinta y seis áreas, cuarenta y ocho punto sesenta y seis centiáreas), ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para que lo enajene a título gratuito, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

**ARTÍCULO SEGUNDO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a título gratuito un lote de terreno con una superficie de 165-36-48.66 Hectáreas (ciento sesenta y cinco hectáreas, treinta y seis áreas, cuarenta y ocho punto sesenta y seis centiáreas), ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, de acuerdo al Cuadro de Construcción, que se reproduce, a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LADO** | | **RUMBO** | **DISTANCIA** | **V** | **COORDENADAS** | |
| **EST.** | **PV** | **Y** | **X** |
|  |  |  |  | 1 | 3,172,026.0000 | 768,454.0000 |
| 1 | 2 | S 42º47’45.88” W | 2,353.578 | 2 | 3,170,299.0000 | 767,855.0000 |
| 2 | 3 | N 68º34’55.00” W | 815.357 | 3 | 3,170,596.7443 | 766,095.9514 |
| 3 | 4 | N 42º47’45.88” E | 2,000.00 | 4 | 3,172,064.2970 | 767,454.7336 |
| 4 | 1 | S 87º48’18.75” E | 1,000.00 | 1 | 3,172,026.0000 | 768,454.0000 |
| **SUPERFICIE: 165-36-48.66 HECTÁREAS** | | | | | | |

**ARTÍCULO TERCERO. -** La donación que en el presente Decreto se autoriza, se realizará a favor del Gobierno Federal, a través de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el fin de que por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional se construyan las instalaciones del Destacamento Militar en la Región Carbonífera del Estado.

**ARTÍCULO CUARTO. -** Se faculta al Titular del Ejecutivo del Estado para que, por sí, o por medio del Representante Legal que designe, otorgue a favor del Gobierno Federal la Escritura Pública de Donación correspondiente a la enajenación gratuita, que con el presente Decreto se autoriza.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Los gastos que se generen por el proceso de Escrituración y Registro de la operación autorizada en este Decreto, serán cubiertos totalmente por el Gobierno Federal.

**ARTÍCULO SEXTO.-** El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en el Título de Propiedad respectivo.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** En el supuesto de que no se formalice la donación que en el presente Decreto se autoriza dentro de un término de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto o el donatario no cumpla con la construcción de las instalaciones para el Destacamento Militar de la Región Carbonífera del Estado, quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose, en su caso, de nueva autorización legislativa para proceder a la enajenación gratuita del inmueble a que se hace referencia en el Artículo Primero de este Documento y se revertirá el bien al Estado.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. J. Reyes Alvarado Quiñones, con objeto de llevar a cabo la ampliación de su vivienda.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 17 del mes de junio del año 2020 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, según consta en acta de Cabildo, de fecha 30 de enero de 2020, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. J. Reyes Alvarado Quiñones.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción norte del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II segunda etapa, de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 19.02 metros y colinda con Calzada Obsidiana.

Al Sureste: mide 3.87 metros y colinda con Lote 1 Manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II etapa.

Al Sureste: mide 16.59 metros y colinda con límite de propiedad y Parcela 37 Fracción 2, Zona 1 del Ejido La Joya y Lote 2 Manzana 1 del Fraccionamiento Quintas del Sol.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la ampliación de su vivienda. En caso de darle un uso distinto a lo estipulado, por ese sólo hecho se rescindirá el contrato revirtiéndose el precio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para llevar a cabo la ampliación de la vivienda.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. J. Reyes Alvarado Quiñones.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción norte del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II segunda etapa, de esa ciudad, una superficie de 29.17 m2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 19.02 metros y colinda con Calzada Obsidiana.

Al Sureste: mide 3.87 metros y colinda con Lote 1 Manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II etapa.

Al Sureste: mide 16.59 metros y colinda con límite de propiedad y Parcela 37 Fracción 2, Zona 1 del Ejido La Joya y Lote 2 Manzana 1 del Fraccionamiento Quintas del Sol.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la ampliación de su vivienda. En caso de darle un uso distinto a lo estipulado, por ese sólo hecho se rescindirá el contrato revirtiéndose el precio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil “Casa Hogar Abrázame” A.C., con objeto de llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una Casa Hogar.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 23 del mes de octubre del año 2019 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *”Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, según consta en acta de Cabildo, de fecha 26 de junio de 2020, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil “Casa Hogar Abrázame” A.C.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción sur del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II segunda etapa, de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide en línea curva en 128.44 metros y colinda con Calzada Obsidiana.

Al Sureste: mide en línea curva en 6.73 metros y colinda con Avenida Juárez y Calzada Obsidiana.

Al Sur: mide 45.58 metros y colinda con Avenida Juárez.

Al Suroeste: mide 117.40 metros y colinda límite de propiedad (hoy fracc. Veredas de la Joya)

Al Noroeste: mide 3.87 metros y colinda fracción norte del mismo predio.

Dicho inmueble se encuentra registrado con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el Folio Real N°6621.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una Casa Hogar. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una casa hogar con la prestación de la atención a la infancia y juventud mexicana mediante actividades de albergue, alimentación, educación y formación ética y de valores a niños y niñas que por sus condiciones y circunstancias viven o trabajan en la calle o bien habitan en un ambiente no apto para su desarrollo integral, el cual otorgará un beneficio social a los habitantes de ese sector.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, una fracción del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento “Sol de Oriente II segunda etapa” de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil “Casa Hogar Abrázame” A.C.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción sur del lote 1 de la manzana 1 del Fraccionamiento Sol de Oriente II segunda etapa, de esa ciudad, una superficie de 3,391.66 m2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide en línea curva en 128.44 metros y colinda con Calzada Obsidiana.

Al Sureste: mide en línea curva en 6.73 metros y colinda con Avenida Juárez y Calzada Obsidiana.

Al Sur: mide 45.58 metros y colinda con Avenida Juárez.

Al Suroeste: mide 117.40 metros y colinda límite de propiedad (hoy fracc. Veredas de la Joya)

Al Noroeste: mide 3.87 metros y colinda fracción norte del mismo predio.

Dicho inmueble se encuentra registrado con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón, en las oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el Folio Real N°6621.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción y funcionamiento de una Casa Hogar. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio. El donatario tendrá un plazo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la publicación de este Decreto, para que formalice la escritura en la que deberá expresar en su clausulado esta condición, y concluya la construcción de la Casa Hogar objeto de la donación.

Transcurridos los 24 (veinticuatro) señalados en el párrafo anterior sin que la construcción haya concluido, el donatario podrá solicitar de forma justificada, por única vez, al Municipio la ampliación hasta por otros 12 (doce) meses, dando vista de dicha solicitud al Congreso del Estado para su consideración, discusión, y en su caso aprobación.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 200.00 M2., ubicado en la colonia “José de las Fuentes Rodríguez” de esa ciudad, a favor de la C. Juana Irene de la Rosa García, con objeto de llevar a cabo la ampliación de su casa habitación y regularizar la tenencia de la tierra, el cual se desincorporo con Decreto número 613 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 14 del mes de agosto de año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 17 de julio de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 200.00 M2., ubicado en la colonia “José de las Fuentes Rodríguez” de esa ciudad, a favor de la C. Juana Irene de la Rosa García, el cual se desincorporo con Decreto número 613 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

El inmueble antes mencionado se identifica como área vial que forma parte de la calle Once de la colonia José de las Fuentes Rodríguez, de esa ciudad, con una superficie de 200.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 10.00 metros y colinda con Ejido La Joya.

Al Sur: mide 10.00 metros y colinda con Avenida Presidente Carranza.

Al Oriente: mide 20.00 metros y colinda con Lotes 7 y 8 de la manzana 24.

Al Poniente: mide 20.00 metros y colinda con Lote 1 de la manzana 22 (propiedad de la solicitante).

**TERCERO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la ampliación de su casa habitación y regularizar la tenencia de la tierra. En caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se rescindirá el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, para dar certeza jurídica al predio y regularizar la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 200.00 M2., ubicado en la colonia “José de las Fuentes Rodríguez” de esa ciudad, a favor de la C. Juana Irene de la Rosa García, el cual se desincorporo con Decreto número 613 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

El inmueble antes mencionado se identifica como área vial que forma parte de la calle Once de la colonia José de las Fuentes Rodríguez, de esa ciudad, con una superficie de 200.00 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 10.00 metros y colinda con Ejido La Joya.

Al Sur: mide 10.00 metros y colinda con Avenida Presidente Carranza.

Al Oriente: mide 20.00 metros y colinda con Lotes 7 y 8 de la manzana 24.

Al Poniente: mide 20.00 metros y colinda con Lote 1 de la manzana 22 (propiedad de la solicitante).

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la ampliación de su casa habitación y regularizar la tenencia de la tierra. En caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se rescindirá el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 72.74 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, a favor del C. Héctor Herrera Montelongo, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de febrero de 2020.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 14 del mes de agosto de año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 05 de marzo de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 72.74 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, a favor del C. Héctor Herrera Montelongo, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de febrero de 2020.

El inmueble antes mencionado se identifica en área vial de terreno de la Calzada Xochimilco, de la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con una superficie de 72.74 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 13.52 metros y colinda con Lote 23, Manzana “H” SMZ.XI

Al Suroeste: mide 13.52 metros y colinda con Calzada Xochimilco.

Al Sureste: mide 5.38 metros y colinda con Calle Aztecas.

Al Noroeste: mide 5.38 metros y colinda con Área vial de la Calzada Xochimilco.

La fracción del área descrita es propiedad del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en los Artículos 21, 22 y 23 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila.

**TERCERO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra y otorgar certidumbre jurídica del predio. En caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se rescindirá el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, para poder otorgar certidumbre jurídica del predio, se lleve a cabo la escrituración del mencionado predio para regularizar la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 72.74 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, a favor del C. Héctor Herrera Montelongo, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 25 de febrero de 2020.

El inmueble antes mencionado se identifica en área vial de terreno de la Calzada Xochimilco, de la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con una superficie de 72.74 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 13.52 metros y colinda con Lote 23, Manzana “H” SMZ.XI

Al Suroeste: mide 13.52 metros y colinda con Calzada Xochimilco.

Al Sureste: mide 5.38 metros y colinda con Calle Aztecas.

Al Noroeste: mide 5.38 metros y colinda con Área vial de la Calzada Xochimilco.

La fracción del área descrita es propiedad del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en los Artículos 21, 22 y 23 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra y otorgar certidumbre jurídica del predio. En caso de darle un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho se rescindirá el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Castaños, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, dos fracciones de área vial; la primera con una superficie de 288.00 m2, ubicado en la calle Francisco I. Madero y la segunda una fracción de la calle Guillermo Prieto con superficie de 400.00 m2, ubicado en la colonia “Libertad” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para ser destinado a la Secretaria de Educación con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo, el cual se desincorporo con Decreto número 612 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 14 del mes de agosto de año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 15 de julio de 2020, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título gratuito, dos fracciones de área vial; la primera con una superficie de 288.00 m2, ubicado en la calle Francisco I. Madero y la segunda una fracción de la calle Guillermo Prieto con superficie de 400.00 m2, ubicado en la colonia “Libertad” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, el cual se desincorporo con Decreto número 612 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

La primera fracción con una superficie de 288.00 m2, ubicada en la calle Francisco I. Madero de la colonia Libertad, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 8.00 metros y colinda con la calle Francisco I, Madero.

Al Sur: mide 8.00 metros y colinda con la calle Guillermo Prieto.

Al Oriente: mide 52.00 metros y colinda con la calle Francisco I. Madero.

Al Poniente: mide 52.00 metros; 44.00 metros de ellos colindan con predio municipal y 8 metros con calle Guillermo Prieto.

La segunda fracción con una superficie de 400.00 m2, ubicada en la calle Guillermo Prieto de la colonia Libertad, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 50.00 metros y colinda con predio municipal.

Al Sur: mide 50.00 metros y colinda con la calle Guillermo Prieto.

Al Oriente: mide 8.00 metros y colinda con calle Francisco I. Madero.

Al Poniente: mide 8.00 metros y colinda con predio municipal.

**TERCERO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Castaños, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, para poder dar cumplimiento a las funciones de dicha Secretaria, el cual pretenden beneficiar a toda la comunidad, brindando un espacio digno para otorgar educación nivel primaria a los residentes de esa colonia.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el R. Ayuntamiento de Castaños, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, dos fracciones de área vial; la primera con una superficie de 288.00 m2, ubicado en la calle Francisco I. Madero y la segunda una fracción de la calle Guillermo Prieto con superficie de 400.00 m2, ubicado en la colonia “Libertad” de esa ciudad, a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, el cual se desincorporo con Decreto número 612 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de junio de 2020.

La primera fracción con una superficie de 288.00 m2, ubicada en la calle Francisco I. Madero de la colonia Libertad, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 8.00 metros y colinda con la calle Francisco I, Madero.

Al Sur: mide 8.00 metros y colinda con la calle Guillermo Prieto.

Al Oriente: mide 52.00 metros y colinda con la calle Francisco I. Madero.

Al Poniente: mide 52.00 metros; 44.00 metros de ellos colindan con predio municipal y 8 metros con calle Guillermo Prieto.

La segunda fracción con una superficie de 400.00 m2, ubicada en la calle Guillermo Prieto de la colonia Libertad, cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 50.00 metros y colinda con predio municipal.

Al Sur: mide 50.00 metros y colinda con la calle Guillermo Prieto.

Al Oriente: mide 8.00 metros y colinda con calle Francisco I. Madero.

Al Poniente: mide 8.00 metros y colinda con predio municipal.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Castaños, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de septiembre de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SE PROTEGA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS SECTORES MÁS DESFAVORECIDOS DEL PAÍS.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita **Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga**, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

La educación es uno de los grandes motores que impulsan el desarrollo de una nación. Con un sistema educativo de calidad, además de proveer a nuestra niñez de los conocimientos necesarios para su formación, también se enriquece nuestra cultura, nuestro espíritu y se genera comunidad.

Según informes del Banco Mundial, la educación contribuye significativamente al logro de dos objetivos estratégicos: poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida[[42]](#footnote-42).

Según este organismo, si los gobiernos de los países no impulsan una educación de calidad, los estudiantes, futuros profesionistas y líderes del mañana, estarán condenados a vivir en la pobreza y la exclusión, siendo los niños con los que la sociedad está más en deuda, los que más necesitan de una buena educación para prosperar en la vida[[43]](#footnote-43).

Las condiciones del aprendizaje, al igual que sus resultados, son casi siempre peores entre los grupos desfavorecidos, como las comunidades indígenas y comunidades rurales. Con la pandemia actual, dicha brecha se ha hecho más grande, pues el acceso a recursos tecnológicos para los estudiantes de los sectores más desfavorecidos es casi imposible, por lo que tomar clases en casa está fuera de su alcance.

De esta manera, todos los órdenes de gobierno deben de tener entre sus prioridades la educación, por un lado, para elevar su calidad y por otro, para no dejar atrás a aquellos sectores desfavorecidos que, con la nueva normalidad, han quedado desprotegidos y sin acceso al conocimiento.

Todos esperábamos que dicha realidad fuera contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, sin embargo, no fue así. Con el nuevo presupuesto, el Ejecutivo Federal desprotegió aún más a los desfavorecidos, dejando atrás su promesa de *“por el bien de todos, primero los pobres”*.

Aunque el presupuesto destinado a educación básica sólo se redujo en 3% en términos reales (de 51,380 mdp a 49,739 mdp) las reducciones y recortes son *“un golpe brutal a la inclusión, a la formación docente y a la educación inicial”*[[44]](#footnote-44).

Mexicanos Primero, tras analizar el PPEF 2021, concluyó que el presupuesto del siguiente año recorta programas esenciales para garantizar efectivamente que las niñas, niños y jóvenes no sólo lleguen a la escuela, sino que logren aprendizajes significativos en ella y participen en su proceso educativo[[45]](#footnote-45).

En el proyecto de egresos enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, se contempla eliminar el exitoso programa de escuelas de tiempo completo, que este año atenderá a 3.6 millones de niñas, niños y jóvenes, en más de 27 mil escuelas del país.

Con el programa de escuelas de tiempo completo, se atiende a población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, de bajos niveles de logro educativo o altos índices de abandono escolar. Estas instituciones dejarán de ofrecer el servicio de alimentación a estudiantes que carecen de acceso a alimentación en sus hogares, además, se afectará a miles de maestros que quedarán sin ingresos.

También se desaparecerá el programa nacional de convivencia escolar, a través del cual, se apoya a las escuelas que se ubican en zonas con altos índices de violencia. Sumado al programa anterior, también se dejó de contemplar en el presupuesto para el siguiente año los programas de atención a la diversidad de la educación indígena y de atención educativa a la población migrante, a pesar de que son sectores cuyo rezago exige atención prioritaria.

Otro grupo vulnerable que se verá severamente afectado por los recortes planteados en el nuevo presupuesto, es aquel que conglomera a más de 390 mil niños, niñas y adolescentes de comunidades marginadas de zonas urbanas y rurales del país, que asisten a las escuelas CONAFE, pues se contempla un recorte a su presupuesto de 18% para el 2021, sumado al recorte del 5% de este año.

Como bien lo afirma el Banco Mundial, un sistema educativo incluyente se traduce en libertad individual y bienestar social. En el caso de las personas, fomenta el empleo, incrementa el ingreso, mejora la salud y reduce la pobreza. A nivel social, la educación de calidad impulsa el crecimiento económico de largo plazo, estimula la innovación, fortalece las instituciones y promueve la cohesión social.

Sin embargo, estos beneficios dependen en gran medida del aprendizaje. Entregar becas mensuales, sin invertir en programas focalizados, no garantiza el aprendizaje, por lo que el uso de recursos no es óptimo y los niños, niñas y jóvenes de los grupos más desfavorecidos quedarán sin las habilidades necesarias para el futuro.

Les invito, para que, como legisladores, alcemos la voz y no permitamos que se deje al margen el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de los grupos más vulnerables del país y de nuestra entidad, pues hoy más que nunca, necesitan del apoyo de sus representantes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. -** **ENVÍESE UN EXHORTO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SE PROTEGA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS SECTORES MÁS DESFAVORECIDOS DEL PAÍS.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO**

**DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la diputada Blanca Eppen Canales, conjuntamente con las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con objeto de que este H. Pleno solicite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos** **su intervención en el caso de la pareja que fue agredida por elementos de la Guardia Nacional durante las protestas en la presa La Boquilla; así como en la investigación del conflicto por el agua, toda vez que involucra el ejercicio de diversos derechos humanos; lo anterior con base en la siguiente:**

**Exposición de Motivos**

En fecha reciente, los medios nacionales dieron cuenta de la siguiente información:

Fuente: <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/09/asi-expulsaron-campesinos-a-la-guardia-nacional-de-la-presa-la-boquilla-en-chihuahua-por-falta-de-agua/>

“9 septiembre 2020

Denunciaron que 52 de los 67 municipios del estado padecen sequía gracias al tratado del 1944.

Desde hace tiempo, productores agrícolas del estado de Chihuahua han protestado por la falta de agua para sus riegos, pero la semana pasada llegaron a un acuerdo que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) incumplió al aumentar la extracción de la presa La Boquilla para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos.

Como resultado, los campesinos tomaron la presa por la fuerza y obligaron a los elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la zona a desalojar el recinto, no sin antes tener un enfrentamiento en el que los uniformados trataron de disipar al colectivo con gas lacrimógeno.

En la mesa de diálogo que tuvo lugar anteriormente, la Conagua aceptó cesar la extracción del agua, luego de que se obtuviera una cierta cantidad. Sin embargo, el pasado domingo 06 de septiembre, aumentó la cantidad de líquido extraído de la presa.

Los protestantes aseguran, de acuerdo con el periódico El Universal que 52 de los 67 municipios del estado padecen sequía gracias a dicho tratado. Por ello tomaron la presa y esta madrugada se mantienen alerta ante la posible llegada de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se había comprometido con los campesinos a acompañarlos a una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para tocar el tema. Sin embargo, el mandatario estatal denunció ante la Alianza Federalista que el ejecutivo federal se habría negado a recibirlo o tomarle la llamada.

México se ha retrasado en la cantidad de agua que debe enviar al norte de su frontera desde sus presas en conformidad con un tratado de 1944. Pero los productores agropecuarios del estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, quieren conservar el agua para sus propios cultivos…” **Fin de la cita.**

A la par de los hechos, destaca que, una pareja fue agredida (falleciendo Jéssica Silva en el acto) en los aparentes enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Nacional durante la toma de la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua.

De acuerdo a las primeras noticias, la Guardia Nacional reportó que el enfrentamiento ocurrió mientras los elementos trasladaban a tres personas detenidas por tener granadas de gas lacrimógeno. Los guardias fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos, quienes los agredieron con armas de fuego.

Los elementos repelieron la agresión y posteriormente localizaron a una persona fallecida dentro de uno de los vehículos, acompañada de otra que se encontraba lesionada, misma que fue trasladada a un hospital, donde se recupera.

Sin embargo, conforme surgieron nuevos datos, la versión fue cambiando hasta señalar que la Guardia Nacional disparó a quemarropa contra el matrimonio. La información más uniforme al respecto refiere que “Testigos señalan que alrededor de las 22:30 horas del martes, el matrimonio circulaba sobre la avenida Tecnológico de la ciudad Delicias, antes de dirigirse a su casa en el poblado de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, cuando fueron alcanzados por las unidades con matrículas GN332343 y GN332340.

Los efectivos hicieron al menos cinco disparos, con los que mataron a quien fue identificada como Jéssica Silva y dejaron al borde de la muerte a su esposo, Jaime Torres. Ambos se dedicaban a la venta de nuez en la región.

En su reporte, la policía local dio a conocer que en el vehículo en que viajaba el matrimonio no había indicios sobre el uso de algún arma de fuego…”

Hasta hace dos semanas, se mencionó que la Guardia Nacional, de acuerdo con la información vertida, puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a 17 elementos; no obstante, las investigaciones se deben ampliar hacia todo el actuar de la Guardia Nacional en la zona, desde los motivos por los que estaban ahí, hasta las circunstancias en que se dio el enfrentamiento, destacando la investigación inmediata que inició la Fiscalía General del Estado.

Por otra parte, no se puede dejar de lado el origen del problema, el reclamo de los campesinos en relación con el agua que por medio de la presa La Boquilla se entrega a Estados Unidos, y la falta de esta que dicen padecer. El agua forma parte de un derecho humano, y protestar de manera pacífica y respetuosa también es un derecho humano, por lo que la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se hace necesaria en estos hechos.

Ya en fecha reciente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señalo que la FGR atrajo la investigación de la agresión contra la pareja ya mencionada, en base a la participación en los eventos de agentes de una fuerza federal, en este caso, la Guardia Nacional, solicitado a la Fiscalía General del Estado la entrega de las constancias del caso y sus avances en las investigaciones.

Cualquiera sea el caso, los hechos siguen cubiertos por un velo de dudas y contradicciones.

Sin embargo, resaltan otros hechos, y nos referimos a que, al tratarse de protestas civiles y pacíficas, y actos de represión ilegal de parte de las autoridades federales, existe por ende violación a derechos humanos diversos, y es la CNDH a quien le corresponde actuar en este tipo de casos, que involucran grandes grupos humanos y la persecución o el actuar indebido de las fuerzas federales; así lo establece la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el siguiente artículo:

*Artículo 3o.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.*

*Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las Entidades Federativas o Municipios, la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional.*

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo la cual se solicita se turne a la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, para que de considerarlo procedente apruebe lo siguiente:

**Único. - Este H. Pleno solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención en el caso de la pareja que fue agredida por elementos de la Guardia Nacional durante las protestas en la presa La Boquilla; así como en la investigación del conflicto por el agua, toda vez que involucra el ejercicio de diversos derechos humanos.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

*ATENTAMENTE*

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de septiembre de 2020**

DIP. BLANCA EPPEN CANALES

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA PARA EXHORTAR A LA CFE A LA REVISION DE LOS CONTRATOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARBON.**

**DIPUTADO PRESIDENTE. -**

**H. Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura**

**PRESENTE. -**

Su servidora Zulmma Verenice Guerrero Cázares con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, conjuntamente con mi compañero Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

Como dice el dicho: “Ni pa atrás, ni pa delante”. Así estamos en el tema de la comercialización del carbón a pequeños productores de la región carbonífera desde hace meses. A principios de este año vimos fotografías y notas que el tema ya estaba solucionado. Todos y todas aquí nos congratulamos y reconocimos en el gobierno federal el esfuerzo realizado, pero resulta que siempre no.

Empezaron a surgir dudas sobre los el cambio de parámetros de calidades(que se han venido manejando por los ultimos 20 anos) y que han cambiado la propuesta de los nuevos contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los pequeños productores de carbon de la Region Carbonifera parámetros de calidades que no corresponden al carbon de térmico de la cuenca Sabinas.

Los pequeños productores de carbón tienen 25 anos de ser proveedores de las carboeléctricas de Nava (mismas que fueron diseñadas para trabajar con una mezcla idónea que incluía el 30% de carbon térmico con características y especificaciones del carbon térmico que se extrae en la Cuenca Sabinas) y de esta actividad se han generado de miles de empleos para diferentes generaciones.

Entendemos que con la alternancia y los nuevos gobiernos cambien las políticas públicas pero el centro debe ser el ciudadano, el impacto a la economía en la región y no el interés unilateral la de una dependencia de gobierno.

Como preámbulo recordaré que desde que inició el Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador hubo un compromiso de palabra de fortalecer la compra del carbón, pero también paradójicamente poco a poco se fue restringiendo la comercialización hasta por más de ocho meses quedar sin actividad.

Apenas hace unos meses la CFE hablaba de voluntad y de trabajar en favor de la región carbonífera.

“*La CFE ha tenido toda la voluntad y disposición para atender el compromiso del presidente de la República con los pequeños productores de carbón de la región carbonífera, de Coahuila, sin embargo, está empresa se ha visto limitada por las restricciones impuestas por la reforma energética del 2013, sus leyes secundarias, la normatividad que se ha derivado de ellas y que rige el sector eléctrico en México”.*

En otra parte de la nota informativa expedida a principios de mayo destaca:

*“Adicionalmente, la CFE ha emprendido al interior de la empresa estrategias que por un lado permiten reducir costos de operación de estas centrales y por otro lado ejecuta un plan de mantenimientos que permite recuperar las unidades de generación para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista. Así mismos se diseña un nuevo esquema de compras de carbón que permite asegurar que los pequeños y medianos productores de carbón tengan una participación igualitaria en el suministro del carbón a las centrales de la CFE instaladas en el norte del país”.*

Sin embargo, al paso de los meses esa voluntad no se ve reflejada en acciones específicas que beneficien al comercio del carbón en la región. A contrario. A decir que los líderes de las organizaciones del carbón los acuerdos y formas están diseñadas para impedir que cualquier pequeño productor pueda participar bajo los estándares que establece la CFE.

El Diario Vanguardia en su nota del 9 de septiembre con el título: “Productores de la Región Carbonífera acuerdan dejar sin suministro de carbón a CFE hasta que se modifique contrato” refiere los siguiente:

*“Los presidentes de la****Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC), Unión Nacional de Auténticos Mineros (UNAM) y la Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC), Bogar Montemayor, Eduardo Aguirre y César Ceniceros Marín****, respectivamente, dieron a conocer que en vista de que es completamente ventajoso el contrato, buscarán por la vía jurídica se modifique.*

“Estamos complemente en desventaja, pues el nuevo contrato y las especificaciones, fue hecho a modo; están ventajosos a favor de la CFE, muy leoninos, tiene especificaciones que el carbón de la región difícilmente puede cumplir, diferentes a como anteriormente habíamos tenido negociaciones con la paraestatal”, señala *César Ceniceros de la UNPC.*

*Consideran que el nuevo contrato elaborado es inviable, por lo que más del 90 por ciento de los productores no podrán cumplir con base a las nuevas* ***especificaciones, lo que los haría perder lo poco que les queda de patrimonio que han logrado al paso de los años” ( FIN DE LA CITA)***

**Y aunque el problema se ha planteado directamente a las autoridades correspondientes aun no obtienen respuesta. Por ejemplo, la una carta enviada en agosto de año en cursos de los productores de carbón a titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) destaca:**

**¨*Las especificaciones técnicas solicitas en el pliego e requisitos se encuentra fuera de toda posibilidad de cumplimiento. Esto considerando las características geológicas del carbón de la región de Sabinas y de los más de 20 años de experiencia de suministro de nuestro carbón en las centrales Termoeléctricas de la CFE ubicadas en Nava, Coahuila¨.***

Entre los requisitos solicitaron se movieran las especificaciones que por años se ha comercializado y penalizan si no se cumple con la calidad del mineral, el problema es que no hay capacidad de dialogo actualmente.

Considero que, así como en diciembre hubo una mesa de trabajo y negociación para sacar un pedido emergente, así es necesario que las autoridades y productores se siente a dialogar por el bien de la economía de la región carbonífera.

La región carbonífera ha demostrado que tiene una capacidad de producción de 4 millones de toneladas de carbón por año, donde 3 millones se destinaban a la CFE y 1 hacia AHMSA para la producción de acero.

Hay que recordar que desde hace más de dos años la Región Carbonífera vive en una constante zozobra respecto a su futuro económico. Como hemos citado las tres asociaciones de productores de carbón en la región: Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC), Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC), Unión Nacional de Auténticos Mineros (UNAM) han manifestado la voluntad y capacidad para llegar a un acuerdo razonable donde impere el como si y no poner obstáculos.

Recuerdo que meses anteriores destacaba que por parte de los productores existe el compromiso de cumplir con los requisitos justos y razonables que establezca la CFE.

Hoy estamos en la incertidumbre y la crisis a tope por la Pandemia Covid-19 que se ha extendido más de seis y en un escenario para la región donde en lugar de haber facilidades solo hay trabas.

Es necesario contar con toda certeza respecto a si la actividad minera continuará y hasta qué punto, porque no solo es la economía de los productores sino de las familias que dependen del carbón.

**Es por lo anteriormente expuesto que solicitamos a este Honorable Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura aprobar el presente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución:**

**PRIMERO. Que este Honorable Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura realice un respetuoso, atento y desesperado llamado al Gobierno Federal para que manera urgente se tomen las medidas necesarias y donde impere la Voluntad por parte del Ejecutivo nacional en materia de celebrar, acordar y reactivar la actividad de los pequeños productores de carbón a través de una mesa de dialogo directa con la CFE que lleve como única finalidad la de dar solución a la crisis económica en la región carbonífera.**

**GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”**

**SALTILLO, COAHUILA A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

Proposición con punto de acuerdo, que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con relación a la situación que acontece actualmente con las Empresas de redes de transporte UBER, IN DRIVER, LOCH, TAXIFY, CABFY, PINK, especialmente en el municipio de Saltillo, Coahuila.

**H. Pleno del Congreso del Estado**

**de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

El Suscrito Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito presentar a este H. Pleno del Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la siguiente:

**Exposición de Motivos**

La semana pasada durante el desarrollo de la sesión del pleno, atendí a un grupo de concesionarios de diversas agrupaciones de taxis (Radio taxis Primero de Mayo, Radio Auto, Radio taxi 5 de Mayo, Radio Taxi de Saltillo, Radio Taxi 20 de noviembre, Taxi Seguro de Saltillo) entre las cuales se aglomera cerca de 180 concesionarios del gremio de autos de alquiler en esta ciudad capital.

Durante el desarrollo de dicha reunión, este grupo de concesionarios me expusieron la problemática por la que están atravesando actualmente en este municipio de Saltillo, Coahuila, misma que les dificulta el poder brindar de manera adecuada el servicio que ellos otorgan, pues consideran que no existen las mismas condiciones (piso parejo), para todas las empresas que se dedican al servicio de alquiler por medio de plataformas tecnológicas como UBER, IN DRIVER, LOCH, TAXIFY, CABFY, PINK.

De igual forma, los miembros de la asociación de taxistas A.C., me comentan que se encuentran extrañados con respecto al tratamiento diferenciado que se le ha dado a las Empresas de Redes de Transporte de servicio de alquiler, por parte de las autoridades de transporte tanto estatales como municipales, pues aplican criterios totalmente diferentes para unos y para otros.

Para empezar, los vehículos que trabajan para las empresas como UBER, IN DRIVER, LOCH, TAXIFY, CABFY, PINK, no se encuentran legalmente registrados ante la secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad como lo señala la ley, ni mucho menos han pagado la cantidad promedio de entre $ 15,000.00 a $ 35,000.00, por concepto de concesión, como si lo han realizado todo los agremiados a las diversas asociaciones de taxis durante muchos años.

En segundo lugar, con el fin brindar el Servicio Público de Transporte en su modalidad de Taxi, todos los prestadores del servicio sin excepción, tanto los Choferes, Dueños de Carro y Concesionarios, deben cumplir con una serie de requisitos, tanto de documentación como pago de derechos o impuestos, revisiones, etc., que vienen estipuladas tanto en la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado, en el Reglamento Municipal de Transporte, así como en las respectivas Leyes de Ingresos, situación que puntualmente llevan a cabo todos los agremiados una asociación de taxistas, cosa que en cambio nunca han cumplido quienes operan como empresas de transporte como UBER, IN DRIVER, LOCH, TAXIFY, CABFY, PINK, situación que desde luego tampoco es justa ni debe seguir operando de esa manera pues debe aplicarse por igual la ley en materia de transporte para todos.

Sin lugar a duda, un servidor durante estos casi tres años como legislador, me he podido percatar la cada vez más complicada situación que representan para el servicio de transporte de pasajeros las compañías que prestan dicho servicio a través de alguna plataforma digital, en algunos municipios del Estado, tales como UBER, IN DRIVER, LOCH, TAXIFY, CABFY, PINK, entre otras, pues estas compañías si se les puede denominar así, operan al margen de la ley, representando una situación de riesgo permanente para la ciudadanía.

En efecto, estas empresas de servicio de transporte operan al margen de la ley, pues no obstante que en el año 2018, se hicieron una serie de reformas a la Ley Estatal de Transporte y Movilidad Sustentable, donde ahora por obligación se les exige que deben de registrarse y empadronarse tanto en el Estado como en los municipios que pretenden operar, al día de hoy muchas de estas compañías no lo han hecho, y siguen operando sin respetar la normatividad de la materia.

De igual forma, es del conocimiento público el riesgo que implica el funcionamiento de compañías como las que aquí se mencionan, pues sus plataformas se encuentran en otras partes del mundo, por tanto no brindan ningún tipo de seguridad y certeza para quienes pueden ser víctimas de algún delito cometido por quienes operan las unidades bajo esta modalidad de una aplicación. Por ello desde hace algún tiempo países como España, Italia, Alemania, Francia entre otros, han prohibido la operatividad de compañías que prestan el servicio de alquiler mediante una aplicación.

Como legisladores nuestra prioridad debe ser la protección de la ciudadanía, que puede quedar expuesta a una situación de vulnerabilidad por no contar con los mecanismos de control adecuados. En ningún momento desearíamos, que pasara lo que ya ha sucedido en varios estados del país donde jovencitas principalmente, que han solicitado el servicio de estas Empresas de Redes de Transporte q trabajan por medio de aplicaciones han sido secuestradas y asesinadas, por choferes que supuestamente están bien seleccionados para realizar ese servicio, pero la realidad demuestra lo contrario.

Por último otro fenómeno que se ha estado dando ya desde hace más de un año en algunas regiones del estado específicamente en la sureste y laguna, es que individuos con un vehículo se hacen pasar como si fueran carros de alquiler que operan a través de alguna aplicación como UBER, IN DRIVER, TAXIFY, CABFY, realizan traslados de ciudadanos que confiadamente se suben sin saber que en caso de suceder alguna situación no existe respaldo de ningún tipo, por lo que se hace necesario como se realiza en la ciudad de torreón llevar a cabo operativos por parte de la autoridad municipal en coordinación con la estatal, a fin de detectar este tipo de anomalías deteniendo a los individuos que engañen a la ciudadanía poniéndola en riesgo, procediendo aplicar todo el rigor de la ley.

Compañeras y compañeros diputados, como lo he señalado en reiteradas ocasiones en esta misma tribuna, la diversidad de opciones es buena para la ciudadanía, lo que se debe cuidar en todo momento, es que tanto las empresas como las asociaciones de concesionarios que presten un servicio de transporte privado a los ciudadanos, deben cumplir ciertos requisitos que brinden la seguridad que las y los coahuilenses se merecen.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a este H. Pleno del Congreso del Estado, para que sea atendida en la vía de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

**Primero.-** Que éste H. Pleno del Congreso del Estado, envíe un exhorto al titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad así como al cabildo municipal de Saltillo, a efecto de solicitarles que de manera coordinada, le den una solución real y efectiva, al problema que actualmente se está suscitando con las Empresas de Redes de Transporte, que operan en el municipio de Saltillo, Coahuila, todo ello con el fin primeramente de que exista piso parejo para todos los que se dedican a la prestación del servicio de transporte de alquiler y en segundo para brindar la seguridad y tranquilidad que se merecen los usuarios de este servicio.

**Segundo.-** Que éste H. Pleno del Congreso del Estado, envíe un exhorto a la Titular de la Secretaría de Seguridad en el Estado, así como al Director de la Policía preventiva municipal de Saltillo, Coahuila a efecto de solicitarles que de manera coordinada realicen operativos como los que se llevan a cabo en la ciudad Torreón, Coahuila, a efecto de ubicar a los individuos que con algún vehículo se hacen pasar por prestadores de servicios de transporte de alquiler bajo alguna plataforma digital, sin ser esto cierto, procediendo a detenerlos, retirarles sus vehículos y aplicarles las sanciones correspondiente.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 23 de Septiembre de 2020.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ, CON EL OBJETO DE EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA A FIN DE CREDENCIALIZAR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE NO HAN PODIDO REALIZAR SUS TRÁMITES EN ESTA DEPENDENCIA, YA QUE EL SERVICIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE HASTA NUEVO AVISO, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Graciela Fernández Almaraz, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada **de urgente y obvia** resolución en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

En nuestro país se ha presentado el fenómeno de envejecimiento demográfico, mismo que es un proceso, en el que la población llega a ser más vieja, respecto ciertos criterios, tales como el incremento en la proporción de personas mayores entre 60 y 65 años, en relación a la población total, tomando de igual manera otros criterios como: expectativa promedio de vida, edad promedio de una población, proporción comparada de población vieja y joven, afectando en de manera física a través del factor edad, además del ámbito económico, labora, salud, emocional, educación y todo lo relativo a las personas mayores.

En ese sentido, se han establecido políticas públicas a fin de atender las necesidades de este sector poblacional, el cual es considerado un grupo vulnerable, contemplando esto, en un marco jurídico en el que inciden los derechos de los adultos mayores para que ejerzan plenamente sus capacidades en el seno familiar y social, preservando siempre su dignidad humana.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece la competencia del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, este organismo según el artículo 28, es el encargado de coordinar las estrategias y programas en favor de este grupo vulnerable, dentro de las cuales contempla la protección, asesoramiento, atención y orientación respecto programas impulsados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en Estados y municipios.

Luego de que la pandemia Covid-19 fue declarada contingencia sanitaria por la OMS, el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores en nuestro Estado y por tratarse de un grupo de alto riesgo de contagio, el INAPAM decidió cerrar sus puertas sin aviso de fecha de reapertura, dejando en la imposibilidad de realizar trámites, como la actualización de credenciales, ocasionando que no puedan adquirir medicamentos, alimentos o utilizar el transporte con los beneficios ya establecidos, ya que al estar vencidas o no contar con dicha credencial emitida por el INAPAM, estos beneficios no son válidos.

Las oficinas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, de las distintas delegaciones de nuestra entidad, han permanecido cerradas desde entonces, sin fecha definida para que este las personas mayores puedan ser atendidas y beneficiarios de los distintos programas de ayuda[[46]](#footnote-46).

Los Adultos Mayores tienen derecho a una atención preferente, servicios de salud, así como a ser orientados e informados de los programas que sean benéficos para ellos, por lo que resulta sumamente importante brindarles las herramientas para garantizar su sobrevivencia y una atención digna y oportuna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO. – EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA A FIN DE CREDENCIALIZAR A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE NO HAN PODIDO REALIZAR SUS TRÁMITES EN ESTA DEPENDENCIA, YA QUE EL SERVICIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE HASTA NUEVO AVISO, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud a la Secretaria de Desarrollo Rural de Coahuila, para resolver la preocupante situación que viven productores del Ejido la Ventana en Matamoros, debido a una plaga de langostas que están arrasando con sus cultivos; lo anterior con base a lo siguiente:**

Desde hace un mes, habitantes del Ejido la Ventana en Matamoros, Coahuila viven una situación por demás preocupante ante una plaga de langostas que está arrasando con sus cultivos de maíz.

De acuerdo a la información de Arturo Mora Olguín, productor del sector social de este ejido, esta plaga acabó en su totalidad con los cultivos de 20 hectáreas en esta zona.

Dicho número de hectáreas son solo del Ejido La Ventana, pero se tiene conocimiento que en otros ejidos de esa zona, también están siendo perjudicados por esta plaga.

Se trata de un chapulín o langosta de aproximadamente ocho centímetros de largo, de color verde, los que están acabando con esos cultivos desde hace un mes, amenazando el esfuerzo, trabajo y dedicación de varios meses de los productores de esta zona.

Es una plaga, que ya tenía algunos años que no se presentaba en la región, sin embargo, probablemente por la humedad que se ha dado en las últimas semanas es que pudo presentarse nuevamente este problema.

Esta situación ha generado temor e incertidumbre en los productores agrícolas del sector social, ya que de continuar la plaga, va a devastar todos sus cultivos.

Lamentablemente la falta de recursos de los productores agrícolas no les ha permitido adquirir el insecticida adecuado que les permitiría acabar con esta plaga.

La situación que viven los productores en nuestro país es una de las más graves en los últimos años, ya que la Federación ha suspendido y desaparecido algunos de los programas que se tenían de apoyo del campo.

Dentro del presupuesto de egresos de la federación para el 2021 se contempla una considerable disminución de recursos para el campo aún más drástico del que se ha dado en los últimos años.

En 2018 se aprobaron 74 mil 476 millones de pesos para la Secretaría de Agricultura, para el 2019 el presupuesto cayó a 65 mil 435 millones de pesos.

Para el 2020 el recorte se duplicó, aprobándose un presupuesto de apenas 47 mil 577 millones de pesos. Ahora la propuesta para 2021, prácticamente mantiene el recorte para el campo con 49 mil 291 millones de pesos.

Este tipo de recortes presupuestales para el campo en nuestro país está ocasionando que este sector quede prácticamente a la deriva ante un complicado panorama económico, es por ello que es indispensable que los Ayuntamientos en coordinación con el Gobierno de Coahuila brinden los apoyos necesarios para los trabajadores del campo en nuestra entidad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo la cual se solicita se turne a la Comisión de Desarrollo Rural, para que de considerarlo procedente apruebe lo siguiente:

**ÚNICO. Este H. Pleno, envíe una atenta solicitud a la Secretaria de Desarrollo Rural de Coahuila, para resolver la preocupante situación que viven productores del Ejido la Ventana en Matamoros, debido a una plaga de langostas que están arrasando con sus cultivos.**

Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de Sep. de 2020

DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ

DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES

DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ

DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE

**PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CON EL OBJETO DE EXHORTAR A LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES ESTATALES DE SALUD A FIN DE QUE ESTABLEZCAN PROGRAMAS Y ACCIONES DE DIFUSION SOBRE EL DERECHO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Verónica Boreque Martínez González, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el Artículo 59 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los Artículos 21 Fracción IV, 152 Fracción I, 179, 180, 181, 182 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar esta proposición con Punto de Acuerdo, solicitando que la misma sea considerada de **urgente y obvia resolución**, en base a la siguiente:

**E X P O S I C I O N D E M O T I V O S**

En el próximo mes de octubre recordaremos la interminable *“Lucha contra el dolor”*. Desde 1984, cada 13 de octubre se conmemora el *“Día Mundial de los Cuidados Paliativos”* rindiendo honor a todas aquellas personas que valientes lucharon, o siguen luchando, hasta los últimos días de su vida.

Desde el surgimiento de dichas técnicas de cuidado médico, aplicadas por primera vez durante la edad media en el continente europeo cuando iniciaron los hospicios, se tenía claro y muy en mente la importancia de dichos cuidados para, al menos, dignificar los últimos momentos de vida de una persona en fase terminal.

Afortunadamente hoy día, los cuidados paliativos pueden integrarse conjuntamente con el tratamiento terapéutico; sea por la importancia que estos ameritan o por el repentino e imprevisible deterioro de salud que se puede presentar en los enfermos, esta técnica no solo se brinda en los hospicios o exclusivamente a pacientes que tienen una esperanza de vida menor a 6 meses; hoy ya se puede aplicar con anterioridad durante el tratamiento médico con el fin de brindar calidad de vida a los pacientes y a sus familiares, independientemente de que sean o no pacientes terminales.

Y es que la finalidad en la aplicación de los cuidados paliativos es aliviar los síntomas y el dolor que los pacientes experimentan, y los cuales no solo afectan su cuerpo, sino que también los dañan de forma psicológica, espiritual y social. Se trata de un proceso más complejo, el cual requiere la participación de un equipo profesional de salud multidisciplinario que ayude tanto al paciente como a su familia a sobrellevar la enfermedad, a mantener la unión y a regresar un poco de paz a su mente.

En cuanto a México se trata, desde el 2009 incorporó una sección sobre cuidados paliativos a su Ley General de Salud, que concede a las personas con una enfermedad terminal a recibir cuidados paliativos en las instituciones de salud y en el hogar. También les concede el derecho a recibir información sobre su enfermedad y diagnóstico, y les permite tomar decisiones acerca de la atención médica que desea recibir en el final de su vida, incluyendo el derecho a rechazar los tratamientos de soporte vital.

Particularmente hicimos lo propio para Coahuila, presentando una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud durante el ejercicio del 1er año de ejercicio constitucional de esta Legislatura, que propone la inclusión del Título Octavo Bis, correspondiente a *“Los Cuidados Paliativos a Enfermos en Situación Terminal”*, y la cual fue aprobada y publicada en la Ley de la materia durante el pasado 2019.

Esto nos ayudó muchísimo para sentar las bases de este tema importantísimo y el cual hoy debe ser contemplado por parte de las enfermeras, doctores, personal médico y demás autoridades de salud como punto prioritario durante la atención de la salud para los usuarios del sistema estatal de salud.

Ahora es turno de las mismas autoridades de salud para poner a funcionar dichos mecanismos, que sin duda alguna serán más que de provecho y beneficio para las personas que viven un cuadro de salud negativo. Conforme a la armonización legal que hacemos mención, así como a las facultades y obligaciones adquiridas por las instituciones y autoridades de salud, las cuales deben cumplir en base a las reformas legales mencionadas, es que pedimos hoy a través del presente punto de acuerdo que estas mismas garanticen en todo momento el pleno, libre e informado ejercicio de los derechos que los enfermos tienen con relación a su estado de salud en etapa preventiva, rehabilitaria o terminal, según sea el caso.

Gracias a la implementación de servicios como los cuidados paliativos esto se puede lograr y, además, se prepara el terreno para todos los achaques sociales futuros que deriven de problemas de salud. Dejando de lado la ola negativa que vivimos por el Covid-19, no cabe duda de que se presentan miles de situaciones medicas diversas que desenlazan en momentos trágicos y traumáticos para el paciente y por supuesto para su familia; por ello se debe cambiar la perspectiva de estos de tal manera que puedan disfrutar los momentos que les queda juntos y no solo pensar en la muerte.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante este H. Congreso del Estado, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia** resolución el siguiente:

**P U N T O D E A C U E R D O**

**ÚNICO.- SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ESTATALES DE SALUD A FIN DE QUE ESTABLEZCAN PROGRAMAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN QUE ASEGUREN, Y SOBRE TODO, GARANTICEN LA APLICACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA CADA PACIENTE QUE LO NECESITE DENTRO DE LOS CENTROS DE SALUD, CLÍNICAS U HOSPITALES DEL ESTADO.**

**ASIMISMO, SE LES EXHORTA, PARA QUE, A TRAVÉS DE SUS INSTITUCIONES DE SALUD, MANTENGAN ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN Y ARCHIVOS CLÍNICOS DE LOS PACIENTES QUE, DENTRO DE SUS INSTALACIONES, REQUIERAN O NECESITAN LA APLICACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS A ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE. –**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS, EN CONJUNTO CON LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA QUE** **SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL Y A LOS 38 AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD A QUE PROMUEVAN Y APOYEN LA CREACIÓN DE COMITÉS DE SALUD QUE SE INTEGRAN POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN URBANA, RURAL O INDÍGENA Y QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA PARTICIPACIÓN EN EL MEJORAMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SUS LOCALIDADES Y DE PROMOVER MEJORES CONDICIONES AMBIENTALES QUE FAVOREZCAN LA SALUD DE LAS Y LOS COAHUILENSES, SOBRE TODO, EN DÍAS DE CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19. ESTA SOLICITUD LA FUNDAMOS CON BASE EN LA SIGUIENTE**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Es importante mencionar, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3 menciona que todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Así mismo, el artículo 25 de la citada norma internacional dicta que *“Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios*…”.

Acorde a la doctrina internacional, encontramos plasmado en el cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución Federal, que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, garantizando la convencionalidad del tema en cuestión.

Por otra parte, nuestra Constitución Local en el numeral 4, fracción VII del artículo 158-U reza que los ayuntamientos tienen la facultad de promover y procurar la salud pública en el municipio y auxiliar a las autoridades sanitarias estatales y municipales en la planeación y ejecución de sus disposiciones.

Ante las posturas normativas ya planteadas, las autoridades en materia de salud tienen la atribución de implementar programas que permitan informar a la población sobre como conservar la salud de los habitantes de su entorno y generar conciencia social sobre la importancia de la preservación del medio ambiente, ya que es el espacio vital en el que convivimos y nos desarrollamos como humanidad.

Bajo este contexto, nuestra Ley Estatal de Salud, establece en su artículo 52 que “*la Secretaría de Salud del Estado, y demás instituciones de salud estatales, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades, accidentes, discapacidad y de rehabilitación de personas con discapacidad.”*

Es importante recalcar que dicha disposición dispone que la ciudadanía es parte fundamental para la mejora continua de la salud local, sobre todo, en tiempos de pandemia donde todas y todos somos propensos al contagio.

Así mismo, el artículo 53 de la norma citada menciona que *“…en los centros de población, se constituirán comités de salud que podrán ser integrados por núcleos de población urbana, rural o indígena los cuales tendrán como objetivo la participación en el mejoramiento y vigilancia de los servicios de salud de sus localidades y promover mejores condiciones ambientales que favorezcan la salud de la población, así como la organización de la comunidad para obtener su colaboración en la construcción de obras e infraestructura básica y social y mantenimiento de unidades.”*

Dicho de otra manera, la Ley Estatal de Salud menciona a los “Comités de Salud” como grupos donde la ciudadanía puede vigilar, participar y generar alternativas para mejorar la salud de la comunidad. Cabe mencionar que los ayuntamientos, en coordinación con la autoridad sanitaria, tendrán la responsabilidad de organizar dichos comités y velarán que se cumplan los fines para los que serán creados.

Estos grupos podrían convertirse en aliados de los Subcomités Técnicos Regionales de Salud del Estado de Coahuila, ya que de estos se generaría información precisa que será usada para implementar políticas públicas que beneficien a las y los coahuilenses.

Al observar las afectaciones que ha provocado la pandemia por COVID-19 en la entidad, no sólo al sector salud sino también al económico y educativo, es necesario dotar de información útil a la ciudadanía y animarla a participar en temas trascendentes como la salud, pues sin esta, la vida no sería posible.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos compete emprender acciones para que nuestras autoridades municipales, de la mano con la autoridad de Salud Estatal, lleven a cabo la creación de los “Comités de Salud”, mismos que buscarán concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar su salud y entorno natural, al mismo tiempo, serán generadores de información útil para que los Subcomités Técnicos Regionales de Salud tomen las mejores decisiones en materia de salubridad en la entidad.

**Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción VI del artículo 21, en los artículos 172, 179, 180, 181 y 182 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como en lo estipulado en la fracción IV del artículo 16 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos ante esta Soberanía la siguiente**

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO**

**Que por las características del caso, solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución.**

**ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL Y A LOS 38 AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD A QUE PROMUEVAN Y APOYEN LA CREACIÓN DE COMITÉS DE SALUD QUE SE INTEGRAN POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN URBANA, RURAL O INDÍGENA Y QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA PARTICIPACIÓN EN EL MEJORAMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SUS LOCALIDADES Y DE PROMOVER MEJORES CONDICIONES AMBIENTALES QUE FAVOREZCAN LA SALUD DE LAS Y LOS COAHUILENSES, SOBRE TODO, EN DÍAS DE CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19.**

***ATENTAMENTE***

**“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA, Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”**

**GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA; A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS

|  |  |
| --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO | DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA | DIP. BLANCA EPPEN CANALES |
| DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA | DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |

**Fuentes:**

<https://www.saludcoahuila.gob.mx/COVID19/indicadores_laguna.php>

Artículos del 43 al 55 de la Ley Estatal de Salud.

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO, CON EL OBJETO DE EXHORTAR AL INSTITUTO DE LA SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI), PARA QUE CONSIDEREN DENTRO DE SUS PROGRAMAS DE SALUD, EL FIRMAR CONVENIOS CON LAS ABASTECEDORAS DE OXÍGENO MEDICINAL, PARA APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE REQUIEREN DE UN TANQUE DE OXÍGENO PARA PACIENTES QUE SIGUEN SU RECUPERACIÓN POR COVID-19 DESDE SU DOMICILIO.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Diana Patricia González Soto, conjuntamente con las demás Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar la presente Proposición con Punto de Acuerdo, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

Nos encontramos en el mes de septiembre y en medio de las fiestas patrias en México el coronavirus sigue presente, la Secretaría de Salud, informa de 694,121 casos confirmados de coronavirus, 73,258 defunciones a causa de esta enfermedad, los recuperados ascienden a 496,224 personas, reporte al 20 de septiembre de 2020.

En medio de la pandemia del coronavirus el oxígeno medicinal se ha convertido en una pieza fundamental para el tratamiento de pacientes víctimas del Covid- 19; la urgencia de cientos de mexicanas y mexicanos por conseguir estos cilindros de oxígeno en todo el país ha generado que los precios en el mercado aumenten de una forma excesiva, pero también que sean muy difíciles de conseguir.

Es por ello por lo que en está ocasión quiero referirme a los pacientes recuperados de coronavirus, en particular aquellos que siguen su tratamiento desde su domicilio particular y que por indicación médica tengan que permanecer con oxígeno medicinal, ya que el oxígeno ayuda al sistema respiratorio, el cual se debilita en algunos pacientes que siguen presentando complicaciones para respirar.

La demanda de tanques de oxígeno medicinal aumentó de manera considerable con la epidemia del virus, ya sea en modalidades de renta o venta de tanques usados y nuevos.

Según notas periodísticas, en los meses recientes en el comercio local de establecimientos especializados, la venta de los tanques de oxígeno portátiles aumentó entre las 60 y 150 unidades. Mientras que las rentas de manera semanal o quincenal se incrementaron en un 80%.

Actualmente el costo de renta de un tanque de oxígeno de 2500 PSI (libras por pulgadas cuadradas) varía desde los 900 a los 1,200 pesos, según las marcas, la calidad de los productos y los accesorios incluidos, debiendo dejar un depósito de hasta diez mil pesos.

A la compra se encuentran precios entre siete mil en un tanque usado y nuevo oscilan entre quince mil pesos, también existen productos alternos como lo son los concentradores de oxígeno, el cual es un aparato eléctrico que no necesita llenado y filtra el aire para generar oxígeno el costo de este aparato se encuentra entre los quince mil pesos hasta veinticinco mil pesos.

En cuanto al llenado de un tanque de oxígeno medicinal de 2500 PSI puede durar hasta cinco horas en los casos de pacientes más delicados y dos días en un paciente con un estado de gravedad estable, teniendo un costo promedio de mil pesos, por lo que el paciente fácilmente al mes puede erogar una cantidad entre quince a veinte mil pesos.

Esto compañeras y compañeros, nos lleva a reflexionar los costos que conlleva tener un paciente en casa con indicación médica de oxígeno medicinal para su recuperación por el virus del Covid- 19.

Los costos tan elevados, tanto de venta como de renta, van consumiendo la economía de población mexicana, dejando en una situación de vulnerabilidad al paciente que se encuentra llevando su tratamiento desde su domicilio particular y que por el alto costo de la renta que con lleva el dejar un depósito el cual es muy alto, ya que el proveedor de renta quiere garantizar su cuidado y buen uso, mediante el depósito, sin olvidar el costo de relleno cada vez que se requiera ya que varía de acuerdo a la necesidad médica de cada paciente.

Existen ejemplos exitosos en el país donde Estados como Veracruz, particularmente el ayuntamiento de Córdoba lleva a cabo la entrega de vales para la recarga de tanques de oxígeno. Mediante subsidio se apoya a un determinado número de familias, el apoyo consiste en una sola recarga por paciente ya que es ese Estado, el llenado de tanque de oxígeno, es de 1,500 pesos, iniciaron con un apoyo de 500 pesos por paciente, actualmente el subsidio es de mil pesos, debido al costo elevado de la recarga.

Es por ello que nuestro exhorto va dirigido al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para que consideren o en su caso refuercen el apoyo brindado a pacientes de familias de escasos recursos, que pueden seguir su recuperación en su domicilio particular y que por indicación médica requieran el oxígeno medicinal como parte de su tratamiento para recuperarse del coronavirus, ya que como anteriormente señale, el depósito por renta de un tanque medicinal, es muy elevado, sumando además el costo que por cada recarga de oxígeno representa.

Dicho apoyo podría ser mediante la subrogación de ese costo de depósito por renta de un taque de oxígeno medicinal, que el INSABI, mediante convenio de colaboración pueda ser el aval con los proveedores de estos servicios a nivel local o federal etc, el Instituto subsidie ese depósito para que el tratamiento indicado de oxígeno medicinal, se siga desde su domicilio particular y no se vea obstaculizado por cuestiones económicas al no contar con el dinero correspondiente al depósito que solicita el proveedor en la renta de un tanque de oxígeno, ya que la familia tiene que cubrir un costo elevado por la recarga de oxígeno que requiera cada paciente, además de buscar opciones de apoyo, vales, o descuento especial para las recargas. Buscando con ello que se cumpla la prestación gratuita de servicios de salud, medicamento y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social a través del Instituto de Salud para el Bienestar, como lo establece en su artículo 7 la Ley General de Salud.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso, solicitando que sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI), PARA QUE CONSIDEREN DENTRO DE SUS PROGRAMAS DE SALUD, EL FIRMAR CONVENIOS CON LAS ABASTECEDORAS DE OXÍGENO MEDICINAL, PARA APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE REQUIEREN DE UN TANQUE DE OXÍGENO PARA PACIENTES QUE SIGUEN SU RECUPERACIÓN POR COVID-19 DESDE SU DOMICILIO.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** |
|  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  | **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |
|  | | |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PRESENTE. –**

**Proposición con punto de acuerdo que presenta el Dip. Juan Antonio García Villa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual se propone a este Pleno solicite al titular del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, brinde el apoyo –que en justicia requieren— a los familiares del Dr. Víctor Homero de la Garza Tenorio, para que en la medida de las posibilidades de su salud, sea trasladado a un hospital con el que el organismo tenga celebrado convenio y le proporcione la atención requerida, además de buscar alternativas para apoyar a los familiares del Dr. De la Garza Tenorio, quien es maestro pensionado, con los gastos generados hasta ahora en un hospital particular, en virtud de la actuación negligente del personal de la Clínica Hospital del Magisterio de Monclova, Coahuila.**

Juan Antonio García Villa, en mi carácter de diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que al respecto disponen los artículos 179, 180, 181, 182 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, me permito presentar a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, a la que solicito se le dé trámite de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como: **“El estado completo de bienestar físico y social de una persona”,** y no solo la ausencia de enfermedad.

La **OMS** considera que el goce del **grado máximo de salud** que se pueda lograr, es uno de los **derechos** fundamentales de todo ser humano. **Esto incluye el acceso a** **servicios de salud de calidad**, y por ello se debe promover una **cobertura sanitaria universal.**

Hoy en día, sin embargo, en Coahuila las instituciones de seguridad social creadas en el Estado para el Servicio de los Trabajadores de la Educación Pública, agremiados a la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, distan mucho de proveer servicios de calidad, en obvio perjuicio de la salud de sus agremiados, además de dejar en completo desamparo a quienes requieren atención médica expedita.

Tal es el caso del Dr. Víctor Homero de la Garza Tenorio, médico especialista de la propia Clínica del Magisterio en Monclova, Coahuila, otorrinolaringólogo, pensionado y por lo tanto derechohabiente de las prestaciones que otorga la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, quien presentó recientemente un cuadro de gravedad neurológica.

En consecuencia, fue ingresado a la Clínica Hospital del Magisterio en aquella ciudad. Sin embargo, las clínicas pertenecientes al Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, no cuentan con adecuados servicios de atención médica para este caso en concreto, como lo es la atención médica de tercer nivel ni cuenta con médicos especialistas en neurología, por lo que sus familiares solicitaron su traslado a un nosocomio particular.

De lo anterior se desprende que la atención a los familiares del Dr. Víctor Homero de la Garza Tenorio fue deficiente, ya que nadie de la citada Clínica ni personal del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, los orientó y menos aún les ofrecieron servicios subrogados de atención médica, como sucede cuando el organismo no está en condiciones de prestar atención especializada en algún ramo de la medicina, por carecer de personal especializado o del equipo y aparatos necesarios, casos para los cuales aquél tiene celebrados convenios para tal propósito, como lo prevé el artículo 7, fracción II, de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Dicha omisión por parte de los empleados de la Clínica Hospital y de los funcionarios del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, ha ocasionado que al día 18 de septiembre de 2020 exista una deuda en un hospital particular de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por un total de 2´050,000 (Dos millones cincuenta mil pesos); ante tal situación, los familiares han indagado que existen dos hospitales, uno en Saltillo y otro en Monterrey, que sí cuentan con convenios celebrados con el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, para la atención de la referida enfermedad.

Aunado al padecimiento antes señalado, el pensionado contrajo el virus de la COVID-19, por lo que su situación se tornó aún más apremiante.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos invocados de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila, se propone la aprobación, por la vía de urgente u obvia resolución, del siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.- El Congreso del Estado solicita al titular del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, brinde el apoyo necesario a los familiares del Dr. Víctor Homero de la Garza Tenorio, para que en la medida de las posibilidades de su salud sea trasladado a un hospital con el que el organismo tenga celebrado convenio y le brinde la atención médica requerida, y asimismo se busquen alternativas para apoyar a los familiares del pensionado con los gastos generados hasta ahora en un hospital particular, en virtud del actuar negligente del personal de la Clínica Hospital del Magisterio de Monclova, Coahuila.**

**Saltillo, Coahuila, a 23 de septiembre de 2020.**

**ATENTAMENTE,**

*“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA*

*Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”*

|  |
| --- |
| DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO |  | DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DIP. BLANCA EPPEN CANALES |  | DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTÍNEZ |
|  |  |  |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |  | DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS |
|  |  |  |
| DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |  | DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO "GRAL. ANDRÉS S. VIESCA", DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DEL DIPUTADO JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA, CON EL OBJETO DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL, A CONCLUIR CON LA MÁXIMA PRIORIDAD, EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO, EN SU TRAMO “DERRAMADERO – LA ENCANTADA”, EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

El suscrito **Diputado Jesús Andrés Loya Cardona**, conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con **Punto de Acuerdo**, solicitando sea considerada de **urgente y obvia resolución** en base a las siguientes:

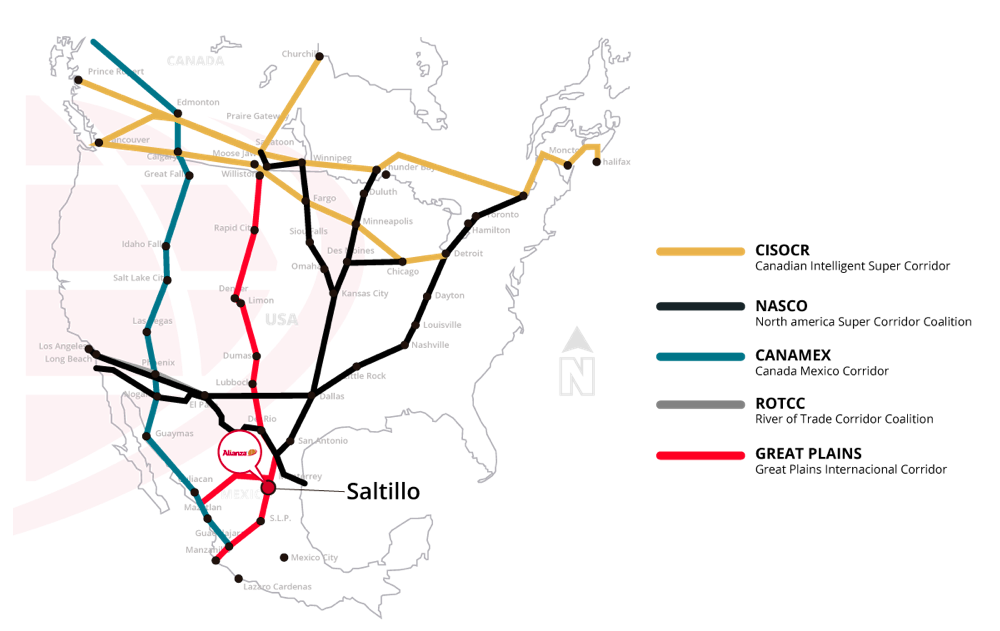
**C O N S I D E R A C I O N E S**

*“Derramadero”* es la denominación de un ejido que se encuentra ubicado en el sur del municipio de Saltillo y, por extensión, así́ se le conoce a toda la región que comprende el *“Cañón de Derramadero”*, que alberga actualmente a diez ejidos: Derramadero, Providencia, San Juan de la Vaquería, Refugio de las Cajas, el Pino, Chapula, San Blas, Santa Teresa de los Muchachos, Santa Rita y Rancho Nuevo.[[47]](#footnote-47)

En las inmediaciones de éstos y el ejido *“Agua Nueva”*, yace la denominada Zona Industrial Derramadero, que concentra a su vez cinco importantes parques industriales: Alianza Derramadero, Derramadero Mencorsa, FINSA Sur, Santa Fe y Santa Mónica. Estos centros destacan la vocación industrial de nuestra capital, una de las zonas que atraen mayor inversión al Estado.

La región sur de Saltillo se ha convertido en un punto de encuentro para los negocios. Favorecida con una ubicación estratégica para el país, es una de los nichos principales de conexión de diversas entidades industriales distribuidas en México, Estados Unidos y Canadá, formando parte del llamado “Corredor NAFTA”, que conecta a Saltillo con las economías más grandes de Estados Unidos, que son California, Texas y el Este industrial de este país, así́ como todo el corredor canadiense de la frontera con la Unión Americana, particularmente hacia Toronto, Otawa, Montreal y Quebec.

El Corredor NAFTA[[48]](#footnote-48)



En Coahuila, el sector industrial aporta actualmente el 51.59 por ciento del PIB total del Estado en diferentes ramas de la industria como: acero, aeroespacial, alimentos, automotriz, biotecnología, cerámica, comercio, eléctrico, electrodomésticos, energético, farmacéutico, fundición, gases industriales, manufactura, metal-mecánica, papel y cartón, plástico, robótica, telecomunicaciones, textil y vidrio.[[49]](#footnote-49)

A nivel nacional, uno de cada cinco empleos en las industrias  
manufactureras pertenece a la rama automotriz. Durante el año 2018 esta industria aportó el 3.7 por ciento del PIB y el 20.2 por ciento del PIB manufacturero, siendo la segunda actividad económica con mayor participación en el PIB manufacturero después de la industria alimentaria.[[50]](#footnote-50)

Para Coahuila, las empresas ligadas a los automóviles representan el 24.8 por ciento de la producción manufacturera del Estado y, las situadas en el distrito de Saltillo constituyen el 63.4 por ciento del total estatal.[[51]](#footnote-51) En ese sentido, la capital coahuilense se ha convertido en una de las áreas de crecimiento más dinámicas en escala nacional.

Justo en esta región de Derramadero y en las inmediaciones de los terrenos ejidales, se localizan 52 compañías con gran presencia en la industria automotriz, tales como FIAT, Chrysler, RAM, Daimler, entre muchas otras, que han contribuido ha posicionar a Coahuila como el mayor fabricante de autopartes (17.7%), el sublíder productor de vehículos en México (15.9%)[[52]](#footnote-52) y el tercer estado exportador del país (12%). En efecto, en la zona del corredor automotriz Monterrey-Saltillo, se localizan más del 50 por ciento de las empresas de este sector de todo el país.

Su dinamismo regional le ha permitido ocupar un espacio cada vez más importante en las actividades industriales del Estado y del país. Sin embargo, a pesar de su importante contribución a la economía local y nacional, esta demarcación aún encara limitaciones para el desarrollo estable de la expansión industrial.

La carretera Saltillo – Zacatecas es una de las más importantes del Estado, no sólo por su nexo con el corredor manufacturero, sino también porque por ésta transitan alrededor de 15 mil personas que habitan en las 82 comunidades rurales, que representan el 90 por ciento de los ejidos de la capital. A ello debe sumarse el tráfico de más de 17 mil empleados de las diferentes empresas del sector y de quienes viajan a la entidad vecina. En total, por esta vía se estima un tránsito promedio diario anual de tres mil 700 vehículos.

Si bien sólo hay una distancia de 10 kilómetros entre la zona urbana de Saltillo y el entronque a Derramadero, con frecuencia se presentan fatales accidentes e importantes retrasos por fenómenos climáticos que conflictúan su conexión. Esto ocurre en gran medida debido a que este tramo se compone por una vía de dos carriles, los cuales a pesar del gran flujo vehicular que tiene, no se ha podido ampliar en más de ocho años.

Cabe recordar que en el año 2012 se invirtieron tres mil 124.6 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para la modernización y ampliación de 343 kilómetros de esta carretera;[[53]](#footnote-53) sin embargo, las obras recayeron en su mayor extensión en los terrenos del estado zacatecano, quedando pendiente la parte coahuilense.

Es por ello que cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal informó que lanzaría una licitación para modernizar el tramo carretero, la noticia fue recibida con entusiasmo y colaboración por parte del gobierno estatal y municipal. Lamentablemente, a más de dos años de su anuncio, esta obra no se ha concretado, estando incluso en riesgo de colapsar por falta de voluntad del gobierno federal.[[54]](#footnote-54)

El siete de abril de este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal lanzó la licitación que incluía la ampliación de diferentes tramos de la carretera con construcción de terracería, drenaje, subdrenaje, pavimento, señalamientos, incluso una barrera central de concreto en un tramo. El proyecto contemplaba la ampliación de la Carretera Federal N° 54, Zacatecas - Saltillo, en el tramo de Saltillo, para modernizarla a cuatro carriles de circulación.[[55]](#footnote-55) Se estimaba que estaría terminada para el 15 de diciembre de este mismo año. Sin embargo, pese a la alta participación de empresas constructoras interesadas en el proyecto, esta dependencia federal declaró desierto el proceso poniendo en grave riesgo la culminación de esta importante obra, presupuestada con una inversión de 97 millones de pesos.[[56]](#footnote-56)

No queremos que este proyecto, como ha ocurrido con otros tantos de gran calado para los coahuilenses, se retrase como consecuencia de la inactividad burocrática o de los recortes aplicados de forma unilateral al Estado por el Gobierno Federal por más de 2 mil 500 millones de pesos en obra pública. Mucho menos es permitible que se use como ficha de cambio con fines de revanchismo político. Que quede claro que la seguridad no es negociable; la vida de los saltillenses no es negociable con temas económicos y políticos. En este tema, cada ente de gobierno debe asumir un enfoque de responsabilidad compartida y cooperación. Y en ese sentido, el Gobierno del Estado y el Municipio ya cumplieron su parte.

El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en sinergia con nuestro Alcalde Manolo Jiménez Salinas, han hecho lo que les corresponde para cumplir con el compromiso de impulsar el desarrollo de las zonas industrial y rural del sur de Saltillo, invirtiendo más de 100 millones de pesos en obras inducidas consistentes en pavimentación, puentes peatonales,[[57]](#footnote-57) así como obras de gas y agua, entre las que destaca la inversión de 53 millones de pesos realizada entre finales de 2018 y 2019 por parte del municipio para instalar 4,600 metros de tubería. Actualmente se encuentra en proceso la instalación de otros 1,055 metros de tubería, con una inversión de otros 32 millones de pesos. Pero sigue faltando la parte federal.

Es por ello que instamos al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a continuar y concluir el proceso de licitación y adjudicación de la obra de modernización y ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas, solicitando se le de máxima prioridad.

Desde esta tribuna hacemos un llamado a la Federación que deje fluir los recursos ya etiquetados para la ampliación de la carretera Saltillo – Zacatecas, con el objeto de que los trabajos puedan ejecutarse lo antes posible y se cumpla con los plazos señalados. No estamos regateando nada. Estamos exhortando que se cumpla con un compromiso hecho a todos los saltillenses y con la responsabilidad de garantizar su seguridad.

Las obras incluidas contemplan un importante beneficio para las más de 15 mil familias y los miles de automovilistas que transitan diariamente por la carretera a Derramadero; permitirá un aumento en las velocidades de operación de los diferentes tipos de usuarios, una reducción en los tiempos de recorrido, en los costos de operación, pero sobre todo, una operación más segura para los usuarios y la reducción de la ocurrencia de accidentes de tránsito, fortaleciendo además la economía local y nacional que infunde la industria automotriz asentada en la capital.

Para Coahuila y, en especial, para Saltillo, es prioridad que se concluya este proyecto que coadyuvará a fortalecer esta demarcación como una de las principales zonas económicas del país, que ofrece competitividad y alta productividad, con crecimiento acelerado, sustentable y sostenido, y de gran atracción para las empresas con planes de crecimiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante este Honorable Pleno del Congreso, solicitando sea tramitado como de **urgente y obvia resolución** el siguiente:

**PUNTO DE ACUERDO**

**ÚNICO.-** Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a continuar y concluir, con la máxima prioridad, el proceso de licitación y adjudicación del proyecto de inversión de infraestructura económica, identificado como *“Ampliación de la carretera Zacatecas - Saltillo del Km. 333+000 al Km. 343+400”*, que considera la ampliación de la sección actual ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para modernizarla a cuatro carriles de circulación.

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
| **DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**  **DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DEMAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL**

**GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |  |  |
| **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |  | **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |
|  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  | **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. -**

**Proposición con Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Rosa Nilda González Noriega, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del “Partido Acción Nacional”, con el objeto de que esta Soberanía envíe una atenta solicitud al Poder Judicial del Estado para que implemente un sistema de audiencias en línea en los Juzgados Familiares y Civiles de Coahuila, cuidando los protocolos de seguridad ante la pandemia por el COVID-19, pero buscando dar celeridad a las audiencias, a los desahogos de pruebas, así como a los diversos trámites que se atienden en los tribunales de nuestra entidad; lo anterior con base en lo siguiente:**

La contingencia sanitaria por el COVID-19 ha cambiado radicalmente la forma de trabajar, de estudiar, y de atender en las dependencias gubernamentales, buscando evitar la propagación del virus.

La impartición de la justicia debe ser considerada una de las actividades esenciales en nuestro país, es por ello que se deben de implementar todas las medidas sanitarias para continuar con su trabajo

A decir del Foro de Abogados en Monclova, los Juzgados Civiles y Familiares donde no han estado exentos de contagios a pesar de las medidas sanitarias, actualmente se encuentran trabajando a menos de un 50% de su capacidad.

Una parte importante del personal se encuentran trabajando por turnos, otros están incapacitados debido a que se encuentra dentro del sector considerado como vulnerable, mientras que otros están trabajando desde casa, ocasionando un severo retraso en la revisión de expedientes, audiencias o desahogo de pruebas.

En el caso especifico del Distrito Judicial de Monclova solamente un juzgado familiar se ha adaptado a la nueva modalidad de audiencias en línea, por lo que el resto de los tribunales de esta materia, así como la Civil se encuentran prolongando la fecha de las audiencias hasta por seis meses o limitando la asistencia de los involucrados para evitar la aglomeración de personas.

Es importante que se empleen las estrategias necesarias en la impartición de la justicia, buscando que los casos que están en curso avancen y se evite el rezago que podría complicar aún más la situación para los ciudadanos.

Con la modalidad de audiencias en línea, método que se ha implementado en el sistema penal, permitirán que los abogados, las partes involucradas y el juzgador, cada uno desde sus dispositivos electrónicos, puedan participar en la audiencia, darle celeridad a los casos y estar en posibilidades de continuar trabajando.

La solicitud de los integrantes del Foro de Abogados de Monclova, busca que puedan continuar con sus labores, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios para garantizar su salud y la de las personas que laboran en los diferentes juzgados.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo la cual se solicita se turne a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para que de considerarlo procedente apruebe lo siguiente:

**ÚNICO. Este H. Pleno envía una atenta solicitud al Poder Judicial del Estado para que implemente un sistema de audiencias en línea en los Juzgados Familiares y Civiles de Coahuila, cuidando los protocolos de seguridad ante la pandemia por el COVID-19, pero buscando dar celeridad a las audiencias, a los desahogos de pruebas, así como a los diversos trámites que se atienden en los tribunales de nuestra entidad.**

**Fundamos esta petición en los artículos 21, Fracción VI, 179, 180 y 182 de La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

ATENTAMENTE

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

GRUPO PARLAMENTARIO “DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 23 de Sep. de 2020

DIP. ROSA NILDA GONZALEZ NORIEGA

DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO DIP. MARIA EUGENIA CAZARES MARTINEZ

DIP. BLANCA EPPEN CANALES DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDES

DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ

DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA” DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA JOSEFINA GARZA BARRERA, CON EL OBJETO DE EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, PARA QUE COORDINEN ACCIONES CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COAHUILA CON OBJETO DE IMPLEMENTAR VISITAS DE INSPECCIÓN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN NUESTRO ESTADO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE OPERACIÓN Y SEAN REGISTRADOS EN EL DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DEL CONADIC.**

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**P R E S E N T E.-**

La suscrita Diputada Josefina Garza Barrera, conjuntamente con las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

El consumo y el abuso de drogas en los últimos años, se ha ubicado en el contexto nacional como uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia, debido a las consecuencias sanitarias y sociales que experimentan quienes las consumen.

El uso y abuso de las sustancias psicoactivas representan una preocupación creciente para la sociedad en general. Esta problemática exige contar con una variedad de recursos humanos y técnicos, así como con la coordinación de las instituciones y programas disponibles en el país, de tal modo que permita implantar estrategias y acciones de investigación, prevención, tratamiento, normatividad y legislación, así como de sensibilización y capacitación, para garantizar que las acciones beneficien a la población.

Para las familias de personas adictas es muy difícil encontrar un centro de rehabilitación que opere dentro de la normatividad establecida, ya que existen lugares denominados anexos o granjas que están operando en pésimas condiciones, con instalaciones deplorables, y con abusos en los derechos humanos de las personas que buscan un lugar para rehabilitarse. Además de cobrar cuotas que no se reflejan en el servicio que ofrecen.

Cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones establecen que en México hay 1,730 centros de atención o rehabilitación para pacientes en internación, de los cuales sólo 450 cuentan con certificación y 200 más están en proceso de certificación; de los 1,730 establecimientos 10 son Centros de Integración Juvenil, 20 centros estatales y 400 clínicas privadas; además de que al menos 1,300 centros fueron fundados por exadictos, sin un protocolo y gente profesional que los atienda.

En el Estado de Coahuila existen un sin número de centros de atención de adicciones, sin embargo, no se cuenta con la certeza que éstos cumplan con la normatividad de aviso de funcionamiento y solamente 2 en todo Coahuila cuentan con el reconocimiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones y las reglas de operación de la Cofepris.

También existen en todo el País los *“Centros de Ayuda Mutua”* que son establecimientos especializados que operan para la atención de las personas que usan o abusan de sustancias psicoactivas, y brindan servicios en dos modalidades: la no residencial, y la residencial; además de un sin número de asociaciones civiles que buscan apoyar a jóvenes adictos que buscan dejar las drogas y que deben de estar regulados por la Secretaría de Salud Estatal y por la CONADIC, todos estos lugares deben operar con base a la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones, NOM-028,[[58]](#footnote-58) misma que establece las condiciones de salubridad e infraestructura por cumplir, y que en la actualidad y ante la violencia que impera en muchos lugares del país es imprescindible que se cumpla.

Dicha norma fue creada para asegurar un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios que permita reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias adictivas, así como la morbi-mortalidad asociadas.

Es a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a quien corresponde dar seguimiento y verificar la forma en que operan y que no se cometan abusos en contra de las personas enfermas; y en caso de que estos centros contravengan lo dispuesto deberán iniciar los procedimientos administrativos y penales contra de quien resulte responsable.

El Artículo 154 bis 3 de la Ley Estatal de Salud, en su fracción I, establece que la Secretaría de Salud debe crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios que ofrecen.

Además, y como se señala con antelación existe un registro en la página Oficial del CONADIC en el que los usuarios pueden acceder a un listado de establecimientos residenciales de atención a las adicciones y que en lo que corresponde al Estado de Coahuila solo existen registrados dos, encontrándose éstos en el Municipio de Torreón Coahuila.[[59]](#footnote-59)

Es por ello y reconociendo que todas las personas merecemos un trato digno en cualquier prestación de servicios, que se deben reforzar los derechos de las personas adictas para que reciban un trato y una atención como cualquier paciente que pueda sufrir otra patología.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo la cual se solicita se turne a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, para que de considerarlo procedente apruebe lo siguiente:

**ÚNICO. - ENVÍESE ATENTO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, PARA QUE COORDINEN ACCIONES CON LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COAHUILA CON OBJETO DE IMPLEMENTAR VISITAS DE INSPECCIÓN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES QUE SE ENCUENTRAN OPERANDO EN NUESTRO ESTADO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS MISMOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE OPERACIÓN Y SEAN REGISTRADOS EN EL DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES DEL CONADIC.**

**A T E N T A M E N T E**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2020**

|  |
| --- |
|  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** |
|  |

**CONJUNTAMENTE CON LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES**

**DEL GRUPO PARLAMENTARIO “GRAL. ANDRÉS S. VIESCA”,**

**DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** |  | **DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** |  | **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |
|  |  |  |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS PÉREZ** |  | **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |
|  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ** |  | **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS** |
|  | | |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** | | |

**PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR CONJUNTAMENTE CON LA DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ” DEL PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO Y AL DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN COAHUILA, PARA QUE EN UNA ACCIÓN COORDINADA, DOTEN DE PERSONAL MÉDICO Y MEDICAMENTOS SUFICIENTES A LOS DISPENSARIOS MÉDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE LOS CINCO MANANTIALES Y DE JIMÉNEZ, PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN MÉDICA DIGNA Y DE CALIDAD PARA LAS Y LOS COAHUILENSES.**

**DIPUTADA PRESIDENTE.**

**H. Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.**

**PRESENTE.**

El Suscrito Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares del Partido Unidad Democrática de Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, nos permitimos presentar a esta soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud ha declarado que “*El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”*.

En sintonía con estos principios, México estableció el derecho a la salud como Derecho y Garantía Individual en 1983, en el cuarto párrafo del artículo cuarto constitucional donde establece que *“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general”.*

Posteriormente, con la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011 el derecho a la salud fue reconocido, precisamente, como derecho humano. De igual forma nuestra legislación local fue adaptada y en su artículo séptimo reconoce el goce de los derechos humanos establecidos en la misma, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Un aspecto trascendente en esta reforma fue el obligar a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, *“a promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen la protección de estos derechos humanos”,* incluido el de la salud.

Bajo estas premisas, parte fundamental del derecho humano a la salud es el acceso a servicios médicos y medicamentos, y en ese sentido, son muchos los esfuerzos se han enfocado en materializar este derecho humano, consagrado en una norma fundamental y el cual se tiene que traducir en atención y servicios de calidad para las y los mexicanos.

El problema surge cuando aterrizamos a la realidad la forma en que el Estado garantiza los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, y es que si bien en Coahuila, como en México, cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio cuenta con la protección más amplia de los derechos humanos incluido el de la salud, éste no es igualmente protegido en las zonas urbanas como en otras comunidades.

Basta con señalar que a diferencia de quienes habitan en municipios que cuentan con hospitales, centros médicos, unidades o clínicas de medicina familiar, las cuales prestan servicios de atención y cuentan con medicamentos; hay también comunidades donde lamentablemente está prohibido enfermarse después de las tres de la tarde, ni se diga en fin de semana. Donde no se cuenta ni con el personal ni con el cuadro básico mínimo de medicamentos para alguna atención o emergencia.

Lo anterior, nos hace ver que particularmente en los municipios de Villa Unión, Zaragoza, Morelos, de los cinco manantiales, así como Jiménez, si bien existen dispensarios médicos, éstos solo cuentan con personal que atiende de lunes a viernes, en una jornada de ocho horas, con un médico de planta, como en Zaragoza, una enfermera, como en Villa Unión y Jiménez, ocasionalmente con apoyo de pasantes, resultando insuficiente la atención que debería de ser igual para todas y todos los coahuilenses.

Con estas condiciones la población de estas regiones ve limitado su acceso a los servicios de salud, donde para mayor atención tienen que recurrir a los municipios cercanos de Allende, Piedras Negras o Acuña.

El acceso a los servicios y desarrollo de infraestructura en materia de salud de los habitantes de los municipios de los cinco manantiales no puede estar limitada en función de los servicios con los que cuentan en materia de salud otros municipios cercanos.

La obligación del Estado implica la provisión de una atención integral, continua y equitativa, abarcando las dimensiones de promoción, prevención, curación y rehabilitación; que involucra el derecho y responsabilidad de las personas, familias y comunidades de ser protagonistas de su propia salud.

Ya lo hemos señalado desde esta tribuna, la salud no es un privilegio, es un derecho inalienable y es aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial. Para que las personas puedan ejercer este derecho, se deben considerar los principios de accesibilidad y equidad. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada y un abasto oportuno y suficiente de los medicamentos necesarios para restaurarla y preservarla.

En Coahuila no debe haber municipios de primera y de segunda, el acceso a la salud le corresponde a todos los coahuilenses por igual.

Ahora bien, ante la doble crisis de salud y económica, hoy más que nunca resulta por demás importante sumar esfuerzos y coordinar acciones, porque esfuerzos aislados producen resultados aislados, pero un esfuerzo coordinado puede generar mejores beneficios. Y ahí está el IMSS, el mayor instituto de seguridad social en América Latina, que además de atender a sus derechohabientes, a través del programa IMSS-Bienestar, atiende a grupos vulnerables que no cuentan con seguridad social que los proteja.

Si el Gobierno del Estado suma esfuerzos con las instituciones federales, estamos seguros que haremos valer el texto de nuestra constitución local dando una protección digna a quienes se encuentran en estado de indefensión.

Coordinar esfuerzos de la mano del programa IMSS Bienestar hará que los recursos materiales y humanos con los que se cuentan se puedan utilizar de la mejor manera posible, para que de esta forma, Gobierno del Estado e IMSS-Bienestar sumen esfuerzos en los dispensarios médicos para brindar una atención digna y de calidad a las y los coahuilenses de los cinco manantiales y de Jiménez.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante este H. Pleno del Congreso del Estado, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo la cual se solicita se turne a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, para que de considerarlo procedente apruebe lo siguiente:

**ÚNICO.** **La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Estado y al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, para que en una acción coordinada, doten de personal médico y medicamentos suficientes a los dispensarios médicos que se encuentran en los municipios de los cinco manantiales y de Jiménez, para brindar una atención médica digna y de calidad para las y los coahuilenses.**

**POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.**

**GRUPO PARLAMENTARIO "BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNANDEZ"**

**SALTILLO, COAHUILA A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

**PRONUNCIAMIENTO DEL DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES CONJUNTAMENTE CON EL DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA (UDC) ENTORNO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO EL 18 DE OCTUBRE.**

**DIPUTADO PRESIDENTE.-**

**H. Diputación Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura**

**PRESENTE. -**

**Su servidora Zulmma Verenice Guerrero Cázares con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción VI, 179, 180, 181, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, conjuntamente con mi compañero Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor nos permitimos presentar a esta soberanía el presente pronunciamiento:**

**Los coahuilenses estamos viviendo una dinámica atípica: Nos estamos acostumbrando a una nueva normalidad que conlleva a convivir con el virus del COVID-19 que desde hace más de seis meses está entre nosotros. Ello nos ha obligado a cambiar hábitos personales y colectivos. La ciudadanía de Coahuila vive una situación adicional, se desarrolla un proceso electoral que culminará con las elecciones el próximo 18 de octubre.**

**Como antecedentes tenemos que en su momento el Instituto Nacional Electoral el 1 de abril suspendió el proceso electoral por la condición que vivíamos en torno a la pandemia Covid-19.**

**Recordemos que el proceso electoral dio inicio el 1 de enero de 2020, el** 30 de marzo de 2020, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 3 (COVID-19) y establece que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atenderla. VII. Facultad de atracción para la suspensión temporal.

El 1 de abril de 2020, el Consejo General del INE, mediante resolución INE/CG83/2020, ejerce la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los Procesos Electorales Locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la Pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2. En dicha determinación se estableció, entre otros aspectos, el siguiente mandato:

“TERCERO. Una vez reestablecidas las condiciones de seguridad sanitaria y en atención a la información que proporcione la Secretaría de Salud, este Consejo General determinará la fecha para celebrar la Jornada Electoral y reanudar las actividades inherentes al desarrollo de los Procesos Electorales Locales, en Coahuila e Hidalgo, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los respectivos Organismos Públicos Locales, los tribunales electorales estatales y los congresos de dichas entidades federativas”, indica el acuerdo.

En la sesión del 30 de julio el INE, aprobó entre otras cosas el establecimiento como fecha para la celebración de la Jornada Electoral local en las entidades de Coahuila e Hidalgo el domingo 18 de octubre de 2020 y todas las adecuaciones q institucionales que conlleva esta decisión.

Si bien es importante el pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos como lo ha establecido la Organización de Estados Americanos (OEA) es de mayor reelevancia que en un proceso electoral con escenarios atípicos se garantice la participación segura de la ciudadanía atendiendo los protocolos de seguridad para el pleno ejercicio de su voto.

Por otro lado, e l INE en el documento ***“Elecciones del mundo en tiempos de Covid-19****”* destaca: “La importancia de las elecciones periódicas, justas, confiables y competitivas, se reconoce como uno de los principales instrumentos procedimentales que tienen las democracias contemporáneas. Si bien la democracia no queda reducida solo a los procesos electorales, estos son el mecanismo para que los ciudadanos ejerzan su poder de intervenir en las decisiones políticas mediante la selección de sus gobernantes y representantes, de manera que puedan, o renovar o revocar el mandato al reafirmar o rechazar las formas y objetivos de sus acciones para abrir paso a otro tipo de propuestas y políticas de gobierno. La realización de elecciones ha coadyuvado en sentar las bases para la transición hacia el establecimiento de regímenes democráticos, así como para deponer gobiernos o bien, para ampliar mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno, como en consultas populares: plebiscitos, referéndum y consultas ciudadanas.

Sin embargo, su periodicidad y la certeza de los resultados son elementos que consolidan la democracia, no solo como forma de gobierno, sino también como forma de vida de una sociedad fundada en el estado de derecho y en el respeto de los derechos humanos”.

En este sentido la participación ciudadana, la acción individual y colectiva se vuelven prioritarias ante el ejercicio de un derecho político salvaguardando la salud. Por otro lado, resulta determinante las acciones que los partidos políticos, candidatos, militancia e instituciones públicas acaten las disposiciones establecidas en los siete protocolos aprobados por el Instituto Estatal Electoral de Coahuila.

P[rotocolo de Seguridad Sanitaria Registro de Candidaturas](http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/Protocolos%20Seguridad%20Sanitaria%20PEL%202020/1.%20Protocolo%20de%20Seguridad%20Sanitaria%20Registro%20de%20Candidaturas..pdf) ( que ya se dio)

* [Protocolo Campañas Electorales](http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/Protocolos%20Seguridad%20Sanitaria%20PEL%202020/2.%20Protocolo%20Campan%CC%83as%20Electorales..pdf)
* [Protocolo de Seguridad Sanitaria - Distribución paquetes CDE](http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/Protocolos%20Seguridad%20Sanitaria%20PEL%202020/3.%20Protocolo%20de%20Seguridad%20Sanitaria%20-%20Distribucio%CC%81n%20paquetes%20CDE..pdf)
* [Protocolo de Seguridad Sanitaria. PREP y simulacros](http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/Protocolos%20Seguridad%20Sanitaria%20PEL%202020/4.%20Protocolo%20de%20Seguridad%20Sanitaria.%20PREP%20y%20simulacros..pdf)
* [Protocolo de Seguridad Sanitaria entrega de paquetes electorales posterior a la Jornada E](http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/Protocolos%20Seguridad%20Sanitaria%20PEL%202020/5.%20Protocolo%20de%20Seguridad%20Sanitaria%20entrega%20de%20paquetes%20electorales%20posterior%20a%20la%20JE..pdf)lectoral
* [Protocolo de Seguridad Sanitaria. Cómputos distritales](http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/Protocolos%20Seguridad%20Sanitaria%20PEL%202020/6.%20Protocolo%20de%20Seguridad%20Sanitaria.%20Co%CC%81mputos%20distritales..pdf)
* [Protocolo de Seguridad Sanitaria. Cómputo Estatal de la Elección](http://www.iec.org.mx/v1/images/proceso2020/Protocolos%20Seguridad%20Sanitaria%20PEL%202020/7.%20Protocolo%20de%20Seguridad%20Sanitaria.%20Co%CC%81mputo%20Estatal%20de%20la%20Eleccio%CC%81n..pdf)

Falta menos de un mes para que concluya la campaña electoral y es pertinente hacer las siguientes reflexiones:

Estar en situación de pandemia implica una coordinación constante de los subcomités de regionales con las autoridades electorales y partidos políticos para que ajusten las medidas sobre el desarrollo de sus campañas respecto a la participación de reuniones, permisos y demás detalles, esto debido a que en el protocolo de campana nos remite a las autoridades estatales y esta a su vez a los comités regionales.

Es importante que todos los actores involucrados en el proceso electoral realicen sus actividades de la manera más responsable y ello implica cuidar la salud y seguir los protocolos de atención, pero también convocar a la participación ciudadana con las medidas preventivas necesarias.

Como es sabido la participación ciudadana es fundamentan en los comicios, sí bien la elección se puede ganar por un voto, es necesario que la ciudadanía ejerza su derecho de manera informada, responsable y con todas las medidas de seguridad.

Por ello es importante que las autoridades electorales tanto locales como federales emprendan sendas campañas informativas donde difundan la importancia del proceso electoral 2020 y la participación ciudadana.

Si bien la pandemia nos ha puesto a prueba en la organización respecto al proceso electoral es importante ir construyendo escenarios y preparación de las autoridades para recibir la participación de las y los ciudadanos coahuilenses.

Asi como tomar en cuentas las recomendaciones del documento de antes citado y que en este escenario recomienda:

“Establecer una intensa campaña de comunicación en la cual se notifique a la ciudadanía sobre los cambios en los mecanismos o modalidades de votación, el procedimiento y elementos que garantizan la secrecía y confiabilidad de los resultados, así como el valor del voto ciudadano.

“Los contendientes políticos podrían utilizar la tecnología a su favor en esta pandemia, ya que esta herramienta les permitiría dar a conocer sus campañas electorales y propuestas al electorado a través del internet y las redes sociales.

“En el dado caso donde una elección se lleve a cabo en las urnas bajo este contexto, establecer medidas preventivas: se recomienda lavar las manos con frecuencia o utilizar un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol antes y después de haber ejercido el sufragio. Así como incorporar estrategias de distanciamiento entre electores, según sea factible, abrir las casillas más temprano, para reducir las multitudes; limpiar y desinfectar rutinariamente el equipo asociado a la votación, como lápices, máquinas de votación, computadoras portátiles, tabletas y teclados”.

Aunque los protocolos abarcan este último punto, es necesario insistir en este diálogo ciudadano de participación y así promover mecanismos asertivos de participación y deliberación política y social como respuesta a la crisis.

“En tiempos de crisis, la diversidad de opiniones informadas puede ser productiva para la consolidación de la gobernanza dentro de las sociedades al influir en la formación de criterios que serán materializados a través de los mecanismos de participación política. La vigencia de esta diversidad de información y de opiniones, a la luz de los postulados de Jurgen Habermas, pueden contribuir a la constitución de una acción comunicativa eficiente, clara y responsable frente a la ciudadanía”, destaca la Organización de los Estado Americanos en la Guía de Acción Política para la pandemia.

En suma, es importante informar de formar pertinente y adecuada las ventajas de cumplir cabalmente con un derecho ciudadano de elegir a las autoridades, en este caso diputados locales y hacerlo con las medidas de seguridad indispensables y que cada actor que participe en este proceso sea corresponsable del ejercicio de un derecho tan valioso que fortalece la democracia en México y Coahuila.

POR UN GOBIERNO DE CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA.

**GRUPO PARLAMENTARIO “BRIGIDO RAMIRO MORENO HERNÁNDEZ”**

**SALTILLO, COAHUILA A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

**DIPUTADA ZULMMA VERENICE GUERRERO CAZARES**

DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

**PRONUNCIAMIENTO DE LA DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), EN RELACIÓN A LAS CONFERENCIAS MATUTINAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.**

Las conferencias diarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador son un instrumento mediante el que la ciudadanía obtiene información sobre las acciones y proyectos que hace el Gobierno de la República.

Ningún Presidente ha informado con tanto rigor y transparencia como lo hace Andrés Manuel. En dichas conferencias cualquier periodista puede preguntar sobre cualquier tema de interés público, así como hacer las denuncias que estime fundadas contra cualquier autoridad.

Recientemente Alonso Ancira, accionista de Altos Hornos de México e implicado en la causa penal que se sigue por la venta con sobre precio de la empresa Agronitrogenados, se amparó solicitando que el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, ordenara al Presidente López Obrador (y cito): “se abstenga de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública" hacia su persona.”[[60]](#footnote-60)

La suspensión solicitada fue negada. Por su importancia reproduciré algunos de los argumentos en que el juzgador sustentó su resolución, mismos que se pueden consultar en la liga que se encuentra a pie de página.

“El objetivo de las conferencias de prensa, permiten a la sociedad tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar información e ideas, lo cual es imprescindible no solamente como instancia esencial de autoexpresión y desarrollo individual, sino como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales, y como elemento determinante de la calidad de la vida democrática en un país.”

“De ahí que de conceder la suspensión en los términos que se solicitan, con la finalidad de prohibir emita cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública como Titular del Ejecutivo Federal, que sea contrario al derecho de presunción de inocencia del quejoso Alonso Ancira Elizondo, restringe la posibilidad de la sociedad de obtener información, expresar y publicar libremente ideas y hechos sobre temas de relevancia pública”.

“En ese contexto, advirtió que el Presidente emitió las manifestaciones públicas reclamadas en atención al derecho a la información, ejercido por quienes acuden a la conferencia referida, pues se trata de libertades que tienen tanto una dimensión individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.”

“Regis López refirió que las expresiones que realice el presidente López Obrador, no son vinculantes para los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, ni para las diversas autoridades en los asuntos de su competencia, relacionados con la situación jurídica de la parte quejosa.” (fin de la cita)

En efecto, el ejercicio de información y transparencia que realiza cotidianamente el Presidente de la República viene a romper. De forma definitiva, la opacidad con que gobernaron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Las mañaneras mantienen al pueblo informado. Por eso, los que trafican con mentiras, los que recibían sobornos para votar por reformas y todos aquellos que se beneficiaban de un régimen corrupto, satanizan las mañaneras.

Aquí lo hemos visto: El miedo, la frustración y la histeria se apoderan de algunos con la sola mención de las conferencias del Presidente López Obrador.

La corrupción también se combate con la información y a eso contribuye diariamente el Presidente de la República.

Saltillo, Coahuila, a 23 de septiembre de 2020.

**DIPUTADA ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ**

Pronunciamiento que presenta el Diputado Edgar Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, con relación al Día de la Conciencia Ambiental.

**H. Pleno del Congreso del**

**Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Presente.-**

En 1972, la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente proclamó en Estocolmo: "El hecho de defender y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en un objetivo primordial para el hombre".

Este evento fue uno de los primeros acontecimientos de importancia que invitó a tomar las medidas necesarias para llevar a cabo, en todo el mundo, programas de educación ambiental destinados no solamente al público escolar, sino a todos los sectores sociales.

Por otro lado, en Argentina se declaró, mediante la Ley Nº 24.605, el día 27 de setiembre como el Día de la Conciencia Ambiental en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, en 1993.

En efecto, las tragedias sacuden las conciencias. La que ocurrió en Avellaneda, Argentina, el 27 de septiembre de 1993, conmocionó a esa nación y al mundo. A lo largo de ese día, varios vecinos habían vertido en el desagüe ácido sulfúrico y sales de cianuro que, al mezclarse y quedar estancados en la red de drenaje, se convirtió en gas cianhídrico.

El compuesto quedó detenido en las alcantarillas y escapó por una coladera de la casa de la familia Guim. Siete de sus integrantes murieron a consecuencia de la inhalación pocas horas después

Ante esta gran tragedia, tres años más tarde, en 1996, el país sudamericano llevó esa fecha a la ley para convocar a sus ciudadanos a crear conciencia sobre la responsabilidad que todos debemos tener sobre actos que nos pueden colocar frente a situaciones de emergencia de consecuencias fatales.

En solidaridad con el pueblo argentino, México y muchos otros países adoptaron la fecha para promover la responsabilidad ambiental de la población y evitar colocarnos en situaciones individuales o colectivas de vulnerabilidad.

De ahí que sea necesario estar atentos para conocer el manejo adecuado de ciertos productos que por su persistencia en el ambiente, explosividad, solubilidad o características de biodegradación, alteran las condiciones normales de suelos, agua, tierra o aire y nos dejan expuestos a consecuencias catastróficas de variadas dimensiones.

Para prevenir situaciones como la de Avellaneda, en México contamos con el Inventario Nacional de Sustancias Químicas que, en 2015, actualizó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) con un sistema de consultas de 5,852 sustancias que se comercializan, producen e importan, útil para que conozcamos las características de persistencia (P), bioacumulación (B) y toxicidad (T) en organismos acuáticos en cada uno de ellos.

Hacer conciencia sobre el manejo de esas sustancias, tanto en el hogar, como en la escuela, los centros de trabajo y demás espacios, es necesario para evitar episodios como el sucedido en Argentina.

Consideramos esta fecha oportuna para que todos podamos trasladar esta temática a los distintos problemas ambientales que cotidianamente afectan nuestras vidas, con objeto de promover el diálogo, reflexión y compromiso para asumir, conforme las distintas responsabilidades, la resolución de los mismos.

**Atentamente**

**Saltillo, Coahuila a 23 de Septiembre de 2020.**

**Dip. Edgar Sánchez Garza**

Fuente.-

<https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-de-la-conciencia-ambiental>

http://www.uncuyo.edu.ar/ices/dia-nacional-de-la-conciencia-ambiental#:~:text=Se%20declar%C3%B3%20el%20d%C3%ADa%2027,de%20Buenos%20Aires%2C%20en%201993.

1. OCDE. (2015). Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE. Disponible en: <https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-in-Spanish.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Wong, Alma. (2020). Por coronavirus, prevén que 4 millones de alumnos abandonen sus estudios. Milenio. Disponible en: <https://www.milenio.com/politica/coronavirus-preven-4-millones-alumnos-abandonen-estudios> [↑](#footnote-ref-2)
3. Redacción. (2020) Propuestas de la UNESCO para garantizar la educación online durante la pandemia. Disponible en: <https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/01/propuestas-unesco-garantizar-educacion-online-pandemia-19132/> [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\_ref\_216\_10feb14.pdf [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\_ref\_086\_06dic77\_ima.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Sartori, G. (2018): *La Democracia en 30 Lecciones*. Editorial de Bolsillo: Ciudad de México. [↑](#footnote-ref-6)
7. OCDE. (2015). Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE. Disponible en: <https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-in-Spanish.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
8. Wong, Alma. (2020). Por coronavirus, prevén que 4 millones de alumnos abandonen sus estudios. Milenio. Disponible en: <https://www.milenio.com/politica/coronavirus-preven-4-millones-alumnos-abandonen-estudios> [↑](#footnote-ref-8)
9. Redacción. (2020) Propuestas de la UNESCO para garantizar la educación online durante la pandemia. Disponible en: <https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/01/propuestas-unesco-garantizar-educacion-online-pandemia-19132/> [↑](#footnote-ref-9)
10. http://www.slideshare.net/gm5/la-sociedad-civil-antecedentes-remotos-presentation-729294 [↑](#footnote-ref-10)
11. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.(2006). Protección de los derechos humanos

    de las personas privadas de la libertad. Documentos Básicos. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/23682.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. INEGI. (2016). Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de Prevención y Readaptación Social. Disponible en: <http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_numeros2.pdf>. [↑](#footnote-ref-12)
13. Azcue, Ludmila. (2020). Políticas penitenciarias en clave feminista. Revista Bordes- Universidad Nacional de José C. Paz Disponible en: <https://www.nodal.am/2020/03/gestionar-la-menstruacion-en-contextos-de-encierro/> [↑](#footnote-ref-13)
14. Sentencia disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-11/el-pediatra-y-la-salud-mental/> [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7449> [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/encuestaepidemiologia.pdf> [↑](#footnote-ref-17)
18. OCDE. (2015). Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE. Disponible en: <https://www.oecd.org/mexico/Education-at-a-glance-2015-Mexico-in-Spanish.pdf> [↑](#footnote-ref-18)
19. Wong, Alma. (2020). Por coronavirus, prevén que 4 millones de alumnos abandonen sus estudios. Milenio. Disponible en: <https://www.milenio.com/politica/coronavirus-preven-4-millones-alumnos-abandonen-estudios> [↑](#footnote-ref-19)
20. Redacción. (2020) Propuestas de la UNESCO para garantizar la educación online durante la pandemia. Disponible en: <https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/01/propuestas-unesco-garantizar-educacion-online-pandemia-19132/> [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/PED2017-2023/Plan_Estatal_Desarrollo_baja.pdf> [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_COAH.aspx> [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.wearemarketing.com/es/blog/turismo-y-tecnologia-como-la-tecnologia-revoluciona-el-sector-turistico.html> [↑](#footnote-ref-23)
24. Otálora Malassis, Janine & Rodríguez Mondragón, Reyes. *La justicia electoral en línea: oportunidades, experiencias y desafíos*. Nexos (2020). https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11598 [↑](#footnote-ref-24)
25. Otálora Malassis, Janine & Rodríguez Mondragón, Reyes, Ibídem [↑](#footnote-ref-25)
26. Otálora Malassis, Janine & Rodríguez Mondragón, Reyes, Ibídem [↑](#footnote-ref-26)
27. Coordinación General de Planeación y Evaluación (2015): *Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015* Gobierno de la República y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, pág. 40. [↑](#footnote-ref-27)
28. Gobierno de Coahuila (2013): *Diagnóstico situacional de las mujeres en las tribus Kikapú y Negros Mascogos de Múzquiz, Coahuila*, Secretaría de las Mujeres, Coahuila. Disponible en: <http://www.coahuilatransparente.gob.mx/otrainfonew/documentos_otrainfo/Diagnostico_Mujeres_Indigenas_de_Coahuila.pdf>. [↑](#footnote-ref-28)
29. Consejo de Derechos Humanos (2018): *Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México (A/HRC/39/17/Add.2)*, Asamblea General de las Naciones Unidas, Ginebra. [↑](#footnote-ref-29)
30. Coordinación General de Planeación y Evaluación (2015): *Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015*. Gobierno de la República y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México, pág. 18. [↑](#footnote-ref-30)
31. Requena, Carlos. (2017). Lenguaje jurídico incomprensible. Forbes. Disponible en: <https://www.forbes.com.mx/lenguaje-juridico-incomprensible/> [↑](#footnote-ref-31)
32. Cossío J. y Lara, R. (2012). El país de las sentencias institucionales. Nexos. Disponible en: <https://www.nexos.com.mx/?p=14832> [↑](#footnote-ref-32)
33. Requena, Idem. [↑](#footnote-ref-33)
34. Requena Idem. [↑](#footnote-ref-34)
35. Consejo de la Judicatura Federal (SF). “Pautas para la elaboración de resoluciones”. Disponible en: <https://www.cjf.gob.mx/resources/lenguajeSencillo/pautasElaboracionResoluciones.pdf> [↑](#footnote-ref-35)
36. Ver. AMPARO EN REVISIÓN 1368/2015. [↑](#footnote-ref-36)
37. González, G. (2019). Sentencias y lenguaje claro. Centro de Información Judicial. Disponible en: <https://www.cij.gov.ar/nota-33385-Sentencias-en-lenguaje-claro.html> [↑](#footnote-ref-37)
38. UNICEF (1989). Convención de los Derechos del Niño. Recuperado de:

    https://www.unicef.org/mexico/media/991/file/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o.pdf [↑](#footnote-ref-38)
39. UNICEF. (2012): El derecho a vivir en familia. Recuperado de:

    https://www.bibliotecaunicef.uy/doc\_num.php?explnum\_id=144 [↑](#footnote-ref-39)
40. Comité de los Derechos del Niño. (2015): Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México. Recuperado de:

    https://www.hchr.org.mx/images/doc\_pub/CRC\_C\_MEX\_CO\_4-5.pdf [↑](#footnote-ref-40)
41. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza [México], 2019, Recuperado de:

    https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/PED-Actualizacio%CC%81n-2019-WEB.pdf [↑](#footnote-ref-41)
42. Banco Mundial. Aprender para hacer realidad la promesa de educación. 2018. Consulado en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096ovSP.PDF?sequence=64&isAllowed=y [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibíd [↑](#footnote-ref-43)
44. Mexicanos Primero. Nota de análisis del PPEF 2021. Consultado en https://s3-us-west-2.amazonaws.com/static-mexicanosprimero.org/2020/notatecnica/nota\_analisis\_PPEF\_10092020.pdf [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibíd [↑](#footnote-ref-45)
46. https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/09/15/afecta-cierre-de-inapam-a-los-adultos-mayores/ [↑](#footnote-ref-46)
47. <https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/INFORME-DERRAMADERO.pdf> [↑](#footnote-ref-47)
48. <http://alianzamx.com/es-section/ubicacion/> [↑](#footnote-ref-48)
49. <https://www.somosindustria.com/articulo/destaca-coahuila-por-su-diversidad-industrial/> [↑](#footnote-ref-49)
50. <https://www.mexicoindustry.com/es/news/coahuila/industria-automotriz-coahuilense-se-mantiene-entre-las-ms-productivas> [↑](#footnote-ref-50)
51. <https://mexicoindustry.com/noticia/coahuila-el-mayor-productor-de-autopartes-y-segundo-en-vehiculos> [↑](#footnote-ref-51)
52. <https://mexicoindustry.com/noticia/coahuila-el-mayor-productor-de-autopartes-y-segundo-en-vehiculos> [↑](#footnote-ref-52)
53. <https://mvsnoticias.com/noticias/economia/modernizan-carretera-zacatecas-saltillo-en-beneficio-de-la-poblacion-234/> [↑](#footnote-ref-53)
54. Presupuestada desde el PEF 2018. <https://www.capitalcoahuila.com.mx/local/amplian-carretera-a-derramadero-para-evitar-accidentes> [↑](#footnote-ref-54)
55. <https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/09/r09_pief.pdf> [↑](#footnote-ref-55)
56. PEF 2020. <https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/09/r09_pir.pdf> [↑](#footnote-ref-56)
57. <https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/colapsa-4t-obras-en-carretera-a-zacatecas> [↑](#footnote-ref-57)
58. <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/028ssa29.html> [↑](#footnote-ref-58)
59. <https://datos.gob.mx/busca/organization/conadic> [↑](#footnote-ref-59)
60. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/17/niegan-suspension-a-dueno-de-altos-hornos-de-mexico-4913.html [↑](#footnote-ref-60)